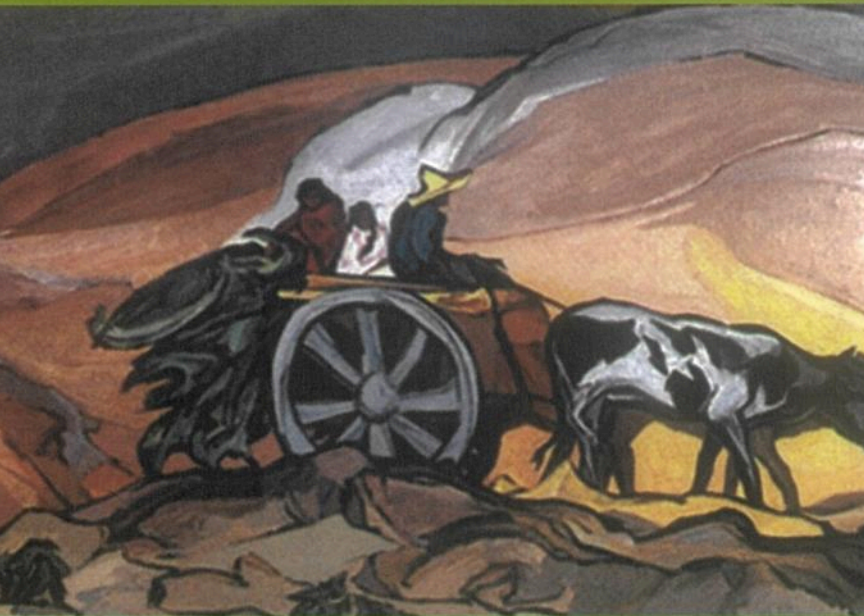


EL CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA

¿SE VALORAN LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS?

Volumen I

Los actores sociales del México
rural frente a procesos políticos excluyentes:
diversidad de impactos y respuestas



Bruno Lutz
Sergio Zendejas

(coordinadores)

El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?

Volumen I

Los actores sociales del México rural
frente a procesos y políticas excluyentes:
diversidad de impactos y respuestas

Bruno Lutz

Sofía Zentenas

(coordinadoras)

ISBN 978-970-70-0000-0

1. Edición: 2011. 2. Edición: 2012.

3. Edición: 2013. 4. Edición: 2014.

5. Edición: 2015. 6. Edición: 2016.

7. Edición: 2017. 8. Edición: 2018.

9. Edición: 2019. 10. Edición: 2020.

11. Edición: 2021. 12. Edición: 2022.

13. Edición: 2023. 14. Edición: 2024.

15. Edición: 2025. 16. Edición: 2026.

17. Edición: 2027. 18. Edición: 2028.

19. Edición: 2029. 20. Edición: 2030.

21. Edición: 2031. 22. Edición: 2032.

23. Edición: 2033. 24. Edición: 2034.

25. Edición: 2035. 26. Edición: 2036.

27. Edición: 2037. 28. Edición: 2038.

29. Edición: 2039. 30. Edición: 2040.

31. Edición: 2041. 32. Edición: 2042.

33. Edición: 2043. 34. Edición: 2044.

35. Edición: 2045. 36. Edición: 2046.

37. Edición: 2047. 38. Edición: 2048.

39. Edición: 2049. 40. Edición: 2050.

El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?

Volumen I

Los actores sociales del México rural frente a procesos políticos excluyentes: diversidad de impactos y respuestas

Bruno Lutz
Sergio Zendejas
(coordinadores)



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES
CASA JUAN PABLOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD MICHUACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

México, 2007

EL CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA
¿SE VALORAN LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS?
(Comité editorial de la colección: Armando Contreras,
Roberto Diego, Bruno Lutz, Paola Sesia)
VOLUMEN I. LOS ACTORES SOCIALES DEL MÉXICO RURAL
FRENTE A PROCESOS Y POLÍTICAS EXCLUYENTES:
DIVERSIDAD DE IMPACTOS Y RESPUESTAS
Bruno Lutz y Sergio Zendejas
(coordinadores)

Primera edición, 2007

- D.R. © Asociación Mexicana de Estudios Rurales
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Circuito Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.
- D.R. © Casa Juan Pablos, Centro Cultural, S.A. de C.V., 2007
Malintzin 199, Col. del Carmen Coyoacán, 04100, México, D.F.
<casajuanpablos@prodigy.net.mx>
- D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana
Prol. Canal de Miramontes 3855
Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387, México, D.F.
- D.R. © Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Av. Insurgentes Sur 1582
Col. Crédito Constructor, 03940, México, D.F.
- D.R. © Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Literario 100, Col. Centro
50000, Toluca, Estado de México
- D.R. © Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Ciudad Universitaria
Av. Francisco j. Múgica s/n, 58030, Morelia, Michoacán

Ilustración de portada: Pablo O'Higgins, *La carreta o Paisaje de Providencia, Nuevo León, 1970,*
óleo sobre tela, 96 x 134 cm

Diseño de portada: Daniel Domínguez Michael

ISBN del volumen I: 968-9274-05-8
978-968-9274-05-6

ISBN de la obra: 968-9274-04-X
978-968-9274-04-9

Impreso en México
Printed in Mexico

ÍNDICE

Por un desarrollo rural sustentable con equidad y justicia social: antecedentes de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales	11
Presentación de la obra <i>El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?</i> Armando Contreras, Roberto Diego, Bruno Lutz, Paola Sesia	15
Volumen I: <i>Los actores sociales del México rural frente a procesos y políticas excluyentes: diversidad de impactos y respuestas</i> Bruno Lutz, Sergio Zendejas	21
PROCESOS HISTÓRICOS Y CONTEXTOS	
Categorías perdurables. Estado posrevolucionario e identidades rurales en el suroeste de Puebla Francisco Javier Gómez Carpinteiro	33
Las cadenas agroalimentarias en la globalización: el caso de México Magda Fritscher	63
Crisis campesina: algunas diferencias y similitudes con la crisis del agro estadounidense de la década de 1980 Dante Ayala Ortiz	85

IMPACTOS Y RESPUESTAS

- Café y seguridad alimentaria: comparaciones
entre la crisis de 1989-1993 y la crisis actual
(1999-2003)
Paola Sesia 101
- Las unidades de pequeña irrigación como mecanismos
de regulación social en los espacios agrícolas locales
Octavio González Santana 134
- El cultivo del aguacate: ¿un medio para asegurar
la reproducción de los ejidatarios como
productores agrícolas?
Cristina Steffen Riedemann,
Flavia Echánove Huacuja 159
- AGROINDUSTRIALIZACIÓN, MIGRACIONES LABORALES,
IDENTIDADES SOCIALES Y RELACIONES DE PODER
- Origen, composición y condiciones de trabajo
de los jornaleros en la cosecha del angú en Morelos
Kim Sánchez, Adriana Saldaña 183
- Agricultores ante el modelo agroindustrial y la lealtad
territorial. El caso de Villa de Arista, S.L.P.
José Javier Maisterrena Zubirán 207
- Emblemática sinaloense. Migración femenina
en circuitos de producción de jitomate
María Isabel Mora Ledesma 233
- Migración e impacto del retorno de migrantes
a Santiago Tangamandapio, Michoacán
Angélica Navarro Ochoa 248
- El impacto de la iniciativa de inocuidad alimentaria
de Estados Unidos en las exportaciones de hortalizas
frescas de México
Belem D. Avendaño Ruiz, Rita E. Rindermann 279

CRÍTICAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA
LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES RECIENTES

- Gobernabilidad foxista: las poblaciones vulnerables
(mujeres) en la seguridad alimentaria
Ivonne Vizcarra Bordi 299
- El Campo No Aguanta Más: la irrupción
de los productores rurales en las políticas públicas
para el campo
Armando Sánchez Albarrán 327

POR UN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL:
ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE ESTUDIOS RURALES

La Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER) surge de la necesidad de fomentar, difundir y profundizar la investigación y el conocimiento que se generan sobre los problemas de la sociedad rural mexicana y que se desarrollan dentro y fuera del país, para contribuir al “desarrollo rural sustentable con equidad y justicia social”; de ahí su lema. La AMER pretende apoyar la generación de políticas públicas, el debate y promulgación de leyes por el poder legislativo y las actividades de la sociedad civil que coadyuven a resolver los problemas del campo mexicano. Bajo estas convicciones, la AMER se constituye desde 1994 como la más importante asociación de su género en el país.

En el primer encuentro de investigadores del medio rural realizado en Taxco, Guerrero, en 1994, se decidió crear la Red Mexicana de Estudios Rurales, la cual fue dirigida hasta 1998 por el doctor Hubert Carton de Grammont, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM). Los trabajos presentados en aquella ocasión fueron publicados en una colección de cuatro volúmenes bajo la coordinación general del propio Hubert Carton de Grammont y H. Tejera, titulada: “La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio”. Estos cuatro libros se han vuelto, con el tiempo, una colección clásica, una consulta obligada para investigadores y estudiantes relacionados con el campo y el ámbito rural.

En 1998 se realizó el segundo congreso de la red en la ciudad de Querétaro, al que asistieron más de 300 personas. En él se decidió, en el pleno de una primera asamblea, convertir la red en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Ahí mismo se dio inicio a su formalización y la redacción de sus estatutos. En virtud del trabajo desarrollado en la red y por el mismo impulso entusiasta del doctor Hubert

Carton de Grammont, éste resultó electo como el primer presidente y fundador de la AMER. En esa ocasión, los trabajos presentados en el congreso fueron editados en un disco compacto bajo el título de "El ajuste estructural en el campo mexicano, efectos y respuestas".

El segundo congreso dejó un legado para los congresos subsiguientes, ya que estableció un espacio para "la voz de los actores". Esta singular característica ha sido la búsqueda de la vinculación con los actores sociales por medio de conferencias y paneles en sesiones plenarias y de mesas de trabajo en las que participan como expositores, representantes de organizaciones campesinas, de productores, de mujeres, de artesanos y de indígenas, así como otros actores de las instituciones públicas, del poder legislativo y de las organizaciones que tienen injerencia en la elaboración y aplicación de las políticas públicas rurales, agropecuarias, sociales y ambientales. Sus visiones, experiencias, opiniones y planteamientos se intercambian y se debaten con investigadores y estudiantes, dando como resultado provechosas experiencias para todos los que participamos.

A partir del tercer congreso, realizado en la ciudad de Zacatecas en 2001, la AMER quedó formal y legalmente constituida como una asociación civil sin fines de lucro, con un registro de más de 100 miembros y con un comité ejecutivo nacional, bajo la presidencia de la doctora Michelle Chauvet Sánchez Pruneda, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A). En este congreso se decidió mantener una periodicidad de dos años entre estos eventos académicos.

De este congreso resultó la segunda colección, de cinco tomos, titulada "Los actores sociales frente al desarrollo rural", cuya coordinación general estuvo a cargo de Yolanda Massieu Trigo y Michelle Chauvet Sánchez, ambas de la UAM, y Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Con el cuarto congreso, bajo el lema, "El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?", celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 20 al 23 de junio de 2003, la AMER consolida su credibilidad entre estudiantes, investigadores y sociedad civil, aumentando a 185 el número de sus miembros y contando con una asistencia total de 443 participantes. En este congreso se presentaron 332 ponencias, que comparadas con las 160 que se presentaron en el evento de Taxco, en 1994, evidencian un crecimiento significativo de la AMER. Los temas abordados en este congreso fueron: "Cultura, educación y comunicación rural"; "Desarrollo en el campo y tecnología"; "Estado, políticas públicas e instituciones"; "Financiamiento y ahorro"; "Género, familia y niñez"; "Globaliza-

ción y alimentos"; "Los recursos naturales y su manejo"; "Migración y empleo"; "Nueva ruralidad, tenencia de la tierra y territorialidad"; "Organizaciones rurales, liderazgo y capital social"; "Pobreza y derechos humanos"; "Pueblos indígenas, conocimiento tradicional, derechos, costumbres y autonomía". Los trabajos presentados fueron editados en un disco compacto, y una selección de ellos ahora se incluyen en esta colección en forma impresa. En la asamblea general de la AMER llevada a cabo en este último congreso, quedó electo como presidente del CEN el doctor Rodolfo García Zamora.

Los congresos de la AMER se han caracterizado por la calidad académica de los trabajos presentados, la variedad, creatividad e innovación en la forma de abordar los diferentes problemas rurales de México que, junto con sus enfoques multi e inter disciplinarios, permiten la interlocución con un amplio sector no sólo de la academia de los estudios rurales sino, sobre todo, con la sociedad en su conjunto.

Las actividades de la AMER se realizan con el aporte de sus socios y con el apoyo de universidades nacionales y estatales, centros de investigación, fundaciones y gobiernos estatales, así como con el apoyo del Conacyt, pues la AMER está inscrita en el Reinecyt. Quienes participan de diversas formas en la AMER han encontrado, sin duda, un espacio plural y abierto a distintas formas de interpretar el acontecer rural. La AMER ha tenido cuidado de ser rigurosa, crítica y constructiva en sus pronunciamientos con respecto a los problemas nacionales, las políticas gubernamentales y los trabajos legislativos rurales. Asimismo, con el fin de evitar el centralismo académico, la AMER se ha propuesto realizar los congresos en diferentes partes del país y, además, tener una amplia y variada participación de integrantes del CEN de diversas instituciones que represente la heterogeneidad regional del México rural.

Entre los proyectos futuros de la AMER están el desarrollar eventos regionales, publicar una revista electrónica en la que se presenten trabajos relevantes para el debate nacional sobre temas rurales y fungir como instancia de consulta de las organizaciones sociales, civiles y públicas.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA
EL CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL MEXICANA
¿SE VALORAN LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS?

*Armando Contreras**

*Roberto Diego***

*Bruno Lutz****

*Paola Sesia*****

En el cuarto congreso de la AMER, celebrado en Morelia, Michoacán, en 2003, las preocupaciones centrales del evento fueron comprender, interpretar y evaluar las repercusiones del paradigma neoliberal para la sociedad rural, después de 20 años de su implantación como política económica del Estado mexicano. Así, los asistentes nos reunimos para reflexionar sobre el acontecer rural y tratar de comprender los procesos de cambio que se han registrado en el mundo rural y, convencidos de la inexistencia de determinismos de cualquier tipo, tratar de contribuir con nuestras ideas a plantear alternativas de desarrollo para la diversidad de actores sociales rurales, rural-urbanos o urbano-rurales que tienen parte de sus raíces y de su identidad en las matrias del campo nacional.

El congreso tuvo como tema central: "El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?". Entre las preguntas derivadas y que de cierta manera fueron retomadas por las ponencias presentadas en el congreso se pueden mencionar las siguientes:

* Investigador del Departamento de Ecología Aplicada, Instituto de Ecología A.C. Correo electrónico: <contrera@ecologia.edu.mx>, <armando.contreras@inecol.edu.mx>.

** Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y del posgrado en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Correo electrónico: <rdq@correo.xoc.uam.mx>.

*** Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: <brunolutz01@yahoo.com.mx>.

**** Profesora-investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Istmo, con sede en la ciudad de Oaxaca. Correo electrónico: <sesia@cieras.edu.mx, paolasesia@yahoo.com.mx>.

- ¿Qué cambios se han registrado en el mundo rural mexicano a partir de la entrada en vigor de las políticas derivadas del modelo neoliberal en México?
- ¿Qué modificaciones se han hecho evidentes en relación con la valoración de los recursos estratégicos rurales?
- ¿Cómo han cambiado las condiciones y los apoyos gubernamentales para la producción agropecuaria?
- ¿Cuál ha sido el impacto del neoliberalismo en la calidad de vida de los pobladores del campo?
- ¿Cómo se concibe la producción, la biodiversidad genética y la bioseguridad del maíz y de otros alimentos básicos?
- ¿Cómo se perciben la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria?
- ¿Qué papel se considera que debe desempeñar cada uno de los actores rurales en lo político, económico, social y cultural?
- ¿Qué impacto ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la diversidad de actores sociales del campo mexicano?
- ¿Cuál es la magnitud, relevancia y significado de los procesos migratorios nacionales y hacia Estados Unidos y Canadá para el campo mexicano?
- ¿Qué respuestas, movilizaciones, acciones han desarrollado los distintos actores sociales rurales en relación con el neoliberalismo y la globalización económica?
- ¿Cuáles son las implicaciones del movimiento indígena nacional en el devenir del México rural?
- ¿Qué papeles sociales, económicos, políticos y culturales están desempeñando las mujeres rurales en el México contemporáneo?

Salvo para el caso de las respuestas de los actores sociales ante un escenario adverso, las ponencias presentadas en el congreso no parecieran haber dado una respuesta muy prometedora a éstas y otras preguntas que se formularon.

Se puede plantear, como una tendencia general, que los planes de estabilización y ajuste estructural definidos por el Banco Mundial para México a partir de 1982, así como la indiscriminada apertura comercial llevada a cabo por el gobierno a partir de la entrada de México al GATT, en 1985, y posteriormente a la Organización Mundial de Comercio (OMC), han implicado una desprotección económica y social de la sociedad rural. El retiro del Estado, la apertura comercial y la liberalización del mercado de productos agropecuarios,

si bien parecen haber significado un beneficio a corto plazo para una centena de empresarios agroexportadores, han implicado un deterioro en la actividad productiva, en el ingreso y en la calidad de vida generalizado para la mayoría de la población rural, la cual ha tenido que recurrir, cada vez más, al trabajo migratorio nacional e internacional para mantener a sus unidades domésticas, dejando de lado la producción agropecuaria, que en todo caso se ha mantenido en un nivel de autosuficiencia, o bien, como un recurso del cual disponer en caso de un imprevisto. Estas tendencias se han visto reflejadas en la composición de las ponencias presentadas en el congreso, la mayor parte de ellas referidas al proceso migratorio, al deterioro y vulnerabilidad de los recursos naturales, a la apertura comercial, la globalización y la pérdida de la soberanía alimentaria, así como a las respuestas y proposiciones alternativas de una diversidad de actores sociales ante este escenario adverso.

Esta colección de cuatro volúmenes titulada: "El cambio en la sociedad rural mexicana ¿se valoran los recursos estratégicos?", incluye una selección de los trabajos presentados en dicho congreso. En esta versión impresa se tuvo el cuidado de someter a riguroso dictamen los trabajos presentados para su publicación. Los miembros del Comité Editorial de la AMER-Morelia esperamos que esta obra contribuya, de alguna manera, a encontrar vías alternativas para transitar hacia una modernidad de distinto cuño a la concebida por "el pensamiento único".

En el volumen I: *Los actores sociales del México rural frente a procesos y políticas excluyentes: diversidad de impactos y respuestas*, coordinado por Bruno Lutz y Sergio Zendejas, se presentan los trabajos sobre los temas: "Estado, políticas públicas e instituciones"; "Globalización y alimentos"; "Migración y empleo"; "Organizaciones rurales, liderazgo y capital social".

Los textos de este volumen nos invitan a reflexionar, de manera crítica, sobre algunos de los principales procesos y políticas relativas a la agricultura y las poblaciones rurales del país que han tendido a privilegiar a influyentes minorías —en detrimento de las mayorías— desde hace más de un siglo, pero con sus especificidades neoliberales recientes. En su conjunto, los artículos abordan las interacciones de dos tipos de procesos históricos, a saber, los relativos al desarrollo o la conflictiva formación nunca acabada del capitalismo, sus clases sociales, mercados y otras instituciones nacionales y globales, por un lado; y los complejos procesos de formación, también continua y conflictiva, del Estado mexicano, incluyendo los cambios en instituciones, políticas y programas públicos, por el otro.

El énfasis recae en la impugnación de importantes privilegios en favor de influyentes minorías rurales, nacionales o globales, por medio de las políticas gubernamentales neoliberales para el campo mexicano, instrumentadas desde principios de la década de 1980. Destacan las críticas a los privilegios acordados a los agroindustriales y, en general, a los grandes productores con mayor capacidad exportadora, en detrimento de la mayoría de los productores y de las poblaciones rurales mexicanas; así como a los intentos de creación, mediante diversos mecanismos organizativos y discursivos, de clientelas políticas en relación con las políticas fundamentalmente asistencialistas para las mayorías rurales del país. Buena parte de los artículos subrayan los impactos y las respuestas relativamente diferenciadas entre y dentro de distintos tipos de productores, jornaleros, hogares, comunidades, organizaciones comunales o de productores y, en general, de la población rural del país, ocasionados por la apertura internacional de la economía mexicana y de las políticas neoliberales del gobierno mexicano, de carácter mucho más asistencialista que de apoyo a la producción agropecuaria.

En el volumen II, titulado: "Pueblos indígenas, territorio y género en el México rural contemporáneo", y coordinado por Sergio Sarmiento y Paola Sesia, se recogen las experiencias de investigación y los análisis de estudios@s dedicad@s a tres ejes temáticos: *a)* pueblos indígenas; *b)* territorio, cuestiones agrarias y dinámicas poblacionales, y *c)* género y familia.

Los artículos incluidos en este segundo volumen nos presentan las múltiples y complejas realidades en las que están insertos los pueblos indígenas en el México contemporáneo, abordando aquellos ángulos de la realidad política indígena que tienen que ver con la aplicación de los llamados "usos y costumbres", la autonomía, la alterancia política, la gobernabilidad, las luchas identitarias y políticas para el reconocimiento de los derechos étnicos y las dimensiones y articulaciones políticas que se dan en los gobiernos municipales y locales. Se trata de miradas críticas antiesencialistas sobre fenómenos y procesos indígenas muy concretos, a veces ambiguos y contradictorios, pero que dan cuenta de realidades en constante transformación y en una profunda relación con los continuos cambios en la política y economía en los ámbitos nacional e internacional.

Se presentan, además, textos que abordan cuestiones agrarias, el conflicto político sobre el territorio, la construcción de la identidad de grupos sociales en disputa por el control y la defensa de la tierra, así como de los recursos naturales y las dinámicas poblacionales que se transforman a raíz de los procesos migratorios. Por último, en el

bloque de los estudios sobre género y familia, se presentan tres textos que abordan temas muy distintos entre sí, tales como la relación entre pobreza y violencia de género ejercida sobre mujeres en ámbitos familiares de una comunidad periurbana cerca de Morelia, Michoacán; el importante papel productivo que tienen las mujeres alfareras de una comunidad cerca de la ciudad de Oaxaca dentro de un contexto familiar, en donde las relaciones genéricas de hegemonía y subordinación se mantienen y reproducen en la vida cotidiana; y el papel que la capacitación "extensionista" puede o no desempeñar en los procesos organizativos de mujeres productoras en la Delegación Tláhuac del Distrito Federal. En los tres casos se extiende la mirada del ámbito rural comunitario para incluir a contextos semiurbanos (o semi rurales) que dan cuenta de las profundas transformaciones que se viven actualmente en México en la relación entre campo y ciudad.

En el volumen III: "Los actores sociales y la nueva ruralidad, territorialidad, financiamiento y asesoría rural", coordinado por Roberto Diego y Carola Conde, se incluyen los trabajos sobre la nueva ruralidad y territorialidad, el financiamiento y la asesoría rural.

Los trabajos abordan las respuestas y diversas propuestas de los actores sociales, organizaciones de la sociedad civil y asesores o facilitadores del cambio social frente a los impactos locales de las políticas neoliberales y el proceso de globalización. Los trabajos sobre la nueva ruralidad y territorialidad presentan cómo en lo micros social, en lo local, se han modificado los mundos de vida de los actores sociales, en un complejo proceso de acomodamiento frente a acontecimientos o acciones externas y cómo estos cambios se han expresado en una diversidad de respuestas frente a esta intervención externa. Los trabajos que tratan el financiamiento y capacitación rural se refieren también a estas movilizaciones de la energía social, en las que han participado organizaciones de la sociedad civil, asesores, acompañantes o facilitadores externos. Los resultados y propuestas de las experiencias de financiamiento, capacitación y acompañamiento rural permiten tener una mejor comprensión de los procesos de cambio rural frente a una política de gobierno adversa y un entorno económico difícil, y pueden motivar al lector a mantener la esperanza por avanzar en el desarrollo humano en lo local y lo mundial.

En el volumen IV: "Producción agraria y recursos naturales", coordinado por Armando Contreras y Susana Córdova, se incluyen los temas de producción, tecnología y medio ambiente; biotecnología y organismos genéticamente modificados y agroindustria de lácteos.

El primer tema reúne estudios de caso en los ámbitos locales y regionales, describen los procesos de producción con el uso de diver-

sas tecnologías, desde las generadas por grupos campesinos hasta aquellas que son transferidas por instituciones gubernamentales, se presentan las dificultades del control de las innovaciones tecnológicas y se hace énfasis en sus impactos ecológicos. El tema emergente de los últimos años en el ámbito nacional es el uso de organismos genéticamente modificados, se presenta el panorama internacional, señalando los intereses de las industrias transnacionales y el debate con los Estados nacionales para permitir su incorporación a la producción de alimentos. En particular se analizan las formas de participación social desde las organizaciones civiles en la adopción de decisiones y las políticas públicas. Por último, se presenta el tema de la integración de la cadena de productos lácteos, estos trabajos analizan las consecuencias del TLCAN en la producción nacional de leche y los espacios generados para la producción local de lácteos. Cabe señalar que los trabajos de este volumen abordan, de manera puntual, el perfil de los actores sociales y sus propuestas de desarrollo local.

VOLUMEN I

*LOS ACTORES SOCIALES DEL MÉXICO RURAL
FRENTE A PROCESOS Y POLÍTICAS EXCLUYENTES:
DIVERSIDAD DE IMPACTOS Y RESPUESTAS*

*Bruno Lutz
Sergio Zendejas*

PROBLEMÁTICAS ARTICULADORAS

Los textos que componen este volumen nos invitan a reflexionar críticamente sobre una diversidad de procesos y políticas relativas a la agricultura y las poblaciones rurales del país, las cuales han tendido a privilegiar a influyentes minorías —en detrimento de las mayorías— desde hace más de un siglo, pero con sus especificidades neoliberales. Los principales beneficiarios aquí estudiados han sido ciertos grupos de empresarios agroindustriales, comerciantes de productos agropecuarios, agricultores con riego y, particularmente, los grandes productores, sin olvidar determinados sectores de las burocracias gubernamentales. Los artículos reunidos en este primer volumen también han centrado su atención en algunos de los grupos relativamente más excluidos o menos favorecidos, salvo en determinadas coyunturas, periodos cortos y regiones muy específicas; se trata, principalmente, de pequeños productores agropecuarios en su mayoría dependientes del temporal de lluvias, ejidatarios integrados o subordinados a complejos agroindustriales, jornaleras y jornaleros agrícolas, así como hogares indígena-campesinos.

Ante la reciente apertura internacional de la economía mexicana y la aplicación de políticas neoliberales por parte del gobierno mexicano, de carácter mucho más asistencialista que de apoyo a la producción agropecuaria, algunos de los artículos subrayan los impactos y las respuestas relativamente diferenciadas entre y dentro de hogares indígena-campesinos, entre los grupos identificados por el Estado como los más vulnerables (por ejemplo, mujeres, pobres y desnutridos rurales, en términos de clientes particularmente relevantes para la política social neoliberal) y entre jornaleras y jornaleros de algunas de las agroindustrias de exportación, así como entre

pequeños agricultores ejidales y privados, que antes fueran productores de granos básicos, entre productores exportadores que tienen que enfrentar los costos de nuevas reglas de inocuidad en el comercio internacional, y entre agricultores y hasta agroindustriales nacionales que son productores de insumos para las grandes empresas exportadoras de productos agroindustriales.

Los textos de la primera sección, "Procesos históricos y contextos" abordan los ámbitos nacionales e internacionales de las referidas transformaciones de sujetos o actores sociales, sus complejas interrelaciones e identidades sociales, así como sus principales instituciones y organizaciones. Estas últimas se refieren a una amplia gama de modalidades predominantes de tenencia de la tierra y formas económica, política, ecológica y culturalmente diferentes para organizar la producción agropecuaria y controlar la distribución de los beneficios respectivos: hogares campesinos (mestizos o indígenas), pequeñas explotaciones apoyadas parcialmente en el trabajo asalariado, redes de pequeños productores empresariales, organizaciones comunitarias, empresas capitalistas agroindustriales, así como articulaciones o cadenas entre diversos tipos. En su conjunto, los tres artículos de esta sección resaltan las interacciones de dos tipos de procesos, a saber, los relativos al desarrollo o la conflictiva formación nunca acabada del capitalismo, sus clases sociales, mercados y otras instituciones nacionales y globales; además, abordan los complejos procesos de formación, también continua y conflictiva, del Estado mexicano, incluyendo cambios en instituciones, políticas y programas públicos.

Sin embargo, al igual que la gran mayoría de los demás capítulos de este volumen, esos procesos y contextos son estudiados en sus relaciones históricamente específicas con problemáticas referentes a determinados grupos, clases e identidades sociales, recursos naturales, organizaciones, burocracias y políticas gubernamentales concretas, en regiones y ámbitos nacionales particulares, y en torno a cultivos o cadenas agroproductivas también específicas. De esta manera, a partir de enfoques diferentes, las tres contribuciones de esta sección nos ponen en guardia contra ciertas limitaciones de las interpretaciones exclusivamente coyunturales o de muy corto plazo sobre los diversos desafíos y oportunidades que enfrentan los grupos sociales—rurales o urbanos, nacionales o extranjeros— ante las recientes fases del proceso de globalización y las políticas públicas neoliberales.

Los artículos de la segunda sección, "Impactos y respuestas", se centran sobre las diversas maneras en que esos desafíos y oportuni-

dades han sido vividos por distintos grupos sociales del país. Igualmente, considerando los tres capítulos en su conjunto, el énfasis recae, por un lado, en la heterogeneidad de complejos y, en ocasiones, hasta contradictorios impactos y respuestas entre muy diversos actores sociales rurales y, por el otro lado (salvo en uno de los textos), en la redefinición y profundización de desigualdades lo mismo entre productores que, en general, entre grupos de pobladores rurales, y aun entre distintas comunidades. Uno de los ejes articuladores de la mayoría de los artículos de esta sección se refiere a la complejidad de las relaciones sociales (es decir, promiscuamente económicas, políticas y culturales) a través y en nombre de muy diversas instituciones respecto de cambios en patrones de cultivo y en tecnologías de producción, impulsados tanto por cambios de políticas gubernamentales como por oportunidades regionales e iniciativas locales, no exentas de conflictos y desigualdades.

La tercera sección, "Agroindustrialización, migraciones laborales, identidades sociales y relaciones de poder", pone el acento en las complejas relaciones entre distintos tipos de productores, jornaleras y jornaleros agropecuarios respecto de uno de los principales vectores contemporáneos de los procesos de transformación agropecuaria del país y de buena parte del mundo: la agroindustrialización. Sin olvidar sus especificidades analíticas, estos artículos pueden considerarse como entretejidos por problemáticas interrelacionadas referentes a diferencias existentes no sólo entre clases o grupos sociales, sino dentro de cada una de ellas: migraciones de jornaleras y jornaleros agrícolas, con calificaciones laborales y lugares de origen diferentes en relación con condiciones de trabajo desiguales, rivalidades y jerarquías laborales entre trabajadores; así como por distintas lógicas de producción entre empresarios y redefinición de identidades sociales: respecto de las relaciones entre jornaleras, entre éstas y jornaleros, y entre empresarios respecto de la sociedad y territorios locales.

La cuarta sección denominada "Críticas y movilización social contra las políticas neoliberales recientes", se articula en torno a las críticas y a una importante movilización social contra las políticas neoliberales de la primera administración federal del siglo XXI en México. Obviamente, de acuerdo con las distintas perspectivas contenidas en este volumen sobre los procesos históricos y los contextos necesarios para analizar coyunturas o periodos de corto plazo, los textos de las distintas secciones pueden complementarse entre sí—sin pretensión de homogeneidad analítica— para, entre otras cosas, vincular los textos de las secciones previas que insisten más sobre

procesos con estos interesantes estudios críticos sobre dichas políticas gubernamentales recientes y las dificultades encontradas, así como las oportunidades buscadas por el movimiento El Campo No Aguanta Más para convertir sus reivindicaciones y los acuerdos pactados en prácticas de gobierno que mejoraran las condiciones de sus representados. Los dos artículos de esta cuarta sección contribuyen a poner el acento en uno de los dos ejes críticos de este volumen: la impugnación de importantes privilegios a influyentes minorías que diversos grupos —desde fuera o dentro del gobierno, del campo y del país— han promovido decididamente, a través de las políticas gubernamentales neoliberales sobre el campo mexicano, desde principios de la década de 1980. Destaca su crítica a los apoyos acordados a los agroindustriales y, en general, a los grandes productores con mayor capacidad exportadora, en detrimento de la mayoría de los productores y a los intentos de creación, mediante diversos mecanismos discursivos y organizativos, de clientelas políticas en relación con las políticas asistencialistas para las mayorías rurales del país.

EL CAPITULADO

Procesos históricos y contextos

La investigación histórica de Francisco Javier Gómez sobre el proceso de constitución y reproducción de las identidades sociales y económicas en el suroeste del estado de Puebla, entre 1921 y 1938, arroja resultados interesantes relativos a la interrelación de la tierra, el agua, el tipo de cultivos y las obras de infraestructura, con los diferentes grupos asentados en esta región. En esa época posrevolucionaria de redistribución de tierras articulada alrededor de la figura del ejidatario y de la gestión centralizada de las problemáticas hidroagrarias locales, un industrial extranjero, mediante el desarrollo de complejas estrategias, logró mantener el control de la producción de la caña de azúcar en la región. A pesar de los cambios generados por las victorias de los agraristas y la fragmentación parcial de las posesiones del hacendado, hoy en día los ejidatarios de la zona siguen dependiendo del cultivo de la caña para su subsistencia y se encuentran sometidos a los responsables del ingenio para su venta.

En su análisis histórico de la constitución y desarrollo de las cadenas agroalimentarias, Magda Fritscher hace hincapié en el papel desempeñado por el Estado y las agroindustrias en el control de la producción y comercialización de los granos básicos. La autora nos

presenta cuáles eran los mecanismos institucionales instrumentados en la década de 1980 por las paraestatales con el fin de regular el mercado interno, imponiendo un precio de garantía en la compra de granos y oleaginosas. Esta política estatal tenía sus virtudes pero también sus limitantes. Sin embargo, con la entrada de México al TLCAN, el Estado se retiró dejando a los mercados controlar los flujos de oferta y demanda de los productos agropecuarios. Entre las principales consecuencias estudiadas encontramos un proceso de concentración agroindustrial mediante el creciente predominio de las grandes empresas y la desarticulación productiva entre exportadores y los productores nacionales de insumos. En el contexto de una apertura casi ilimitada del mercado nacional, los pequeños productores sufren en su gran mayoría de la competencia desleal y de la falta de una política institucional proteccionista frente a los agricultores de América del Norte y Europa, así como de la carencia de apoyos institucionales y económicos específicos y, en general, de la ausencia de una política agrícola de mediano plazo ajena a los vaivenes políticos.

En su estudio comparativo de la resolución de la crisis agrícola de 1984 en Estados Unidos y la solución dada a la crisis del sector agropecuario en México en 1995, Dante Ayala Ortiz resalta la preeminencia, en ambos casos, de una lógica capitalista de corte neoliberal. Desde distintos ámbitos, nacionales e internacionales, se preconizó y fomentó la desaparición de las pequeñas explotaciones rurales calificadas como no rentables y su sustitución por agroindustrias acaparadoras de tierras. El aumento del volumen de los productos agropecuarios importados de Estados Unidos a raíz de la entrada de México al GATT y luego al TLCAN, ha provocado profundos, y a menudo trágicos, procesos de cambio social y económico. En este contexto, la reconversión de los productores no deja de ser un eufemismo cuando están en bancarrota u obligados a ejercer varios oficios para no caer en la miseria.

Impactos y respuestas

El análisis comparativo sobre la seguridad alimentaria en dos comunidades de campesinos indígenas de Oaxaca, realizado por Paola Sesia, muestra el impacto del Inmecafé antes de la crisis del aromático y la influencia posterior que tuvo la aplicación del programa Progres-*a*-Oportunidades en el aspecto nutricional. En una de las comunidades los estragos causados por la disminución brutal del precio internacional del café fueron atenuados por las iniciativas de

una organización comunitaria que promovió modalidades ecológicamente sustentables de diversificación agroforestal. Ahí la influencia del programa Oportunidades ha sido moderada y ha generado una dependencia relativamente menor de las familias rurales con los programas asistencialistas promovidos por el Estado. En contraste, en la otra comunidad, la crisis del café obligó a los hombres a emigrar temporalmente a la ciudad de México; con la posterior aplicación del programa Progresá-Oportunidades, los hombres disminuyeron su labor en el campo y las familias se volvieron dependientes de esta nueva pero incierta fuente de ingreso. A pesar de estas reacciones diferenciadas, la persistencia de diferentes grados de desnutrición infantil en ambos casos obliga a repensar una solución integral que vaya más allá de proyectos agroecológicos locales y de asistencialismo institucional.

La investigación de Octavio González sobre el pequeño riego en un ejido del municipio de Ecuandureo, Michoacán, se enfoca en mostrar la importancia de la gestión social de los recursos hídricos, así como el papel desempeñado por los migrantes transnacionales en un proceso de modernización hidroagrícola que condujo a la especialización productiva y la desarticulación entre la agricultura de riego y la de temporal y, en general, entre los sistemas de cultivo locales. Para los productores que han podido sumarse a dicho proceso, las remesas recibidas desde Estados Unidos se han convertido, con el paso de los años, en la principal fuente de financiamiento para la compra de insumos y equipos para el cultivo del trigo y de hortalizas. Asimismo, la migración de trabajadores ha permitido, indirectamente, a los ejidatarios mantener las estructuras sociales de regulación de conflictos en torno al agua de riego y poder suplir las deficiencias de las instituciones crediticias del sector rural.

En su estudio sobre el cultivo del aguacate en un ejido de Michoacán, Cristina Steffen y Flavia Echánove muestran cómo la producción de esta fruta fue sustituyendo progresivamente el cultivo de la caña de azúcar. Las investigadoras detallan las razones por las cuales los pequeños aguacateros no logran organizarse para compactar sus compras de insumos, entre las que destacan la falta de capital de la mayoría de los ejidatarios, quienes tienen alrededor de dos hectáreas cada uno. Mediante el control del proceso de pesaje y calibración de los aguacates cosechados, las empresas empacadoras han logrado imponer un precio de compra que deja pocas ganancias a los pequeños productores. Este estudio muestra la complejidad de las relaciones de producción, sociales, comerciales e institucionales que se tejen entre los diferentes actores que intervienen en el proceso de

cultivo del aguacate. Asimismo, si bien la situación de los ejidatarios ha mejorado notablemente con el abandono del cultivo de la caña de azúcar, se han acentuado las desigualdades que fragilizan el tejido social de San Francisco Peribán, municipio de Uruapan.

*Agroindustrialización, migraciones laborales,
identidades sociales y relaciones de poder*

El estudio de Kim Sánchez y Adriana Saldaña sobre el cultivo de una planta exótica, el angú, por parte de una agroempresa instalada en el estado de Morelos, se centra en la generación de flujos migratorios desde zonas rurales del vecino estado de Guerrero. La poca disponibilidad de mano de obra en Morelos y la especialización de los jornaleros agrícolas guerrerenses, de ambos sexos, han permitido a la empresa de capital estadounidense disponer de trabajadores eficientes para realizar las tareas inherentes al cultivo, cosecha y empaque de este delicado fruto. Las condiciones relativamente buenas de trabajo y de alojamiento —con respecto a otros campos agrícolas— se contraponen a las técnicas de control de la mano de obra, instrumentadas en el marco de la flexibilización e intensificación del trabajo. No obstante de ser una generadora de fuentes de empleos, a pesar de la alta tecnificación del cultivo del angú, esta empresa de exportación ha sabido explotar en su favor la competencia y rivalidad entre los cosechadores pagados a destajo, entre los que tienen experiencia y los que no, entre los trabajadores de Tula y los de Xitopontla.

En la región tomatera de Valle de Arista, San Luis Potosí, José Javier Maisterrena analiza el proceso de formación de diferentes tipos de productores. Después de analizar el proceso histórico de perforación de pozos y cultivo intensivo de jitomate, el autor elabora una tipología de los productores: temporalero, agricultor periférico, agroganadero y agroindustrial. Cada uno de estos grupos tiene una visión propia de la combinación entre la lógica de la productividad y la valoración del territorio. Los empresarios locales, sin menospreciar las condiciones territoriales para la producción del jitomate, se han involucrado políticamente con el Valle de Arista, al que consideran como su "patria chica", mientras los inversionistas fuereños han sobreexplotado los mantos acuíferos y siguen considerando a este territorio únicamente por lo que les pueda ofrecer temporalmente para el desarrollo de sus negocios.

En la misma región tomatera de Valle de Arista, el texto de María Isabel Mora se centra en el carácter cultural y económicamente em-

blemático de una eficiente mano de obra femenina originaria de Sinaloa, que es solicitada, reclutada y contratada por los empacadores. La investigadora señala que la adquisición de un fuerte capital simbólico por parte de las trabajadoras sinaloenses debido a su habilidad, experiencia, docilidad, lealtad y eficacia, les ha permitido ocupar los puestos más prestigiados y mejor remunerados en las empresas tomateras de Valle de Arista. Los patrones han sabido sacar provecho de la competencia creada entre las sinaloenses y las trabajadoras de la región. Pero la influencia de las mujeres jóvenes de Sinaloa ha rebasado el ámbito laboral de las agroempresas para expandirse en los medios sociales del Valle de Arista, ya que se volvieron ejemplos de belleza y de emancipación. A pesar de esta situación, las empacadoras sinaloenses nunca dejaron de ser dominadas por hombres, quienes ocupan todos los cargos directivos y de supervisión de las empresas tomateras.

La migración hacia Estados Unidos de los pobladores de Santiago Tangamandapio, Michoacán, es estudiada por Angélica Navarro en sus dimensiones histórica y social. Fenómeno dinámico y complejo, la migración de los pobladores se inicia en el periodo revolucionario de 1910 y ha implicado no sólo cambios sociales y demográficos, sino que, con el paso del tiempo, se ha establecido como una tradición, un rito de paso. Aunque en este pueblo emigrar hacia el norte es un fenómeno masivo, no todos intentan esta aventura; de los que migran no todos regresan y de los que regresan no todos se vuelven "exitosos". Además, si por un lado esta migración esencialmente masculina ha permitido mejorar la construcción de las casas de los lugareños y la propia fisonomía del pueblo; por el otro, ha generado cambios de mentalidad, la introducción de valores ajenos a la comunidad y ha inducido la propagación de nuevas enfermedades.

En su reflexión sobre el impacto de la iniciativa de inocuidad alimentaria de Estados Unidos, Belem D. Avendaño y Rita E. Rindermann presentan algunos resultados de una encuesta realizada entre agroempresas de Sinaloa exportadoras de hortalizas frescas. Las autoras señalan que producir alimentos de calidad e ino cuos representa un aumento significativo de los costos para los empresarios mexicanos.

*Críticas y movilización social
contra las políticas neoliberales recientes*

Ivonne Vizcarra estudia la construcción de categorías sociales sobre grupos vulnerables en el campo, así como sus consecuencias sobre la

conducta social de los diferentes segmentos de la población concernida. Muestra que las prioridades del "buen gobierno" foxista (2000-2006) responden, con suma exactitud, a las recomendaciones de las agencias internacionales en materia de combate a la pobreza, seguridad alimentaria y equidad de género. Si bien se puede apreciar una evolución en el diseño de programas de atención a la mujer rural, la autora demuestra que subsisten mecanismos institucionales de discriminación de género. Asimismo, muestra que en esos discursos se sigue considerando a los pobres del campo como clientes del desarrollo con todas las consecuencias negativas de condicionamiento y dependencia que esto implica.

El efímero movimiento social El Campo No Aguanta Más, analizado por Armando Sánchez, denunció la falta de apoyo por parte del poder ejecutivo o mejor dicho del apoyo destinado sectorialmente a reforzar las actividades de la agroindustria en detrimento de los pequeños productores. El hecho de que un movimiento conformado por diversas organizaciones en cuanto a ideología, presencia territorial y ubicación política haya podido obligar a los representantes del gobierno foxista a sentarse y negociar el Acuerdo Nacional para el Campo, indudablemente constituye un logro. Sin embargo, las tensiones y rivalidades entre los líderes rurales han logrado fragmentar el movimiento al mismo tiempo que el gobierno utilizó todo tipo de argucias para no cumplir con lo pactado. Los pequeños productores son, ciertamente, los más perjudicados por el fracaso de esta coyuntura para impulsar el mejoramiento de la situación económica del sector social rural.

CATEGORÍAS PERDURABLES.
ESTADO POSREVOLUCIONARIO E IDENTIDADES
RURALES EN EL SUROESTE DE PUEBLA

*Francisco Javier Gómez Carpinteiro**

RESUMEN

El propósito de este trabajo es identificar el surgimiento histórico de identidades rurales a partir del caso del suroeste de Puebla. El marco analítico de esta investigación es el problema teórico de la relación entre Estado e identidades. El argumento central es que las identidades locales posrevolucionarias, vistas como categorías políticas, están asociadas a la expresión organizativa e institucional de la formación del Estado y a la modernización capitalista en el marco de relaciones conflictivas y con efectos directos en el espacio social. En este sentido, las identidades, pese a la inventiva y capacidad de las personas, no se constituyen aisladamente por medio de discursos políticos o prácticas culturales, sino por su vinculación contradictoria con relaciones sociales y estructuras organizativas. Asimismo, la comunidad nacional que comenzó a formarse en la posrevolución brindó el marco para que los actores rurales de la zona trataran de integrarse a ella poniendo de por medio sentidos de justicia, propiedad y nociones sobre sí mismos, siempre dentro de la articulación de procesos sociales, políticos y culturales.

PRESENTACIÓN

En el contexto de las reformas neoliberales, la crisis del campo pareció haber arribado a su punto más álgido a finales del mes de enero de 2003. Los importantes actos políticos y las concentraciones multitudinarias de campesinos en la capital de país para exigir que

* Profesor-investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: <panchog39@hotmail.com>.

el gobierno mexicano revisara las otras cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC), exhibieron la punta del iceberg de un masivo descontento que manifestó, significativamente, en el nombre que adquirió una coalición de organizaciones de agricultores, El Campo No Aguanta Más, los drásticos efectos que han tenido las transformaciones en el agro, que desde el régimen de Miguel de la Madrid se han aplicado de manera sistemática. Más allá de las consecuencias coyunturales que tuvo esa protesta, ¿cómo reflexionar sobre su génesis, cómo entender su expresión atada a las identidades de los múltiples actores que en ella concurren, teniendo a cuestas sus propios problemas, reivindicaciones e historias regionales o locales de poder?

El propósito de este ensayo es plantear la existencia de identidades rurales que surgieron a la par de la formación del Estado nacional posrevolucionario. Contra lo que pudiera pensarse, tales identidades no corresponden a una esencia o matriz cultural, de donde se derivan valores locales o estilos de vida significativos para construir patrones o configuraciones de un tipo definido; ni tampoco son resultado de objetivaciones derivadas mecánicamente de estructuras económicas. Las identidades están ancladas al surgimiento de categorías sociales vinculadas a la formación del Estado nacional y a los procesos de modernización capitalista, las cuales no sólo expresan desigualdades materiales, sino también diferencias sociales y culturales específicas de acuerdo con determinados contextos espaciales e históricos.

Al comenzar este trabajo refiriéndome a una movilización integrada por campesinos y agricultores de muchos sitios del país, pretendo argumentar acerca de la trascendencia de incorporar el estudio de las historias y sociedades regionales a los entendimientos de movimientos y formas de organización política. Me parece que desde esta perspectiva es factible comprender mejor las acciones colectivas y las ideas que las sustentan con todas sus contradicciones y potencialidades. De esta manera, las identidades no aparecen simplemente como resultado de una "realidad fragmentada", producto de un mundo altamente globalizado y diluyendo las fronteras nacionales, sino enraizadas en historias concretas de trabajo vinculadas a las transformaciones del capitalismo. Esta visión contrasta con las provenientes de la antropología sociocultural, principalmente, que establecen que en esta época posmoderna las subjetividades están menos ligadas al trabajo y a los Estados nación, cuyas fronteras rápidamente se están disolviendo, en cambio éstas se originan por poderes descentrados y tienen en el mercado una fuente

plena y variada para su realización (Appadurai, 2001; Kearney, 1996). Para demostrar lo anterior, analizaré el caso del suroeste de Puebla, donde la formación de identidades posrevolucionarias estuvo relacionada con el control de recursos productivos en un contexto regional e histórico de acumulación capitalista y de reorganización espacial.

Empiezo con un problema teórico construido por la relación entre identidad y Estado, lo cual refiere a la dimensión política en la que se construyen las subjetividades "con él y contra él" (Nugent y Alonso, 2002:175). Sin duda, esta premisa debe mucho a la noción de "gubernamentalidad" de Foucault (1999:195-196), pero también al enfoque de Abrams (1988). Este autor define al Estado como un poder ideológico que legitima lo ilegítimo por medio de procesos y prácticas históricamente específicas de sujeción. En tanto Corrigan y Sayer (1985:4-5), seguidores de Abrams, lo contemplan para el caso de Inglaterra como una revolución cultural, un proyecto de regulación moral que hace obvias y naturales las premisas del orden social, y su formación individualiza a las personas como ciudadanos, votantes, contribuyentes, etcétera. Tanto para Abrams como para sus estudiantes, la regulación moral implica la materialización del Estado a través de categorías previamente concebidas de acuerdo con el sexo, edad, clase o lugar. En términos de Sayer, la referida "materialidad" de las formas cotidianas de la construcción del Estado tiene como propósito identificar la manera en que el Estado "vive" a través de los sujetos, así la resistencia está vinculada a las subjetividades y las sociabilidades "que los dominantes siempre buscan regular, pero nunca logran conformar completamente" (Sayer, 2002:237).

En su conjunto, estas perspectivas han sido centrales en el desarrollo de marcos analíticos que han estudiado las dinámicas entre el Estado y las comunidades rurales en la sociedad posrevolucionaria mexicana (Alonso, 1995; Becker, 1995; Nugent, 1993; Vaughan, 1997). Se conoce con profundidad casos acerca de las relaciones entre el Estado y grupos populares que han iluminado la fuerza de la cultura y la vida cotidiana en la generación de identidades surgidas en marcos contenciosos. En este trabajo trato de continuar con la indagación de las maneras en que la concreción de la formación del Estado tiene efectos en las personas y se materializa en sus formas de sociabilidad. Pero deseo responder particularmente a la pregunta de cómo la formación del Estado se asocia a la modernización capitalista y las consecuencias que tuvo este proceso en la reorganización espacial y la construcción de desigualdades.

En concordancia con las aseveraciones de Corrigan, Ramsey y Sayer (1980), quienes postulan a su modo tal inseparabilidad, pongo énfasis en la necesaria vinculación de las prácticas y discursos culturales con la economía política. Para ellos, los procesos de regulación del Estado tienen consecuencias en las definiciones materiales para trabajar en favor de los intereses del capitalismo, por lo cual es importante observar los rituales y las categorías donde las personas son nombradas y ubicadas en las articulaciones de la división del trabajo con las relaciones políticas y culturales (Corrigan, Ramsey y Sayer, 1980:20-24). Estos autores sostienen que el proceso simultáneo de regular y nominar no está exento de contradicciones, conflictos y luchas; lo que muestra la incesante pero incompleta construcción de la hegemonía del Estado. El caso etnográfico e histórico que aquí muestro esboza los términos en que esos procesos se presentan; busco que sea, además, un acercamiento empírico para seguir mejorando nuestra comprensión de la génesis de las identidades rurales posrevolucionarias.

El asunto de la constitución de las identidades puede verse, además, vinculado a la formación de categorías en la reorganización de un poder estructural, que controla el trabajo y construye subjetividades para el dominio (Wolf, 2001:20-21). Tilly plantea en el estudio de la desigualdad categorial una perspectiva similar a la de Wolf. Establece que las categorías refieren a "la clase, el género, la raza, la etnia y sistemas similares de distinción socialmente organizados que claramente califican" (Wolf, 2001:20). Al igual que Wolf, sugiere analizar también la desigualdad a partir de un enfoque relacional. Su premisa básica es superar perspectivas individualistas que miran a las categorías como "esencias" y no vinculadas a estructuras y procesos organizativos. Dentro de las formas de desigualdad, Tilly pone énfasis en entender las desigualdades *persistentes*, las que persisten y están atadas a trayectorias de vida y a historias organizacionales (Tilly, 2000:20, cursivas en el original).¹

Mi argumento es que las identidades locales posrevolucionarias, vistas como categorías, están asociadas a la expresión organizativa

¹ Tilly dice que las categorías surgen ligadas directamente al control de los recursos productores de valor y a problemas organizativos. De este modo, categorías generalmente pareadas, reconocidas y organizadas como blanco/negro/varón/mujer, casado/soltero/, ciudadano/no ciudadano, entre otras, hacen un crucial trabajo organizacional, que lleva a generar diferencias importantes y duraderas en el acceso a los recursos valorados. Así, "la desigualdad persistente depende abundantemente de la institucionalización de los pares categoriales (Tilly, 2000:22).

e institucional de la formación del Estado y a la modernización capitalista en el marco de relaciones conflictivas y con efectos directos en el espacio social. En este sentido, las identidades, pese a la inventiva y capacidad de las personas, no se constituyen aisladamente a través de discursos políticos o prácticas culturales, sino por su vinculación contradictoria con las relaciones sociales y los procesos organizativos. La comunidad nacional que comenzó a formarse en la posrevolución brindó el marco para que los actores rurales de la zona trataran de integrarse a ella poniendo de por medio sentidos de justicia, propiedad y nociones sobre sí mismos, siempre dentro de la articulación de procesos sociales, políticos y culturales. Como en buena medida lo sostiene el enfoque de la nueva historia cultural (Alonso, 1995; Becker, 1995; Nugent, 1993; Vaughan, 1997), la formación del Estado, vista como "revolución cultural", no fue generadora exclusiva de subjetividades. "La regulación moral" se enlazó a estructuras y procesos de acumulación capitalista, donde hubo expresiones regionales en la reconfiguración del espacio productivo que operaron sobre categorías asentadas previamente y con la generación de nuevas, vinculadas a novedosos procesos organizativos.

Una vez finalizada la revolución armada, en el suroeste de Puebla se reorganizó el poder regional a partir de la modernización de la producción de azúcar. Tal reorganización operó, fundamentalmente, por las acciones de William O. Jenkins, un industrial estadounidense que aplicó principios fordistas, particularmente visibles entre 1921 y 1938, año en el que el presidente Lázaro Cárdenas, ante las exigencias de los agraristas de pueblos y ranchos de la zona, emitió un decreto para expropiar las posesiones de Jenkins y crear un ejido administrado por una cooperativa. En ese decreto también se especificó que los beneficiados serían, contrario a los solicitantes originales, los antiguos trabajadores de Jenkins, y se determinó seguir produciendo caña, la cual se continuaría entregando al molino que Jenkins conservó.²

² El caso que estudio ha sido abordado por otros investigadores. Ronfeldt (1975 [1973]) analiza la creación del ejido colectivo, pero fundamentalmente las luchas y los conflictos faccionales por disolverlo o preservarlo posteriormente. Otero (2004) indaga sobre las relaciones entre Estado y los objetivos y liderazgos del movimiento campesino regional. Su objetivo básico es estudiar la expresión de luchas políticas y de clase en el México contemporáneo. Paré (1979) investiga la subordinación económica y política de los ejidatarios hacia el capital y el Estado, tal condición busca entenderla en el marco de la estructura y las relaciones de clase. También Lara (1979) analiza estas cuestiones y destaca los tipos de fuerza de trabajo al interior de las comunidades

En el marco de la formación del Estado posrevolucionario, Jenkins tuvo éxito en crear un complejo agroindustrial, integrando tierra y agua a la producción de azúcar y sus derivados. En adición, transformó radicalmente el espacio productivo y el paisaje rural, al mejorar y ampliar obras hidráulicas, crear caminos e introducir vías de ferrocarril con el objeto de conectar todas las áreas de cultivo a un ingenio que renovó para concentrar toda la producción de caña de la región. Para lograr estos cambios, el empresario mantuvo relaciones muy estrechas con los principales grupos políticos de la entidad, fundamentalmente con el gobernador Maximino Ávila Camacho, quienes a su vez lo vincularon con la burocracia del centro del país (Ronfeldt, 1975; Pansters, 1992). Sin embargo, basó buena parte de su éxito en las alianzas que mantuvo con grupos y liderazgos locales de pueblos, barrios y ranchos de la región. En el contexto de la formación del Estado posrevolucionario, las categorías que se iban creando para gobernar, como "ejidatarios", "sindicalistas" y otras más que formaron parte de la retórica posrevolucionaria —por ejemplo "agrarista"—, sirvieron muy bien para que ese industrial las utilizara para sus propios fines, y tendieron a crear relaciones más modernas entre el capital y el trabajo, así como un sustrato más firme para instaurar un orden de dominación diferente, aumentando al mismo tiempo las tasas de acumulación. Pero los propios moradores de la zona encararon e interpretaron de diversas formas los procesos que modificaron su espacio social.

Para la gente de este sitio la formación del Estado posrevolucionario y la reorganización capitalista permitieron la activación de comunidades políticas locales, que con agudas contradicciones trataron de incorporarse, conservando o mejorando su posición social en el imaginario de la comunidad nacional. Cuando el Estado abrió las posibilidades para crear ejidos, desarrollar la educación pública y promover ideas en torno a la justicia y la igualdad social, los moradores de la región vieron inigualables oportunidades para mejorar su

ejidales, especialmente toma en cuenta a los cortadores de caña. De Grammont (1979) contrasta formas de lucha y organización después de la creación del ejido colectivo, destacando el despegue económico que tuvo el ingenio de Atencingo a partir de mediados de la década de 1940. Su estudio es interesante por esbozar la construcción de la clase rural regional asociada a diferentes procesos organizativos y de poder a lo largo de la historia del siglo XX. Finalmente, Boege y Ávila (1979) buscan observar la constitución de formas de dominación en la zona de Atencingo, en su planteamiento destacan la poca centralización alcanzada por el Estado que posibilitó que Jenkins y sus aliados alcanzaran la fuerza política que tuvieron.

situación social, creando un núcleo ejidal, abrazando la instrucción pública o buscando ratificar ante el gobierno derechos ancestrales. De tal forma, el surgimiento de categorías no implicó simplemente la encarnación de formas de dominación, sino tales nominaciones permitieron su resignificación por parte de los actores locales. Ellos buscaron darle a esas categorías sus propios sentidos y agregaron otras, como las de "oriundos" "avecindados", "pequeños propietarios", "acasillados", que manifestaron las tensiones internas generadas por disputas ancestrales en torno al control de los recursos.

En el siguiente apartado ofreceré un acercamiento al contexto regional porfirista con el fin de observar en qué sentido el espacio social fue transformado con la modernización capitalista posrevolucionaria y observar qué contradicciones y formas de desigualdad estaban ya presentes en el mundo local. Posteriormente, abordaré la relación entre la formación del Estado, la aplicación de principios fordistas y el surgimiento de nuevas categorías sociales, todo lo cual tuvo expresión en una geografía de poder, matizada por relaciones conflictivas. Concluiré con unas breves reflexiones sobre la utilidad de una orientación histórico-cultural para analizar la construcción de subjetividades relacionadas con estructuras y procesos de acumulación capitalista.

ESBOZO DE UNA ECONOMÍA POLÍTICA REGIONAL DURANTE EL PORFIRIATO

Durante las últimas décadas del siglo XIX se hizo palpable la presencia en la región de un grupo de inmigrantes extranjeros, principalmente españoles, que se establecieron en la ciudad de Puebla, argumentaban que la región era insalubre y proclive a desatar la violencia de sus moradores. Ellos conformaron una elite regional que aprovechó las ventajas de las reformas liberales juaristas y lerdistas para adquirir propiedades de los pueblos de la región. De igual forma, con el régimen de Porfirio Díaz lograron la seguridad necesaria para el desarrollo de distintas actividades económicas. Los miembros de esta elite poseyeron haciendas que funcionaron como unidades productivas relativamente autónomas. Tenían sus propios campos de cultivo y molinos donde producían azúcar, piloncillo y alcohol. Vendían sus productos principalmente en los mercados regionales y en algunos puntos del sur de México. En las haciendas laboraban trabajadores provenientes de pueblos y ranchos vecinos o de otras

comunidades rurales más distantes.³ Existían dos clases de trabajadores: quienes acudían diariamente a trabajar a la hacienda y aquellos que residían de manera permanente en ella, llamados localmente, como en otras partes del país, "acasillados".

A pesar de que las comunidades rurales e indígenas de la zona perdieron buena parte de sus propiedades durante la época colonial (Lipsett-Rivera, 1999:45) y dado que se creó durante la etapa liberal un mercado de tierras que fue aprovechado, sobre todo, por la elite de extranjeros, los moradores de estos lugares tuvieron algún éxito en la defensa de sus derechos sobre la tierra y agua que aún poseían.⁴ Una fuerte jerarquía, apoyada en el sistema de cargos, estuvo encabezada por autoridades locales, llamadas "principales". Estas personas organizaron las formas de propiedad y el acceso a los recursos materiales basándose en una serie de valores y significados

³ La fuente histórica para sustentar esta afirmación proviene de los testimonios de diversos informantes. Ellos cuentan historias de trabajadores que llegaron de otros rumbos; o bien ellos mismos fueron quienes emigraron a esta región de tales sitios. Mertens (1988:59) refiere también que los hacendados del valle de Atlixco, cercano a la región, requirieron para esta época también de cuadrillas de trabajadores oriundos de los distritos de agricultura de temporal de Cholula, Tecali y Tepeaca.

⁴ Presento a continuación algunos ejemplos de las transacciones que se hicieron para comprar y vender tierra en la región durante esta etapa. Archivo General de Notarías, Puebla (AGNP), Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro 1882, f. 7: terreno de labor en el campo Tezoquiapa del pueblo de Tlapanalá que vendió Tomás de la Cruz a favor de José Díaz Rubín; f. 10: terreno de labor, regadío, en el paraje Zapote Blanco del pueblo de Tilapa que vendió Joaquín Vargas a José Díaz Rubín; f. 11: terreno de labor ubicado en el paraje Ahuehuetitla, Tilapa, que Julián Pérez, previo consentimiento de su esposa Valeria Rojas, vendió a José Díaz Rubín; f. 12: terreno de labor localizado en el pasaje La Cienega, Tlapanalá, que Juan Paulino Amarillas vendió a José Díaz Rubín. Libro de Registro 1883, f. 20: terreno de labor en el paraje Tezoquiapa, Tlapanalá, que vendió Juan Anselmo Gaspar, con el consentimiento de su esposa María Josefa Mendoza, a José Díaz Rubín, representado por Manuel Huerta; f. 21: huerta de árboles frutales, ubicada en Tilapa, que vendió Joaquín Vargas a José Díaz Rubín; f. 23: un sitio con casa habitación y huerta de árboles frutales, en Tilapa, que Manuel Velis Mora vendió a José Díaz Rubín; f. 24: terreno de riego, localizado en el paraje Cantlalca, Tilapa, que José Díaz Rubín vendió a Teodoro Zamora. Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1897, f. 70: "Los señores José Bello y Sebastián B. De Mier celebraron el contrato de venta en pacto de retroventa, vendiendo el primero a favor del segundo cuatro terrenos, sitios en Matzaco". Díaz Rubín adquirió de un pequeño propietario un terreno que anteriormente había pertenecido al "común del pueblo de Tlapanalá". AJP, 1884, s/n: amojonamiento promovido por José Díaz Rubín.

locales sobre la justicia y la autonomía. Las autoridades de pueblos y barrios apoyaron sus labores en "representantes" o "apoderados", abogados, tinterillos o individuos con capacidades para leer y escribir, y oriundos de las comunidades o ajenos a ellas. Estos representantes tuvieron un peso determinante en la defensa de los derechos a los recursos productivos de las poblaciones rurales, principalmente los del agua para riego.

De la misma manera que la Corona española otorgó desde 1635, a los encomenderos, los pueblos de la región tuvieron derecho a ciertos volúmenes de agua para uso agrícola.⁵ Manteniendo relaciones muy tensas con las haciendas, las comunidades hicieron efectivas sus concesiones al recurso a lo largo de los años. Incluso con el gobierno de Díaz se trató de regularizar los usos del agua y de establecer con claridad las cantidades asignadas, tanto para haciendas como a pueblos, luego de peticiones que directamente hicieron las comunidades de la zona a la burocracia porfirista y de los conflictos que existían entre éstos y los grandes propietarios (Kroeber, 1994:138).

Pero los conflictos entre hacendados y moradores de comunidades rurales no fueron los únicos. Dentro de este marco de tensiones, una elite local, compuesta de comerciantes, agricultores y profesionistas, tuvo sus propios intereses y recreó relaciones contradictorias con los otros sectores. Sus miembros jugaron un papel clave en la creación de un mercado de tierras en la región desde el último tercio del siglo XIX. Adquirían terrenos en los radios de pueblos y barrios y después los revendían entre los hacendados, o bien los acaparaban para

⁵ El agua fue otorgada mediante "repartimiento" por Juan González Peñafiel, fiscal de la Real Audiencia. "Copia certificada de la simple del testimonio del Título de Aguas". Este documento es común encontrarlo en los archivos de ejidos y asociaciones locales de regantes. Generalmente, autoridades de pueblos y barrios de la región pidieron una copia al Archivo General de la Nación al comienzo de la fase posrevolucionaria para ratificar sus derechos al riego ante el Estado.

⁶ Documento sólo algunos ejemplos de este tipo de acciones. AGNP, Libro de Registro de Documentos 1897, f. 61: 32 terrenos en el pueblo de Tilapa, que Catalino Veliz vendió a Agustín de la Hidalga. AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1897, f. 70: "Los señores José Bello y Sebastián B. De Mier celebraron el contrato de venta en pacto de retroventa, vendiendo el primero a favor del segundo cuatro terrenos, sitios en Matzaco"; Libro de Registro de Documentos, f. 23: dos terrenos ubicados en el paraje Coyula del pueblo de Puctla, que vendió Trinidad Piedra a Sebastián B. Mier, representado por Antonio Posada. AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Registro de Contratos, f. 52: compraventa de un terreno, ubicado en

la producción agrícola.⁶ Sin embargo, en lo político no dependieron de los propietarios extranjeros. Esta elite local ocupó los puestos de la burocracia de la región y tuvo conexiones directas con el gobierno porfirista. Por otra parte, trató de mejorar su posición en el espacio regional. Por lo tanto, deseó controlar la mayor cantidad de tierras y derechos de agua. Generalmente, sus aspiraciones en este rubro se toparon con las decisiones de las autoridades locales —“principales”—, quienes fueron muy reacios a ceder las concesiones de agua a este grupo.

La elite local fundamentó su vinculación con el Estado porfirista a través del manejo de valores y discursos patrióticos promovidos desde el centro político del país. Combinado con ideas de modernización y progreso, los ricos locales reprodujeron un discurso en el cual querían modificar el espacio social mejorando o reforzando su

el barrio de La Magdalena, entre Sebastián B. Mier (comprador), representado por Antonio Posada, y Antonio Armijo (vendedor). AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1908, f. 84: rancho de Santa Ana, Tlapanalá, que Luis G. Hernández vendió a Mauricio Anzures, 15 de enero de 1908. Esta misma propiedad la adquirió de Enrique Llaca, dueño en ese entonces de la hacienda San José Teruel, quien a su vez la compró a un vecino del pueblo de Tepeojuma. AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1909, f. 1: seis terrenos de riego ubicados en el potrero del Pueblo de Puctla, que vendió Daniel López a Alejandro Fuentes, 10 de enero de 1909; f. 4: nueve terrenos de riego localizados en distintos barrios de Izúcar de Matamoros, que Alejandro Fuentes vendió a Luis G. Hernández, 22 de febrero de 1909. Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 2: terreno ubicado en el paraje Apatlaco del barrio de Santa Catarina, Izúcar de Matamoros, que José Marín vendió a Alejandro Fuentes, 23 de enero de 1910. AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 2: terreno ubicado en el paraje Solpetitla, en el barrio de San Bernardino, Izúcar de Matamoros, que vendió Luis G. Hernández a Alejandro Fuentes, 11 marzo de 1910; Libro de Registro de Documentos, 1910, f. 10: terreno localizado en Solpetitla, barrio San Bernardino de Izúcar de Matamoros, que Luis G. Hernández vendió a Alejandro Fuentes, s/n. AGNP, Notaría Izúcar de Matamoros, Libro de Registro de Documentos 1898, f. 78: terreno localizado en el paraje Los Capines, que vendió Margarito Castillo a Pascuala Ballinas, 4 de octubre de 1898. Libro de Registro de Documentos 1905, f. 39: fracción del rancho de Zacarril, Tilapa, que la señora Trinidad Cortés vendió a Jesús R. Vargas, 9 de enero de 1905; Libro de Registro de Documentos 1909, f. s/n: lote No. 1 del rancho Zacamila, Tilapa, que Jesús Vargas vendió a Vicente Enríquez, quien compró para su menor hijo Antonio Enríquez. Jesús R. Vargas había heredado de su padre, un próspero comerciante de Tilapa, once terrenos de riego (AGNP, Carpeta No. 3, Copia íntegra de Expediente de Testamento privado otorgado por el Sr. Rafael E. Vargas para Elevarlo a Escritura Pública, 21 de enero 1900).

posición en él para combatir la "pobreza", el "atraso" y la "ignorancia", en una palabra, la "incivilidad" de poblaciones indígenas.⁷ En este sentido, ellos promovieron diversas ceremonias y festivales cívicos para homenajear héroes y símbolos patrios.⁸ Con estos rituales el gobierno de Díaz buscaba ganar legitimidad, mientras los ricos locales construían un tipo de liderazgo político que les permitiera un mayor margen de acción para sus maniobras y capacidad para controlar mejor los recursos materiales de los pueblos de la región. Los alcances de la elite local fueron limitados. Los propietarios extranjeros, pese a respetar al gobierno de Díaz, no hicieron prácticamente nada por constituirse en un vehículo efectivo de la legitimidad del régimen, así que sólo vieron la modernidad que promovía el gobierno como la posibilidad de renovar sus sistemas productivos. Con respecto a los moradores de los pueblos, la modernización implicaba minar sus capacidades de control de sus derechos a tierra y agua. Aunque se consideraban a sí mismos patriotas, porque como lo cuentan los moradores de la región, paisanos suyos en el pasado lucharon contra los invasores franceses en el siglo XIX, miraron con desconfianza los festivales cívicos promovidos por las elites locales y, en general, las maniobras políticas y económicas de las elites. Acerca de este desdén, Sofía Pérez, una mujer que nació en 1902 en el pueblo de Tepeojuma, contó lo siguiente: "mis abuelos decían que esas fiestas las

⁷ Raymundo García, *Mortalidad y sus causas en el distrito de Izúcar de Matamoros* (1899). Raymundo García, era un médico que vivía y trabajaba en la zona, manifestó su desencanto por "lo exagerado de las tradiciones locales", que impedían a su juicio impulsar proyectos de modernización.

⁸ La inauguración del ferrocarril interoceánico fue una ocasión para un acto de esta clase. En aquella fecha el jefe político del distrito de Izúcar de Matamoros recibió la orden de mantener izada la bandera nacional, mientras el gobernador estuviera en ese sitio con motivo de tal acontecimiento. AGNP, Circulares 1873-1896: circular s/n: que envió el gobierno del estado de Puebla a la jefatura política del distrito de Izúcar de Matamoros, 30 de mayo de 1890. Ese mismo año, con el propósito de celebrar la independencia del país, el gobernador de Puebla dirigió una carta a la autoridad política de Izúcar de Matamoros en los siguientes términos: "Deseando solemnizar las glorias de la patria de la mejor manera posible y considerando que los empleados de este distrito a quienes tengo la honra de dirigirme se encuentran animados de los mismos sentimientos por la presente les suplico se sirvan cooperar con lo que les fuere posible y concurrir con sus empleados el día 15 a las 9 de la noche y el día 16 a las 9 de la mañana al palacio municipal con el objeto de verificar el paseo cívico que tendrá lugar en la conmemoración de nuestra gloriosa independencia". AGNP, Circulares 1873-1896: circular 56: que envió gobernador del estado de Puebla a la jefatura política de Izúcar de Matamoros, 9 de septiembre de 1890.

hacían nada más las gentes de fuera, del gobierno, casi nadie de aquí iba a celebrar con ellos”.

En este contexto regional, las más grandes e importantes desigualdades estuvieron vinculadas al control de los recursos que generaron valor, principalmente el agua. Por una parte, la elite extranjera, propietaria de grandes haciendas productoras de azúcar y sus derivados, subrayó su distancia social de los habitantes locales y no hizo mucho para legitimar su autoridad o la del régimen, por ejemplo, tejiendo lazos sociales hacia abajo. En suma, los integrantes de esa elite fueron hábiles en crear trabajadores, pero fallaron en influir en la construcción de subjetividades leales a ellos mismos y al Estado porfirista. Por otra parte, con su posición social surgida para controlar ciertas áreas del mercado local y puestos públicos, la elite de comerciantes, agricultores y profesionistas reprodujo bien el discurso racial y calificó como “inciviles” las prácticas e ideas de poblaciones indígenas y campesinas, a veces detentadoras de derechos de agua, que le impedían ascender en la escala social.

Finalmente, al interior de las comunidades rurales se reprodujeron diversas diferencias de género, generación y clase, las cuales operaron directamente en el acaparamiento del agua y en la exclusión de su control. Bajo estas circunstancias, la defensa de la autonomía de los pueblos ante clases y fuerzas más poderosas de la región se llevó a cabo, contradictoriamente, a costa de la activación sistemática de desigualdades categoriales como la de viejos/jóvenes, varones/mujeres, y posesionarios de agua/no posesionarios de ese recurso.

Para la primera década del siglo XX, la prosperidad de empresas y haciendas en Puebla (y en todo el país) contrastaba con el descontento social por parte de grupos populares (Thomson, 1989:75). Sin ningún sustrato que otorgara apoyo político a sus acciones, la elite extranjera experimentó, directamente, durante la revolución armada serios ataques a sus unidades productivas, las cuales fueron cerradas y sus campos de cultivo incendiados y abandonados. No está de más decir que los contingentes que atacaron a esas haciendas estaban compuestos por vecinos de las comunidades de la región que se unieron a la causa revolucionaria (LaFrance, 1989:189). Cuando el movimiento armado terminó (más o menos al final de esa misma década), esta elite buscó reanudar la operación de sus haciendas y molinos. Sin embargo, nuevos actores, fuerzas y relaciones sociales emergían en una configuración de poder diferente, la cual estaría relacionada con otra estructura de acumulación capitalista y en novedosos procesos de reorganización del espacio social.

CAPITALISMO, REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Y ESTADO POSREVOLUCIONARIO

William O. Jenkins fue cónsul honorario de Estados Unidos en la ciudad de Puebla. En 1921, con fuerte capital político y económico, comenzó a adquirir propiedades en la región.⁹ Ante las dificultades que encararon los integrantes de la elite de extranjeros para reanudar las operaciones de sus haciendas, Jenkins se las fue comprando paulatinamente. Para 1936, este industrial ya había obtenido las posesiones más grandes de la región. Como indiqué antes, también construyó infraestructuras físicas y sociales —caminos, vías de ferrocarril, integración de campos de cultivo, canales de riego, créditos, construcción de escuelas y otras obras públicas. Sin embargo, estas transacciones y obras no fueron parte de un proceso simple; estuvieron llenas de contradicciones y ambigüedades en las que se vieron envueltas diferentes actores colectivos, fuerzas e instituciones. En este contexto se puede apreciar mejor el surgimiento o reformulación de categorías políticas que se ajustaron a la reorganización capitalista de la región.

Además de contar con pocos recursos financieros y contactos con la burocracia posrevolucionaria, la antigua elite de extranjeros enfrentó la presión de los habitantes de pueblos y ranchos de la región que solicitaban al gobierno la expropiación de sus tierras para la formación de ejidos. Por su parte, el Estado posrevolucionario en su proceso de formación promovió una serie de reformas sociales y culturales, entre ellas la fundación de núcleos ejidales y escuelas públicas. En este marco, Jenkins y sus empleados pudieron desarrollar diversas estrategias para concentrar los mayores recursos disponibles en la zona. En primera instancia, impulsaron a los agraristas de la región, quienes habían participado directamente en la revolución armada y en algunas campañas militares para la defensa del régimen posrevolucionario, azuzándolos para que presionaran al gobierno con la finalidad de que expropiara las posesiones de los propietarios porfiristas.

⁹ Acorde con el marco analítico que manejo, uso la noción de “capital político y económico” en un sentido relacional. Veo al poder como una relación social, y surge como “un aspecto de todas las relaciones entre las personas (Wolf, 2001:20). Asimismo, esta noción está vinculada a la idea de Bourdieu (1988:113) de ver a los capitales (económico, social, cultural y simbólico) constituirse en un campo circundado por relaciones de poder objetivas, que tienen una base material.

Cito un ejemplo de esos procesos para la formación de ejidos. En 1925, un antiguo revolucionario del pueblo de Tepeojuma llamado Juan Merino y calificado por sus oponentes como agrarista, encabezó solicitudes ante el gobierno para la creación de un ejido. El objetivo del grupo liderado por Merino era lograr una dotación que pudiera otorgar a cada posible ejidatario al menos tres hectáreas de riego. En su solicitud, la gente de Merino ofreció al gobierno un panorama sobre la extensión que guardaban las fincas particulares alrededor de la población, entre ellas se determinaba las susceptibles de ser afectadas. Las propiedades que rodeaban a Tepeojuma eran las haciendas de Teruel, Espíritu Santo Tatetla, La Magdalena y un rancho anexo a esta última llamado Tlatic. Las dos primeras fincas eran propiedad de Jenkins, aunque legalmente aparecía una hija suya como la dueña. Las otras estaban en posesión de los sucesores de Sebastián B. Mier, también propietarios de San Nicolás Tolentino, una hacienda situada más hacia el sur y que también enfrentaba la presión de numerosos pueblos para su fraccionamiento. Un representante de los sucesores de Mier manifestó su desacuerdo con la expropiación de tierras irrigadas en beneficio de los solicitantes de Tepeojuma. Alegaba que éstas eran sembradas con caña de azúcar, cultivo que era industrializado. Jenkins, por su parte, manifestó su "apoyo" para que las propiedades a nombre de su hija fueran afectadas para la creación de las parcelas ejidales de Tepeojuma. Sin embargo, determinó que las parcelas serían formadas con extensiones de las haciendas del Espíritu Santo y San José Teruel, no contempladas dentro de sus áreas irrigadas.¹⁰

Asimismo, Jenkins y sus empleados fomentaron en las haciendas la creación de sindicatos que comenzaron a demandar mejores salarios y condiciones de trabajo para sus agremiados. De acuerdo con Valentín Moreno, un viejo trabajador de la hacienda propiedad de la familia francesa Maurer, "en 1934 empezó a mangonear Guillermo Jenkins, el mero apoderado de Atencingo. Éste le empezó a meter sindicatos a Raboso, y cobraban caro, y entonces ellos [los Maurer] se empezaron a aburrir y le vendieron".¹¹ Casi a mediados de la década

¹⁰ Registro Agrario Nacional-Puebla (RAN-P), exp. 599 (dotación), f. 4: Resolución para la dotación de ejido al pueblo de Tepeojuma, de la solicitud hecha por vecinos de este lugar el 13 de noviembre de 1925.

¹¹ En adición a los problemas con el sindicato que comenzó a operar en su hacienda, los Maurer encararon presiones de los agraristas de los poblados de Agua Dulce, Puctla, San Mateo Oxtotla y San Juan Raboso. En este último lugar vivían los trabajadores residentes de la hacienda, quienes argumentaban que el suyo era un centro de población con la categoría po-

de 1930, el papel del sindicato se tornó más relevante. Los sindicatos se erigieron en un punto de convergencia de conflictos y alianzas de fuerzas políticas regionales.

La Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC), que representaba el mayor número de obreros en Puebla, se vinculó con la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), antecedente directo de la Central de Trabajadores de México (CTM). En cambio, en la zona cercana de Atlixco, que contaba con numerosas fábricas textiles, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) adquirió bastante fuerza política (Malpica, 1989: 167). Este organismo apoyó la candidatura de Maximino Ávila Camacho. En cambio la FROC no, y fue perseguida violentamente por ese político.¹² Ambas centrales de trabajadores trataron de expandirse en la región suroeste de Puebla, principalmente por medio de la afiliación de los trabajadores cañeros y azucareros. Jenkins y su gente estuvieron muy atentos a estas disputas. En una carta que el administrador del complejo agroindustrial escribe a uno de los dueños de la hacienda de Raboso, prácticamente en la víspera de que Jenkins pasara a ser propietario de esta unidad productiva, establece que

[...] yo dije [...] mi modo de pensar en el sentido de que tanto la FROC como la CROM en el estado tienen cierta supedición [*sic*] para su estabilidad o preponderancia relacionada con el que vaya a ser el nuevo gobernador del estado. Si triunfa [Maximino] Ávila Camacho, la CROM va a tener cierta preponderancia (Torres, 1994:182).

En esa carta el empleado de Jenkins sugería entablar negociaciones con la CROM. No obstante, Jenkins y sus empleados no desarrollaron acciones concretas para mostrar sus simpatías por una u otra central de trabajadores. Las alianzas que establecieron con ellas dependieron de la hegemonía lograda por ciertos grupos políticos

lítica para demandar tierras ejidales. En torno a este problema, el gobernador del estado de Puebla, José Mijares Palencia, informó al presidente Abelardo L. Rodríguez que la gente de San Juan Raboso trataba de "hacer un cambio de localización [de su ejido], permutando una fracción de 50 hectáreas de terrenos de temporal por otro de iguales dimensiones, pero en terrenos de riego y sembrado de caña de azúcar, lo que viene a causar daños de difícil reparación para los quejosos". Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Abelardo L. Rodríguez, exp. 552.5/198, 12 de junio de 1933.

¹² Para un acercamiento más profundo a las luchas intersindicales y a la represión avilacamachista contra la FROC, véase Gamboa (1981:58-59); Gamboa y Munguía (1981:36-37); Malpica (1981:155, 1989:174-176) y Pansters (1992:120-124).

regionales. Para el tiempo en que se redactó la carta citada, la CROM efectivamente iba en ascenso y contaba con el apoyo de Maximino Ávila Camacho. Sin embargo, la FROC evitó ser desplazada de los sindicatos de trabajadores del complejo de Jenkins.¹³

Pese a los embates de las facciones avilacamachistas, la FROC siguió dirigiendo los sindicatos de trabajadores de las haciendas de Jenkins. Cuando las exigencias de las comunidades de la región arrieron para que las posesiones de Jenkins fueran expropiadas, este organismo sindical tuvo un papel clave en las negociaciones que llevaron al diseño de los términos en que se ejecutó el decreto presidencial cardenista. En ese momento, la FROC se alió, paradójicamente, con el gobierno de Ávila Camacho y Jenkins, y todos juntos lograron que la resolución presidencial otorgara las tierras a los trabajadores del complejo agroindustrial y no a los campesinos que originalmente las solicitaron. La participación de este organismo fue importante, no simplemente por representar la suma de una fuerza más. La FROC, como parte de la CTM, conformaba un sector político que había expresado su lealtad al régimen de Cárdenas. Jenkins y el gobierno regional apreciaron y aprovecharon para sus fines esta relación.¹⁴

Jenkins logró tener influencia entre los agraristas y los sindicalistas debido a las relaciones que mantuvo tanto con los líderes de las co-

¹³ Ronfeldt observó igualmente la importancia política que jugó la FROC en la reforma agraria cardenista. Él sostiene que ésta, dirigida en Puebla por Blas Chumacero y la CTM, cuyo máximo dirigente era Vicente Lombardo Toledano, intervino en favor de Jenkins para que el presidente Cárdenas decretara la formación de un ejido colectivo que "benefició" a los antiguos trabajadores de Jenkins, y permitió que continuaran suministrando materia prima al molino del estadounidense (Ronfeldt, 1975:32-34).

¹⁴ Para mayo de 1936, la FROC informaba al gobierno que habían firmado provisionalmente un contrato de trabajo con la Compañía Civil e Industrial de Atencingo, propiedad de Jenkins. Cuando Maximino Ávila Camacho arribó al gobierno de Puebla, en 1937, mantenía una evidente distancia política con Vicente Lombardo Toledano, representante de la CTM, a la cual estaba afiliada la FROC poblana. Sin embargo, en lugar de continuar combatiendo a los froquistas, Ávila Camacho vio en ellos un aliado sólido en las negociaciones tendientes a lograr la reforma agraria que crearía el ejido colectivo. Poco después de haberse publicado la resolución presidencial y que comenzaron a funcionar el ejido y la cooperativa ejidal, Vicente Lombardo Toledano pidió al presidente Cárdenas una audiencia, recordó al presidente la solicitud que Maximino Ávila Camacho le había hecho para ese fin. En la reunión se tratarían cuestiones relativas al reparto de tierra en la zona del ingenio de Atencingo. Manifestó, además, que lo acompañaría una comisión de obreros y campesinos de "las diversas haciendas [de] Atencingo con [el] propósito exclusivo [de] plantear a usted problema y explicarle aspectos importantísimos..." (AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, exp. 404.1/5767).

munidades rurales de la región como los de las centrales obreras de Puebla. Así, no sólo esas nuevas categorías políticas, junto con sus liderazgos, contribuyeron al desplazamiento de las viejas elites, sino que también cambiaron las formas de trabajo en la región y contribuyeron a la expansión de la ganancia.

Al final se puede apreciar que para 1938, del total de hectáreas que agrupaban las antiguas haciendas porfiristas, 52 204, Jenkins sólo logró conservar 10 910. Sin embargo, entre esas posesiones, 8 338 eran tierras de riego, prácticamente la misma cantidad de terrenos de riego que poseyó la elite de grandes propietarios porfiristas (véase el cuadro 1). Por otra parte, antes de la revuelta armada, las tierras de la región habían producido un promedio de 64 toneladas de caña por hectárea, después de finalizado el conflicto produjeron 78 en 1924 y 85 en 1927. En cambio, en 1931 la cosecha llegó a 120 toneladas por hectárea y en 1934 ascendió a 161. "Se dijo que el ingenio de Atencingo se había convertido en el más productivo de México y que las tierras habían producido el más alto rendimiento en toda la América Latina" (Ronfeldt, 1975:23).

También las alianzas entre Jenkins y esos liderazgos llevaron a que los segundos lograran que pueblos, ranchos y barrios vendieran o rentaran tierras y derechos de agua, para que se destinarían a la producción de azúcar (véase el cuadro 2). Para que estos vínculos tuvieran una base de legitimación, Jenkins patrocinó la construcción de escuelas públicas; introdujo luz eléctrica en algunos poblados; pagó el arreglo y mantenimiento de parques, edificios de presidencias municipales y auxiliares, y proporcionó dinero para la realización de fiestas patronales en diferentes lugares.

Por otra parte, Jenkins otorgó créditos directamente o a través de sus empleados a aquellos productores locales que se integraron al cultivo de caña. Sin embargo, dentro de los pueblos no hubo un consenso generalizado para aliarse con él. De hecho, existieron facciones que desconfiaron desde el primer momento de los planes de Jenkins, y cuando éste ya controlaba buena parte de los recursos productivos de la región, continuaron oponiéndose a sus propósitos. Los conflictos entre los seguidores de Jenkins y sus contrarios tuvieron, a menudo, desenlaces violentos. La cuestión no era sencilla. Estas alianzas y enemistades se presentaron en un ambiente donde se activaron reclamos para lograr justicia e igualdad social. No sólo la posibilidad de obtener tierra mediante la creación de un ejido activaba esos deseos, sino también el hecho de que el acceso a la educación pública pudiera socavar la ignorancia y reducir distancias de clase, como a menudo lo apuntaban los agraristas de la región. Si Jenkins fo-

CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS, 1921-1938

<i>Hacienda</i>	<i>Propietarios</i>	<i>Superficie (ha)</i>		<i>Superficie (ha) propiedad de Jenkins</i>	
		<i>Total</i>	<i>Irrigadas</i>	<i>Total</i>	<i>Irrigadas</i>
Teruel	Ángela Conde Vda. De Conde	3 812	700	811	677
La Magdalena	Sucesores Sebastián B. Mier	2 645	25		
Espíritu Santo	(Tatetla) Juan Pérez Acedo	4 847	322	1 035*	931
Raboso	Familia Maurer	2 234	1 071	1 163	921
San Nicolás Tolentino		14 747	2 631	1 038	866
Matéala	Herlinda Llera Vda. De la Hidalga	18 000	240		240
Rijo	Herlinda Llera Vda. De la Hidalga	3 049	660	367	349
Colón	Herlinda Llera Vda. De la Hidalga	2 870	500	577	403
Jaltepec				1 752	1 277
Atencingo y anexo Lagunillas	Familia Díaz Rubín		2 500	4 167	2 714
Totales		52 204	8 649	10 910	8 368

* Suma total de Tatetla y su anexo La Magdalena.

FUENTE: elaboración propia con base en los datos contenidos en las resoluciones presidenciales, Archivo del Registro Agrario Nacional-Puebla (ARAN-P).

CUADRO 2
TOTAL DE VOLÚMENES DE AGUA DE HACIENDAS Y COMUNIDADES RURALES QUE SE USARON PARA LA FABRICACIÓN DE AZÚCAR

<i>Concesionarios</i>	<i>Volúmenes</i>	<i>Volúmenes con alguna restricción Litros por segundo</i>
Hacienda	10 615	555*
Pueblos/barrios	3 785	745** 1 470***

* Líquido usado del 10 al 31 de diciembre.

** Utilizado sólo los domingos.

*** Únicamente 54 horas cada 15 días.

FUENTE: Archivo Histórico del Agua (AHA), informes de aprovechamiento del agua del río Nexapa, 1920-1925.

mentaba movimientos en favor de la formación de ejidos y al mismo tiempo patrocinaba la construcción de escuelas, aliarse con él pudo resultar tanto atractivo como contradictorio, dado que al mismo tiempo minaba autonomías locales para el manejo de los recursos naturales.

La agroindustria para la fabricación de azúcar y sus derivados requirió de mucha mano de obra. Además de contar con los antiguos trabajadores "acasillados" de las haciendas que adquiría, Jenkins y sus administradores contrataron a peones provenientes de los pueblos vecinos. Como ya expliqué, en un primer momento Jenkins estableció alianzas con los agraristas de los pueblos para impulsar la formación de ejidos y, simultáneamente, la desestabilización económica de los antiguos grandes propietarios. Sin embargo, los ejidos que se formaron fueron integrados en su mayor parte por tierras de temporal. Por lo tanto, los grupos locales opuestos a Jenkins demandaron al gobierno la expropiación de las posesiones de Jenkins. Ante esta situación, el industrial prescindió de seguir contratando a trabajadores provenientes de los pueblos contiguos a sus propiedades. En su lugar, reclutó a una fuerza de trabajo que provino principalmente de poblaciones rurales del centro de Puebla y del estado de Oaxaca. Esos nuevos trabajadores fueron conocidos localmente como los "avecindados" y fueron objeto de resentimiento por parte de los habitantes originales u "oriundos" de los pueblos, quienes creían que los segundos eran los causantes de la pérdida de sus trabajos. Además, los empleados de Jenkins se encargaron de profundizar ese resentimiento. A menudo promovieron que los recién llegados a los pueblos tuvieran o participaran en el control de algún cargo cívico, lo que generó agudos conflictos internos, incluso sangrientos.

Pero no sólo la tierra y el trabajo fueron motivos de conflictos. El agua representó también una importante fuente de tensiones. Otra vez, con el surgimiento de la sociedad posrevolucionaria, los antiguos concesionarios a derechos al líquido buscaron ratificarlos ante el Estado central. Proprietarios de las haciendas porfiristas, los moradores de pueblos y el propio Jenkins entablaron entre sí diferentes disputas por el control del agua. Por lo general, los pleitos tenían que ver con la denuncia de robos de agua o por las negativas de alguna parte de compartir el volumen que pasaba por una toma para diferentes usuarios.¹⁵ Además, los conflictos también enfren-

¹⁵ Archivo Histórico del Agua (AHA), Aprovechamientos Superficiales (AS), caja 528, exp. 8082, ff. 4-9: memoria descriptiva de 24 de septiembre de 1926, Jefe de la VII Zona de Aguas.

taron internamente a residentes de los pueblos y a pueblos contra pueblos. En este contexto, el gobierno federal trató de normar los usos del líquido. Buscó crear un reglamento que estableciera los volúmenes de agua correspondientes para cada concesionario y marcara una serie de disposiciones para su manejo, al mismo tiempo planteó la formación de "juntas de agua" con la finalidad de aplicar tal reglamentación.¹⁶

Las políticas federales de centralización de la administración del agua de riego chocaron con prácticas y organismos locales. Si bien el Estado logró determinar qué cantidades corresponderían a cada concesionario, no tuvo el mismo éxito para hacer funcionar a las citadas juntas. En los pueblos y barrios existían formas de organización comunitarias asociadas a los sistemas de cargos sociorreligiosos que controlaban el manejo y el acceso al recurso. De tal manera, las iniciativas de los agentes de gobierno por reglamentar el uso del agua para un control más centralizado se toparon con estas estructuras. Los mayordomos o "principales del agua" eran quienes internamente determinaban qué personas serían beneficiarias del líquido, lo que generaba formas de subordinación basadas en la generación, el género y la clase, puesto que hombres ancianos con alta concentración de recursos materiales y simbólicos estaban al frente de la organización local del agua.

Quienes no tuvieron agua o su papel en su control fue bajo, contemplaron los procesos políticos asociados a la formación del Estado posrevolucionario y a la reorganización capitalista como una posibilidad para mejorar su posición social. Algunos vecinos apoyaron el deseo del gobierno federal de crear juntas de agua. Otros trataron de vincularse con Jenkins para tener más fuerza en el plano regional. Sus intentos generalmente fallaron, pero mostrarían las fuertes disputas que existían entre los vecinos.¹⁷ A diferencia de funcionarios y técnicos del gobierno, Jenkins comprendió bien los usos y costumbres en el manejo local del agua. Contrario a las iniciativas del Estado, no pretendió socavarlos, sino ajustar sus propios obje-

¹⁶ AHA, AS, caja 528, exp. 8082, ff. 80-89: reglamento provisional sin fecha para la distribución de las aguas del río Nexapa y sus afluentes los ríos Nexac, Apol, Alseseca, Barranca de la Leona, Barranca del Carmen, Cantarranas, Manantiales de Axocopan, Epatlán, Ahuehuevo y Tototl, Cuenca del Balsas, estado de Puebla; caja, 527, exp. 8081, ff. 61-62: informe de 23 de marzo de 1933 sobre la inspección practicada a la caja del canal de la hacienda de Raboso y los barrios orientales.

¹⁷ AHA, AS, caja 527, exp. 8081, f. 246: oficio de 22 de mayo de 1935 de vecinos del barrio de San Bernardino a la SAYF.

tivos a las formas de organización y autoridad locales. En algunas partes de la región, como en los barrios de la pequeña ciudad de Izúcar, trabajó directamente con "representantes", quienes pudieron concentrar los recursos de pequeños propietarios de tierra y agua para sembrar caña de azúcar. Como señalé antes, durante el Porfiriato los representantes o apoderados habían sido hasta ese momento figuras políticas cruciales en la defensa de los recursos de la comunidad ante fuerzas externas. En el periodo de reformas liberales, pueblos y autoridades locales ocuparon abogados, tinterillos o personas con habilidades para leer y escribir con el deseo de que defendieran ante la burocracia central sus derechos sobre la tierra y el agua. Si lograron algún éxito fue gracias a la tarea de esos representantes. En el periodo en que Jenkins creó su complejo agroindustrial, diversos productores se aglutinaron en torno a un representante que coordinaba sus actividades y buscaba que sus distintos campos se enlazaran para el cultivo de caña y su agua se ocupara para ese mismo fin.

Asegurando el suficiente riego de la planta, Jenkins contrató sus propios representantes, algunos integrantes de la elite local, que a su vez se vincularon con los apoderados de los pequeños propietarios de los barrios. En los marcos locales llegó a existir, separadamente, la propiedad de la tierra y la del agua; de manera que alguien podía vender su tierra y seguir conservando sus derechos de agua. Estaba tan enraizada esta práctica que los empleados del gobierno llegaron a manifestar que existía un *ethos* en la región, que podía mover a la gente a la defensa violenta de su forma de organización del uso y control del este recurso.¹⁸ Jenkins pudo haber adquirido entonces numerosas áreas de tierra, pero sin agua. Por esta razón, la labor de esos representantes, que lograron mantener acuerdos con vecinos y autoridades locales, fue clave para los fines del industrial estadounidense.

En otros lugares, como aquellos pueblos que lograron dotaciones ejidales con derechos de agua, Jenkins y su gente impulsaron la siembra de caña a través de acuerdos que establecieron con facciones y líderes locales; en el caso de los pueblos con derechos ancestrales, siguió las mismas estrategias. Jenkins pudo obtener, finalmente, tierra y agua suficientes para la producción de azúcar, pero, reitero, en el ámbito local eso significó fuertes tensiones y conflictos entre los moradores. Algún convenio que una autoridad firmó con Jenkins para cultivar caña, el permiso para que una obra hidráulica de éste pasara por el pueblo, la fundación de una escuela pública, representó

¹⁸ AHA, AS, caja 535, exp. 8109, ff. 27-28: informe de 8 de junio de 1949, elaborado por el perito hidráulico Juan I. Lizalde de la Comisión Nacional de Irrigación.

un espacio de disputa y violencia, dado que no siempre esas iniciativas fueron apoyadas por todos los vecinos.

Para 1938 el complejo agroindustrial estaba completamente consolidado, prácticamente toda la tierra y agua se destinaba a la producción de azúcar y sus derivados. Como ya señalé, por esas fechas aumentaron también los reclamos de agraristas de pueblos de la región. Ellos pedían al gobierno el fraccionamiento de las propiedades del industrial para fundar ejidos. Ante esos reclamos, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar las tierras de ese complejo para la creación de núcleos ejidales. Sin embargo, la alianza formada por Jenkins y el gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, impidió que se pusiera en práctica dicha decisión. Entonces Cárdenas decretó, en 1938, la expropiación de las posesiones de Jenkins, pero los beneficiarios serían no los vecinos que originalmente reclamaron las tierras, sino los trabajadores del complejo agroindustrial, los antiguos "acasi-llados" de las haciendas, los cuales se organizarían en un ejido y en una cooperativa agrícola con el objeto de seguir sembrando caña para abastecer la fábrica que Jenkins conservaría.¹⁹ Con este hecho y el decreto presidencial, se generaría una nueva disputa y desigualdad, expresada con el surgimiento de una nueva categoría social ligada a la organización de un ejido colectivo.

La formación de este tipo de núcleo ejidal llevó, directamente, a la creación de campesinos. Los trabajadores, antiguos peones de las haciendas porfiristas y generalmente provenientes de otros sitios fuera de la región, se convirtieron en ejidatarios bajo el control de un sistema organizativo que de manera indirecta Jenkins y sus empleados siguieron manejando por un buen tiempo.

Puede parecer que estamos ante un latifundista, que simplemente concentró agua y tierra. Sin embargo, las acciones de Jenkins deben verse desde otra perspectiva, que relaciona nuevos procesos de acumulación a particulares configuraciones de poder y, por consiguiente, a otros actores sociales, fuerzas e instituciones. Jenkins fue un agente modernizador, que con el propósito de aumentar las ganancias en la producción de azúcar y sus derivados, impulsó la modificación de la organización productiva con apoyo de principios organizativos fordistas. Estas modificaciones no sólo tuvieron efecto sobre el espacio productivo, sino también sobre las identidades y categorías sociales, tal como lo he venido describiendo.

Los tipos de desigualdad que aparecieron o se reafirmaron en este periodo, estuvieron asociados a una estructura del capitalis-

¹⁹ *Diario Oficial*, 21 de abril de 1938.

mo. Como sugiere Roseberry (2002a), tal estructura tiene que ser colocada en una temporalidad y espacio específicos. En este caso, la acumulación capitalista envolvió una reorganización espacial que estuvo directamente conectada a la centralización del proceso productivo. Sobre esta base, la noción de fordismo tiene sentido en el marco de alianzas y conflictos que un industrial mantuvo con diferentes grupos locales y dentro de la expresión de la formación del Estado posrevolucionario con sus formas de regulación de subjetividades y sociabilidades.

Harvey (1989:121-122) asocia régimen de acumulación a modos de regulación social y política. Influido por los preceptos de la escuela regulacionista, este autor señala que los regímenes de acumulación aluden a amplios periodos de estabilización económica y a la transformación tanto de las condiciones de producción como de la reproducción de los asalariados. Por lo tanto, el modo de regulación significa el desarrollo de un cuerpo de reglas y procesos sociales interiorizados que garantizan la acumulación. Sin embargo, el capitalismo enfrenta crisis, por lo que tiene que crear sus propias condiciones para seguir garantizando su existencia. De hecho, Harvey (1987:143-144) afirma que el capitalismo siempre está creando su propia geografía para su continuidad. Este autor acuña el concepto de "estructuración espacial" para entender los términos en que se crea infraestructura física y social que permite la circulación de capital. Siguiendo esa noción, las alianzas que Jenkins estableció con diversos grupos populares de la región en el marco precisamente de la formación del Estado y las reconfiguraciones territoriales impulsadas por la acumulación, llevaron a la creación de un nuevo espacio en la geografía del capitalismo.

Jenkins actuó, en términos de una acumulación capitalista, de una manera diferente a la seguida por la elite extranjera del Porfiriato e introdujo cambios sustantivos en la organización de la producción y en las relaciones entre capital y trabajo. Por su parte, los liderazgos y actores colectivos locales pudieron, con todas las contradicciones y paradojas posibles, participar e integrarse desde sus pueblos o barrios a los procesos de modernización, oponiendo sus deseos para controlar los recursos productivos, a veces con relativo éxito, otras con estrepitosos fracasos. Puntualmente, los efectos de estas transformaciones pudieron observarse en las siguientes cuestiones.

1. Al crearse un complejo agroindustrial en la región se centralizó la producción de azúcar y sus derivados en una sola fábrica, anulando con ello la dispersión y la relativa autonomía de

las unidades productivas de este giro en el Porfiriato, cuyo patrón de organización incluso se remontaba a la época colonial. Tal racionalización pudo lograrse por la renovación de un molino de azúcar y por la construcción de una red de vías de ferrocarril, que conectaron prácticamente todos los campos de cultivo con el centro de producción. La modernización incluyó, además, la creación de caminos vecinales, puentes y diversas obras hidráulicas (canales, presas, túneles, desecado de terrenos, etcétera).

2. Se crearon categorías laborales ligadas a la ideología posrevolucionaria, que fueron clave en el trabajo organizacional (ejidatario, sindicalista); y se recrearon localmente otras —acasi-llados, oriundos, avecindados— que exhibieron las cambiantes alianzas, las enemistades y, en general, las similitudes y diferencias que guardaron entre sí los diferentes grupos subordinados.
3. Se impulsó la sindicalización de trabajadores y se mantuvieron estrechos convenios y formas de colaboración entre líderes y Jenkins. Particularmente se patrocinó su fundación allí donde los antiguos dueños de las haciendas se mantuvieron reacios a venderlas. Las centrales regionales de trabajadores aprovecharon esa situación para crear organismos sindicales en esos lugares y en las haciendas que paulatinamente Jenkins fue creando. En general, los sindicatos mantuvieron relaciones cordiales con el complejo agroindustrial de Jenkins y aparecieron ante los ojos de funcionarios y burócratas del gobierno como ejemplos de las relaciones “equilibradas” entre capital y trabajo. De hecho, el convenio presidencial emitido por Lázaro Cárdenas para fundar el ejido colectivo y la cooperativa surgió de negociaciones mantenidas entre diversas fuerzas y políticos regionales, figurando en ellas preponderantemente líderes regionales y nacionales de la más importante central obrera de aquellos días, la CTM.
4. Los pactos se extendieron a las poblaciones locales de la región a través de sus líderes. Si en la etapa porfirista fueron casi nulas las relaciones o acuerdos entre los hacendados y los grupos populares de la región por medio de intermediarios políticos, en el nacimiento de la sociedad posrevolucionaria se establecieron diversas alianzas y convenios entre Jenkins y facciones y liderazgos locales. Hago énfasis en señalar que tales pactos implicaron que el empresario estadounidense dirigiera prácticamente a su conveniencia la dotación ejidal —impidiendo que

fueran afectadas por las expropiaciones del gobierno sus tierras de riego—, adquiriera áreas irrigadas en poblaciones circunvecinas y lograra concentrar el agua de la región, mediante la renta o el convencimiento de los regantes locales, para la fabricación de azúcar.

5. La creación de escuelas para socializar significados y valores del patriotismo porfirista no fue un proyecto abrazado por los propietarios extranjeros. Cuando fundaron alguna, ésta fue para los hijos de los empleados y administradores. En cambio, Jenkins interpretó que la escuela era un vehículo importante en el proceso hegemónico del Estado posrevolucionario. Sin embargo, al patrocinar la fundación de ellas, siete en una región que hasta 1930 tenía similar número, no sólo impulsó la reforma cultural, también agregó más obra pública para la creación de la infraestructura social que el capitalismo necesitó para su reorganización en el espacio regional.
6. Los cambios en la organización del trabajo repercutieron directamente en el incremento de la producción y, por consiguiente, en la elevación de las tasas de ganancia.

CONCLUSIONES

El caso que he planteado en este ensayo, permite un acercamiento a la historia del capitalismo en el México moderno en relación con la formación del Estado nacional y el surgimiento de identidades rurales. Tales identidades estuvieron vinculadas a procesos que modificaron el espacio social en términos de una geografía que favoreció la acumulación capitalista.

Asociadas a principios fordistas, las transformaciones que ocurrieron en la región fueron flexibles a las propias prácticas y organizaciones locales, por ejemplo con la integración de formas comunitarias de control del agua a la producción capitalista de azúcar. En términos del fordismo, los cambios estuvieron referidos a la puesta en práctica de modos de reglamentación moral y cultural que se concretizaron en categorías como “ejidatarios”, “sindicalistas”, “trabajadores oriundos” o “trabajadores avecindados”, las cuales operaron de manera efectiva sobre bases existentes para modificar la organización regional de la producción. En esta configuración, las relaciones sociales productivas fomentaron, simultáneamente, acciones de cooperación, cooptación y coerción. Todo dentro de una doble y articulada dimensión que refiere a las maneras en que la hegemonía

trabaja vinculada con la coerción, al menos en el establecimiento de un orden particular de dominación (Roseberry, 2002b:216). En primer lugar, la construcción de escuelas y otras obras públicas y el apoyo a la realización de festividades religiosas tradicionales, impulsaron el surgimiento de una conciencia nacional y el fomento paralelo de una "cultura" local, pero a través de una nueva organización del espacio que incrementó sustancialmente las tasas de ganancia. En segundo, el uso sistemático de la violencia apoyó estas políticas y reforzó el éxito en la creación de una nueva geografía y formas de subordinación. Pero como señala Harvey (1989:124), las formas de organizar el trabajo enfrentan contradicciones que refieren a las complejas maneras en que la acumulación capitalista se presenta en diferentes tiempos y espacios. Los actores de la región constantemente demandaron por medio de sus prácticas, nociones y rituales, respeto a sus propias formas de reorganización y sentidos de justicia locales.

En estos días la zona sigue fuertemente dedicada a la producción de azúcar. Los agricultores de caña venden ahora su producto a un ingenio del grupo empresarial Escorpión, que fue expropiado por el gobierno de Vicente Fox en 2001 para su saneamiento financiero. En el marco de la crisis en la que está sumergida la industria azucarera, en esta región las categorías que surgieron en los primeros años de la posrevolución continúan expresándose de forma política. De hecho, las diferentes transformaciones que vive hoy en día la sociedad mexicana en su conjunto, están siendo evaluadas de distinta forma por cada uno de los actores rurales que componen este espacio social; al mismo tiempo, las tensiones entre ejidatarios/no ejidatarios, avecindados/oriundos, pequeños propietarios/ejidatarios, etcétera, siguen marcando también la existencia de desigualdades que han perdurado en el tiempo y reflejan, en buena medida, las formas contradictorias que adquiere la política regional.

Cualquier observador atento al desarrollo de las reformas neoliberales en el campo mexicano podrá constatar que las respuestas y las luchas políticas de los actores sociales han sido tanto diversas como contradictorias. Las premisas fundamentales esgrimidas por los distintos regímenes establecen la necesidad de fomentar la privatización y reorientar la agricultura hacia mercados globales, por lo cual se plantea la integración de ciertos sectores productivos a esta última estrategia, ya sea como mano de obra o como inversionistas asociados o subordinados a corporaciones transnacionales. El aparente retiro del Estado para permitir la libre determinación sobre la forma en que las personas deben organizarse y posibilitar las acciones de las fuerzas del mercado, ha sido evaluado desde distintas pers-

pectivas, no necesariamente opuestas sino activadas según la conveniencia de los interesados. En un marco histórico de relaciones conflictivas entre regiones y localidades con el centro político del país, las iniciativas neoliberales parecerían ser sensibles a los deseos históricos de autonomía de campesinos o agricultores que han querido controlar, directamente, sus recursos materiales fuera de la esfera de regulación del gobierno. En este sentido, el rechazo anterior a las políticas del Estado se convierte hoy en aceptación. A la inversa, aquellas poblaciones rurales que fueron abiertas receptoras de las políticas del régimen, y participaron activamente en sus reformas culturales que promovía para generar lealtades políticas hacia él, principalmente a través de la formación del ejido y la instrucción pública, hoy en día se encuentran en abierto rechazo a los proyectos neoliberales y los efectos reversivos de las otrora "conquistas sociales".

Ante estas paradojas, considero que el estudio de las identidades rurales es una tarea central en el entendimiento del México moderno y sus cambios. En particular, responder a la interrogante de cómo surgieron estas subjetividades en relación con la formación del Estado posrevolucionario, ayudaría mucho en la comprensión de las acciones e ideas de personas cuyas vidas, en la actualidad, siguen fuertemente relacionadas con la tierra y con su comunidad, pero también vinculadas a procesos de deterioro ecológico, a la limitación de los recursos productivos y a la migración internacional. Sin embargo, es difícil lograr un adecuado registro histórico y cultural de la génesis de las identidades y sus reformulaciones si se obvia o se dan por sentados los procesos asociados a las expresiones espaciales y temporales del capitalismo. El caso analizado siguió, así, la perspectiva de ligar la emergencia de subjetividades a novedosas formas de acumulación y sus consecuencias espaciales. Otros investigadores podrán plantearse las mismas tareas y encontrar similares paradojas. Al fin de cuentas, las luchas de los campesinos y productores rurales en el contexto presente demandan un entendimiento más amplio de su génesis y contradicciones.

BIBLIOGRAFÍA

- ABRAMS, P. (1988), "Notes of the Difficulty of Studying the State" (1977), en *Journal of Historical Sociology*, núm. 1(1), pp. 58-89.
- ALONSO, A.M. (1995), *Thread of Blood. Colonialism, Revolution, and Gender on Mexico's Northern Frontier*, Tucson, The University of Arizona Press.

- APPADURAI, A. (2001), *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*, Buenos Aires, Trilce/Fondo de Cultura Económica.
- BECKER, M. (1995), *Setting the Virgin on Fire. Lázaro Cárdenas, Michoacan Peasants and the Redemption of the Mexican Revolution*, Berkeley, University of California Press.
- BOEGE, E. y R. ÁVILA PALAFOX (1979), "La estructura de poder en la zona cañera de Atencingo", en L. Paré (coord.), *Ensayos sobre el problema cañero*, México, UNAM, pp. 263-337.
- BOURDIEU, P. (1988), *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus.
- CORRIGAN, P. y D. SAYER (1985), *The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution*, Nueva York, Basil Blackwell.
- _____, H. RAMSEY y D. SAYER (1980), "The State as a Relation of Production", en Philip Corrigan (ed.), *Capitalist, State Formation and Marxist Theory*, Londres, Quarter Books, pp. 1-25.
- FOUCAULT, Michel (1999), "La gubernamentalidad", en *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales*, vol. II, Barcelona-México, Paidós, pp. 174-197.
- GAMBOA, L. (1981), "La CROM en Puebla y el movimiento obrero textil en los años 20", en *Memorias del Encuentro sobre Historia del Movimiento Obrero*, México, Universidad Autónoma de Puebla.
- _____, y E. MUNGUÍA (1981), "El fracaso de la Convención Industrial Obrera del Ramo Textil (1925-1934)", en *Boletín del Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero*, 2(3), pp. 29-67.
- GRAMMONT, Hubert Carton de (1979), "Historia de las luchas sociales en la zona de Atencingo", en L. Paré (coord.), *Ensayos sobre el problema cañero*, México, UNAM, pp. 185-262.
- HARVEY, D. (1989), *The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Londres, Basil Blackwell.
- _____, (1987), "The Geopolitics of Capitalism", en D. Gregory y J. Urry (eds.), *Social Relations and Spatial Structures*, Hong Kong, Macmillan Education, pp. 128-163.
- KEARNEY, Michael (1996), *Reconceptualizing the Peasantry*, Boulder, Westview Press.
- KROEBER, C.B. (1994), *El hombre, la tierra y el agua. Las políticas en torno a la irrigación en la agricultura de México, 1885-1911*, México, CIESAS/IMTA.
- LAFRANCE, D.G. (1989), *The Mexican Revolution in Puebla, 1908-1913. The Maderista Movement and the Failure of Liberal Reform*, Wilmington, Delaware, SR Books.

- LARA, S. (1979), "La importancia de la comunidad campesina y las formas de conciencia social de los jornaleros de Atencingo", en L. Paré (coord.), *Ensayos sobre el problema cañero*, México, UNAM, pp. 115-184.
- LIPSETT-RIVERA, S. (1999), *To Defend our Water with the Blood of our Veins. The Struggle for Resources in Colonial Puebla*, Albuquerque, The University of New Mexico.
- MALPICA, S. (1989), "La crisis de hegemonía política de la CROM en Atlixco (1925-1929)", en *Atlixco: historia de la clase obrera*, México, Universidad Autónoma de Puebla.
- _____ (1981), "La derrota de la FROC en Atlixco", en *Memorias del Encuentro sobre Historia del Movimiento Obrero*, México, Universidad Autónoma de Puebla.
- MERTENS, H. (1988), *Atlixco y las haciendas durante el Porfiriato*, México, Universidad Autónoma de Puebla.
- NUGENT, D. (1993), *Spent Cartridges of Revolution. An Anthropology History of Namiquipa, Chihuahua*, Chicago, The University of Chicago Press.
- _____ y A.M. ALONSO (2002), "Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: cultura popular y formación del Estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua", en G. M. Joseph y D. Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*, México, Era, pp. 175-210.
- OTERO, G. (2004), *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas/Simon Fraser University/Miguel Ángel Porrúa.
- PANSTERS, W. (1992), *Política y poder en México. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista en Puebla, 1937-1987*, Puebla, Centro de Estudios Universitarios/UAP.
- PARÉ, L. (1979), "El análisis económico de las clases sociales de Atencingo", en L. Paré (coord.), *Ensayos sobre el problema cañero*, México, UNAM, pp. 59-113.
- RONFELDT, D. (1975), *Atencingo. La política de la lucha agraria en un ejido mexicano*, México, FCE.
- ROSEBERRY, W. (2002a), "Understanding Capitalism—Historically, Structurally, Spatially", en D. Nugent (ed.), *Locating Capitalism in Time and Space. Global Restructurings, Politics and Identity*, Stanford, CA, Stanford University Press, pp. 61-79.
- _____ (2002b), "Hegemonía y lenguaje contencioso", en G.M. Joseph y D. Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la forma-*

ción del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno, México, Era, pp. 213-226.

- SAYER, D. (2002), "Formas cotidianas de formación del Estado: algunos comentarios disidentes acerca de la hegemonía", en G.M. Joseph y D. Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*, México, Era, pp. 227-238.
- THOMSON, G. (1989), "Montaña y llanura in the Politics of Central Mexico: The Case of Puebla, 1810-1920", en W. Pansters y A. Ouweneel (eds.), *Region, State and Capitalism in Mexico. Nineteenth and Twentieth Centuries*, Amsterdam, CEDLA, pp. 59-78.
- TILLY, CH. (2000), *La desigualdad persistente*, Buenos Aires, Manantial.
- VAUGHAN, M.K. (1997), *Cultural Politics in Revolution. Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-1940*, Tucson, The University of Arizona Press.
- TORRES BAUTISTA, M. (1994), *La familia Maurer de Atlixco, Puebla. Entre el Porfiriato y la Revolución*, México, Conaculta.
- WOLF, Eric R. (2001), *Figurar el poder. Ideologías de dominación y crisis*, México, CIESAS.

LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS EN LA GLOBALIZACIÓN: EL CASO DE MÉXICO

*Magda Fritscher**

RESUMEN

Este trabajo da cuenta de la actual situación de desarticulación en que se encuentra el sistema alimentario en México, en especial en el sector de granos y oleaginosas. Los agricultores, antes vinculados por la intermediación estatal con los industriales, hoy actúan sin los referentes necesarios para el restablecimiento de la conexión con sus mercados naturales. El sector agroindustrial, a su vez, impulsado por las políticas de apertura comercial, busca en el exterior sus insumos agrícolas en desmedro del sector primario nacional. Ante la conflictividad creciente que se ha generado en el campo a consecuencia de esta disyuntiva, el Estado busca crear un acercamiento entre ambos sectores, otorgando beneficios a los compradores de las cosechas nacionales. Sin embargo, si bien esta acción resuelve el problema inmediato de la contingencia política y social, no es suficiente para solucionar el problema de la desarticulación productiva, dado que sus orígenes se deben a hondas raíces estructurales.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el tema de las cadenas agroalimentarias en México, observando su comportamiento a partir del momento en que el país cambia de estrategias de desarrollo a fines de la década de 1980. En especial se desea hacer alusión a la difícil relación que

* Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <mofm_2002@yahoo.com>.

media entre el agro y la industria alimentaria, una vez que el país deja atrás su pasado estatizante y se abre a las tendencias de la globalización.

En efecto, el nuevo contexto propicia una desarticulación entre ambos sectores que no ha podido cerrarse con el paso de los años, pero que, además, se ha profundizado en la medida en que la agroindustria tiende a nutrirse cada vez más de importaciones en lugar de acudir al mercado interno para abastecerse. Esta situación ha provocado indignación entre los productores agrícolas, lo que los lleva, a su vez, a acudir al Estado para que actúe como intermediario y garante de que sus cosechas encuentren ubicación. Ello finalmente conduce a que las instancias oficiales convoquen a las empresas procesadoras a convenios o subastas mediante los cuales obtienen un producto a bajo costo gracias a los subsidios estatales. Esta dinámica circular, registrada sobre todo en el caso de los granos básicos producidos en ciertas regiones del país, expresa a qué grado ha llegado la brecha estructural entre los oferentes agrícolas y los consumidores industriales de estos productos. Asimismo, indica la inmensa dependencia de los agricultores respecto de los aparatos estatales, recordando los antiguos tiempos del estatismo. Pero, sobre todo, apunta a su extrema vulnerabilidad, dado que el auxilio estatal ya no ocurre en forma automática y espontánea, como sucedía antes, sino que ahora es otorgado como una concesión que, por lo general, depende de la presión política y del rango de movilización que logren los afectados. Urge, pues, encontrar medidas concretas que, en un plazo mediano, fortalezcan a los agricultores en su capacidad económica frente a las adversidades que hoy padecen.

En este trabajo analizamos dicha problemática desde la perspectiva de los granos básicos. ¿Cuáles son las razones estructurales por las que éstos tienden a ser desplazados por las importaciones? ¿En qué momento se establece entre el producto nacional y el importado una relación de competencia y en cuál obedece a una complementariedad? ¿Es posible una recomposición en las relaciones entre industriales y productores agrícolas de tal manera que estos últimos no se vean excluidos del escenario agroalimentario nacional y sustituidos por agentes externos?

AGRICULTURA E INDUSTRIA: ALGUNAS ACLARACIONES

Por lo general, la problemática agrícola es concebida como un núcleo *per se*, autosuficiente. Su competitividad es evaluada y medida

únicamente en consideración a sus costos y rendimientos, sus escalas de producción y su tecnología. En este contexto, se asume que el producto nacional no puede competir con el estadounidense por la falta de recursos tecnológicos, financieros, escalas de operación y otros similares. No obstante, esta óptica se revela insuficiente, pues deja de lado aspectos tan importantes como los de ubicación geográfica, de mercados y de predisposición para una articulación adecuada con el entorno agroindustrial. Así, en el presente, observamos el caso de zonas agrícolas eficientes y con alta productividad que, sin embargo, no son competitivas por un factor aparentemente ajeno a las consideraciones usuales: el de su ubicación geográfica, por ejemplo, los graneros del noroeste del país. Su distancia con respecto a la industria procesadora o los centros de consumo hace que pierda el atractivo para los industriales, dados los altos costos que implica el traslado de las cosechas. Por el contrario, producciones menos eficientes en cuanto a rendimientos, como las de la región del centro del país, suelen ser de interés industrial dada su localización más adecuada, siempre y cuando cumplan con ciertas normas de calidad. En otros casos, un sector o producto con altos rendimientos y bajos costos puede quedar relegado frente a otros que, en determinado momento, se consideren más ventajosos por parte de las ramas industriales involucradas. Así, el sorgo, cereal forrajero por excelencia hasta fines de la década 1980, si bien sigue siendo demandado por los sectores ganaderos, sufre un proceso de desplazamiento con respecto al maíz amarillo de importación. Desde esta óptica, sería más útil hablar de competitividad o de ventajas comparativas del conjunto del complejo agroindustrial y no sólo de uno de los núcleos que lo componen, dado que cada uno de éstos depende, en gran medida, de la calidad de los demás, así como de la naturaleza de sus interrelaciones (Reyes y Muñoz, 1997).

Este razonamiento nos lleva, ineludiblemente, al análisis de la actividad-eje del sistema alimentario: la industria procesadora de alimentos, misma que comanda las transformaciones de los demás sectores, determinando sus ritmos de expansión, la incorporación de valor a los productos, sus transformaciones tecnológicas y las necesidades de patrones de cultivos adecuados a sus requerimientos.¹ Desde esta perspectiva, una actividad necesaria, pero subalterna,

¹ El advenimiento del llamado *complejo agroindustrial* a mediados de los años sesenta del siglo pasado, ilustra en su máximo grado la tendencia integradora, momento a partir del cual se rompe con las tendencias autonomistas de la agricultura y ésta se subsume al nuevo paradigma (Wirley y Stipp, 2003).

como la agricultura, depende intrínsecamente de la lógica industrial, ya que el restarle importancia podrá significar su aislamiento, así como la pérdida de su competitividad y de mercados. Para ello se requiere que la agricultura funcione en sintonía con las demandas industriales, situación no siempre fácil de lograr, dado que por su naturaleza carece de la flexibilidad necesaria para cumplir con este objetivo. Por otra parte, ahí en donde el proceso de subordinación agrícola es el resultado de rupturas bruscas y no de un lento aprendizaje y acumulación de experiencias, suele ser crítico y conflictivo, tal como ocurre en la experiencia mexicana actual.

No obstante el carácter hegemónico de la industria agroalimentaria, ésta es también recíprocamente dependiente de sus fuentes primarias. Es por ello que incluso en momentos de globalización, cuando las tendencias de gran parte de los sectores manufactureros se dan en el sentido de una dispersión de procesos productivos a escala planetaria, en búsqueda de territorios que garanticen su rentabilidad, el complejo agroindustrial —por el contrario— tiende a privilegiar su concentración geográfica, dada la necesidad de contar con fuentes seguras de aprovisionamiento. Ello significa, por lo general, estar en cercanía con los sectores agrícolas. Este modo de actuar *sui generis* del sector en momentos de globalización explica por qué los complejos agroindustriales aún obedecen a la modalidad de *conglomerados*, en donde prevalecen los contratos o subcontratos o la integración vertical. Así también se explica su propensión hacia una concentración geográfica específica, en donde los distintos eslabones de la producción y el consumo conviven en forma centralizada, a diferencia de los signos dispersivos observados en las empresas *globales* (Buttel, 1996). En estas circunstancias, la desvinculación propia de México entre sus sectores agrícola e industrial se da a contracorriente de esta tendencia, fenómeno que pretendemos explicar en este trabajo.

Por otra parte, cabe destacar que la producción industrial de alimentos sufre profundas modificaciones en la época actual, dado que tanto los patrones de producción como los de consumo se han modificado. Si en el modelo alimentario *preglobal* se privilegiaba la producción de alimentos homogéneos e indiferenciados, producidos a larga escala y con precios bajos, al estilo de los *commodities*, ahora esta tendencia se ha modificado en el sentido de fomentar la extrema diversificación y la sofisticación de los bienes.² Este proceso, si

² En respuesta a las nuevas tendencias, los subproductos alimentarios que aparecen año tras año en los centros capitalistas se cuentan por miles. Así,

bien tiene lugar dentro de los propios sistemas de transformación industrial por medio de técnicas biotecnológicas que segmentan y transforman el producto intermedio para dar, finalmente, forma a una vasta heterogeneidad de productos finales, también se sustenta en la necesidad de contar con materias primas de distinta naturaleza que cumplan con el requisito de la diversidad. Es decir, también requiere de la agricultura una oferta cada vez más versátil de especies susceptibles de procesamiento industrial. En este sentido, los sistemas de investigación genética desempeñan un papel importante en el diseño de nuevas plantas o variedades para poder responder a las metas industriales, proceso que una vez puesto en acción, se ha conocido como la *segunda revolución verde* (Benetti, 2000).

Aquí se detecta otro problema para el complejo agroindustrial mexicano por el alto grado de incompatibilidad con esta necesidad de diversificación. En los momentos actuales, la industria nacional de semillas se resiente de un duro golpe que consistió en el retiro del subsidio a la empresa oficial, Productora Nacional de Semillas (Pronase), y en la venta de gran parte de sus activos. Por más de 30 años, dicha empresa había surtido a los agricultores con las semillas de los cultivos básicos a precios bajos, situación que se detuvo bruscamente con la decisión de liquidarla en 1991. Con ello se verificó un drástico descenso en la producción estatal de semillas (de 362 mil toneladas a tan sólo 17 mil entre 1982 y 1991), así como un gran aumento en el volumen de las importaciones. Por otra parte, las empresas privadas que surten el mercado nacional responden únicamente en forma parcial a las necesidades de los agricultores, pues no producen todas las variedades demandadas (*El Financiero*, 31/8/04 y 02/10/02). Ante estas condiciones, en que priva una oferta interna precaria y desarticulada y se registran alzas continuas en los precios de las semillas, ha sido imposible responder a las necesidades agroindustriales de diversificación en la oferta de nuevas variedades de plantas y cultivos.

Así, en tanto varios núcleos alimentarios industriales pudieron adaptarse a los nuevos tiempos, la agricultura ha demostrado poca propensión para ello, debido en gran medida a que no cuenta con apoyos financieros, de capital y logísticos para reconvertirse de acuerdo con los nuevos patrones de producción.

Otro factor digno de mención es el relativo a las estructuras de comercialización, en especial las que vinculan el sector agrícola

en Estados Unidos, en el año de 1995, surgieron al mercado 16 800 productos con estas características (Gordon, 1998:94).

con el industrial. Si éstas no funcionan de manera adecuada, pueden transformarse en un obstáculo para el enlace entre ambos. Así, en caso de que no existan mecanismos que permitan una provisión permanente del producto a lo largo del año, la industria será afectada. En este caso, los empresarios se verán urgidos a adquirir la totalidad del producto en el momento de la cosecha, con lo cual sus costos de producción se elevarán en un alto porcentaje. Aquí cabe recordar que existen factores estructurales que agudizan esta disfunción, toda vez que la estacionalidad de las cosechas agrícolas choca con la naturaleza constante de la demanda industrial. Esta situación tiende a matizarse cuando hay mecanismos de oferta que permiten al agricultor retener parcelas de su producto y venderlas progresivamente durante el año, para lo cual se requiere de buenas instalaciones de acopio y políticas de pignoración, como ocurre en Estados Unidos. Los sistemas estatales de comercialización en México permitían también esta opción, pues la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) administraba la oferta, garantizando su solvencia y precios remuneradores para los productores primarios. No obstante, al reducir su margen de operaciones para luego desaparecer en la segunda mitad de la década de 1990, privó el caos en los mercados internos, impulsando las importaciones desde el vecino país en detrimento de las cosechas nacionales.

En conclusión, el abordaje más totalizador de la problemática agroalimentaria permite entender las razones por las cuales si un eslabón de la cadena no funciona adecuadamente, como es el caso del que vincula el productor agrícola con las empresas procesadoras, se impacta de forma negativa todo el proceso agroindustrial. También nos permite comprender por qué para el industrial el sistema de comercialización agrícola de México le es desfavorable, mientras que el estadounidense le favorece, ya que le permite recibir su mercancía en los tiempos y cantidades que exigen sus procesos productivos, sin verse obligado a un acopio costoso por largos periodos de tiempo.

AGRICULTURA E INDUSTRIA EN MÉXICO

El periodo de economía cerrada

La organización del sistema alimentario en México durante las décadas que van de los años cincuenta hasta avanzada la década de los ochenta del siglo pasado, obedeció a una serie de premisas difíciles de encuadrar en el contexto actual. La primordial, centrada en el prin-

cipio de la seguridad alimentaria, tenía que ver con el incremento en la producción de alimentos básicos de tal forma que se produjera una oferta abundante que permitiera bajar los precios. Para ello se buscó que en las zonas irrigadas del norte y noroeste se cultivaran granos con los métodos innovadores de la "revolución verde" para abastecer el mercado interno, localizado sobre todo en torno a las grandes urbes. Todos los esfuerzos logísticos oficiales fueron canalizados a esta meta, incluidos los tecnológicos. Así, los centros de investigación oficiales³ diseñaron especies híbridas que, con la ayuda de los otros componentes del paquete tecnológico, tenían como fin aumentar la productividad en los alimentos. Como las nuevas semillas requerían de irrigación permanente, muchos cultivos se trasladaron a las zonas irrigadas, abandonando las zonas de temporal del centro del país. Ejemplo de ello fue el trigo que migró de zonas temporales de Tlaxcala hacia el noroeste. Hoy este cultivo, en su casi totalidad (95 por ciento), procede de áreas de riego y en su mayor parte se origina en dicha región (Sagar, 1996).

En este contexto, los productores fueron subsidiados para que se comprometieran con los nuevos cultivos y las nuevas técnicas. El Estado profundizó su intervención en el sistema alimentario, ocupando un papel rector en la conducción de la nueva agricultura. Dado que las principales industrias procesadoras se localizaban en las regiones próximas a los grandes centros urbanos, en especial el Valle de México, para cubrir la enorme distancia de un lugar al otro, se crearon instancias estatales encargadas de la compraventa de los granos, así como de su traslado. Años más tarde, la empresa estatal Conasupo pasó a encargarse de esta tarea, convirtiéndose en el principal conducto que salvaba las distancias entre el norte y el centro y otras zonas del país, asumiendo los costos que representaban el acopio, traslado y distribución de los granos.⁴ Asimismo, el sistema

³ Hasta 1961, las instituciones encargadas de promover y difundir la tecnología de la "revolución verde" en México fueron el Instituto de Investigaciones Agrícolas y la Oficina de Estudios Especiales. A partir de esta fecha, ambas se fundieron para formar el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Por otro lado, en este momento también se creó la paraestatal Productora Nacional de Semillas (Pronase), cuya función era reproducir a gran escala las nuevas semillas y distribuirlas entre los productores.

⁴ En los años ochenta, cuando fue mayor la intervención de Conasupo en las compras nacionales, sus adquisiciones correspondieron al 50% del trigo nacional, al 40% del frijol y del sorgo y de proporciones menores en arroz y soya. Si consideramos que la empresa también tenía el monopolio de las importaciones, el grado de su participación en los mercados era aún más importante. Entre 1993 y 1994, la paraestatal llegó a absorber más de ocho

de bodegas y almacenes construidos por la comercializadora estatal a lo largo y ancho del territorio nacional constituyó otro gran esfuerzo para dar cauce al proceso de comercialización de los granos básicos. Finalmente, el sistema ferroviario estatal coadyuvó de igual forma a lograr esta meta.

Varios cultivos básicos fueron introducidos en las prósperas regiones norteñas: en los años de implantación de la "revolución verde", emergió el trigo en Sonora, Baja California y Sinaloa; luego, a partir de los setenta, los cultivos forrajeros como la soya y el sorgo se establecieron en Sinaloa y Tamaulipas fundamentalmente y, por último, en los años noventa, el maíz de igual forma encontró arraigo en los estados del norte, en especial en Sinaloa. Estos cultivos no tenían mercados locales o regionales significativos y en su mayor parte debían fluir hacia las regiones centrales de México: los destinados al consumo humano a las grandes zonas urbanas del altiplano, en tanto los forrajeros, que no encontraban cabida en sus espacios circundantes, a las regiones de ganadería intensiva de la región Centro-Occidente. Se creó, así, un diseño agroindustrial *sui generis*, en que los polos del sistema alimentario estaban separados por centenas o miles de kilómetros. Esta lejanía, que se agudizaba por el carácter poco eficiente de las vías de comunicación, sin embargo, no era resentida por los actores involucrados —agricultores e industriales— como tampoco por la población consumidora, pues el Estado se encargaba de los gastos derivados del traslado de las cosechas. Tampoco los agricultores solían verse afectados por precios más bajos debidos a la distancia respecto a los centros de consumo. Por el contrario, los precios poseían una equivalencia para todo el territorio nacional, generando un estímulo para que los productores se siguieran instalando en regiones alejadas o incluso en tierras sin vocación agrícola. Los excesos de producción, como consecuencia ineludible de esta política de precios, tampoco afectaban a los productores, dado que Conasupo absorbía la totalidad de los excedentes de las regiones comerciales.

Por otra parte, el Estado fijaba precios de garantía uniformes para todo el año, sin reconocer diferencias entre las épocas de cosecha, cuando se acumulan los productos, y las de escasez, cuando por lo general los precios suben. Ello impulsaba a los productores a una concentración de ventas en momentos de cosecha, situación que priva hasta nuestros días.

millones de toneladas del maíz, lo que equivalía en torno al 50% del producto nacional y a la casi totalidad del maíz que entraba a los circuitos comerciales (OECD, 1997, FIRA, 2000).

En este contexto, la agencia estatal acopiaba los excedentes, formando un sistema de reservas, que permitía una estabilidad en la oferta, dado que ingresaba productos al mercado en momentos de escasez, en tanto que en los de abundancia los sustraía. Cuando las cosechas eran insuficientes, la paraestatal recurría a las importaciones para completar los requerimientos del mercado interno. Ello propiciaba un ambiente de certidumbre para agricultores e industriales: en cuanto a los primeros, tenían los mercados asegurados, en tanto los segundos estaban protegidos de manera permanente de una situación de desabasto. No obstante la atmósfera de estabilidad que ello propició, hizo de los actores involucrados en el sistema alimentario entes ajenos y adversos a una cultura de mercado, situación que luego los afectó de manera muy severa.

Con fronteras cerradas y sin la competencia externa, el sistema garantizaba estabilidad a la sociedad en términos de seguridad alimentaria. Sin embargo, pese a los beneficios de este modelo, el sistema alimentario a que dio origen era totalmente dependiente de las esferas estatales para su desempeño y, por lo tanto, extremadamente vulnerable. Cuando el modelo económico que lo sustentaba cambió, con la apertura comercial y el retiro de la paraestatal, el caos fue enorme, el cual persiste hasta nuestros días.

Dado que una de las preocupaciones básicas del gobierno era el abaratamiento en los costos de los alimentos, las agencias oficiales productoras de tecnología tenían como prioridad el incremento en los rendimientos de los cultivos. En estas circunstancias, otros aspectos de la producción, como los vinculados con la calidad y la diversidad, eran considerados secundarios. No se buscó alentar entre los productores estos objetivos, premiándolos con precios diferenciados por mejorías en la presentación de los productos o por incorporar más nutrientes, o aun por introducir variedades novedosas al mercado. Así, por ejemplo, en el caso del trigo, nunca se estimuló la producción de plantas con altos contenidos proteínicos, lo que en términos internacionales constituye un referente obligado para el precio. El grano mexicano, en contraste con el estadounidense o el canadiense, sigue siendo —hasta hoy— bajo en proteína y, por lo tanto, de escasa calidad según los criterios internacionales (Gómez, 2001). De igual forma, sus distintas variedades (gluten fuerte, suave o cristalino) no recibían un precio distinto, llevando los productores al cultivo de aquellas que les permitían una mayor rentabilidad, independientemente de las necesidades del consumo interno. Por otra parte, tampoco se premiaba un producto con mejor presentación (en términos de uniformidad en tamaño, forma, color y limpieza), ra-

zón por la cual granos como el frijol y otros llegaban con un alto grado de impurezas y daños al mercado. En cuanto al maíz, hasta los años noventa estuvo prohibido su cultivo para fines distintos a los de consumo humano. Así, la principal variedad era el maíz blanco, destinado a la producción de tortilla. El maíz amarillo, de tipo forrajero, tan demandado en la actualidad por sectores de la industria y de la ganadería, nunca fue introducido en México. Los cultivos forrajeros aprobados institucionalmente desde la década de 1970 eran el sorgo y la soya. Así, también otros productos ya vigentes en el mundo, como ciertas oleaginosas o los edulcorantes derivados del maíz nunca fueron introducidos al país. En estas condiciones, el diseño agrícola llevó a un patrón de cultivos poco flexible y con grandes dificultades para la innovación.

La industria alimentaria, por otra parte, era consumidora cautiva de los productos ofertados internamente: trabajaba con las variedades seleccionadas, sin referencia a lo que pasaba en el mundo externo a las fronteras nacionales. Subsidiada por el gobierno, con un mercado cautivo y una rentabilidad asegurada, se ceñía a lo conocido, sin arriesgarse a salir de los patrones establecidos. Cabe destacar que los empresarios de este ramo recibían fuertes subsidios al momento de comprar sus insumos a la paraestatal a costos muy inferiores al que habían sido adquiridos, o respecto de los precios de mercado.

Apertura comercial y desestatización

El cambio de modelo económico de fines de los años ochenta subvirtió por completo los condicionantes de la producción de alimentos en México. Así, en primera instancia, se puede afirmar que desapareció la correspondencia que existía previamente entre los conceptos de autosuficiencia y seguridad alimentaria. Este último pasa a ser concebido como la capacidad de consumo que posee la población respecto a los alimentos, sea que provengan del abasto interno o del mercado internacional. Esta noción básica va a orientar las políticas subsecuentes para el sector, volviendo superflua la compleja arquitectura de intermediación estatal dirigida hacia la producción interna de granos básicos y su distribución.

Una de las primeras medidas respecto a las nuevas estrategias fue el retiro de Conasupo de sus tareas de intermediación entre agricultores e industriales para la mayor parte de los productos y su posterior relevo de sus funciones como importadora oficial. Sólo el maíz y el frijol conservaron por más tiempo las prerrogativas del

apoyo de la comercializadora (precios de garantía y protección en las fronteras), medidas que persistieron hasta 1999, si bien en forma más restringida durante los últimos tres años.⁵ Con ello también desaparecieron las medidas de apoyo a precios y el control de las fronteras a través de los permisos de importación para la mayor parte de los granos y oleaginosas. Esta situación llevó a una nueva estructura de precios, cuyo referente básico pasaba a ser el valor internacional del producto añadido de los costos de su internamiento y transporte hasta las zonas de consumo. Ello constituía un golpe para los productores nacionales, que hasta entonces habían recibido precios de garantía, acotados de una u otra forma a los costos medios de producción. Sin embargo, los más perjudicados fueron aquellos agricultores comerciales localizados lejos de los centros de consumo, dado que a partir de entonces sus precios se verían castigados, no sólo por la homologación con el exterior, sino también por el factor distancia. Así, los productores de trigo de Sonora y Baja California, de sorgo de Tamaulipas y luego de maíz de Sinaloa y Tamaulipas, se enfrentarían con un gran número de obstáculos en la colocación de sus cosechas, mismas que además se vieron afectadas en su valor. La situación se volvió más aguda cuando se intensificó la competencia respecto a los productos importados, a mediados de los años noventa, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ante la enorme inconformidad social que ello generó, el gobierno ideó estrategias alternativas para que la producción excedente fuera absorbida: estableció convenios con los industriales con el fin de que adquirieran la producción nacional a cambio de un subsidio en la compra, de tal forma que los productos adquiridos internamente tuvieran ventajas frente a los importados. Luego, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, las subastas sustituyeron a los convenios, buscando reproducir la misma lógica. Esta modalidad, que se impuso en las regiones del norte fue, por lo general, errática y conflictiva, dependiendo de cuán intensas fueran las movilizaciones para que se produjera la cobertura estatal. Por otra parte, los subsidios que recibían los industriales o comercializadoras para adquirir los granos tenían un doble propósito: además de facilitar el flujo de las cosechas, debían incorporar un monto dirigido a los agricultores con el fin de compensarlos por las pérdidas sufridas en virtud de los cambios. Ello generaba conflictos, pues por lo general, el monto atribui-

⁵ En maíz, la paraestatal siguió apoyando con precios mínimos sobre todo a los productores de Sinaloa y en menor medida a los de Chiapas.

do a éstos era tan sólo una fracción pequeña del total de los subsidios, misma que no siempre era respetada por los industriales.⁶ Por otro lado, no todas las entidades eran igualmente beneficiadas por los apoyos estatales, generándose un fuerte sentimiento de descontento entre los productores de otras regiones frente al hecho de que los productores del norte se llevaban la mejor tajada de los recursos.⁷

Pese a las nuevas estrategias estatales para atender a los productores nacionales, muchas empresas industriales se siguieron adiestrando en la importación de productos del exterior, para lo cual consideraban que había un sinnúmero de ventajas frente a la adquisición de productos internos. Una de éstas era la posibilidad de adquirir el producto en forma progresiva y fragmentada, según lo iban imponiendo las necesidades del proceso productivo industrial. Ello se daba en contraste con la práctica nacional de comprar la totalidad del producto de una sola vez, dadas las características de la oferta en México. Así, dado que la mayor parte de las cosechas de los estados del norte correspondían al ciclo otoño/invierno, había que adquirirlas de inmediato, debido a la urgencia de liquidez de parte de los productores para cubrir sus compromisos con la banca. Esto implicaba que, de comprar internamente el grano, el industrial debería hacerse cargo del almacenaje por todo el año y con ello de los elevados costos que implicaba, sobre todo en momentos en que el crédito interno se encarecía. Ante esta situación, la opción de traer el producto a destajo, en forma parcelada según sus necesidades, era mucho más atractiva en términos contables que la de adquirirlos internamente (Contreras *et al.*, 1993; *Agrosíntesis*, varios números).

Esta posibilidad se da por el hecho de que en Estados Unidos la estructura de comercialización favorece la entrega del producto en estas condiciones, tanto por las características que asume la oferta del grano, como por la naturaleza de los subsidios que otorga el gobierno a la comercialización. Además, las dificultades internas para la obtención de créditos con el objetivo de adquirir las cosechas eran un obstáculo cada vez más infranqueable, sobre todo después de la

⁶ Años más tarde, con el foxismo, la administración de los subsidios a los productores tendió a estabilizarse cuando, a partir de 2002, se instauró el modelo de "ingresos objetivo" por producto. Ello significaba que el productor recibiría del Estado un complemento a su ingreso por la venta del producto, siempre y cuando los precios de mercado fueran inferiores a un precio predeterminado en el nivel oficial. No todos los agricultores, sin embargo, estuvieron incluidos en este pacto (Fritscher, 2004).

⁷ De hecho, en 2002, cinco estados se llevaron 88% de los recursos del programa Apoyos a la Comercialización: Sinaloa, Sonora, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua (Aserca, 2003).

crisis devaluatoria y financiera de 1995. Frente a ello, actuaban como estímulo a la importación los créditos otorgados por la Commodity Credit Corporation de Estados Unidos a los importadores de alimentos, mismos que en plazos y tasas de interés eran mucho más favorables que los vigentes en México. Además éstos contaban con subsidios encubiertos, como parte de políticas de largo plazo encaminadas a facilitar el camino para los exportadores estadounidenses.

Desde otra perspectiva, también surgían más obstáculos para la compra nacional de las cosechas. Así, por ejemplo, sólo en el caso de organizaciones de productores eficientes se lograba compactar la oferta. De otra forma, cuando provenía de productores pequeños y poco organizados, se presentaba en forma fragmentaria e individualizada, lo que encarecía costos y dificultaba los procesos de compraventa. Por lo general, en estos casos, eran los agentes caciquiles quienes cumplían con las tareas de intermediación. Los industriales, sin embargo, deseaban negociar con sectores organizados en forma más institucional y con una concepción empresarial de los procesos de mercadeo. En estas condiciones, encontraban en Estados Unidos óptimas condiciones para realizar sus transacciones, dadas la eficiencia y tradición institucional de las agencias comercializadoras.

La apertura comercial propició una serie de situaciones novedosas que también favorecieron la práctica de importar. Una de éstas fue que pronto se descubrió que el universo de mercancías ofertadas por Estados Unidos, y en menor medida por Canadá, era mucho más amplio y diversificado que el nacional, resultado del gran salto hacia la versatilidad experimentado por estos países desde la década de 1980. Ello se reflejaba tanto en variedades de un mismo producto como en productos novedosos. Frente a esta situación, las variedades mexicanas perdían su atractivo, ya que no eran las más adecuadas para las industrias. Así, por ejemplo, en trigo, era el sector de la panificación el que mayores cantidades de grano requería. En este caso, las importaciones pasaron a llenar este vacío, agudizándose esta situación en la medida en que los productores del norte, afectados por la plaga del "carbón parcial", buscaron sustituir las variedades panificables por las de tipo cristalino, más resistentes, pero de escaso consumo en el país. En cuanto al maíz, también se desconocían los beneficios de la variedad amarilla en tanto producto forrajero, consagrado desde la posguerra en los mercados internacionales. El gran incremento en las necesidades de forraje en los últimos años impulsó la importación de maíz amarillo en cantidades crecientes, dado que México no produce este grano. Sus componentes lo hacen

más adecuado a las necesidades forrajeras, así como a ciertas ramas industriales —como la del almidón—, que el maíz blanco. Por otra parte, con un precio que era entre un 20 y 30 por ciento inferior al del grano nacional, esta opción se veía reforzada (*El Financiero*, 2/9/02).

Finalmente las importaciones de fructuosa, edulcorante derivado del maíz y que se adapta mejor a las necesidades de endulzar las bebidas, producto de igual forma de larga tradición en los mercados internacionales (Wilkinson, 1989), entraron en fuertes cantidades, sustituyendo el azúcar interno derivado de la caña de azúcar y llevando a esta rama agrícola a una fuerte crisis.

De esta manera, la agricultura nacional fue afectada por el brusco cambio de modelo, ya que las nuevas circunstancias exigían que respondiera con elementos y estructuras de las cuales carecía. El diseño alimentario anterior, basado en una compleja organización estatal y en la meta del abasto interno, así como en la producción de *commodities*, era totalmente inadecuado a los nuevos tiempos, pues partía de supuestos que ahora se habían desvanecido. Así, sin el concurso de Conasupo, muchas de las zonas de producción antes hegemónicas, hoy sólo pueden subsistir gracias al apoyo estatal. Éste, en contraste con épocas anteriores, es ahora concebido como un recurso excepcional, objeto de una concesión gubernamental, así como de negociaciones políticas, más que de un *modus operandi*, ampliamente institucionalizado, a quien nadie solía cuestionar.

El deceso de la paraestatal, a su vez, puso a descubierto el precario estado de la infraestructura de comercialización, con bodegas insuficientes y mal equipadas, carentes de condiciones para mantener el grano por un periodo más largo de tiempo. Por otra parte, la inexistencia de prácticas que permitieran retener el producto para así evitar los bajos precios que suelen pagarse al momento de las cosechas, fue otro factor crítico, con enormes congestionamientos en las ventas poscosecha, afectando a productores e industriales. Para contrarrestar este problema, hoy se va imponiendo lentamente la práctica oficial de extender créditos para pignorar los productos, misma que, no obstante, presenta varias dificultades. Así, en un contexto de incremento de las importaciones, los precios pueden venirse abajo y socavar la economía de los agentes involucrados en esta modalidad. Por otra parte, la ausencia en México de prácticas de certificación de las cosechas, así como de control de calidad, hace renuente la banca a otorgar préstamos para estos fines, debiendo siempre concurrir el gobierno para avalar este tipo de financiamiento.

Otro fenómeno nada trivial que dificulta mucho la comercialización, es la falta de un sistema de transporte adecuado, así como

de vías de comunicación más ágiles. Las carreteras mexicanas están en pésimo estado y cuando no, son muy caras.⁸ El transporte ferroviario es sumamente deficiente y, dada la falta de ríos, no contamos con la modalidad de traslado pluvial que suele ser tan económica en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Esta situación relativiza enormemente las ventajas que podrían, a primera vista, disfrutar las zonas productoras de México frente a las del vecino país, dada su mayor cercanía respecto de los centros de consumo nacionales. En este último caso, el factor de mayor distancia entre Estados Unidos y México se ve compensado por la eficiencia y el bajo costo en los medios de comunicación y transporte del vecino país (en particular el transporte por el río Mississippi y el marítimo). Así, los fletes para una tonelada de maíz entre algunos estados productores de nuestro país (Sinaloa y Sonora) y la ciudad de México eran superiores, en 1994, a los de un envío equivalente desde un puerto estadounidense del Atlántico al mismo destino, ingresando por Veracruz (Sagar, 1994).

Finalmente, un último factor representativo de las dificultades del país para hacer frente a los cambios recientes en sus relaciones comerciales con el exterior es el fuerte rezago en la capacidad innovadora de las instancias de investigación con respecto a la sustitución de cultivos y a la necesidad de crear nuevas especies más cercanas a la demanda. Hoy ni siquiera pueden contender con los problemas fitosanitarios que aquejan a varios productos y que en algunos casos han llevado a su desaparición. Ejemplo de ello es la soya en Sinaloa, que prácticamente desapareció de territorio nacional debido a problemas de plagas, y el trigo panificable que, frente a la enfermedad del "carbón parcial", está siendo sustituido por la variedad cristalina, aunque ésta carezca de mercados en México, tal como ya se señaló.

En conclusión, tal como se expuso, el cambio de modelo económico de la agricultura en México no se hizo acompañar de la preocupación oficial por instrumentar políticas de transición que permitieran un paso gradual hacia otras estructuras más acordes con los principios de la globalización y las nuevas demandas industriales. En

⁸ Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el rezago en infraestructura, la inseguridad en las carreteras, la necesidad de asegurar las mercancías y los camiones, el marco regulador y el alto costo de los combustibles son los principales factores que inhiben la competitividad del transporte carretero nacional. Según dicho instituto, el transporte carretero nacional es de los más caros del mundo, superando en mucho los costos de los de nuestros socios comerciales y de Brasil (*El Financiero*, 10/7/04).

cambio, las modificaciones fueron abruptas, no llevaron a un proceso sustitutivo que avanzara gradualmente, mediante una infraestructura y prácticas alternativas ahí en donde hacían falta. Aún hoy día, después de quince años de las reformas, no se han creado estos nuevos pilares, diluyéndose la acción gubernamental en apoyos y subsidios compensatorios para los productores, pero no en cambios infraestructurales que permitan afrontar los riesgos de la apertura comercial con mayor holgura.

DESAJUSTES ENTRE OFERTA Y DEMANDA

El proceso de cambio económico llevado a efecto en el transcurso de la década de 1990, alcanzó de igual forma a las empresas agroalimentarias, mismas que sufrieron un abrupto proceso de reajuste frente a la apertura comercial, destacándose un impactante proceso de concentración. Muchas de éstas han alcanzado una dimensión multinacional y se destacan en el ámbito mundial por su alto valor en ventas o exportaciones.⁹ Para ello, fueron necesarios varios ajustes, entre los cuales destaca el crecimiento en su monto de operación y su diversificación. Este proceso exigió, además, un incremento en los bienes agrícolas aportados, así como una mayor selectividad en cuanto a su composición. La apertura comercial permitió el acceso a un mayor elenco de bienes, algunos de los cuales no eran parte de la oferta mexicana, llevando en muchos casos a un proceso sustitutivo de los bienes nacionales. En muchos casos, sin embargo, este proceso sustitutivo no alcanzó su plena configuración, observándose la paradoja de que junto con las importaciones, se observa el fenómeno de sobreproducción interna.

El caso del maíz es paradigmático al respecto pues, tal como se observó anteriormente, en tanto se registra exceso de producción de la variedad blanca, la variedad amarilla, de creciente aceptación entre los núcleos industriales, prácticamente no es cultivada, razón por la cual se importa en casi su totalidad.

Cultivo omnipresente en toda la geografía del país, así como en la gastronomía mexicana, el maíz blanco es un componente básico

⁹ Destacan Bimbo, la tercera panificadora mundial por el valor de sus ventas, las cerveceras Femsa y Moctezuma, que colocan a México como el tercer exportador mundial de cerveza, Maseca y Minsa, productoras de harina de maíz con presencia en Estados Unidos y otros países, así como las empresas avícolas y de alimentos balanceados, muchas de las cuales son de capital extranjero.

de la dieta de la población. Dado su carácter estratégico, el relevo de su condición protegida ocurrió en un plazo más largo al de los demás granos, situación que empujó a un gran número de productores a su cultivo. Así, en los primeros años de la década, el grano incrementó su volumen cosechado entre 70 y 80 por ciento, alcanzando un monto de entre 18 y 20 millones de toneladas, situación que prevalece hasta la fecha. No obstante, el monto destinado a la tortilla (incluido el autoconsumo) no supera los 10 o 11 millones de toneladas, por lo que se estima que el volumen restante se destina a usos forrajeros (Casco y Rosenzweig, 2000:55).

Por otra parte, la industria procesadora sufrió un importante proceso de crecimiento y diversificación en los años noventa del siglo pasado. De una parte, la tortilla, antes centrada en los métodos artesanales de producción de masa nixtamalizada, pasó a ser elaborada también en forma industrial. Grandes empresas de elaboración de harina de maíz ahora coexisten con las microindustrias molineras y con las tortillerías en la oferta del producto, sin poderlas desplazar. En consecuencia, las necesidades del maíz blanco, utilizado en la elaboración de este producto han crecido, no superando, sin embargo, el límite ya señalado. Empero, el sector en donde se observa una mayor capacidad de absorción del grano es el de las industrias emergentes, poco expresivas con anterioridad, que emplean el maíz amarillo como su materia prima. Así, las industrias del almidón, las cerealeras, las de la fructuosa, pero sobre todo las vinculadas con la producción de alimentos balanceados, se han desarrollado fuertemente en la última década, pasando a utilizar una cantidad creciente del grano. Dentro de éstas, el sector que más se inclina por el uso de esta variedad es el de ganadería integrada, destacándose también la avicultura por su enorme capacidad de absorción. Es así la pecuaria nacional la que se va haciendo crecientemente adepta del uso de maíz amarillo, siendo la responsable por el fuerte aumento en las importaciones a partir del año de 1998.¹⁰

El uso preferente del maíz amarillo por este sector industrial responde a sus características inherentes en términos de pigmentación, cantidad de glucosa, almidón y aceites, así como de textura, pero también al hecho de que, tal como se afirmó anteriormente, su pre-

¹⁰ Ello significó, en los hechos, que dado que el sector importador principal es el relacionado con una cadena alimentaria, productora de artículos básicos, como carnes, leche y huevos, no ha sido gravado en sus importaciones, dado el impacto inflacionario que ello causaría. Así, los sobrecupos de maíz que, según el TLC, deberían pagar elevados aranceles, han sido relevados de tal obligación por las instancias gubernamentales.

cio es inferior al del grano blanco (*Agrosíntesis*, 28/2/02). Dado que su demanda a ido ascenso en los últimos años, alcanzando más de seis millones de toneladas, es preocupante que en el nivel nacional no se incremente la producción de esta variedad, mayormente cuando, desde el lado del maíz blanco, se exceden las necesidades de abasto en varios millones de toneladas, debiendo ser canalizada al uso forrajero. Este desajuste entre oferta y demanda nacional ocurre en gran medida porque el Estado sigue ofertando una gran cantidad de subsidios a los productores nacionales de maíz blanco, en particular a los localizados en el noroeste del país, bajo el amparo de los llamados programas de Apoyos a la Comercialización. Pese a su intención de promover el cambio hacia el faltante maíz amarillo, no ha tenido éxito en sus propósitos, en gran medida debido a las dificultades para convencer a los agricultores sobre la necesidad de una reconversión. Por otra parte, la importación de esta variedad ha provocado una gran polémica en el país, sustentada en argumentos que apuntan hacia el riesgo de un desplazamiento del maíz blanco por el amarillo. Los industriales y ganaderos, en consecuencia, se ven amenazados de ver interrumpido su abasto de maíz amarillo, lo que provoca un ambiente de tensiones y conflictos.

No obstante, al momento de la apertura, en el 2008, el maíz amarillo podrá entrar en cantidades ilimitadas, lo que ciertamente presionará los mercados formales del maíz blanco hoy destinados al uso forrajero.

En el caso del trigo también se registra una disyuntiva similar. En este caso, la industria hegemónica es la panificadora, requiriendo la mayor parte del grano ofertado (alrededor del 70 por ciento del total). Las variedades panificables, sin embargo, han ido languideciendo en México, sobre todo en la última década, cuando se han vuelto susceptibles de plagas, como el "carbón parcial" en el noroeste del país. Esto implica que se ha debido importar una cantidad creciente del cereal para abastecer a las industrias comprometidas con la panificación. En cambio, se ha desarrollado una variedad no panificable, la del trigo *crystalino*, que con éxito sustituye a las primeras, sobre todo porque es más resistente a las plagas. Esta variedad, vinculada con la producción de pastas, empero, se encuentra con un mercado restringido en México, razón por la cual cae, de igual forma que el maíz blanco, en una situación de sobreoferta. En este contexto, los excedentes son en parte orientados hacia la exportación y en otros al uso forrajero. De igual forma que el maíz blanco, se subsidia a productores y compradores, razón por la cual se profundiza la brecha con respecto a las necesidades nacionales del trigo.

De la misma manera que sucede con el maíz sinaloense, se observa el fenómeno de lejanía de las zonas productoras en relación con las zonas de consumo. Así, en su mayor parte, el trigo es cultivado en Sonora, Baja California y Sinaloa, pero las industrias locales sólo absorben 26 por ciento de la producción, debiendo ser canalizadas al Altiplano Central, en donde se localiza más del 40 por ciento de la capacidad de molienda del país (Gómez, 2001). Dadas las deficiencias en el sistema de transporte del país, los costos del traslado se incrementan, acercándose a los del trigo importado. Por otra parte, el trigo mexicano sigue padeciendo de un problema añejo, el de su bajo contenido proteínico, inferior al de Estados Unidos y Canadá (Agrosíntesis, 1999).

Tal como observamos en estos casos, la situación predominante es la de un desajuste entre oferta y demanda, síntoma inequívoco de la desarticulación en las cadenas productivas nacionales.

Una situación similar se observa en el caso del frijol, en donde también se cultivan excedentes de variedades menos demandadas, en tanto otras no logran satisfacer la demanda nacional. En este caso, Sinaloa reporta fuertes excedentes de frijoles claros, en tanto el país es deficitario en la variedad negra, debiendo importarla de Estados Unidos. Se observa aquí, de igual forma que en el caso del trigo, una priorización entre los agricultores de los criterios agronómicos sobre los de mercado. Así, el incremento del cultivo del frijol en Sinaloa en fechas recientes se debe a su mayor resistencia a la falta de agua en momentos en que ésta se vuelve escasa. En ambos casos, el criterio del factor *mercado* está ausente, observándose la lucha de los productores por superar los obstáculos que les presentan en el ámbito productivo. Aquí también ha sido patente la intervención estatal para resolver los problemas de comercialización.

CONCLUSIONES

Este ensayo deja constancia de las dificultades presentes hoy en los escenarios agroindustriales de México. Agricultores e industriales actúan, según lógicas propias, en muchos casos ajenas por completo a los requisitos que exige una cadena productiva. Tal como observamos, el agricultor no reconoce en el mercado un referente fundamental para la elección de su acción económica o en los mercados industriales el destino ineludible de su producción. Ello se debe, por un lado, a la larga tradición de que en última instancia el Estado actúa como mediador para que sus cosechas se vendan pero, por

otra, a que no cuenta con márgenes de acción para elegir una acción económica alternativa. Así, en muchos casos, su opción se define en primera instancia por variables agronómicas, como por ejemplo los mayores rendimientos de una variedad frente a la otra o la mayor resistencia de cierto tipo de cultivo frente a las plagas o a la sequía. Tal como observamos en este trabajo, esta situación no responde tan sólo a un problema de cultura o voluntad, sino que revela la situación de vulnerabilidad del productor agrícola, enfrentado a una crisis severa de rentabilidad frente a las políticas neoliberales.

El industrial, a su vez, actúa según sus conveniencias inmediatas y en caso de que la compra interna del grano resulte azarosa o difícil, acude al mercado internacional para sus adquisiciones. En este caso, su cadena productiva se integra con el exterior y siempre y cuando tenga su cuota de importación asegurada, podrá tener un desempeño exitoso. Sin embargo, si encuentra ventajas en la compra de productos nacionales, así lo hará, sobre todo cuando para ello el desembolso sea menor al de las compras externas, en virtud de los subsidios estatales.

Como se ve, se trata de un círculo vicioso difícil de romper, dado que por el momento hay muchos obstáculos de tipo financiero y político para enfrentar el problema de las cadenas productivas desde una perspectiva reconstructiva. En este sentido, el Estado no ha podido lanzar acciones de reajuste, dada su debilidad frente a los intereses creados, sobre todo de parte de los actores privilegiados por la presente situación. En momentos en que se emprendieron acciones en esta dirección, hubo que dar marcha atrás por razones políticas. Urge, así, una concientización social respecto a este problema, misma que permita legitimar para la acción estatal una nueva dinámica en aras de vincular ambos sectores. Una medida importante en este sentido será la reconversión agrícola en zonas productivas, alentando la sustitución de los cultivos excedentarios por otros más acordes con la demanda regional o local. Otra medida de carácter urgente es la de crear mecanismos para que fluyan las cosechas en forma más natural que en el presente, por medio de la creación de una infraestructura de almacenaje y transporte adecuada y eficiente. Una más, la de institucionalizar las prácticas de pignoración, que permitan una mejor administración de las ventas durante el año. Finalmente, deben crearse estímulos para que los productores agrícolas se organicen con el fin de compactar la oferta y mejorar sus términos de negociación con los compradores.

De la parte industrial sería muy importante incrementar los espacios de integración con la agricultura, a través de contratos de pro-

ducción. En la actualidad éstos existen, pero son insuficientes. De igual manera, sería recomendable la intención de mayor acercamiento a los sectores agrícolas, situación que les brindaría beneficios en caso de que hubiera algún bloqueo a las importaciones, fuera ésta de tipo económico o político. Por último, el Estado debe instrumentar acciones de contención de importaciones siempre y cuando ello sea lesivo para la parte agrícola, y no signifique una obstrucción para el desempeño industrial o ganadero, y esté contemplado en los tratados comerciales con las naciones vecinas.

BIBLIOGRAFÍA

- BENETTI, María (2000), *Reestruturação do Agronegócio no Brasil e Rio Grande do Sul nos anos 90: concentração, centralização e desnacionalização do capital*, documento, Porto Alegre, Fundação de Economia e Estadística, Núcleo de Estudos Agrários.
- BUTTEL, Frederick (1996), "Teoretical Issues in Global Agri-Food Restructuring", en D. Burch *et al.*, *Agri-Food Restructuring*, Londres, Avebury.
- CÁMARA DE DIPUTADOS LVII LEGISLATURA (2000), *¿Cuánta liberalización aguanta la agricultura? Impacto del TLCAN en el sector agropecuario*, México, Cámara de Diputados/UACH/CECCAM/CIESTAAM.
- CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO (1999), *Sector agropecuario. Estadísticas básicas 1989-1998*, México, CNA.
- CONTRERAS RUIZ, M. *et al.* (2003), *Perspectivas de la producción de trigo en la región del sur de Sonora frente al Tratado Trilateral de Libre Comercio*, México, UACH/CIESTAAM.
- FRITSCHER, Magda (1999), "El maíz en México: auge y crisis en los noventa", en *Cuadernos Agrarios*, núms. 17-18, México.
- _____ (2001), "Libre comercio e integración en Norteamérica: el caso de la agricultura", en *Revista Mexicana de Sociología*, año LXIII, núm. 4, México.
- _____ (2004), "Reorientación de la acción estatal en el campo mexicano", en *Alteridades*, año 14, núm. 27, México.
- GÓMEZ MORALES, Gabriela (2001), "Análisis competitivos de las Pymes panificadoras en el D.F. en su entorno agroindustrial: trigo-harina-panificación", tesis de maestría, México, Facultad de Contaduría y Administración-UNAM.

- GORDON, Alan (1998), "Changes in Food and Drink Conceptions and the Implication for Food Marketing", en OECD, *The Future of Food*.
- HEWITT DE ALCÁNTARA, Cynthia (1978), *La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970*, México, Siglo XXI.
- INFORMES DE GOBIERNO, varios años, México.
- MORALES IBARRA, Marcel (1997), "Maíz y neoliberalismo. Nuevas realidades, viejas interpretaciones", en Gerardo Torres Salcido y Marcel Morales Ibarra, *Maíz-tortilla, políticas y alternativas*, México, CICCH/UNAM.
- OECD (1997), *Examen de las políticas agrícolas de México*, París.
- REYES, Pedro y Haidee MUÑOZ (1997), *Cadenas de productos básicos en México*, México, CIESAS.
- Sagar (1994), *Anuario Estadístico de Producción y Comercialización de Maíz*, México.
- _____ (1995), *Anuario Estadístico de Producción y Comercialización de Trigo*, México.
- _____ (1996), *Anuario Estadístico de Producción y Comercialización de Maíz*, México.
- _____ (1999), *Situación actual y perspectivas de la producción de maíz en México 1990-1999*, México.
- WILKINSON, John (1989), *O Futuro do Sistema Alimentar*, Sao Paulo, Hucitec.
- WIRLEY JERSON, Jorge y María Luisa STIPP PATERNIANI (2003), "Productos transgénicos e a preservação del modelo agrícola exportador", en Sonia Maria Bergamasco y Maria de Fátima Archanjo Sampaio, *Sistemas Agroalimentares. Análises e perspectivas para a América Latina*, Sao Paulo, Unicamp/Feagri.

HEMEROGRAFÍA

- Agrosíntesis*, publicación mensual de 1996 a 2001.
- Claridades Agropecuarias*, publicación mensual de 1994 a 2002.
- El Financiero*, de 1999 a 2002.

CRISIS CAMPESINA: ALGUNAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA CRISIS DEL AGRO ESTADOUNIDENSE DE LA DÉCADA DE 1980

*Dante Ayala Ortiz**

RESUMEN

El presente trabajo parte de la hipótesis de que el gobierno mexicano está apostando hacia la reestructuración del campo mexicano, guiándose por el camino que siguió Estados Unidos, tras su crisis agrícola en los años ochenta del siglo pasado. La discusión central consiste en que las bases de la crisis de las *farms* estadounidenses fueron muy diferentes a las que actualmente prevalecen en el campo mexicano, por lo que la consiguiente salida y reestructuración que se dio en aquel país, no puede ser la alternativa de solución a la crisis del agro mexicano. Se busca mostrar cómo, de seguir el modelo estadounidense, el resultado será el desmantelamiento de la producción campesina y la búsqueda de una reestructuración en torno a las grandes empresas agrícolas, cuya eficiencia y productividad suponen una mayor competitividad para el mercado mundial. Se considera que, si bien, las actuales políticas podrán lograr lo primero —por ejemplo, el desmantelamiento de la producción campesina—, eso no garantiza que se logre lo segundo, es decir, la reestructuración del campo con base en las grandes empresas agrícolas, como sucedió en el caso estadounidense. A modo de corolario se reflexiona sobre dos posibilidades alternas al modelo estadounidense en la búsqueda de soluciones a la crisis del campo mexicano.

* Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: <dante_ariel12@yahoo.com.mx>.

INTRODUCCIÓN

De forma general, en la actualidad se tiene la común idea de asociar a la producción del campo estadounidense con el gigante de la gran empresa agrícola establecida en extensas plantaciones, con un alto grado de tecnificación, mecanización y uso de insumos agroquímicos que les permite tener altos rendimientos a bajo costo.

Sin embargo, aun cuando históricamente la agricultura estadounidense ha sido un persistente líder de la agroproducción mundial, no siempre sus unidades productivas agrícolas han sido los "monstruos" que hoy parecen ser. No, esto no ha sido siempre así. Prácticamente desde el nacimiento de Estados Unidos como nación independiente, y durante más de 150 años, la economía de este país estuvo fuertemente ligada a la producción y modo de operar de las llamadas pequeñas y medianas *farms* familiares.

Estas unidades de tamaño pequeño a medio, se caracterizan por ser tradicionalmente operadas por medio del trabajo familiar, con una relativa baja tecnificación y cuyas ventas se ubican por debajo de los 20 mil dólares anuales (Reimund *et al.*, 1986). Hasta 1969 estas *farms* todavía constituían casi 85 por ciento del total de *farms* existentes en Estados Unidos, con un número aproximado de 1 904 000 establecimientos; sin embargo, para 1982, tras la irrupción de la crisis, se redujo este número a una tercera parte, eliminando abruptamente a todas aquellas *farms* consideradas "no competitivas" en el nuevo modelo agrario, para buscar la reestructuración del sector en torno a las grandes empresas agrícolas estadounidenses.¹

Zanjando artificialmente las grandes diferencias de tipo histórico, cultural, tecnológico y ambiental, que sin duda existen y han existido entre el campo mexicano y el estadounidense, hoy parece que —una vez más— el gobierno de México trata de seguir el modelo de su vecino del norte en la superación de la actual crisis del sector campesino mexicano.²

En este trabajo se establecen algunas diferencias y similitudes entre la crisis campesina actual de México con respecto a la crisis de la década de 1980 en Estados Unidos, buscando demostrar que la

¹ De acuerdo con la información del *Agricultural Statistics of the United States* (vv.aa.), entre 1970 y 1993 la reducción de *farms* del sector agropecuario estadounidense fue de casi 900 mil establecimientos, lo que pone en relieve la magnitud de la crisis y la reestructuración de este sector.

² Se debe aclarar aquí que, aun cuando el análisis realizado en este documento se circunscribe al sector campesino, de ningún modo se considera que la crisis del campo mexicano sea exclusiva de los campesinos.

salida reestructuradora del sector que se dio en aquel país no es un camino apropiado a seguir para superar la actual crisis campesina. Finalmente, se reflexiona sobre dos posibilidades alternas al modelo estadounidense en la búsqueda de soluciones a la crisis del campo mexicano.

BASES DE LA CRISIS DEL AGRO ESTADOUNIDENSE DURANTE LA DÉCADA DE 1980

Luego de experimentar el impulso productivo que supuso la "revolución verde" a partir de la década de 1950, el campo de Estados Unidos vivió una de sus épocas de mayor auge, que le permitió comandar gran parte de la producción agrícola mundial, especialmente de granos, actuando como regulador de la producción, almacenador, distribuidor y, desde luego, fijador de los precios de estos productos en la escala internacional. De acuerdo con Solari (2002), este auge alcanzó su clímax durante los años setenta, cuando una combinación de apertura de nuevos mercados y crecimiento de saldos exportables, generó una excesiva sobreestimación de las expectativas de incremento del mercado agrícola mundial que, particularmente, los productores de Estados Unidos avizoraban en el mediano plazo.

De forma acompasada al evidente éxito general que estaba teniendo el campo estadounidense, el Estado inició su paulatina retirada reduciendo los apoyos y el papel compensador de los gastos estatales en la agricultura avanzando, de esta manera, en la liberalización de la agricultura. Debe notarse que esta retirada del Estado fue contracíclica: se inició precisamente cuando se suponía que el sector marchaba bien y que podría funcionar mejor si se le concedía mayor libertad para actuar de acuerdo con los dictados del libre mercado.

Ante esta paulatina retirada del Estado y dada la gran expectativa que prevalecía sobre los mercados internacionales, los *farmers* buscaron el incremento de su capital productivo vía contratación de créditos y financiamientos con la banca comercial principalmente, para continuar elevando, aún más, su productividad. La confianza era plena sobre un horizonte bastante promisorio.

Sin embargo, fue en los umbrales de los años ochenta cuando el sector resintió su primer freno tras la contracción del mercado externo por 1) la recesión mundial; 2) la entrada de nuevos exportadores; 3) la sobrevaluación del dólar; 4) los cambios en las dietas; 5) el embargo cerealero hacia la Unión Soviética; entre otros factores.

En el ámbito interno hubo elementos adicionales que se sumaron en la configuración y desencadenamiento de la crisis, por ejemplo, la profunda reducción de las tasas de rentabilidad, la caída en los ingresos de las *farms* y el aumento del endeudamiento total por efecto del alza de las tasas de interés. Como era de esperarse, este primer freno pronto se tradujo en la falta de solvencia generalizada del sector para pagar el principal y los intereses, derivando en quiebras masivas de pequeñas y medianas *farms* y bancos rurales, y con ello, un áspero desmantelamiento de la estructura productiva vigente hasta entonces en este sector.

En el nivel macroeconómico, los elementos que acompañaron la configuración de la crisis fueron: la reducción del producto agrícola, la estimulación del proceso inflacionario, la alta inestabilidad financiera y productiva, la reducción de las expectativas de crecimiento del sector a corto y mediano plazos. Para 1982 más del 45 por ciento de las pequeñas y del 31 por ciento de las medianas *farms* se habían declarado insolventes frente a los bancos. Pero esta política de choque no quedó allí, sino que fue profundizándose cada año a lo largo de la crisis. En los hechos, se buscó la quiebra masiva e inmisericorde de las pequeñas y medianas *farms* familiares con bajos niveles de productividad y rentabilidad. Así, por ejemplo, en tan sólo los cinco primeros meses de 1984, unas 110 mil *farms* de todo tipo se declararon en situación de quiebra (Dunne y Gowers, 1985).

En el fondo, el objetivo del gobierno era generar una nueva estructura del agro teniendo como eje a las grandes empresas agrícolas para conseguir niveles de productividad superiores a las del resto de los países, reduciendo los costos fiscales al anular la franja de pequeñas y medianas *farms* con menores niveles de eficiencia, que normalmente eran las depositarias de los subsidios y pagos de apoyo (Solari, 2002). También se intentó reorientar los grandes excedentes de producción agropecuaria hacia el mercado mundial mediante un sistema de subsidios a las exportaciones y una enérgica estimulación del sector hacia la competencia externa, buscando una presencia más importante en el mercado mundial de bienes agrícolas, especialmente con productos de alto valor agregado.

En resumen, fue una política económica desastrosa para el sector en su conjunto, pero altamente beneficiosa si se evalúa desde el punto de vista de la centralización de tierras y capitales requerida para reestructurarlo con un nuevo eje de dominación en torno a las grandes empresas agrícolas, que fueron las unidades productivas que avanzaron en medio de la crisis, posicionándose como la nueva hegemonía agrícola estadounidense.

ALGUNAS SIMILITUDES ENTRE LA CRISIS DE LOS AÑOS OCHENTA
DEL AGRO EN ESTADOS UNIDOS Y LA ACTUAL CRISIS
CAMPEESINA MEXICANA

Como ya se ha mencionado, la crisis del campo estadounidense fue, en esencia, una crisis de sobreacumulación, esto es, una crisis por exceso de capital; paradójicamente, en el caso mexicano la crisis encuentra sus bases en el extremo empobrecimiento y la descapitalización que ha venido sufriendo desde hace al menos cuatro lustros. En tal sentido, en el presente ensayo se pone énfasis en este aspecto fundamental de la crisis campesina, el empobrecimiento sistemático, haciendo abstracción de otros múltiples factores que inciden fuertemente y determinan la funesta dinámica campesina nacional.

Para iniciar, se debe mencionar que aun cuando durante largas décadas —al menos de 1930 a 1970—, el sector agropecuario mexicano dio muestras de competitividad, dinamismo y autosuficiencia; pero, entrada la década de 1980, a la hora de buscar a quién cargar los costos de la crisis estructural de la economía nacional que irrumpió en aquellos años, paradójicamente fue a este sector al que se le impuso el mayor peso.

Los argumentos que se esgrimieron entonces se centraban en el hecho de que la población económicamente activa del sector era muy grande, mientras que su aportación al producto interno bruto era muy baja. En otras palabras, que el sector era altamente ineficiente, por lo que se requería prácticamente sacar a la gente improductiva y no competitiva del campo, argumentando que, simultáneamente, se daría un proceso de industrialización que permitiría absorber a la población rural excedentaria.

Así, de forma similar a la experiencia estadounidense de los años ochenta, se justificó un cambio estructural que implicaba la retirada del Estado, la apertura comercial y el establecimiento de los estándares internacionales como parámetros para evaluar la competitividad del sector.

En los hechos, los resultados de la reforma estructural han sido más bien de carácter retrógrado y desestructurante, puesto que en esta sacudida propiciada por el Estado mexicano para eliminar a las producciones rurales ineficientes, se han socavado los logros y las propias bases del capital acumulado desde la posrevolución, poniendo en jaque a la producción agropecuaria nacional.

Con respecto al entorno internacional, recordemos que al inicio de la década de 1980, éste se mantuvo fuertemente marcado por una

contracción del mercado mundial que, en el caso particular de Estados Unidos se agravó tras el embargo cerealero que ellos mismos impusieron a la extinta Unión Soviética, en represalia por la invasión rusa a Afganistán, como también por la entrada de nuevos competidores, tales como Argentina, que entre 1982 y 1985 se erige como uno de los principales agroexportadores cerealeros. Esta difícil situación internacional, combinada con una inadecuada política cambiaria, obligó a Estados Unidos a mantener su moneda sobrevaluada entre 1980 y 1985, estimándose que el precio del dólar estuvo hasta 40 por ciento por debajo del tipo de cambio real de sus principales socios comerciales.

De forma similar a aquel momento, el entorno económico internacional actual se caracteriza por un bajo crecimiento del producto mundial, pues si bien —visto desde México— existe una gran diversificación del mercado internacional, la demanda agregada mundial no está creciendo al ritmo que los economistas consideran necesario para promover el desarrollo.

Asimismo, en el caso de México se han hecho numerosos estudios que demuestran que al menos de 1998 a la fecha, el peso mexicano ha mostrado una persistente sobrevaluación frente al dólar, que en 2002 llegó a estimarse incluso en un 40.9 por ciento (Calva, 2005).

Por otra parte, tras el *boom* cerealero al inicio de los años setenta, en Estados Unidos se empezó a registrar una peculiar combinación de incremento de la productividad con caídas generalizadas en las tasas de rentabilidad. En este sentido, las *farms* vieron reducidos sus ingresos como resultado del incremento de sus pasivos con la banca, el desplome de los precios internacionales, la disminución del apoyo estatal y la caída en sus ventas.

En México, el incremento de la productividad no ha sido tan generalizado como las amplias caídas en la tasa de la rentabilidad. Ahora bien, hablando particularmente de las unidades productivas campesinas, éstas han visto reducidos sus ingresos por la disminución del apoyo estatal, su desplazamiento del mercado interno y, en muchos casos, por el incremento de sus pasivos con la banca comercial.³ Un duro golpe propinado al agro mexicano fue que mientras los precios de sus cultivos caían, las tasas de interés subían y se retiraban los apo-

³ En 1998 el endeudamiento de los productores ascendía 395 millones, mientras que para 1995, tras la materialización de la crisis financiera, este monto creció a 13 326 millones de pesos (Calva *et al.*, 1996, citado por Rubio, 1997).

vos directos al campo. De hecho, como una parte del esfuerzo por modernizar el campo muchas de las instituciones que apoyaban al sector fueron privatizadas, reducidas o eliminadas.

En ambos casos se observa que el endeudamiento se vio incrementado por alzas continuas en las tasas de interés real que, ante la insolvencia, provocó la quiebra masiva de numerosas unidades productivas —de las llamadas familiares en los Estados Unidos, y campesinas en México—, que al propio tiempo, abrió el camino para un paulatino proceso de centralización y concentración de tierras y capitales.

Por lo que corresponde al empleo agrícola, como se ha dicho, el argumento de la reestructuración del campo suponía que habría un proceso de industrialización que permitiría absorber a la población rural expulsada. En la práctica, esto último no ha sucedido, obligando a una muy importante parte de la población, al no tener más alternativa, a emigrar hacia los centros urbanos o hacia Estados Unidos. El Consejo Nacional de Población estima que durante las dos últimas décadas, México ha expulsado alrededor de 5.3 millones de personas allende la frontera norte (SSA, 2004).

De igual modo, paralelamente a la caída del empleo rural, en México se ha venido verificando el incremento de los ingresos rurales no agrícolas, para autosubsidiar la producción en sus propias unidades productivas (Boltvinik, 2003). En el caso de Estados Unidos, este proceso inicialmente fue de carácter complementario, pero conforme la crisis se fue agravando, adquirieron un carácter compensatorio ante la caída de los ingresos agrícolas.

En el caso mexicano, la participación de los ingresos rurales no agrícolas constituye cada vez una participación más importante, no sólo para financiar la producción campesina, sino para arraigar a la gente en el medio rural.

Finalmente, uno de los rubros en donde se observa con más claridad la convergencia en la caracterización del modelo mexicano con respecto al estadounidense de los años ochenta, es en lo que se refiere a la definición de los nuevos objetivos y políticas para el sector agropecuario.

Volvamos a la década de 1980. Tras la irrupción de la crisis, la nueva directriz del sector agrícola estadounidense para el corto plazo consistió en asegurar la reducción del papel del Estado como rector en la agricultura; brindar un apoyo diferenciado en favor de los productores con vocación agroexportadora —de alto valor agregado principalmente—, y con base en ello brindar asistencia selectiva a las empresas que demostrasen ser las más competitivas.

En el largo plazo, los nuevos derroteros consistieron en generar una nueva estructura en el sector agrícola de Estados Unidos que, por una parte, redujera los costos fiscales del gobierno (al dejar de apoyar a una amplia franja de pequeñas y medianas *farms* que absorbían una gran porción del presupuesto) y, por el otro, al reorientar los excedentes de producción hacia la exportación, lo que permitiría la atracción de mayores divisas al país.

Para México, se puede decir que los objetivos centrales de la política agrícola no han variado sustancialmente desde los años ochenta. En los hechos han tendido a exacerbarse en torno a un claro propósito de descampesinización, el cual ha contado con varios frentes.

Un argumento central en este proceso fue el presentado por Levy y Winjbergen en 1992, quienes aseguraban que la liberalización comercial tendría efectos directos sobre el ingreso y la tasa marginal de salario, y en sí, sobre el precio del maíz, tanto en zonas rurales como urbanas.⁴ Esto es que México debería de abandonar las prácticas poco competitivas e ineficientes de la siembra de maíz, para dedicarse a otras actividades e importar el maíz desde donde se tienen ventajas comparativas y competitivas.

Sin embargo, retomando exclusivamente el programa del gobierno federal encabezado por Vicente Fox, la política sectorial es un nítido ejemplo del modelo que se está buscando implantar, al establecer que 1) todos los productores que sean competitivos tendrán el apoyo del gobierno federal, y que 2) ante la apertura comercial, las políticas actuales se dirigen hacia mayores niveles de especialización productiva y eficiencia económica.

DIFERENCIAS CENTRALES ENTRE LA CRISIS DE LA DÉCADA DE 1980 DEL AGRO EN ESTADOS UNIDOS Y LA ACTUAL CRISIS CAMPESENA MEXICANA

Esta serie de similitudes arriba expuestas es lo que nos permite asegurar que el actual gobierno mexicano está siguiendo el tipo de crisis-reestructuración del sector estadounidense, como alternativa de solución a la profunda crisis del campo mexicano. Pero si bien har

⁴ Según estos autores, la apertura comercial al maíz estadounidense, efectivamente afectaría, por el lado de la producción, a un considerable número de productores maiceros mexicanos de subsistencia; no obstante, aseguraban que por encima de las pérdidas en la producción, ellos registrarían un mayor beneficio por el lado del consumo, al tener acceso a un maíz a precios más bajos que los actuales en las zonas rurales.

sido ya señalados los numerosos paralelismos en la caracterización de la crisis presentada en el agro estadounidense durante los años ochenta y la actual crisis campesina mexicana, existen de igual modo, numerosas diferencias que las separan y hacen afirmar que lo que resultó positivo para el primero, no necesariamente tiene que serlo para el segundo.

En primer lugar, refiriéndonos exclusivamente a la caracterización de la crisis, como ha sido señalado por Solari (2002), la crisis del agro estadounidense fue, en primera instancia, una crisis de sobreacumulación de capital, gestada y madurada en el sistema productivo en la búsqueda de mejorar las tasas de rentabilidad, pero detonada desde la esfera de la circulación.

En el caso mexicano es evidente que la crisis campesina no es fruto de la sobreacumulación de capital, sino de su extremo opuesto, es decir, resultado de la creciente descapitalización del campo, manifestada tanto en el estancamiento del producto agrícola,⁵ como en la caída de la inversión en el sector, la reducción del empleo y la erosión de los términos de intercambio de este sector con el resto de la economía, entre otros.

Desde esta perspectiva, una diferencia adicional es el hecho de que la ubicación inicial de la crisis campesina mexicana no se dio en la esfera de la circulación, como en Estados Unidos, sino en la esfera de la producción desde donde se ha irradiado hacia la esfera de la circulación. Esto se observa cuando se revisan algunas cifras del sector (tomadas de Calva, 2003c): los términos de intercambio sufrieron un gran deterioro: entre 1982 y 2001, los productores de maíz perdieron 56.2 por ciento del poder adquisitivo; los trigueros, 46.3 por ciento. Por otra parte, la dinámica agrícola ha resultado muy afectada, ya que la producción agropecuaria per cápita del 2002 fue 14.3 por ciento menor al de 1981 y en kilogramos, la producción de los ocho principales granos resultó 21.8 por ciento menor, la de carnes rojas disminuyó 28.8 y la de maderas cayó 39.9 por ciento. Como contraparte, las importaciones de alimentos se dispararon de 1 790 millones de dólares en 1982, a 11 77.4 millones en 2001, estimándose que en el año 2003 llegaron a 13 mil o 14 mil millones de dólares.

En términos de inversión pública productiva, ésta se redujo en 95.5 por ciento (a una veinteava parte); por ejemplo, la superficie anual abierta al cultivo irrigado disminuyó de 146 mil hectáreas

⁵ Entre 1985 y el año 2000, la producción agrícola de los 10 principales cultivos se mantuvo alrededor de las 29 mil toneladas, en tanto que la superficie sembrada se redujo en aproximadamente 6.5 por ciento, según cifras del segundo informe de gobierno de Vicente Fox.

a 5 800 hectáreas al año; mientras que el gasto público global en fomento agropecuario cayó 73 por ciento. Por su parte, la banca nacional de desarrollo disminuyó sus créditos agropecuarios, por ejemplo, el área habilitada por Banrural se redujo de 7.3 millones de hectáreas, en 1982, a sólo 1.5 millones en 2001.

Pero bien, haciendo énfasis sobre las diferencias entre la crisis de los modelos agrícolas de ambos países, llama la atención el hecho de que la crisis se inició en México, al igual que en Estados Unidos, hacia 1981-1982, como parte de la crisis campesina mundial que estalló desde el inicio de 1980;⁶ sin embargo, en aquel país la gran sacudida y quiebra de las pequeñas y medianas *farms* ineficientes duró aproximadamente entre cinco y seis años, dando paso inmediato a la profunda reestructuración del sector en torno a las grandes empresas agrícolas.

En cambio, México ha vivido ya veinte años de permanente sacudida y quiebra técnica de las pequeñas producciones campesinas —y otras ni tan pequeñas, ni tan campesinas—, y aún no se vislumbra ningún signo de reestructuración de la planta productiva agropecuaria nacional, más que el desmantelamiento y la desestructuración del campo mexicano.

Otro contraste central en el desarrollo de las respectivas crisis, en ambos países, puede situarse en que, no obstante las radicales reformulaciones del sector agrícola estadounidense, su política agropecuaria ha mantenido ciertos condicionamientos y características que no corresponden a una concepción netamente liberal. Por ejemplo, Estados Unidos no ha abandonado su política de subsidios, ya que siguen siendo mecanismos que ayudan a garantizar la seguridad estratégica en alimentos y en otros productos agropecuarios clave. También adoptan, en algunos casos, una política de subsidios explícitos y dirigidos, en la medida en que existen algunas ramas a las que no se puede dejar sin subsidiar.

Lo anterior se hace patente en la nueva Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural 2002, que incrementa el presupuesto agroalimentario de aquel país hasta 118 mil millones de dólares anuales durante el periodo 2002-2011, y que están orientados principalmente a subsidiar áreas de producción específicas como maíz, trigo, arroz, soya, cacahuete, algodón, leche, azúcar, frijol, etc. (Calva, 2003a), es decir, dirigido a la producción de sus alimentos básicos.

⁶ Blanca Rubio (1997) refiere que tanto la producción familiar de los países desarrollados, como la producción campesina de los latinoamericanos enfrentaron un proceso de discordancia de su forma productiva con el ascenso del nuevo orden económico internacional.

En el caso de nuestro país, se observa que inicia su política de liberalización del sector agropecuario a partir de la segunda mitad de los años ochenta y el Estado ya no vuelve a proteger este sector durante los posteriores agravamientos de la crisis. De hecho, disminuye invariablemente, año con año, el nivel de los apoyos directos e indirectos otorgados al campo.

En suma, mientras que en Estados Unidos el eje rector de su política agrícola es privilegiar la seguridad alimentaria sobre la liberalización comercial, en el caso de México el eje central e inamovible es privilegiar la liberación comercial por encima de la propia seguridad alimentaria de los mexicanos de hoy y los de las futuras generaciones.

¿ES VIABLE EL MODELO DE LA GRAN EMPRESA AGRÍCOLA COMO ALTERNATIVA PARA EL CAMPO MEXICANO?

Para concluir este ensayo, se puede considerar que tanto la sobreacumulación como la descapitalización, respectivamente entre Estados Unidos y México, constituyen las dos caras de una misma moneda: la crisis del sector agrícola de estos países, con la salvedad de que en el segundo caso, esta crisis se ha prolongado por más de 20 años.

Desde este punto de vista, se puede decir que el desarrollo agrícola correspondiente en cada una de estas economías no puede seguirse en forma lineal, ni bajo la reduccionista visión del gobierno mexicano que supone el seguimiento del modelo estadounidense como la salida única y viable a la crisis del campo mexicano.

Por el contrario, la dinámica y desarrollo que han seguido ambos modelos —tanto en sus puntos coincidentes, como en sus divergentes—, hacen pensar que la situación de descapitalización y, por ende, de déficit alimentario, del sector mexicano, es el complemento preciso para el acomodo de los excedentes agrícolas —y de sobreacumulación—, del sector agrícola estadounidense.

Es ingenuo suponer que dadas las condiciones impuestas de dependencia alimentaria desde Estados Unidos, y sumisamente aceptadas por el gobierno mexicano, nuestro país pueda encontrar una salida a la estructural y sistémica crisis del campo mexicano, y quiera seguir montándose en el modelo estadounidense de reestructurar nuestro agro en torno a las grandes empresas agrícolas.

En el presente trabajo se afirma que esto no puede suceder en un esquema de asociación comercial, en el cual no se busca el trato igua-

litario, sino la complementaridad, marcada por las llamadas ventajas comparativas y en donde se impone la ley del competidor más fuerte y el nefasto ciclo de la dependencia alimentaria.

COROLARIO: ENTRE EL SUBSIDIO Y LA LIBERALIZACIÓN
LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL

De acuerdo con José Luis Calva (2003b), la historia económica de las naciones que cuentan con sectores agrícolas exitosos tienen dos grandes momentos en la interrelación del desarrollo agrícola y el desarrollo económico general: en una primera fase, el sector agropecuario contribuye al financiamiento del desarrollo industrial y a la acumulación del sector urbano; en una segunda, las actividades no agrícolas devuelven al campo los servicios que éste prestó al desarrollo económico general, efectuando transferencias netas de recursos en favor de la acumulación de capital agrícola y de la tecnificación de las granjas. Visto así, sucede que en México se ha cumplido puntualmente la primera gran fase de la interrelación de la agricultura y las actividades no agrícolas, pero no se ha dado ningún paso hacia la segunda fase.

En este sentido, tal parece que el campo mexicano se encuentra en una triple encrucijada: ciertamente, una alternativa es seguir el modelo estadounidense de reestructuración agrícola en torno a grandes empresas; sin embargo, la viabilidad de esta opción es muy reducida dadas las propias características del campo mexicano, que tras 20 años de intenso desmantelamiento se niega a abandonar su histórico y tradicional perfil productivo de carácter familiar.

Un segundo camino —y no muy alejado del anterior—, sería perseverar en los mecanismos del libre mercado, como instrumento para compensar los altos costos sociales que supone la producción campesina, en un sistema perfeccionado de información simétrica entre productores y consumidores nacionales, en el cual los primeros generan productos agrícolas de alta calidad en términos de nutrición, calidad e inocuidad alimentaria, generando adicionalmente externalidades positivas en términos de ocupación rural, fortalecimiento de la identidad cultural y servicios ambientales asociados a prácticas menos lesivas del entorno; mientras que los segundos, es decir, los consumidores, reconociesen esta serie de beneficios colaterales de la producción y consumo de productos agrícolas nacionales y pagasen un precio diferencial “justo” por encima de los precios internacionales, en compensación a tales beneficios extras.

Resulta evidente que esta segunda alternativa queda seriamente comprometida, al contrastarla con el socavado poder de compra del grueso de la población mexicana, considerando que más de la mitad de la población experimenta algún grado de pobreza, que antes que pensar en "precios justos", se esfuerza por satisfacer el mínimo fisiológico de ingesta calórica.

Finalmente, la tercera vía en esta encrucijada del campo mexicano, podría ser la seguida por el modelo europeo que, bajo un eficaz sistema de reconocimiento a la multifuncionalidad de qu agricultura (Bartra, 2003), aplican un esquema de subsidios altamente discriminatorios que evitan entre otras cosas: 1) la presión social por la creación de nuevas fuentes de empleo fuera del medio rural; 2) la erosión de los valores culturales asociados a la producción agrícola tradicional de la mayoría de los países de Europa Occidental; 3) la pérdida de la agrobiodiversidad, así como el mantenimiento de servicios ambientales positivos por prácticas tradicionales, y 4) la defensa de la soberanía nacional al garantizar la seguridad alimentaria en la mayoría de los productos básicos de esa región del mundo.

Ante esta triple encrucijada en que se encuentra el campo mexicano, en el presente trabajo se considera, claramente, que la alternativa más viable, que no más fácil, es precisamente esta última: el establecimiento de un sistema de mecanismos institucionales de reconocimiento a los servicios sociales, culturales, ambientales y de soberanía alimentaria que supone la producción campesina para los mexicanos, como un acto de reivindicación nacional por el aporte que este sector ha dado al desarrollo de México, aun a costa de su propia reproducción social.

BIBLIOGRAFÍA

- BARTRA V., Armando (2003), *El campo mexicano ante la globalización*, conferencia magistral dictada en la Universidad Autónoma de Chapingo, 22 de febrero.
- BOLTVINIK, Julio (2003), "¿Por qué son pobres los campesinos?", en *La Jornada*, 31 de enero.
- CALVA, José Luis (2003a), "El papel del campo en el proyecto de nación", en *El Universal*, 21 de febrero, p. 30-A.
- _____ (2003b), "Direcciones de la reconstrucción agrícola", en *El Universal*, 7 de marzo, p. 32-A.
- _____ (2003c), "¿Y los parámetros sociales de la política agrícola?", en *El Universal*, 10 de enero, p. 28-A.

- _____ (2005), "Sobrevaluación del peso", en *El Universal*, 22 de julio, p. 28-A.
- DUNNE, Nancy y Andrew GOWERS (1985), "Los subsidios agrícolas en Estados Unidos", en *Financial Times*, 31 de enero.
- LEVY, Santiago y Sweder VAN WINJBERGEN (1992), "El maíz y el acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos", en *El Trimestre Económico*, vol. LVIII (4), núm. 232, México, pp. 823-862.
- REIMUND, Donn, Nora BROOKS y P. VELDE (1986), "The U.S. Farm Sector in the Mid-1980's", en *Agricultural Economic Report*, núm. 548, Washington, U.S., Department of Agriculture.
- RUBIO, Blanca (1997), "La vía campesina en tiempos de crisis y globalización", ponencia presentada al Congreso de LASA, 17 al 19 de abril, Guadalajara, México.
- SECRETARÍA DE SALUD (2004), *Salud y apoyo al migrante: estadísticas de migración y salud*. Secretaría de Salud y Asistencia, disponible en <http://www.saludmigrante.salud.gob.mx/estadisticas/mex_pop_car.htm>, consultado en junio de 2004.
- SOLARI V., Andrés H. (2002), "Crisis y reestructuración de la agricultura en los Estados Unidos, 1975-1990", tesis de doctorado, México, Facultad de Economía-UNAM.

CAJAS Y SEGURIDAD ADMINISTRATIVA: COMPARACIONES ENTRE LA ÉPOCA DEL 1980-1993 Y LA CRISIS ACTUAL (1993-2003)

FRANCIS ESCOBAR

IMPACTOS Y RESPUESTAS

El presente artículo analiza el impacto de la crisis económica y administrativa en las cajas de pensiones en España durante el periodo 1980-1993 y la crisis actual (1993-2003). Se comparan los datos de ingresos, gastos y reservas de las cajas de pensiones en ambos periodos. Se observa que durante el periodo 1980-1993, las cajas de pensiones experimentaron un crecimiento sostenido de sus reservas, lo que les permitió hacer frente a las necesidades de pago de pensiones. Sin embargo, durante la crisis actual (1993-2003), las cajas de pensiones experimentaron una drástica reducción de sus reservas, lo que les impidió hacer frente a las necesidades de pago de pensiones. Este artículo analiza las causas de esta situación y propone algunas medidas para mejorar la seguridad administrativa de las cajas de pensiones.

El presente artículo analiza el impacto de la crisis económica y administrativa en las cajas de pensiones en España durante el periodo 1980-1993 y la crisis actual (1993-2003). Se comparan los datos de ingresos, gastos y reservas de las cajas de pensiones en ambos periodos. Se observa que durante el periodo 1980-1993, las cajas de pensiones experimentaron un crecimiento sostenido de sus reservas, lo que les permitió hacer frente a las necesidades de pago de pensiones. Sin embargo, durante la crisis actual (1993-2003), las cajas de pensiones experimentaron una drástica reducción de sus reservas, lo que les impidió hacer frente a las necesidades de pago de pensiones. Este artículo analiza las causas de esta situación y propone algunas medidas para mejorar la seguridad administrativa de las cajas de pensiones.

CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: COMPARACIONES ENTRE LA CRISIS DE 1989-1993 Y LA CRISIS ACTUAL (1999-2003)

*Paola Sesia**

RESUMEN

La debacle cafetalera de los años 1989-1993 y la actual (1999-2003) presentan diferencias importantes en las estrategias de seguridad alimentaria y sus efectos nutricionales en hogares indígena-campesinos. En dos estudios de caso se constató que en los años noventa la estrategia primaria para garantizar la seguridad alimentaria fue productiva: procurar el autoabasto cultivando más maíz, disminuyendo la producción del café y diversificando más la producción comercial y de autoconsumo. Actualmente, aumenta la precariedad de las condiciones productivas, la producción agrícola decrece, aumenta la migración y resalta la dependencia cada vez más marcada de los hogares hacia los subsidios al consumo procedentes del programa Progres/Oportunidades.¹ Se ilustrarán los efectos nutricionales sobre los hogares de estas distintas etapas de la crisis cafetalera.

* Profesora-investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Istmo, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Correos electrónicos: <sesia@ciesas.edu.mx> y <paolasesia@yahoo.com.mx>.

¹ Durante el periodo de realización del estudio, el programa tenía el nombre de Progres. En marzo de 2002, cambió oficialmente de nombre a Oportunidades. Es por eso que se utiliza el término Progres/Oportunidades a lo largo del texto en referencia a los datos recopilados en trabajo de campo. Se presentan sólo dos excepciones: a) cuando se habla exclusivamente de los primeros años de Progres, en donde se usa este nombre para el programa, y b) en las conclusiones, donde ya se utiliza el nombre actual de Oportunidades.

campesinos de los resultados recibidos un
Diego, en el año académico
instituciones, sin las cuales
quiero agradecer a la doc
tropológica de la UAM-Izt
del trabajo de campo co
partamento.
³ Esto se dio como co
afectaron a la Organiza
tema de cuotas que hasta
dando un cierto grado de
nal. Estos procesos de d
grandes países consum
⁴ Algunos de los au
marcaron como la des
procesos organizativos
rativo del Estado y abri
propios. En otras pala
perspectiva de los pe
organizaciones autonó
nos potencialmente
listas, electoreras "co
mexicano. Véase, por
de Organizaciones C
nadora Estatal de Pr
tal en Oaxaca (Arand
1998).

INTRODUCCIÓN²

La crisis cafetalera del 1989-1993 llamó mucho la atención, en su momento, por los efectos devastadores que tuvo sobre los sistemas locales de producción, la supervivencia y el bienestar de cientos de miles de familias de pequeños productores en México. Lo que más impactó en ese entonces fue la dramática caída de los precios en el mercado internacional;³ caída a la cual se añadió la desaparición repentina del Inmecafé (Martínez, 1996:118). Ambas situaciones dejaron a un sinnúmero de pequeños productores mexicanos con reducciones en sus ingresos de hasta cuatro o cinco veces de lo que ganaban antes de 1989.⁴

² Este artículo es resultado del proyecto "Procesos organizativos, sistemas de producción, salud, nutrición y género en la región de la Chinantla, Oaxaca", que coordiné en trabajo de campo entre los años 1997 y 1999, con el financiamiento del Sistema de Investigación Benito Juárez (SIBEJ) del Conacyt; se recibió además una beca-premio Stanley Grant para trabajo de campo de la Universidad de Arizona, en 1997. Para el análisis y la redacción de los resultados recibí una beca como investigadora en residencia del Centro de Estudios sobre México-Estados Unidos, Universidad de California, San Diego, en el año académico 1999-2000. Agradezco el apoyo a todas estas instituciones, sin las cuales este trabajo no hubiera sido posible. Por último, quiero agradecer a la doctora Ana Paula de Teresa del Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa todo el apoyo que me dio en el desarrollo del trabajo de campo con la participación de varias estudiantes de ese departamento.

³ Esto se dio como consecuencia de los procesos de desregulación que afectaron a la Organización Internacional del Café (OIC) y desmanteló el sistema de cuotas que hasta 1988 se había logrado mantener durante varios años, dando un cierto grado de estabilidad a los precios en el mercado internacional. Estos procesos de desregulación fueron activamente promovidos por los grandes países consumidores, sobre todo Estados Unidos.

⁴ Algunos de los autores que analizaron el impacto de esta crisis, remarcaron cómo la desaparición de Inmecafé dio cabida a la emergencia de procesos organizativos autónomos que lograron rebasar el control corporativo del Estado y abrir espacios de gestión, producción y comercialización propios. En otras palabras, no todos los efectos fueron negativos. Desde la perspectiva de los pequeños productores, la creación o consolidación de organizaciones autónomas regionales o nacionales representó —por lo menos potencialmente— un sano distanciamiento de las políticas asistencia-listas, electoreras "compravoto", y creadoras de dependencia del Estado mexicano. Véase, por ejemplo, la constitución de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) en el nivel nacional y de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) en el ámbito estatal en Oaxaca (Aranda, 1992, 1996; Moguel *et al.*, 1992; Piñón y Hernández, 1998).

Se ha hecho hincapié que el costo negativo de la crisis de 1989-1993 fue particularmente alto entre aquellos cafeticultores de extracción indígena, ya que para decenas de miles de familias indígenas en estados como Oaxaca, estas pérdidas representaron una caída dramática en su ya precario estado de bienestar (Hernández Navarro, 1992; Piñón y Hernández, 1998). Sin embargo, pocos estudios han documentado estos procesos en los espacios locales. La mayoría se ha limitado a declarar cómo han aumentado los niveles de pobreza en estos sectores sociales como consecuencia de la crisis y de la caída de los ingresos.

En mi propio trabajo (Sesia, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2005) he tratado de documentar cómo, en dos espacios rurales indígenas de Oaxaca, la crisis cafetalera de los primeros años de la década de 1990 tuvo efectos negativos directos en el bienestar de las poblaciones locales; sobre todo en la seguridad alimentaria y la nutrición. Argumenté que los estragos se lograron amortiguar, en parte, gracias a un despliegue de múltiples estrategias de supervivencia individuales, familiares y comunitarias; estrategias que se dieron de manera diferenciada, de acuerdo con las condiciones productivas, ambientales, organizativas y laborales específicas de cada una de las dos localidades bajo estudio.

En el presente artículo quisiera retomar algunos de estos resultados para compararlos con las condiciones alimenticias y nutricionales que se están experimentando, hoy en día, en estas mismas localidades; condiciones que se han generado en un contexto político-económico diferente al de los primeros años noventa y en una situación de profundización de la crisis del café. A diferencia de hace diez años, el panorama está ahora marcado por la presencia masiva del programa gubernamental Oportunidades en las comunidades rurales indígenas y que tiene entre sus áreas prioritarias de intervención justamente la alimentación y la nutrición. En particular, me interesa analizar de manera comparativa en los dos periodos: *a*) el contexto cambiante de las políticas públicas y sus efectos en los espacios locales; *b*) las estrategias de supervivencia desarrolladas frente a los dos momentos de crisis, y *c*) cómo se reflejan esos procesos cambiantes en el estado nutricional de las poblaciones locales.

ALGUNAS ACLARACIONES TEÓRICAS

Para entender la relación entre estrategias de supervivencia y nutrición en poblaciones indígena-campesinas en contextos de crisis, con-

sidero indispensable utilizar el concepto de "seguridad alimentaria" como el eje articulador entre las dos.

Antes de abordar esta relación, es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de "seguridad alimentaria". Este concepto tuvo un proceso de redefinición importante en la literatura de los últimos treinta años (Foster y Leathers, 1999: 95; Pottier, 1999: 11). Pasó de ser concebido en los años setenta del siglo pasado como un problema de insuficiente producción de alimentos en el nivel mundial y de precios demasiado altos en el mercado internacional (UNO, 1975) a ser considerado a partir de la década de 1980 como un problema más bien de acceso y distribución (Foster y Leathers, 1999; Maxwell, 1990; Pottier, 1999). En 1983, la FAO declaró que la seguridad alimentaria implicaba "que toda la gente en todo momento [tuviera] acceso tanto físico como económico a los alimentos básicos que necesita" (1983).⁵ Ésta es la conceptualización que sigue prevaleciendo hoy en día, aun si las unidades de análisis han variado desde el individuo, pasando por la familia para llegar hasta la nación o aun a regiones supranacionales (Maxwell, 1990; Pottier, 1999).

Maxwell nos recuerda que, no obstante las variaciones existentes, todas las definiciones de "seguridad alimentaria" que se usan actualmente comparten algunas preocupaciones básicas de las cuales dos son de particular interés en esta ocasión. Primero, se remarca la importancia que tienen la producción y la distribución de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria en condiciones de pobreza (1990:3). La seguridad alimentaria se ha convertido, de hecho, en un concepto sustituto de "pobreza", especialmente en la literatura que se aboca al estudio del impacto de las políticas de ajuste estructural (1990:4; Cornia *et al.*, 1987). En segundo lugar, se hace hincapié sobre la íntima conexión existente entre la producción, la distribución y el consumo de alimentos, y se utiliza el término "seguridad alimentaria" como un concepto integral que incluye a todas estas dimensiones.

En el nivel del hogar —que es el nivel que más interesa en este trabajo— la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad a lo largo del tiempo de adquirir todo el alimento necesario para mantener la salud de todos sus integrantes (Von Braun *et al.*, 1989). Entre hogares de pequeños productores agrícolas (como los indígena-campesinos) cuya disponibilidad de recursos está estructuralmente limitada, la seguridad alimentaria es mediada por varios factores.⁶ El

⁵ El texto original es en inglés. La traducción es mía.

⁶ De Walt (1989) identifica a los siguientes como los más importantes: calidad y cantidad de la tierra disponible; fuentes, formas, control sobre y

objetivo de garantizarla se puede dar a través de una combinación de distintas estrategias:

La seguridad alimentaria puede lograrse a través de su propia producción de alimentos, incluyendo la crianza de animales domésticos para el autoconsumo, o basándose en el intercambio entre producción de alimentos y producción de otros cultivos en el mercado para generar ingresos, o buscando parcialmente otras posibilidades de generar ingresos a través de empleos no agrícolas (Von Braun *et al.*, 1989:53-54).

Las estrategias adoptadas varían de acuerdo con la disponibilidad de cada hogar en recursos naturales y materiales, la naturaleza y magnitud de interacción con el mercado para productos agrícolas, empleo y alimentos, y las diferentes políticas públicas que intervienen, directa o indirectamente, en la economía de los hogares en los espacios locales.

Una visión que se centra en la seguridad alimentaria no sólo nos ayuda a explicar las múltiples y distintas estrategias de los hogares campesinos. También tiene la ventaja de incluir en el análisis cuestiones de seguridad económica y de supervivencia más allá de la pura obtención de la comida. Más importante aún, el concepto de seguridad alimentaria como un campo íntimamente interconectado entre producción, distribución y consumo nos hace entender la importancia de integrar en un solo enfoque lo que es alimentación y nutrición, por un lado, y lo que es desarrollo agrícola y políticas públicas (tanto económicas como sociales) hacia el mundo rural, por el otro. Éste es, precisamente, el enfoque que la FAO y el World Food Council adoptaron hacia finales de la década de 1970 (véase Pinstrup-Andersen, 1981:27-29); el mismo enfoque que también otros analistas han promovido en la política pública o en la investigación (véase como ejemplos a De Walt, 1989 y Pottier, 1999:11, 27).

Sin embargo, en la política pública no siempre prevalece un enfoque integral en la promoción de la seguridad alimentaria. El neo-

monto total de ingresos disponibles; organización de la producción y la disponibilidad de mano de obra en el hogar; la temporalidad estacional de la producción; la diversidad de cultivos y el acceso a otros cultivos alimenticios o a la recolección de los mismos; el papel de las mujeres y los niños en la producción; las preferencias, la aceptabilidad y el uso de ciertos alimentos sobre otros; los requerimientos de jornales para cada cultivo; y los precios en el mercado tanto para los cultivos comerciales como para los alimentos básicos.

liberalismo promueve, más bien, intervenciones focalizadas con una selección e incorporación de beneficiarios a los distintos programas sociales de corte restrictivo. La reducción del gasto público es prioritario con respecto a programas de fomento al desarrollo económico. Es así como, con el auge neoliberal que estamos viviendo en la actualidad en el país, la política pública hacia el agro se caracteriza por divorciar la política social de combate a la pobreza (política que incluye a los programas de nutrición y de salud en el medio rural) de la política de desarrollo económico en la agricultura (política de la cual los campesinos están de facto excluidos). Los programas de combate a la pobreza —dirigidos en gran parte a las poblaciones indígena-campesinas del país— se manejan en el terreno de lo social con la exclusión de lo económico (por ejemplo, no contemplan la generación de empleos o una política de apoyo a la producción). Se ha separado de una manera tajante lo que es autosuficiencia alimentaria y fomento a la producción de lo que es consumo de alimentos y (des)nutrición, y el Estado ha dejado de hacerse responsable de los primeros para enfocarse a los segundos.

LAS LOCALIDADES⁷ Y LA ÉPOCA DE AUGE DEL CAFÉ

San Antonio Analco y Santa Cecilia de Madero son dos localidades de la región chinanteca de Oaxaca que presentan características históricas, económicas, medioambientales y agrarias distintas.

Analco es una antigua comunidad de origen colonial de aproximadamente 370 habitantes (1998), enclavada en la montaña a 600 msnm dentro del municipio de Usila (distrito de Tuxtepec). Rica en recursos naturales, esta localidad no sufre de escasez de tierras, teniendo un territorio comunal con una extensión total de 2 707 hectáreas. La vida económica local se ha regido desde finales de los años setenta sobre la producción del binomio maíz-café como principales productos, además, del cultivo de la yuca y el frijol para autoconsumo. Hasta el año 2001, Analco no había presenciado un proceso de expulsión de mano de obra migratoria en busca de trabajo. La comunidad no presenta, además, tradición de trabajo por jornal.

Santa Cecilia de Madero, en cambio, es una localidad relativamente joven (fundada en 1908) de aproximadamente 350 habitantes

⁷ Para una descripción más detallada de estas dos localidades, sus contextos regionales, la historia de sus procesos productivos y organizativos en las que han estado inscritas, véase Sesia 2002a, 2002b y 2003b.

(1998) y que se ubica a los 180 msnm en el municipio de San Juan Lalana (distrito de Choapan). La localidad es, hoy en día, pobre en recursos naturales ya que presenta una fuerte erosión de los suelos (PAIR, 1997), debido a la práctica de una agricultura intensiva con periodos de descanso de los acahuales demasiado cortos durante por lo menos quince años. Cuenta actualmente con un total de 1 200 hectáreas de tierras comunales, extensión insuficiente para la expansión demográfica natural de la población local, por lo cual las tierras agrícolas son sobreexplotadas y presentan un bajo rendimiento. El sistema de producción es de roza-tumba-quema (RTQ) basado en el binomio maíz-frijol. Desde la década de 1970 aumentó el cultivo del café en la localidad; éste, sin embargo, se cultiva en tierras no aptas por su escasa elevación. Desde mediados de los años noventa se ha afianzado la explotación de la fibra de ixtle como producto comercial alternativo al café.

A partir de los años ochenta, Santa Cecilia ha sufrido un fuerte proceso de expulsión migratoria entre los jóvenes de ambos sexos. Desde 1989 un número oscilante pero mayoritario de las 53 familias participa en la Unión de Pueblos Indígenas de la Sierra de Lalana (UPISL),⁸ una organización regional que en 2001 agrupaba a 13 pueblos chinantecos con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida por medio de la diversidad productiva y la satisfacción de necesidades básicas dentro de un modelo de desarrollo sustentable.

Con estos perfiles disímiles, lo que estas dos localidades tienen en común es que comparten la historia de la economía cafetalera campesina de los últimos veinte a treinta años. En ambas, el Inmecafé promovió la expansión de la producción de café a partir de la segunda mitad de los años setenta.⁹ Con Inmecafé se introdujeron variedades mejoradas del café, se formaron semilleros, se regalaron pesetillas, se proporcionó asistencia técnica, se otorgaron créditos para la renovación de cafetales y la compra de fertilizantes, asimismo se ofreció una alternativa de comercialización al "coyotaje", otorgando precios de garantía con anticipos a la cosecha y pagos de remanentes después de la misma, garantizando, así, un mercado a los productores. Esto implicó ingresos más o menos seguros para las familias, que de manera creciente se volvieron dependientes de este

⁸ En 1998, 33 familias estaban activamente participando en la organización.

⁹ En Lalana el Inmecafé entra en 1974 y es en 1980 que expande notablemente sus actividades; en Usila entra entre 1974 y 1978, y en Analco inicia su promoción entre 1978 y 1984.

altivo para garantizar sus estrategias de reproducción. A partir de los primeros años ochenta, el café adquirió una importancia primordial en ambas localidades: el café trajo dinero, un dinero seguramente variable según los altibajos del precio internacional, pero dinero seguro durante los años que existió Inmecafé.¹⁰

En Analco el nivel de vida mejoró. Como estrategia familiar de producción con el aumento del trabajo asociado al café y de los ingresos generados por su venta, disminuyó el cultivo de maíz (de más de tres mil kilogramos, promedio en los años setenta, a 550 kilogramos en 1990 y de un promedio de 3 a 1 por hectárea por unidad doméstica)¹¹ y aumentó el del café. En los primeros años ochenta, dos terceras partes de las mejores tierras agrícolas estaban ya dedicadas al cultivo del café; cultivo que la familia trabajaba con su propio mano de obra (Montiel, 1995). Gracias a los ingresos generados por el café, los analqueños garantizaron la seguridad alimentaria en sus hogares; la estrategia funcionó y el estado nutricional de la comunidad mejoró de manera sensible. Los índices de desnutrición, según el indicador talla/edad¹² se redujeron de un alarmante 95 por ciento en los años setenta a 56 por ciento en 1988 (véase gráfica 1).

Para Santa Cecilia, el convertirse en una comunidad cafetalera implicó un desahogo —aunque temporal— de la que ya se perfilaba como una situación de presión creciente sobre la tierra. Aquí iniciaron los procesos de expulsión migratoria precisamente en 1985, año en que el precio del café cayó en el mercado. El cultivo del café se expandió notablemente en esa época y más del 60 por ciento de las parcelas dedicadas al café en 1997 fueron abiertas a este cultivo

¹⁰ Hay que remarcar que en los años de apogeo del Inmecafé, sólo entre el 30 y 46 por ciento de la producción total de café en México era captada y comercializada por esta institución (Martínez, 1996), pero su presencia e impacto entre los pequeños productores —como los campesinos de Analco y Santa Cecilia— fue profundo y notable.

¹¹ Esta disminución se debió, además, al hecho de que en la misma época en la localidad se abandonó la cría de ganado porcino, lo cual implicó una menor necesidad de maíz como alimento principal de estos animales.

¹² El indicador talla/edad es particularmente útil para construir las curvas históricas de retroproyección nutricional, porque la talla viene afectada negativamente en su desarrollo con una situación nutricional deficiente de manera progresiva y acumulativa en un lapso de tiempo relativamente largo. La diferencia del peso, el cual está sujeto a cambios más drásticos e inmediatos frente a una crisis nutricional. Talla/edad mide la desnutrición acumulada en el nivel histórico y en la curva de retroproyección se incluyen como desnutridos por "talla muy baja" a todos aquellos que presentaron una estatura inferior a -2 desviaciones estándar en la puntuación de Z, según las tablas del National Center for Health Statistics (NCHS).

en la época de presencia de Inmecafé en la región (1974-1989). No obstante, el bajo rendimiento y la baja calidad del aromático, la venta del café garantizó ingresos bajos pero seguros. Entre tanto, sin embargo, los volúmenes de maíz para el autoabasto disminuyeron, ya que el café competía con el maíz en el trabajo familiar pero también los rendimientos de las parcelas decrecieron y los tiempos de descanso de los acahuales se redujeron de manera dramática. No obstante estas dificultades estructurales, gracias a la contingencia de un precio alto del café en el mercado se logró mantener la seguridad alimentaria y la situación nutricional de la localidad mejoró. Los índices de desnutrición medidos por talla baja disminuyeron de más del 60 por ciento en 1984, a 44 por ciento en 1988 (véase gráfica 2).

LA CRISIS DEL 1989-1993 Y LAS RESPUESTAS LOCALES EN LA DÉCADA DE 1990

Con la crisis de 1989 estas mejoras notables llegaron a su fin de manera abrupta. En 1993 se obtenía una quinta parte de lo que se había obtenido por la venta de café en 1986.¹³

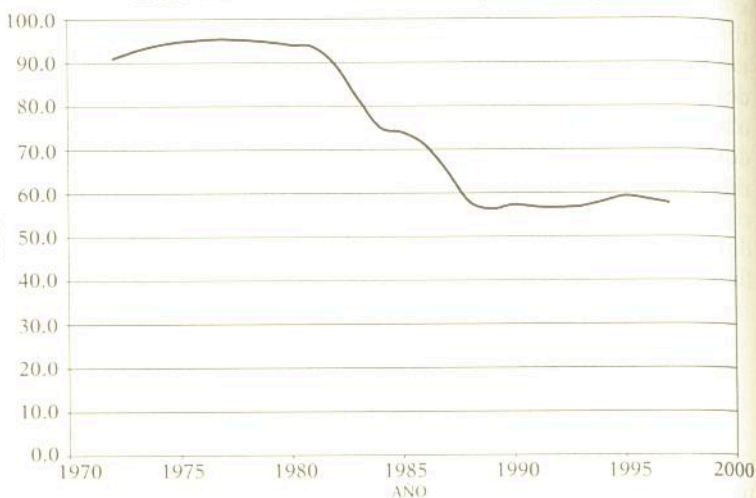
La situación se volvió particularmente dramática en Santa Cecilia, lugar donde ya se sufría por insuficiencia de tierras, deterioro ambiental y bajos rendimientos de los cultivos. Que la situación fuera dramática es evidente por los resultados del primer diagnóstico nutricional a la población infantil levantado en junio de 1991 (véase el cuadro 1); época de escasez¹⁴ y siendo éste el segundo año de caída en el precio del grano y el primer año en que el Inmecafé había suspendido por completo su función comercializadora (Martínez, 1996). Los niños estaban padeciendo una situación de semihambre: casi todos tenían desnutrición moderada o severa y nadie tenía un peso normal para su edad. Casi tres cuartas partes de los menores de cinco

¹³ Los ingresos percibidos por el productor a la venta bajaron de un promedio de 11 pesos/kilogramo en 1986, a tres pesos en 1990 y 2.25 pesos en 1993; representando estos precios sólo una cuarta parte (27 por ciento) en 1990 y una quinta parte (20 por ciento) en 1993 con respecto a lo que se obtenía en 1986.

¹⁴ La temporada del verano se considera de "escasez" por parte de los mismos productores y sus familias, por ser la época del año (a partir de marzo-abril para algunas familias que se encuentran en una situación particularmente precaria) en que se acaban las reservas del maíz de la cosecha anterior y no se dispone todavía del nuevo hasta septiembre-octubre.

GRÁFICA 1
ANALCO: CURVA HISTÓRICA DE RETROPROYECCIÓN DE TALLA

Tasas históricas de desnutrición (1970-1977)

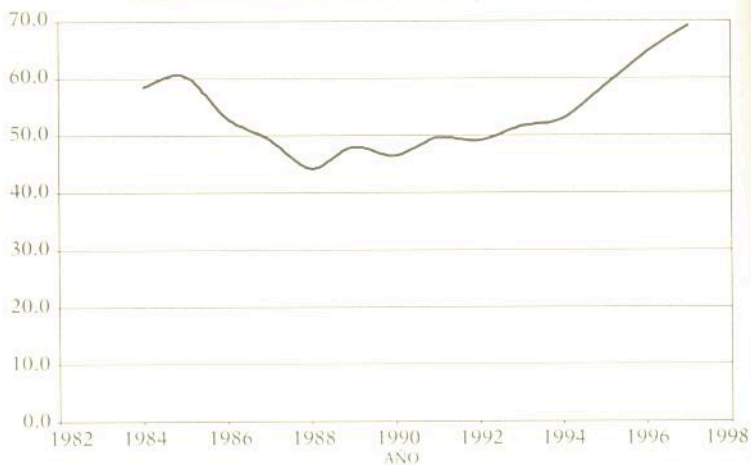


FUENTE: trabajo de campo, 1998.

GRÁFICA 2

SANTA CECILIA: CURVA HISTÓRICA DE RETROPROYECCIÓN DE TALLA

Tasas históricas de desnutrición (1984-1997)



FUENTE: trabajo de campo, 1998.

años y más de cuatro quintas partes de los mayores de cinco años estaban sufriendo de emaciación (bajo peso/talla):¹⁵

CUADRO 1
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN ENTRE POBLACIÓN INFANTIL
DE 0 A 5 Y DE 5 A 12 AÑOS, 1991

	<i>Talla/edad</i> ¹⁶	<i>Peso/edad</i> ¹⁷	<i>Peso/edad</i> ¹⁸	<i>Peso/talla</i> ¹⁹
0-5 años	52.6	84.2	100.0	73.7
5-12 años	52.0	100.0	100.0	88.0

FUENTE: diagnóstico nutricional UPISL-MLAL, junio de 1991.

Según la curva de retroproyección, en Analco las tasas de desnutrición por tallas muy bajas tuvieron su punto más bajo en 1988 con 56 por ciento para iniciar a subir ligeramente y alcanzar 59 por ciento en 1995. Aun si en esta localidad no aumentaron las tasas de manera alarmante, sí se revirtió una tendencia muy marcada hacia un mejor estado nutricional que se había afirmado en la década anterior.

¿Cómo reaccionaron estas localidades frente a la crisis? En Analco, las estrategias productivas se desplegaron hacia el cultivo del binomio maíz-café, además de otros productos de policultivo como el frijol. La tendencia fue hacia una mayor producción de maíz, para así garantizar el autoabasto familiar en una época de precios muy ba-

¹⁵ Este indicador es particularmente sensible a un estrés nutricional inmediato; estos porcentajes extremadamente altos indican que la localidad estaba enfrentando, efectivamente, una seria emergencia alimentaria de casi hambruna. Es interesante remarcar que la talla ya se iniciaba a ver afectada con respecto a los mejores índices de unos pocos años antes; sin embargo, el efecto profundamente negativo sobre la talla iba a profundizarse notablemente en los siguientes años.

¹⁶ Incluye a todos aquellos que presentaron una estatura inferior a -2 desviaciones estándar en la puntuación de Z según las tablas del NCHS.

¹⁷ Incluye a desnutrición moderada y severa, o sea, a todos aquellos cuya puntuación Z en peso/edad fue inferior a -2 desviaciones estándar según las tablas del NCHS.

¹⁸ Incluye a desnutrición leve, moderada y severa, o sea, a todos aquellos cuya puntuación Z en peso/edad resultó inferior a -1 desviación estándar según las tablas del NCHS.

¹⁹ Incluye a desnutrición leve, moderada y severa, o sea a todos aquellos cuya puntuación Z en peso/talla haya resultado inferior a -1 desviación estándar según las tablas del NCHS.

la venta para el café y precios del maíz, a la compra, a la alza,²⁰ el promedio de hectáreas dedicadas al maíz repuntó de una hectárea por familia a principios de los años noventa, a 1.7 en 1996-1997, a 2.5 a partir de 1998, mientras que el promedio de producción anual de la década de 1990 había subido a más de mil kilogramos por familia. Se identificó, además, una tendencia hacia el aumento del cultivo del frijol y de la yuca; ambos productos destinados para el autoconsumo.

Las estrategias productivas incluyeron, asimismo, el cultivo de huerto de patio de donde se recaban frutas y verduras importantes para complementar la dieta. Además, se siguieron recolectando plantas comestibles, recurriendo a la cacería y la pesca en temporadas de crianza de animales de traspatio.

En Santa Cecilia, las estrategias de supervivencia frente a la crisis de 1989-1993 fueron tanto de carácter familiar como colectivo; en este último caso, por medio de la constitución de la organización comunal UPISL en 1989-1990. Entre las estrategias productivas se siguió con el binomio maíz-café; no obstante, el cultivo de café empezó a disminuir tanto en extensión de cultivo como en su importancia económica relativa. Hubo renovación de cafetales por la UPISL e intentos —en su mayoría fracasados— de pasar al cultivo del café orgánico en los años de 1994 a 1996.

La producción se diversificó, sobre todo para el autoconsumo, con la finalidad de llegar a una mayor autosuficiencia con el maíz; la autosuficiencia perdida desde hacía por lo menos 15 años por los bajos rendimientos y el agotamiento de los suelos (el maíz cosechado dura, en promedio, cinco meses, después hay que comprar). Se aplicaron técnicas de cultivo agroforestales sostenidas en el modelo ecológico con algunos primeros resultados; se introdujeron nuevos cultivos como el frijol abono verde como fertilizante produciendo suficientes excedentes para la venta. Se establecieron viveros de especies maderables y de frutales para la reforestación, el autoconsumo y la eventual venta. Se empezó a cultivar el ixtle, el cual había convertido en la principal fuente de ingresos en la localidad, desplazando el cultivo de café. Se impulsó el cultivo de traspatio y la introducción del frijol para garantizar el autoconsumo. La tendencia, impulsada por la UPISL, ha sido hacia la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, perdida hacía tiempo, con algunos buenos resultados.

²⁰ El precio del maíz en las tiendas Conasupo aumentó progresivamente de 90 centavos el kilogramo, en 1997, a 1.5 pesos en 1998, dos pesos en 1999 y 2.20 pesos en 2000.

Otra
mínimo
tre los s
de tras
mejora
de 199
pulsión
en pot

Lo
rales,
noven
tes, m
las co
cilia c
una t
dond
prod
por l

Es
dent
por l
esto
fam
vo d
para
tos

U
am
cie
Est
cor
me
pe
ag

ci
al
te
cl
ti
te
q

Otra estrategia importante de la UPISL fue la de garantizar un piso mínimo de consumo; para este fin, la organización promovió —entre los socios— proyectos de estanques de peces y crías de animales e traspatio para así tener acceso a fuentes de proteínas animales y mejorar la dieta. Además de la producción, a lo largo de la década de 1990, Santa Cecilia siguió registrando tanto los procesos de exclusión de jóvenes como el trabajo por jornal de hombres y mujeres en potreros de comunidades vecinas.

Lo expuesto hasta aquí nos revela que, como tendencias generales, las estrategias utilizadas para enfrentar la crisis en los años noventa fueron parecidas, a pesar de algunas diferencias importantes, marcadas principalmente por la mayor precariedad actual en las condiciones económicas y la presencia de la UPISL en Santa Cecilia con respecto a Analco. El punto en común más importante fue una tendencia compartida hacia la autosuficiencia alimentaria, en donde se impulsó la agricultura de subsistencia y la diversificación productiva. El proceso ha sido guiado, en el caso de Santa Cecilia, por la UPISL; en Analco éste ha sido más espontáneo.

Este repliegue hacia la producción de autoconsumo tiene una evidente relación con la debacle de la economía cafetalera y se explica por la prioridad que la seguridad alimentaria mantiene dentro de estos hogares indígena-campesinos. En ambos casos las estrategias familiares y comunitarias de los años noventa han tenido el objetivo de garantizar el abasto alimentario y generar ingresos en dinero para la satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo alimentos que sólo se consiguen comprándolos.

Una segunda coincidencia en este periodo fue la importancia —en ambas localidades— de múltiples fuentes de aportaciones en especie y en ingresos para lograr la seguridad alimentaria de los hogares. Esto alude a la necesidad de ampliar nuestra visión de qué es lo que constituye la “seguridad alimentaria”, más allá de una concepción meramente productivista. Resulta obvio que, para lograrse, ésta depende de un sinnúmero de estrategias entre las cuales la producción agropecuaria es fundamental pero no suficiente.

Las diferencias existentes entre Analco y Santa Cecilia en capacidad de producción y de garantizar el autoabasto y la seguridad alimentaria en la década de los años noventa se debió, en gran parte, a la mayor riqueza de los recursos naturales, la mayor variedad climática y calidad de suelos, así como el mayor y mejor acceso a la tierra de Analco con respecto a Santa Cecilia. De acuerdo con los datos nutricionales recopilados en 1998, estas diferencias permitieron que las familias analqueñas amortiguaran con mayor éxito que en

Santa Cecilia los estragos de la crisis cafetalera en lo que a seguridad alimentaria se refiere, por lo menos de acuerdo con lo que el estado nutricional de la población infantil de 0 a 5 años reflejó en ese momento (véanse los cuadros 2 y 3).

CUADRO 2
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN POR PESO/EDAD,
MENORES DE 5 AÑOS

	<i>Normal</i>	<i>Leve</i>	<i>Moderada</i>	<i>Severa</i>	<i>N</i>
Analco	53.1	36.7	10.2	0.0	49
Santa Cecilia	36.7	46.9	8.2	8.2	49

CUADRO 3
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN POR TALLA/EDAD,
MENORES DE 5 AÑOS

	<i>Normal</i>	<i>Leve</i>	<i>Moderada</i>	<i>Severa</i>	<i>N</i>
Analco	22.0	24.0	36.0	16.0	50
Santa Cecilia	15.2	21.7	19.6	43.5	46

Si observamos los dos indicadores peso/edad y talla/edad en esta población, podemos percibir que los niños y niñas de ambas localidades tenían, en 1998, por lo común, estaturas muy bajas²¹ y de peso inadecuado para su edad; además, los niños de Santa Cecilia sufrían en una mayor proporción que los de Analco de tallas muy bajas. Probablemente esta situación fue un reflejo directo de cómo la crisis cafetalera de los primeros años noventa repercutió en la seguridad alimentaria, la dieta y el estado nutricional, considerando que mientras que el peso se puede compensar con una dieta apropiada en el momento que la situación económica y alimenticia de un hogar mejora, la baja estatura no es reversible.

En el caso de los niños de cinco a doce años podemos observar que, a diferencia de los menores de cinco años, la situación nutricional de la población infantil de Santa Cecilia en 1998 era mejor que la de Analco en lo que a tallas muy bajas se refiere: 51.8 por ciento en

²¹ "Talla muy baja" incluye las mediciones que caen dentro de "desnutrición moderada" y "desnutrición severa", o sea la población infantil que presenta una talla inferior a -2 desviaciones estándar en la puntuación de Z.

Santa Cecilia contra 63.7 por ciento en Analco. Hay que notar, además, que a diferencia de lo que normalmente se supone y que en efecto estaba ocurriendo en Analco, en Santa Cecilia los mayores de cinco años presentaban un porcentaje menor de tallas muy bajas (51.8 por ciento, véase el cuadro 4) que los menores de cinco años (63.1 por ciento, véase el cuadro 3).

Estos dos datos coinciden con la tendencia en la curva histórica de retroproyección de talla para esta comunidad, en donde se indica que a lo largo de la década de 1990, la situación nutricional —medida por tallas muy bajas— de la localidad seguía empeorando (pasando de un mínimo de 44 por ciento en 1988 a más de 70 por ciento en 1997), lo cual explica el porqué un porcentaje mayor de niños menores de edad presentaba tallas muy bajas con respecto a niños de mayor edad.

CUADRO 4
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN, POBLACIÓN DE 5-12 AÑOS
(TALLA/EDAD)²²

	<i>Normal</i>	<i>Leve</i>	<i>Moderada</i>	<i>Severa</i>	<i>N</i>
Analco	9.9	26.4	51.6	12.1	91
Santa Cecilia	10.7	37.5	37.5	14.3	56

²² Para la población mayor de cinco años no se recomienda utilizar el indicador peso/edad porque después de los cinco años el peso está sujeto a variaciones multifactoriales que vuelven este indicador menos específico en su asociación con la ingesta nutricional. El indicador talla/edad aquí utilizado es más preciso y recomendado para este grupo de edad. Sin embargo, es importante recordar que éste refleja una desnutrición acumulada en el nivel histórico sin poder discriminar entre, por un lado, niños que sufrieron un profundo estrés nutricional en el pasado y que repercutió en su talla pero que en el momento de la medición habían ya logrado compensar esta deficiencia nutricional teniendo un crecimiento adecuado aun con talla baja y, por el otro, aquellos niños que, habiendo sufrido por esta situación en el pasado, siguen sufriendola también en el presente, repercutiendo en un crecimiento inadecuado aun por su talla baja. El hecho de que entre este grupo de edad los niños de Analco presentaran un porcentaje más alto de desnutrición por talla baja es congruente con la evolución de la curva de retroproyección para esta localidad en comparación con la curva de Santa Cecilia, en la que se indica que entre 1986 (año en que nacieron los niños que en 1998 cumplían 12 años) y 1993 (año en que nacieron los niños que en 1998 cumplían cinco años), en términos absolutos los porcentajes de niños con talla muy baja fue en conjunto más alto en Analco (de 71 por ciento en 1986 para bajar a 56 por ciento en 1989 y quedarse en 57 por ciento en 1993) que en Santa Cecilia (de 53 por ciento en 1986 para bajar a 44 por ciento en 1988 y subir a 52 por ciento en 1993).

LA CRISIS ACTUAL: UNA PANORÁMICA GENERAL

principio del nuevo milenio se están dando cambios económicos y políticos que afectan de manera múltiple la supervivencia de localidades rurales como Analco y Santa Cecilia. En el ciclo agrícola 2001-2002 se dio la peor caída en los precios internacionales del café en más de cien años (Cárdenas, 2001; IDB/USAID/WB, 2002). El precio promedio de 100 libras de café en la Bolsa de Nueva York cayó de 100 dólares en el verano de 1997, a 120 dólares en mayo de 1999, 40 en 2001 y 43 al principio de 2002 (IDB/USAID/WB, 2002; Ponte, 2002).

La crisis actual del café ya no es consecuencia de una coyuntura cíclica del mercado, sino un fenómeno estructural. Mientras la demanda no ha cambiado, el mercado de café tiene una sobreoferta de más de 10 millones de sacos (IDB/USAID/WB, 2002), en gran parte gracias a la entrada masiva de nuevos países productores estimulada por una política de promoción de crédito impulsada por el Banco Mundial para que estos países generaran ingresos para repagar sus deudas exteriores (Hernández Navarro, 2001; OXFAM, 2002).²³ Se prevé que la sobreoferta continúe por lo menos durante los próximos cinco años, lo cual provocará ulteriores caídas en los precios del café (OXFAM, 2002).²⁴

En México, aproximadamente 282 mil familias cultivan el café, de las cuales 87 por ciento vive en áreas de alta o muy alta marginalidad y 66 por ciento son indígenas (Hernández Navarro, 2001). Ce-

²³ En particular, Vietnam se ha vuelto en diez años el segundo productor mundial después de Brasil, inundando el mercado con café "Robusta", de menor calidad que la variedad "Arábica", pero la favorita por las compañías transnacionales productoras de café soluble. Vietnam pasó de producir cuatro millones de sacos en 1995 a 14 millones en 2001, lo cual representa el 33 por ciento de la producción total mundial para ese año.

²⁴ Es importante remarcar que hay ganadores y perdedores en la cadena global del café. Mientras que los precios que se les pagan a los cafeticultores son más bajos que los costos de producción, el precio al consumo ha declinado sólo de manera marginal (OXFAM, 2002; Ponte, 2002). Un pequeño productor en México, hoy en día, sólo recibe entre 20 y 30 centavos de dólar por libra de su café de variedad "Arábica" y un pequeño productor en Camerún recibe cuando mucho 10 centavos de dólar por una libra de café "Robusta" (OXFAM, 2002). Al mismo tiempo, los precios para los consumidores en Estados Unidos, Canadá o Europa pagan en promedio 10 dólares por libra. Los países en vía de desarrollo reciben menos de una tercera parte de todas las ganancias generadas por el café en la cadena que va desde la producción hasta el consumo (OXFAM, 2002); los pequeños productores, cuando mucho, reciben menos de una sexta parte (Hernández Navarro, 2001).

iendo a presiones de la Unión Nacional de Productores Cafetaleros (UNPC) y de la CNOC, a finales del año 2000 el gobierno del presidente Fox prometió crear un registro nacional de los pequeños productores. En este programa de apoyo emergente se le otorga 900 pesos (en 2002) por hectárea a cada productor hasta un máximo de cinco hectáreas.

Sin embargo, hay muchas dudas acerca de que en el fondo esta medida tenga una verdadera voluntad de proteger los intereses de los productores o de proveer los niveles de asistencia que se necesitan para garantizar que los cafecultores puedan sobrellevar la crisis actual.²⁵ La supervivencia económica de miles de familias rurales en lugares como Analco o Santa Cecilia está hoy en juego.

Al mismo tiempo hay cambios en la política social que pueden tener un impacto muy significativo en localidades campesinas. El programa Progresá, renombrado Oportunidades en 2002 (*Diario Oficial*, 15 de marzo de 2002) está cambiando sus reglas de operación y está expandiendo sus áreas geoeconómicas de intervención. El número total de familias beneficiarias, los montos totales y los tipos de subsidios en efectivo están cambiando. Cuando Progresá inició, en 1997, mantuvo como regla un monto máximo total de subsidios que se le podía otorgar a cada beneficiaria. Este techo se aplicaba aun cuando el número total de niños inscritos en la escuela a partir de tercero de primaria en principio podía generar becas que excedían el techo máximo permitido. Ahora, las mujeres reciben el monto total de becas de acuerdo con el número total de niños inscritos de cada familia. De esta forma, el rango entre montos mínimos y máximos recibidos por familia ha aumentado notablemente. Hay familias que reciben sólo el apoyo alimenticio (en 2002, 290 pesos cada dos meses) mientras que hay otras que, en la misma localidad, reciben dos mil o hasta cuatro mil pesos cada dos meses.

Además, con Oportunidades las becas van a incluir a los adolescentes que están cursando la preparatoria, mientras Progresá sólo otorgaba becas hasta la terminación de la secundaria. En muchas localidades se han levantado nuevamente los censos y hay casos de familias previamente excluidas por errores o negligencia de los levantadores del censo, que ahora están incluidas en dicho programa.

²⁵ Este apoyo es sólo un paliativo frente a la extrema pobreza y la creciente vulnerabilidad de estos productores. El proceso de registro avanza, además, con demasiada lentitud y muchos productores no han recibido los subsidios prometidos (Hernández Navarro, 2001; *La Jornada*, 11 de febrero de 2002).

No obstante la retórica de Oportunidades (que promete ofrecer créditos e incentivos económicos) y fuera de los subsidios al consumo que ofrece Progres/Oportunidades y algunos otros programas de apoyo a los pequeños productores —como Procampo o el apoyo emergente a los cafeticultores—, en realidad hoy en día los campesinos tienen muy pocas alternativas económicas más allá de la migración.

Los programas gubernamentales no generan empleos en los espacios rurales y la política actual del gobierno aumenta la dependencia de los campesinos indígenas de los subsidios de Progres/Oportunidades para su supervivencia. Sin embargo, es importante recalcar que hay heterogeneidad de respuestas y el impacto de Progres/Oportunidades no es homogéneo, aun en lugares o entre familias en donde los subsidios de este programa se han vuelto indispensables para la supervivencia.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA CRISIS ACTUAL DEL CAFÉ EN ANALCO Y SANTA CECILIA?

En Analco los ingresos por el café llegaron a representar más del 50 por ciento del total de ingresos en la mayoría de los hogares hasta 1998. En 2001-2002, el último año del cual tengo datos, los ingresos fueron sólo 13 por ciento de lo que habían sido cuatro años antes (véase el cuadro 5). De ser la fuente principal de la seguridad económica en los años ochenta, el café en Analco se ha vuelto un desastre económico y una fuente de mayor preocupación en el nuevo milenio.

CUADRO 5
INGRESOS FAMILIARES PROMEDIO POR LA VENTA DE CAFÉ
(1996-2002)²⁶

<i>Ciclo agrícola</i>	<i>1996-1997</i> <i>(pesos)</i>	<i>1998-1999</i> <i>(pesos)</i>	<i>1999-2000</i> <i>(pesos)</i>	<i>2000-2001</i> <i>(pesos)</i>	<i>2001-2002</i> <i>(pesos)</i>
Analco		15 500	9 000	2 800	2 000
Santa Cecilia	8 000			1 000	1 000

FUENTE: trabajo de campo, 1997-2002.

²⁶ Se calcularon estas figuras multiplicando el precio promedio obtenido en el mercado local-regional por el promedio de producción de café para cada ciclo agrícola. Los datos sobre producción de café se obtuvieron a través de entrevistas con doce hogares en el caso de Analco y ocho en el caso de Santa Cecilia. Estos hogares fueron seleccionados para formar una mues-

Desde mediados de los años noventa, en Santa Cecilia la dependencia del café para generar ingresos ha disminuido de manera sustancial. En parte, esto tiene que ver con los esfuerzos de la UPISL hacia la diversificación agroforestal. La fibra de ixtle ha reemplazado al café como el producto comercial más importante.

Mientras que 80 por ciento de los hogares seguían atendiendo a sus parcelas de café en el año 2000 con extensiones de entre 2 y 2.5 hectáreas, la producción —de por sí ya bajísima— descendió a la mitad (200 kilogramos) de lo obtenido en los últimos cuatro años (Methodus, 2000). Pero mientras la producción bajó 100 por ciento, los ingresos bajaron 400 por ciento.²⁷ De todas formas, es interesante remarcar cómo a finales del año 2000, el café representaba sólo 13 por ciento del total de ingresos del hogar promedio.

Mientras tanto, el monto de los subsidios y el número de beneficiarios de Progres/Oportunidades está aumentando en Analco. El monto promedio que reciben cada dos meses las familias por vía de becas escolares aumentó 42 por ciento²⁸ en los 18 meses desde principios del año 2000 hasta finales de 2001: de 835 pesos (con un rango de un mínimo de 430 a un máximo de 1 920 pesos) a 1 183 pesos (con un rango de 790 a 2 640 pesos). Mientras al principio del año 2000 sólo siete familias recibían arriba de mil pesos cada dos meses, hacia finales de 2001 ese número era de 18 familias. Ninguna beneficiaria recibía arriba de los dos mil pesos en el año 2000; en el verano 2001 dos familias recibían más de 2 500 pesos y dos meses más tarde, tres familias recibían más de 3 500 pesos. El número total de beneficiarias también creció de 50 a 77.

Mientras disminuyen los ingresos por el café, los montos de Progres/Oportunidades para aquellas familias que reciben becas escolares se vuelven cada vez más importantes. Para un hogar campesino cuya economía está en crisis, recibir un promedio de siete mil pesos al año (con un rango de 4 740 a 15 840 pesos) no es poca cosa. Para aquellas familias que reciben los montos más altos, los subsidios Progres/Oportunidades logran compensar las pérdidas en los in-

tra estratificada representativa de la localidad, de acuerdo con el nivel socioeconómico y a la etapa biológica del ciclo familiar de cada hogar. Es importante remarcar que estos montos no están indexados a la inflación, por lo cual los montos reales recibidos por cada hogar han caído aún más en los últimos ciclos agrícolas.

²⁷ Estos ingresos no están indexados a la inflación, lo cual implica que en realidad son aún más bajos.

²⁸ Este crecimiento rebasa por mucho el índice de inflación, calculado para estos 18 meses en 11 por ciento.

pesos cafetaleros. Para la mayoría de los demás (44 de un total de 7 beneficiarias) que reciben sólo el subsidio alimenticio básico (290 pesos cada dos meses a finales de 2001), este monto es demasiado modesto para desempeñar un papel relevante en su supervivencia económica.

En Santa Cecilia las mujeres que habían sido excluidas de manera arbitraria durante el primer censo del programa Progresía no habían sido integradas a finales del año 2001, a pesar de que ya se había levantado el nuevo censo ese mismo verano. El número total de mujeres beneficiarias seguía siendo 47, aun si, entre el año 2000 y el año 2001, habían aumentado de 23 a 27 las mujeres que estaban recibiendo becas escolares.

Entre las beneficiarias que reciben becas escolares, los montos totales han crecido en un promedio de 20 por ciento en un año:²⁹ de 57 pesos cada dos meses (con un rango mínimo de 315 y un máximo de 880 pesos) en el 2000 a 670 pesos (con un rango mínimo de 365 y un máximo de 1 420 pesos) en 2001.³⁰ En promedio, las familias reciben cuatro mil pesos en un año (con un rango que va de 2 190 a 8 520 pesos). Estos montos son más altos que los subsidios agrícolas de Procampo. Como los montos totales son menores en Santa Cecilia, en comparación con Analco, la contribución de Progresía/Oportunidades a los ingresos totales de cada hogar es también mejor, como lo es también la dependencia hacia el programa para la supervivencia local.

Estas diferencias entre hogares y entre localidades son importantes. Progresía/Oportunidades significa distintas cosas para los habitantes de ambas localidades. Las diferencias no se deben sólo a los montos desiguales, sino también a las relaciones sociales que el programa afecta, incluyendo a los procesos de adopción de decisiones, las relaciones de poder entre la pareja y las perspectivas de vida de los hijos. ¿Qué podemos, entonces, predecir para el futuro de estas localidades en lo que se refiere a estrategias de producción y reproducción, seguridad alimentaria, bienestar y nutrición considerando estas situaciones contextuales?

Por su dependencia del café, como su principal fuente de ingreso, los analqueños han sido muy golpeados por la actual crisis del gra-

²⁹ La inflación para este mismo período fue de siete por ciento.

³⁰ Los montos de las becas escolares son muchos más bajos en Santa Cecilia que en Analco. Esto refleja un nivel educativo mucho más bajo en la primera localidad, aun si con Progresía/Oportunidades el número de niños y niñas que siguen en la escuela y terminan la primaria (y algunos continúan con la secundaria) ha aumentado la aplicación del programa.

no. Como no tienen ninguna perspectiva inmediata de otro cultivo comercial, es probable que se inicie la migración en busca de trabajo. Efectivamente, por primera vez en el invierno 2001, veinte hombres adultos migraron temporalmente durante cinco meses hacia la ciudad de México para trabajar en la industria de la construcción o en restaurantes de comida rápida. Estas personas se fueron entre diciembre y abril, justo en el periodo cuando hasta hace dos años estaban en plena recolección del café. Si esto es algo coyuntural o se vuelve más permanente es algo abierto para futuras investigaciones.

Una pregunta básica que surge ahora: ¿cómo están afectando los subsidios Progres/Oportunidades la alimentación local? Resulta obvio que la separación que el programa hace entre becas escolares y el subsidio básico alimenticio no se traduce en una asignación diferenciada de estos fondos al interior del hogar. Independientemente de las etiquetas específicas que el programa asigna a cada transferencia monetaria, todos los montos Progres/Oportunidades tienden a terminar en el mismo cajón para satisfacer las necesidades básicas del hogar, entre las cuales la comida tiene la prioridad mayor.³¹ Por lo tanto, si controlamos la composición familiar y la razón productores/consumidores para cada hogar, resulta que los hogares que reciben los montos más altos de las transferencias monetarias del programa son aquellos que van a tener más facilidad para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. La pregunta obvia que nos queda es saber si —y en qué casos— estos subsidios sustituyen a los ingresos perdidos por el café y con ellos aumentar la capacidad de cada hogar, para cubrir las necesidades básicas alimenticias, como lo sostiene programa.³²

Para aquellos hogares en donde se logra mantener (en unos pocos casos, hasta acrecentar) el poder adquisitivo gracias a Progres/Oportunidades, vale preguntarse si el programa no está afectando las estrategias productivas y los patrones laborales, haciendo que disminuyan los esfuerzos de estos hogares por mantener su propia producción

³¹ Sin embargo, hay que calificar esta afirmación en casos en donde los montos de las becas escolares son altos y las necesidades de los niños y niñas en la escuela empiezan a ser onerosas en cuanto a gastos, por ejemplo, de útiles escolares. Esto sucede sobre todo en la secundaria. En estos casos he notado que en muchos hogares sí hay conciencia de la necesidad de solventar estos gastos con las becas escolares.

³² En su planteamiento inicial, el programa sostuvo que los montos otorgados tenían que cubrir un porcentaje (alrededor de 30 por ciento) de los gastos mínimos necesarios de los hogares en extrema pobreza; o sea, que se planteaba que los subsidios no tenían que suplantar otros ingresos sino aña-

para el autoconsumo alimenticio. A la memoria me vienen las palabras pronunciadas, en 1999, por una mujer líder de la UPISL cuando su familia no fue incluida en el primer censo de beneficiarias de Progresas:

Con este Progresas, los hombres se van a volver flojos y borrachos, ya no van a trabajar sus milpas y no van a cumplir con sus obligaciones como proveedores y se van a acostumbrar que papá gobierno apoya a sus mujeres y sus familias³³ (02/99).

Estas palabras me hacen, además, ver que estos interrogantes con respecto al programa tienen también implicaciones importantes para las relaciones de género al interior del hogar o de la comunidad.

Con respecto al impacto del programa sobre las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria, sí hay indicios de que algunos de los jefes de familia de Analco, cuyas esposas reciben las cantidades más altas por las múltiples becas escolares de sus hijos, están reduciendo su trabajo en el campo; esto no sólo con el café, que prácticamente han abandonado, sino también con sus milpas de maíz.

Dalmacio, cuya esposa recibe los montos más altos de Progresas/Oportunidades en Analco, ha disminuido su trabajo agrícola gracias a los recursos económicos que recibe su familia. Él habla favorable-

dirse a ellos. Sin embargo, a partir del año 2000, la realidad tan profunda de la crisis cafetalera y el crecimiento en montos totales de los subsidios a través de las becas escolares, han hecho posible que en algunos casos los montos totales efectivamente sustituyan los ingresos perdidos por el café. Además, independientemente del planteamiento inicial del programa, Progresas/Oportunidades reclama ser un programa que logra mejorar, de manera efectiva, la alimentación y la nutrición de las familias beneficiadas.

³³ Es interesante notar el paralelo que existe entre el discurso antiasistencialista y tradicional en su concepción de género de esta mujer con la retórica contra el estado de bienestar predominante hoy en día en muchos países industrializados que han adoptado políticas neoliberales en lo social. Es importante mencionar que cuando Dominga pronunció estas palabras, ella estaba muy enojada por haber sido excluida por el programa; el resentimiento es un motivo obvio en sus siguientes palabras: "Yo no sé porque no nos dan [Progresas] dinero a mi familia. Nos excluyeron y nadie me sabe decir por qué. Pero mi marido trabaja y no necesitamos el dinero del gobierno [...] se pueden quedar con su dinero [...] ¿no nos quieren dar dinero? No lo queremos. Yo no necesito que papá gobierno apoye a mis hijas y a mí. Yo trabajo y mi marido es un buen marido que trabaja duro". También es importante aclarar que las cantidades mínimas que se estaban dando en ese momento (marzo de 1999, cuando la gran mayoría solo recibía el subsidio básico alimenticio) en la localidad de Dominga no justificaba afirmaciones de este tipo.

mente de esta situación pero al mismo tiempo está preocupado y se siente inseguro y vulnerable, ya que no sabe hasta cuándo el programa pueda durar o desaparezca, como fue el caso del Inmecafé hace ya varios años.

Ponciano, por otro lado, no tiene resentimiento alguno que su joven mujer reciba sólo la beca básica alimenticia. Su discurso se vuelve una crítica compleja al programa, expresada en un lenguaje que revela dimensiones importantes de género. A través de su crítica él reafirma el valor del trabajo masculino y la importancia de que el padre sea un buen modelo como hombre trabajador para sus hijos:

El dinero de Progresá no es lo mismo como el dinero que nosotros ganamos con nuestro propio sudor [...] ahora muchos viven con ese dinero pero los hombres piensan "¿porqué tengo que trabajar si mi señora ya tiene suficiente dinero para el gasto?" Los hombres se vuelven flojos [...] ya no trabajan tanto como antes [...] pero también están tristes. No se sienten útiles pues. Antes el gobierno nos apoyaba a nosotros, a nuestra producción. Ahora ya no es así. Y los niños: ¿qué aprenden los niños si sus papás ya no trabajan tan duro como antes? Esto está muy mal también para nuestros hijos. Ellos ya no aprenden a valorar el trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de nuestro sudor y nuestras manos. Ése sí es trabajo que vale. El dinero que ganamos con nuestro sudor tiene mucho más valor que este dinero Progresá (05/02).

El énfasis del Progresá/Oportunidades en una mejor alimentación y nutrición entre la población beneficiada puede, efectivamente, presentar un impacto positivo sobre el estado nutricional. El programa ofrece tres tipos de intervenciones en este ámbito: *a*) el suplemento alimenticio a todos los bebés de cuatro meses hasta los dos años, de aquéllos desnutridos entre los dos y los cinco años de edad, y de las mujeres embarazadas y lactantes; *b*) pláticas educativas sobre alimentación y nutrición que son obligatorias para las mujeres beneficiarias, y *c*) la beca básica alimenticia para cada hogar beneficiario. Considerando las pequeñas cantidades que esta última intervención aporta, de suyo no significa mucha diferencia para aquellas familias que no reciben adicionalmente las becas escolares. Las pláticas educativas parecen tener más impacto sobre percepciones y preferencias que sobre las dietas. El suplemento alimenticio, por otro lado, es una estrategia de salud muy popular en intervenciones para la infancia en condiciones de pobreza (Mosley, 1984; Mosley y Chen, 1984). Su eficacia, sin embargo, puede ser mínima en contextos en donde

las oportunidades económicas para las familias se encuentran seriamente limitadas o hasta reducidas por una situación de crisis (Mosley, 1984). Habría que averiguar si el impacto en conjunto de estas tres acciones puede sortear efectos positivos.

Por ahora es importante remarcar que en Analco, el estado nutricional de los menores de cinco años no ha mejorado sustancialmente con respecto a nuestras mediciones antropométricas de 1998 y 1999; ambas mediciones antecedieron la intervención de Progres/Oportunidades. La desnutrición leve ha aumentado siete puntos porcentuales desde nuestra última medición en febrero de 1999 (pero sólo tres puntos desde julio 1998):

CUADRO 6
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN, MENORES DE CINCO AÑOS,
ANALCO 1998, 1999 Y 2001

	<i>Talla/edad</i> ³⁴	<i>Peso/edad</i> ³⁵	<i>Peso/edad</i> ³⁶	<i>Peso/talla</i> ³⁷
1998 (N=50)	54.0	10.0	46.0	4.0
1999 (N=43/50)*	51.2	10.0	42.0	2.3
2001** (N=55)	50.9	9.3	49.1	3.6

FUENTE: datos de trabajo de campo, julio 1998 y febrero 1999.

* Para 43 niños se tomaron los datos de peso y talla; para 7 más se pudo registrar sólo el dato de peso/edad.

** Datos proporcionados por el auxiliar de salud de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO).

Estos primeros resultados indican que Progres/Oportunidades puede funcionar como una válvula de seguridad para amortiguar los estragos de la crisis cafetalera actual. Sin embargo, en el contexto económico negativo que se vive hoy en día en Analco, Progres/Oportunidades no logra mejorar el estado nutricional de manera sustancial, contrariamente a lo que son sus objetivos declarados. Esto indica que las intervenciones nutricias específicas —como el suplemento alimenticio— no logran ser tan efectivas en reducir la desnutrición infantil entre los hogares campesinos, a diferencia del monto total de los subsidios que Progres/Oportunidades entrega de manera continua a las familias. Una veta siguiente de investigación tendrá que

³⁴ Véase nota 16.

³⁵ Véase nota 17.

³⁶ Véase nota 18.

³⁷ Véase nota 19.

contemplar si el estado nutricional de los menores de cinco años efectivamente varía de acuerdo con los distintos montos que reciben las familias beneficiarias.³⁸

En Santa Cecilia, la migración y el trabajo asalariado son estrategias de supervivencia ya establecidas. La gran mayoría de los jóvenes que salen no regresan a la comunidad; sólo las mujeres jóvenes que no se han casado envían de manera esporádica remesas a sus padres. Este tipo de migración disminuye la presión demográfica sobre la tierra, pero no contribuye significativamente a la generación de ingresos adicionales para las familias residentes.

En la situación actual es probable que, aun por motivos distintos, ambas estrategias aumenten en importancia. Se puede prever que el trabajo agrícola asalariado siga difundándose sobre todo en los meses de escasez y en las temporadas en que, por distintas razones, los jornales dedicados a la cosecha o la limpieza de la fibra de ixtle disminuyan. La dependencia del trabajo asalariado seguramente aumentará entre los hogares más pobres; es previsible que, con el tiempo, se abandonen por completo las parcelas de café que ya han envejecido mucho y no han sido renovadas. El ixtle es lo que da un respiro, pero esta alternativa va a seguir abierta sólo si los precios del mercado se mantienen y si la planta no cae víctima de plagas. Hay señales de que tanto el trabajo agrícola asalariado como la dependencia del ixtle para conseguir ingresos económicos, efectivamente, están aumentando en importancia (Methodus, 2000).

En los hogares donde los hombres están involucrados en actividades agroecológicas y de autosubsistencia promovidas por la UPISL, es probable que sigan participando en aquellas que vean con mayor potencial. Éstas incluyen las técnicas de terrazas y de fertilización orgánica para aumentar la productividad del maíz y de otros cultivos asociados a la milpa, como el frijol, así como las microplantaciones de ixtle o el cultivo del frijol abono verde. Otros proyectos de corte doméstico para diversificar la dieta —como los estanques de peces, los proyectos de aves, árboles frutales y hortalizas— es probable que también sigan practicándose, siempre y cuando los resultados sean buenos.

A menos que los precios del café empiecen a subir pronto, es dudoso que la UPISL siga apoyando la renovación de los cafetales. Sin embargo, como el café es un cultivo de amplia tradición en Santa

³⁸ Sería también interesante estudiar si los montos Progresá tienen algún o múltiples impactos sobre el estado nutricional de los niños mayores de cinco años, incluyendo a los adolescentes y a los adultos.

Cecilia, la mayoría de los productores sigue cultivándolo en pequeñas cantidades, por lo menos para el autoconsumo.³⁹ De mantenerse las otras alternativas comerciales (además del ixtle, el frijol abono verde y últimamente la raíz del barbasco), la persistencia de las fuentes de trabajo asalariado en comunidades aledañas y los precios del café siguen a la baja, lo más probable es que el café se mantenga sólo como un cultivo marginal y secundario. Lo que queda por saber es si esta marginación del café en la economía campesina local es temporal y reversible en caso de que se registre un aumento del valor de este producto, o si constituye el principio del fin del café en la región.

A mediano o largo plazos, una de las acciones más exitosas de la UPISL será la de sedentarizar la milpa como la mejor forma de aumentar la productividad del maíz y preservar la poca selva primaria que todavía queda en la región. De acuerdo con información de finales del año 2000, la mitad de los hogares en Santa Cecilia habían dejado de usar el método tradicional de RTQ y de rotación de los acahuales para adoptar técnicas ecológicas de sedentarización (Methodus, 2000). Hay indicadores de que la productividad está aumentando, pero falta todavía mucho para poder llegar a la autosuficiencia en el abasto de maíz (Methodus, 2000).

¿Cuáles son los impactos de estos factores sobre la seguridad alimentaria y el estado nutricional familiar? Los resultados preliminares indican que la dependencia del café para la supervivencia económica—con sus consecuencias devastadoras en la seguridad alimentaria y la nutrición a principios de los años noventa— ha sido rebasada. Aun si muchos hogares siguen viviendo una situación de inseguridad alimentaria, en términos de autoabasto, son menos que hace unos pocos años. La agricultura se ha logrado diversificar un poco más, tanto para el autoconsumo como para el mercado.⁴⁰

³⁹ Efectivamente, a finales del año 2000, de 60 hogares, 50 todavía estaba cultivando algo de café en Santa Cecilia (Methodus, 2000).

⁴⁰ La influencia directa de la UPISL y las ONGs que la apoyan (como Methodus, S.C.) para mejorar la seguridad alimentaria local, ésta es aún difícil de medir, pero debe de reconocerse. No obstante, el modelo campesino de desarrollo sustentable que promueve la UPISL es tal vez de menor importancia para la supervivencia económica local que la disponibilidad del trabajo asalariado en comunidades aledañas o la presencia de dos alternativas agrícolas comerciales: el ixtle y el frijol abono verde. Son estas alternativas las que ofrecen los ingresos mínimos necesarios a los productores locales. Es importante mencionar que ambos productos fueron promovidos por la UPISL, la cual también provee facilidades de comercialización. A finales del año 2000, 30 hogares en Santa Cecilia estaban cultivando de manera intensiva

Después de tres años de que Progres/Oportunidades iniciara sus operaciones en Santa Cecilia y después de los cambios en estrategias productivas que acabo de delinear, las mediciones antropométricas de los menores de cinco años revelan que las prevalencias de desnutrición han disminuido 15 puntos porcentuales en el indicador talla/edad (véase el cuadro 7).

CUADRO 7
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN, MENORES DE CINCO AÑOS,
SANTA CECILIA 1998, 1999 Y 2001

	<i>Talla/edad</i> ⁴¹	<i>Peso/edad</i> ⁴²	<i>Peso/edad</i> ⁴³	<i>Peso/talla</i> ⁴⁴
1998 (N=45/43)	63.1	16.4	63.3	6.6
2001 (N=42)*	47.6	23.8	47.6	14.3

FUENTE: datos de campo de las mediciones antropométricas de junio de 1999.

* Datos proporcionados por el promotor de salud de la comunidad.

Este cambio positivo revierte una tendencia dramática en disminución de la estatura en la localidad desde 1988. De acuerdo con el indicador peso/edad, el porcentaje de niños sin desnutrición también ha aumentado de 36.7 por ciento en 1998 a 52.4 por ciento in 2001. Sin embargo, el porcentaje de los niños que presentan desnutrición moderada y severa, de acuerdo con este indicador, ha aumentado en más de siete puntos porcentuales.⁴⁵

o semiintensiva el ixtle, mientras que los demás lo seguían recolectando como planta silvestre.

⁴¹ Véase nota 16.

⁴² Véase nota 17.

⁴³ Véase nota 18.

⁴⁴ Véase nota 19.

⁴⁵ También ha aumentado el porcentaje de niños que sufren de bajo peso por la talla, aun si este aumento se deba, probablemente, a una mejor vigilancia en salud y en nutrición debido a la incorporación de estos niños en el programa Progres/Oportunidades. Seguramente una buena parte de las mediciones se hicieron por el auxiliar de salud en el momento en que las madres llevaron a sus hijos a consulta de salud por alguna enfermedad. Se sabe que, con la enfermedad, el peso puede bajar sustancialmente, incluso de manera temporal. Esto explicaría también, o por lo menos en parte, el aumento de la desnutrición moderada y severa de acuerdo con el indicador peso/edad.

A diferencia de Analco, es probable que estos resultados nutricionales en su mayoría positivos en Santa Cecilia sean un producto tanto de las cambiantes estrategias productivas para aumentar la seguridad alimentaria de los hogares como de las intervenciones de Progresía/Oportunidades; estas últimas dedicadas a promover de manera sinérgica el consumo alimenticio, la salud y la nutrición en los menores de cinco años. Otras investigaciones podrán determinar, a futuro, el peso específico de cada una de estas intervenciones.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Este breve recuento de la relación entre economía cafetalera, seguridad alimentaria y nutrición en pueblos indígena-campesinos de Oaxaca a lo largo de los últimos veinte años, nos da pie para algunas consideraciones finales. En primer lugar, es importante remarcar el profundo impacto que las políticas cambiantes del Estado mexicano han tenido en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de estas poblaciones. El apoyo a la producción y comercialización del café entre el campesinado en las décadas de los setenta y ochenta tuvo una influencia positiva sobre la calidad de vida local; influencia que se vio reflejada en una disminución notable de los índices de desnutrición entre la población infantil y adolescente. La importancia del Inmecafé residía en apoyar con dinero, en cantidades tal vez modestas, pero seguras, permitiendo satisfacer las necesidades básicas y contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria de la mayoría de los hogares.

Como es bien sabido, la política impulsada por el Inmecafé respondió a la última fase en que el gobierno mexicano siguió apoyando a la economía campesina como parte sustantiva del modelo de desarrollo agropecuario del país (Appendini, 1992; Bartra, 1995). A partir de la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) el rumbo económico registró un viraje importante hacia la adopción de un modelo de carácter neoliberal, pero cuyos efectos en el ámbito cafetalero se sintieron hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Durante el gobierno de este último, la economía campesina deja de ser incluida en la política de desarrollo agropecuario para pasar a ser objeto de una política social de carácter asistencial, en donde los campesinos empiezan a ser identificados como "pobres rurales", en lugar de actores económicos relevantes (Appendini, 1995:59).

Como hemos analizado, los resultados de este viraje en la política hacia el agro en poblaciones campesino-indígenas, como Analco y Santa Cecilia, han sido en su mayoría negativos por lo menos en lo que se refiere a la seguridad alimentaria y el estado nutricional. El impacto negativo del abandono por parte del Estado fue multiplicado en el caso del café por la simultánea y persistente caída del precio del aromático en el mercado internacional a partir de 1989.

En este contexto, las múltiples respuestas de los productores y sus familias a la crisis no lograron revertir estas tendencias negativas en el nivel alimenticio y nutricional en los años noventa, a pesar de que el proceso de repliegue hacia el autoabasto logró amortiguar, por lo menos, algunos de los estragos. La debacle actual de la producción cafetalera, a principios del nuevo milenio, está impactando la seguridad alimentaria y el estado nutricional de estos pueblos después de una ya prolongada década de crisis.

El impacto de la actual política social —cuyo elemento central es el programa Oportunidades— en revertir estas tendencias negativas en el estado de bienestar (sobre todo en el consumo de una dieta adecuada y en el estado nutricional correspondiente) es hasta ahora limitado y contradictorio.

Como hemos visto, en el caso de Analco, en donde las alternativas de ingresos por la vía de la comercialización de productos agrícolas más allá del café son limitadas, la intervención masiva de Oportunidades no logra hasta el momento mejorar las condiciones de dieta y nutricionales de la localidad. En este caso se está registrando, además, una creciente dependencia de muchos de los hogares hacia el programa para su supervivencia económica; lo cual implica una tremenda vulnerabilidad hacia el futuro si el programa llegara a desaparecer o a cambiar sus reglas de operación de tal forma que los subsidios disminuyeran.

En el caso de Santa Cecilia, donde la dependencia del café ya había disminuido y en donde se están dando algunas alternativas de generación de ingresos por medio de la comercialización de otros productos agrícolas o de la venta de la fuerza de trabajo a jornal o por la migración, la presencia del programa Oportunidades parece tener resultados más positivos sobre la disponibilidad de alimentos y el estado nutricional de los menores de cinco años. En esta localidad, además, la dependencia de los hogares hacia los subsidios Oportunidades es menor, lo cual implica un menor grado de vulnerabilidad de muchos hogares hacia el futuro.

La historia reciente de estos dos espacios locales revela la importancia de diseñar una política de desarrollo económico dirigida ha-

campesinado para garantizar su seguridad alimentaria y, por un estado nutricional adecuado de la población. Es evidente en las poblaciones bajo estudio una situación económico-productiva estable, con ingresos seguros y garantizados a los hogares, para un nivel mínimo de bienestar que se traduce en un mejor estado nutricional de la población.

Esta conclusión es particularmente relevante en la época actual, cuando los programas de intervención sectorial dirigidos a mejorar el estado nutricional de la población considerada de alto riesgo (niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes) se abocan casi exclusivamente a pesar, medir, dar papillas a los menores de cinco años que resultan bajos de peso y ofrecer —de manera obli- gatoria o no— pláticas educativas sobre alimentación y nutrición a las madres y papilla a las mujeres embarazadas y lactantes.

En el caso de los subsidios directos al consumo que aporta Oportunidades, habría que preguntarse hasta qué punto puedan revertir las deficiencias nutricionales considerando la magnitud de las pérdidas económico-productiva que viven estas poblaciones y las limitaciones que pueden enfrentar en cuanto a opciones de generar ingresos por otros medios (por ejemplo, por medio del trabajo asalariado a jornal o las remesas migratorias).

Partir de estos dos estudios de caso podemos observar que una mejora nutricional favorable en la niñez se logra sostener más fácilmente a través del tiempo en situaciones en donde se sigue manteniendo la generación de ingresos propios por medio de la actividad económico-productiva de los adultos. Si la generación de ingresos propios se ve seriamente limitada por crisis económicas y por la falta de una estructura de apoyo en el ámbito de la producción y comercialización de los productos generados en el campo, los mecanismos de intervención nutricional, como los planteados por Oportunidades, resultan fundamentalmente demasiado limitados en sus alcances para marcar una diferencia positiva.

Por último, es importante reiterar que la creciente dependencia de muchos hogares indígena-campesinos presenta hacia los subsidios en efectivo derivados de las becas educativas del programa Oportunidades, los colocan en una situación de profunda vulnerabilidad que puede tener repercusiones negativas a mediano y largo plazo en su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria familiar. En este sentido, se vuelve dudosa la pretensión del programa de poder mejorar sustancialmente el bienestar alimenticio y nutricional de los hogares rurales, sobre todo cuando se habla de un bienestar sostenido a través del tiempo.

APPEN

ARANI

BARTI

CÁRD

CORR

DE V

FOO

FOS

HE

INT

BIBLIOGRAFÍA

- PENDINI, Kirsten (1992), *De la milpa a los tortibonos*, México, El Colegio de México.
- _____ (1995), "La transformación de la vida económica del campo mexicano", en Jean-François Prud'Homme (coord.), *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, México, ILET/Plaza y Valdés, pp. 31-104.
- RANDA, Josefina (1992), "Camino andado, retos y propuestas: la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca", en *Cuadernos del Sur*, núm. 2, pp. 89-112.
- _____ (1996), "Las mujeres cafetaleras en Oaxaca", en *Cuadernos Agrarios*, núm. 13, pp. 129-151.
- BARTRA, Armando (1995), "Los nuevos campesinos", en Jean-François Prud'Homme (coord.), *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, México, ILET/Plaza y Valdés, pp. 169-219.
- CÁRDENAS, Jorge (2001), "The World Coffee Crisis", Opening Statement by the General Managers, National Federation of Coffee Growers of Colombia, at the World Coffee Conference, Londres, 17 de mayo de 2001.
- CORNIA, G.A., R. JOLLY y F. STEWARD (eds.) (1987), *Adjustment with a Human Face*, Oxford, Oxford University Press.
- DE WALT, Kathleen (1989), "Integrating Nutritional Concerns into Adaptive Small Farm Research Programs", en Della McMillan (ed.), *Anthropology and Food Policy in Africa and Latin America*, Atenas-Londres, The University of Georgia Press.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (1983), *World Food Security: A Reappraisal of the Concepts and Approaches*, reporte del director general, Roma, FAO.
- FOSTER, Phillip y Howard D. LEATHERS (1999), *The World Food Problem. Tackling the Causes of Undernutrition in the Third World*, Boulder-Londres, Lynne Rienner Publishers.
- HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis (1992), "Cafetaleros: del adelgazamiento estatal a la guerra de mercados", en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández Navarro (eds.), *Autonomía y nuevos sujetos sociales del desarrollo rural*, México, Siglo XXI/CEHAM.
- _____ (2001), "Café: la pobreza/la riqueza de la pobreza", documento manuscrito.
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK/UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT/WORLD BANK (2002), "Managing the Competitive Transition of the Coffee Sector in Central

- America", documento de discusión preparado para el Taller Regional "The Coffee Crisis and its Impact in Central America: Situation and Lines of Action", Antigua, Guatemala, 3-5 de abril.
- ARTÍNEZ, Aurora Cristina (1996), *El proceso cafetalero mexicano*, México, IIEC-UNAM.
- AXWELL, Simon (1990), "Food Security in Developing Countries: Issues and Options for the 1990s", en *IDS Bulletin*, núm. 21(3), pp. 2-13.
- ETHODUS, S.C. (2000), "Diagnóstico de Santa Cecilia de Madero", documento manuscrito, septiembre.
- MOGUEL, Julio y Josefina ARANDA (1992), "Los nuevos caminos en la construcción de la autonomía: la experiencia de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca", en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández (eds.), *Autonomía y nuevos sujetos sociales del desarrollo rural*, México, Siglo XXI/CEHAM.
- _____, Carlota BOTEY y Luis HERNÁNDEZ (eds.) (1992), *Autonomía y nuevos sujetos sociales del desarrollo rural*, México, Siglo XXI/CEHAM.
- ONTIEL, Rosendo (1995), "El conflicto agrario: génesis de la organización comunitaria en San Antonio Anasco", en *Cuadernos de Antropología*, serie I, vol. 5, México, UAM-I.
- OSLEY, W. Henry (1984), "Child Survival: Research and Policy", en *Population Development Review*, Suppl. núm. 10(3).
- _____, y Lincon CHEN (1984), "The Analytical Framework for the Study of Child Survival", en *Population Development Review*, Suppl. núm. 10(25).
- NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), *Growth Charts*, Atlanta, Center for Disease Control (CDC) <www.cdc.gov/nchs>.
- KFAM (2002), "Bitter Coffee: How the Poor are Paying for the Slump in Coffee Prices", documento disponible en la internet, abril.
- INSTRUP-ANDERSEN, Per (1981), *Nutritional Consequences of Agricultural Projects: Conceptual Relationships and Assessment Approaches*, Working Paper 456, Washington, The World Bank.
- _____, JIMÉNEZ, Gonzalo y Jorge HERNÁNDEZ (1998), *El café: crisis y organización*, Oaxaca, IIS-UABJO.
- _____, MONTE, Stefano (2002), *The Coffee Crisis*, Issue Paper, Copenhagen, Centre for Development Research.
- _____, OTTIER, Johan (1999), *Anthropology of Food. The Social Dynamics of Food Security*, Cambridge, Polity Press.

- PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (1997), "Diagnóstico comunitario Ejido Santa Cecilia, Mpio. San Juan Lalana Oaxaca", Programa de Desarrollo Regional Sustentable de la Chinantla, documento manuscrito, diciembre.
- SESIA, Paola (2002a), "Crisis cafetalera, familias y nutrición en la región de la Chinantla, Oaxaca", en *Cuadernos del Sur*, núm. 17, pp. 31-42.
- _____ (2002b), "Confronting Neoliberalism: Food Security and Nutrition Among Indigenous Coffee-Growers in Oaxaca, Mexico", tesis de doctorado en Antropología Sociocultural, Tucson, Universidad de Arizona.
- _____ (2003a), "Crisis cafetalera, familias y nutrición en la región de la Chinantla, Oaxaca", en *Memoria del III Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales*, Zacatecas, 3-6 de junio de 2001, CD.
- _____ (2003b), "The Repeasantization and Decommodification of Indigenous Agriculture Following Economic Restructuring and Free Trade: Coffee, Corn and Food Security in Oaxaca", en Elizabeth Ferry, Casey Walsh, Gabriela Soto, Paola Sesia y Sarah Hill, *The Social Relations of Mexican Commodities*, La Jolla, CA., Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD, pp. 81-126.
- _____ (2005), "Nutrición y género en la región cafetalera de la Chinantla, Oaxaca", en Paola Sesia y Emma Zapata (coords.), *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, tomo 5, Yolanda Massieu, Michelle Chauvet y Rodolfo García (coords. generales), *Los actores sociales frente al desarrollo rural*, Zacatecas, Praxis/AMER/Conacyt/Gobierno del Estado de Zacatecas, pp. 459-500.
- UNITED NATIONS ORGANIZATION (1975), *Report of the World Food Conference, Roma, Noviembre 5-15 1974*, Nueva York, UNO.
- VON BRAUN, Joachim, David HOTCHKISS y Maarten IMMINK (1989), *Nontraditional Export Crops in Guatemala: Effects on Production, Income and Nutrition*, Research Report núm. 73, Washington, IFPRI.

LAS UNIDADES DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN COMO MECANISMOS DE REGULACIÓN SOCIAL EN LOS ESPACIOS AGRÍCOLAS LOCALES

*Octavio González Santana**

RESUMEN

El pequeño riego ha adquirido gran importancia en los últimos años, pues cubre cerca de la mitad de la superficie de riego en el nivel nacional. A pesar de ello ha sido poco estudiado y tiene escasa definición institucional y legal en el sector hidroagrícola. En un contexto de recientes reformas estructurales y de reorientación del modelo de desarrollo nacional, las articulaciones sociales que a su alrededor se generan pueden dar muestra de un interesante ejercicio de regulación social en los espacios agrícolas locales y una respuesta al accionar del Estado. A partir de un estudio de caso se intentará dar cuenta de la importancia del pequeño riego en la organización socioespacial de los terrenos ejidales y de los puentes que se construyen a partir de su articulación con la mediación social del desarrollo y la acción política por el poder municipal. Dicho proceso ha impulsado el desarrollo local por la vía de la modernización hidroagrícola y la especialización productiva del espacio agrícola. Sin embargo, éste no ha sido homogéneo, pues si bien ha permitido una mayor cohesión social al interior de las unidades de riego y la mejoría económica, también ha provocado la desintegración productiva, territorial y social, a la vez que ha modificado las prácticas productivas, abonando a la diferenciación social.

* Profesor-investigador del Centro de Estudios de Geografía Humana de
El Colegio de Michoacán. Correo electrónico: <octavio@colmich.edu.mx>.

INTRODUCCIÓN¹

En la actualidad la geografía mexicana se encuentra en una etapa de expansión. Sin embargo, todavía hace falta mayor apertura hacia otros campos de investigación insuficientemente abordados por quienes practican las ciencias geográficas. El presente trabajo es un ejemplo de dicho esfuerzo.

Apoyado en un estudio geográfico realizado en el noroeste de Michoacán, este ensayo se centra en el análisis de la relevancia del pequeño riego en la organización socioespacial de los terrenos ejidales. El objetivo es subrayar la importancia de las unidades de pequeña irrigación como una forma de regulación social del manejo del espacio agrícola ejidal y sus articulaciones en el ámbito municipal.

La presente reflexión se ubica en el estudio de la redefinición del ejido como forma de organización socioespacial en el ámbito local, ante un contexto de recientes reformas estructurales del Estado y de la economía. Reformas que ocasionaron el abandono del pequeño riego por las instituciones gubernamentales y la apertura de la propiedad social al mercado de tierras y aguas, según se define en el Artículo 27 Constitucional y sus leyes reglamentarias en la materia.

Sin embargo, no es posible dar por sentado que, de facto, los espacios ejidales y su organización tiendan a erosionarse ante dichos cambios, sino más bien hay que considerar que existen respuestas de los regantes para contrarrestar tales efectos. En ello, la pequeña irrigación y la reestructuración productiva fruto de su regulación espacial han sido determinantes en ciertas partes del país. Aunque todavía muestran algunas contradicciones al respecto, sobre todo en relación con la autosuficiencia alimentaria en los ámbitos local y municipal. Por último, por medio de la pequeña irrigación también se puede encontrar la emergencia de mecanismos de mediación social, donde los actores locales han sabido vincular el proceso de modernización hidroagrícola con el control del poder político local.

EL CONTEXTO NACIONAL

Resulta paradójico que cuando se intenta indagar sobre problemáticas que acusan al pequeño riego en nuestro país, de inmediato sale a la luz la inminente indefinición institucional en que se encuentra,

¹ Gran parte de la información utilizada en este trabajo proviene de una investigación de tesis, realizada para optar al grado de maestría en estudios rurales en El Colegio de Michoacán, llevada a cabo durante los años de 1998 y 1999.

igual que la complejidad de la burocracia gubernamental donde inserta. Sin embargo, éste ocupa cerca de la mitad de la superficie regadío en el ámbito nacional y, además, es frecuente encontrarlo en aquellos espacios donde domina la agricultura campesina (Escobar, 1997:256).

Todo pareciera indicar que institucionalmente el pequeño riego acomoda tanto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como a la Comisión Nacional del Agua (CNA), ya que ni forma parte de las grandes obras de irrigación, ni pertenece del todo a la dinámica de los espacios donde se practica la agricultura de temporal. Lo cierto es que las unidades de riego, diversas en su composición y antigüedad,² son importantes en la organización de muchos espacios agrícolas del territorio nacional.

En el presente caso interesa esbozar el contexto de la introducción del pequeño regadío por el Estado a partir del periodo posrevolucionario, en especial durante el gobierno de Cárdenas. La idea de la puntualización parte del hecho de que en ese tiempo la promoción de la modernización de los espacios rurales en el nivel nacional pasaba en fuertes contenidos de cambio económico y social, todos dirigidos al naciente sector agrario. Uno de sus objetivos era satisfacer las necesidades de alimentos de una población urbana creciente, producto del proceso de industrialización del país, misma que nutrida constantemente por un ejército de reserva que arribaba al medio rural.

Parte del arsenal legal e institucional, que en ese entonces perfilaba hacia un fuerte centralismo estatal (Aboites, 1998:179), tenía su origen en la Constitución de 1857, la Ley de Vías de Comunicación de 1888 y la Ley de Aguas de 1910, cuyo objetivo central era la apropiación y control de los recursos hídricos. Ya en el periodo posrevolucionario se emitieron nuevas leyes como las de 1926, 1929, 1930 y 1936; asimismo se crearon instituciones como la Dirección de Irrigación, más tarde Departamento de Reglamentación e Irrigación (Carrasco, 1998:32), así como la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), y en conjunto fueron la plataforma de la política hidráulica impulsada durante el periodo cardenista.

En sus diversas etapas, el centralismo hidráulico se ha hecho manifiesto por medio de la emisión de leyes y reglamentos en materia hidráulica y agraria; el desarrollo de una política orientada a la creación

² Algunas unidades de riego datan de la época de la hacienda e inclusive periodo prehispánico (Martínez y Palerm, 1997:34)

de instituciones gubernamentales, con una burocracia especializada bajo cuyo encargo estaba la formulación de políticas públicas, indagar tanto sobre la existencia y naturaleza de los recursos hídricos, de la planeación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así como del control socioproductivo y político de una gran masa de productores agrícolas que integran los distritos de riego. Aunque no pudiera decirse lo mismo respecto a la irrigación en pequeña escala, con fuerte presencia campesina.

Para el proyecto cardenista el cambio técnico, en gran parte sustentado en la construcción de monumentales obras hidráulicas en el norte y centro del país, fue una de las grandes bases para impulsar lo que en su momento fue considerado como la "revolución verde" (Hewitt, 1978).

Con una inversión económica marginal (Durán, 1988) y paralelo a la realización de las obras de gran irrigación, en otras partes del país con gran potencial hidráulico se crearon unidades de pequeño riego a partir de la perforación de pozos profundos, de la construcción de obras que permitían aprovechar reducidos escurrimientos en beneficio de pequeños núcleos campesinos (Orive, 1970:80), así como de la rehabilitación de la infraestructura hidráulica que perteneciera a las antiguas haciendas. Más tarde, dicho proceso sería ampliado a otras partes del territorio nacional, sobre todo con base en programas como el Plan Benito Juárez y el Plan Nacional de Pequeña Irrigación (Escobedo, 1997:248).

No obstante la probada antigüedad de un buen número de unidades de riego, fue a partir de la expedición de Ley Federal de Aguas, en 1972, que el Estado consideró a la pequeña irrigación desde la perspectiva legal e institucional, pues se buscaba promover su desarrollo. Fue en ese sentido que se crearon las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (Urderal), figura jurídica a la que fueron integradas un buen número de unidades de pequeña irrigación. Cuando esto no sucedía por cualquier causa, simplemente se les consideraba como unidades de riego (Martínez y Palerm, 1997:25).

Hacia los años ochenta del siglo pasado, en plena etapa de recomposición institucional (Linck, 1996:87), a través de la todavía Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) la política hidráulica consideró estrategias basadas en el desarrollo rural integral, creando el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pronadri), que en buena medida vino a promover la construcción de obras de pequeño riego a partir de la perforación de pozos profundos para el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Fue así que el Pronadri se aplicó en muchas partes del país, no obstante la sensi-

dad o fragilidad ambiental de algunas áreas como la cuenca Ler-Chapala.³

Resulta prudente agregar que si bien el Estado ha sido el principal promotor y ejecutor de las obras relacionadas con las unidades de pequeña irrigación, prácticamente ha corrido a cuenta de los riegoes construir su propia organización y su administración autónoma.

En este contexto, a raíz de la apertura de la economía nacional al exterior iniciada en la década de 1980, empezaron a gestarse cambios orientados a aligerar el peso económico del Estado y su burocracia, mejor conocidos como el "ajuste estructural". Para el caso del ámbito rural, algunos de los cambios más notables fueron la desaparición del crédito en el sector agropecuario y el desmantelamiento de varios organismos encargados del extensionismo y la política hidráulica.

Bajo ese marco institucional y económico, el pequeño riego no se encontraba ajeno de sufrir de las desavenencias de la política gubernamental. Por lo que a raíz de las reformas neoliberales realizadas al artículo 27 Constitucional a principios de los años noventa del siglo XX, el gobierno salinista dejó al pequeño riego en una situación bastante vacía legal, ya que ni la Sagarpa ni la entonces recién creada CNA han asumido la responsabilidad de promover algún programa que realmente esté orientado a impulsar el desarrollo de este importante componente del sector hidroagrícola nacional.⁴

Ocurre lo mismo con el esquema general del modelo de desarrollo rural que se venía desarticulando desde años antes e imponiendo en su lugar una visión orientada hacia el exterior, ahora regulada por el mercado. En ese entorno, ante todo económico, se exponían debilidades de las ventajas comparativas que nada tenían que ver con el reforzamiento de la autosuficiencia alimentaria local ni con el cuidado de los recursos ambientales, sino con la reconversión productiva.

Para esta área geográfica, en especial del noroeste de Michoacán, se expedieron dos decretos de veda relacionados con la extracción de aguas subterráneas. El primero, conocido como "El Salitre", data del año de 1956 y el segundo fue expedido en el año de 1987 y comprende todo el estado de Michoacán.

Actualmente existen algunos intentos, promovidos a iniciativa del Banco Mundial, que buscan mejorar las condiciones tecnológicas, productivas y la organización de las unidades de riego. Tal es el caso del Proyecto de Modernización Integral de Riego (PMIR), impulsado en algunas partes del país con la participación de la CNA y la ahora Sagarpa. Aunque en el nivel nacional aún no se ve nada claro.

Tal parece que realmente se buscaba crear las condiciones que permitieran la apertura de la tierra y el agua a las libres fuerzas del mercado.⁵ Sin embargo, desde hace tiempo existe la tendencia a señalar que la tierra y el agua no debieran separarse, sobre todo en los casos de pequeñas comunidades de regantes, que por tradición así lo han manejado (Maass y Anderson, 1978).

Más allá de la polarización de posturas, la predicción generada sobre los efectos de los cambios estructurales más bien es una cuestión que debe analizarse de acuerdo con las especificidades locales (Zendejas, 1995:43). En este último punto se ubica la presente reflexión, ante todo en la organización socioespacial de aquellos ejidos de mediano temporal que han tenido acceso al pequeño riego desde hace poco más de 30 años.

La noción de pequeño riego

Se considera al pequeño riego diferenciado de la gran irrigación por su forma de organización autogestiva (Escobedo, 1997:243), y se le concibe a partir de su expresión socioespacial a través de las unidades de pequeña irrigación. Que para el caso de este análisis se constituyen por dos componentes: el primero, de tipo material, que tiene que ver principalmente con un espacio definido por un grupo de parcelas y/o propiedades, una fuente de abastecimiento de agua que puede ser: pozo profundo, presa, río, acueducto, etc., y su infraestructura de irrigación, y que no suman más de unos cuantos cientos de hectáreas.

En cambio, el componente social lleva a la forma de integración como son los usuarios que pueden ser desde una o varias comunidades de regantes, una estructura de autoridad formal e informal que con frecuencia es socialmente aceptada, sus funciones y, en general, la organización social de la unidad propiamente dicha.

Por lo tanto, a partir de ambos componentes —material y social— se puede hablar de la organización del espacio. Es decir, del “conjunto de objetos creados por el hombre y dispuestos sobre la superficie de la tierra” (Correa, 1986:55). Pero para comprender mejor el espacio resulta necesario analizarlo en su constante movimiento, por ello se incluye el factor histórico para identificar los procesos organizativos, así como los orígenes de situaciones de tensión y desacuerdo entre los regantes.

⁵ Véanse los artículos 28, 33 y 58 de la Ley de Aguas Nacionales y el 80 de la Ley Agraria.

Es de esta forma que a través de las unidades de pequeña irrigación se puede analizar la redefinición del ejido en cuanto a forma de organización socioespacial, así como las diversas maneras en que desde lo local se han enfrentado los embates de las reformas estructurales, cuyo ejemplo son las articulaciones entre la modernización hidroagrícola, la mediación en el desarrollo y la acción política.

¿La desintegración territorial del ejido?

En la fecha de realización de la investigación de la cual procede este ensayo, habían pasado siete años de la reforma al Artículo 27 Constitucional y al menos en el caso del noroeste de Michoacán no se sabía que se hubiese producido aún la desintegración del ejido por la venta de tierras, ni tampoco en la producción local se veían los esperados efectos de la inversión privada o la existencia de las asociaciones entre los ejidatarios y demás productores.

Respecto al aprovechamiento de las llamadas ventajas comparativas, las condiciones productivas no habían cambiado tanto, con excepción de algunos sectores privilegiados del norte del país, en gran parte especializados en cultivos comerciales de granos y hortalizas. En cambio y a modo de presunción, lo que sí se podía encontrar en algunas áreas definidas como de temporal eran ejidos que desde lo local intentaban construir su propio proceso de modernización agrícola y en ello el pequeño riego resultaba central.

Obviamente, el pequeño riego como eje articulador de la organización de los espacios ejidales tenía que reajustarse ante estos cambios. En muchos casos dichos ajustes estaban encaminados a fortalecer la reorientación productiva, con los consecuentes impactos sobre las actividades agrícolas y ganaderas.

EL ESTUDIO DE CASO

El ejido de Rincón Grande pertenece al municipio de Ecuandureo, en el estado de Michoacán, y se ubica al noroeste de dicho estado. Se encuentra en la porción media de la cuenca del valle de Ecuandureo, en el borde oeste del "Bajío seco michoacano". En consecuencia su topografía se caracteriza por la conformación de laderas y lomeríos, limitando considerablemente la práctica del regadío por gravedad.

Su suelo es de tipo vertisol pélico, cuyo origen proviene del desgaste de edificios basálticos adyacentes y tiene una textura fina, permitiendo una buena conservación de humedad en tiempo de lluvias y mayor seguridad para el desarrollo de una gran variedad de cultivos. De acuerdo con el segundo sistema de Thorwaite, con base en las categorías de humedad y temperatura, el clima local es subhúmedo seco y semicálido (González, s.f.:27-28). Aquí la precipitación no rebasa los 800 milímetros al año.

Al interior del ejido existen cinco unidades de pequeña irrigación constituidas a partir de cuatro pozos profundos y una represa, que en conjunto suman 80 por ciento de la superficie de cultivo actual. Lo anterior puede indicar ciertas ventajas que posibilitan buenas cosechas a lo largo del año.

Según los resultados obtenidos con la aplicación del programa Procede, el ejido de Rincón Grande cuenta con una superficie total de 932.6 hectáreas, de la cual 67 por ciento son parcelas, 26 por ciento tierras de uso común y el resto corresponde al asentamiento humano. En cuanto a los individuos con derechos sobre las tierras parceladas, existe un total de 125: 112 ejidatarios y 13 posesionarios.⁶ Quienes tienen una superficie individual que oscila entre media hectárea y más de 14, y en promedio no suman más de cinco hectáreas.

La defensa del territorio es característica entre los rinconenses, una de sus principales manifestaciones se puede constatar porque no permiten que quienes no hayan nacido o no radiquen en el poblado, puedan comprar tierras, mucho menos ser miembros del ejido. En ese sentido, para que alguien pueda radicar en el poblado de Rincón Grande, el único mecanismo posible es contraer matrimonio con algún o alguna rinconense.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000, en relación con la población total por localidad en el municipio de Ecuandureo, el poblado de Rincón Grande es el cuarto en importancia. Cuenta con un total de 1 058 habitantes, de los cuales 435 son hombres y 623 mujeres, una diferencia entre sexos que puede ser indicio de un fenómeno migratorio de dimensiones considerables. Con base en las entrevistas realizadas a los productores locales, se pudo verificar que a últimas fechas el destino de los emigrantes se ha

⁶ Según la ley agraria, posesionario es aquel individuo que sin ser ejidatario —o contar con la membresía ejidal— tiene los mismos derechos sobre la tierra que cualquier miembro del ejido o ejidatario (rentar, enajenar, etc.), pero no participa en muchas acciones de carácter legal del núcleo agrario, como por ejemplo, la asamblea ejidal.

entrado hacia el estado de Tennessee, en Estados Unidos, sobre todo en la construcción —de campos de golf— y los servicios.

Entre las principales actividades económicas del ejido se encuentra la agricultura⁷ de temporal con sorgo, maíz, frijol y hortalizas, y el riego con el trigo, el garbanzo y las hortalizas. En menor escala está la ganadería bovina y caprina de doble propósito (CADER-Zamora, 1998).

Con excepción del maíz, sorgo, frijol y en menor medida del garbanzo —que parcialmente son para el autoconsumo en las actividades ganaderas—, la mayoría de la producción se destina al mercado regional de granos e insumos industriales en las ciudades de La Piedad y Numarán. Por su parte, las hortalizas salen al ámbito nacional a través de los intermediarios y “coyotes”, y se comercializan en las centrales de abastos de Puebla y San Luis Potosí, entre otras. Por orden de importancia económica, en las actividades ganaderas encontramos la cría de bovinos de doble propósito, la cría de cabras y la engorda de cerdos.

Respecto a las modalidades de financiamiento, las actividades agrícolas resultan más favorecidas que las ganaderas. De los productores del ejido sólo unos pocos cuentan con crédito de la banca de desarrollo y en menor número de la banca privada. Por lo tanto, en su gran mayoría se sustentan en las remesas que les envían sus familiares emigrantes, motivo por el que los prestamistas privados son los menos solicitados.

El porcentaje de hombres asalariados es muy bajo, porque muchos de ellos emigran y se emplean en Estados Unidos. Las remesas que éstos envían a sus familiares sirven para múltiples propósitos, entre los que se puede destacar la alimentación, el vestido, la construcción de casas-habitación, la salud y la agricultura. En el caso de las mujeres —en su mayoría solteras— la situación es diferente, ya que éstas son contratadas por las agroindustrias procesadoras de frutas y verduras de la ciudad de Zamora.

En el desarrollo del presente trabajo se hará mayor énfasis sobre el pequeño riego, dado que se considera que es a partir de éste como se regula la organización del espacio agrícola rinconense.

Dada la poca importancia que hasta ahora se le ha dado al pequeño riego en el ámbito nacional, el estudio de caso del ejido de Rincón

⁷ Se parte de la idea de considerar a la agricultura como aquella actividad productiva ubicada en los espacios rurales, la cual integra tanto a las actividades agrícolas como las ganaderas, es decir, sin disociar al cultivo y al ganado, ya que aún en estas fechas existe una fuerte complementariedad entre ambas actividades.

Grande puede mostrar que el binomio remesas-pequeña irrigación resulta fundamental para la organización socioespacial local.

Asimismo, hay que señalar que en el proceso de desarrollo local la mediación social, realizada tan hábilmente por diversos ayuntamientos de Ecuandureo, ha contribuido de manera considerable a la articulación entre modernización hidroagrícola y el control del poder político en el ámbito municipal. Es decir, el proyecto de desarrollo de Rincón Grande, al igual que el de otros ejidos al interior del municipio, se ha entretelado con el poder político, por lo que desde hace varios periodos éstos, vía las urnas, han tomado en sus manos la dirección del municipio.

La emergencia del pequeño riego

En el municipio de Ecuandureo el pequeño riego fue introducido por el Estado entre los años setenta y ochenta del siglo pasado. Aunque del proceso histórico derivado del reparto agrario emergieron varias disputas por el agua para regadío entre los ejidos de Rincón Grande, Quiringüicharo y La Noria.

Hacia finales de los años treinta del siglo pasado, el ejido de Rincón Grande recibió la "accesión de aguas"⁸ de la presa de La Noria y del manantial del Salto, no obstante la emergencia del conflicto les impidió regar sus tierras. La razón fundamental estribó en que los ejidos de La Noria y Quiringüicharo jamás se lo permitieron. Pues no obstante la intervención de las instituciones del sector agrario e hidráulico, que infructuosamente intentaron reglamentar el uso del agua para regadío, nunca obtuvieron agua de dichas fuentes.

Ante esa circunstancia, por varios años la organización del espacio agrícola ejidal siguió prácticamente igual que los años anteriores, aunque ahora bajo la organización de los productores ejidatarios; quienes por muchos años se vieron limitados por los espacios de decisión colectiva. Bajo el sistema productivo de "año y vez", que tenía un ciclo de dos años de duración, había un aprovechamiento integral del potencial productivo que se expresaba a través la rotación de la tierra entre el maíz, el garbanzo y la ganadería. El cual después de mu-

⁸ Por "accesión de aguas" se entiende aquel procedimiento administrativo que concluía con un ordenamiento gubernamental y en donde se les entregaba, al menos en el papel, cierto volumen de agua a los núcleos agrarios que así lo solicitaran a partir de una fuente cercana susceptible de aprovechar. Véase el Artículo 27 Constitucional de 1917 en materia de tierras y aguas, el Código Agrario de 1934 y el reglamento de Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1936.

chos años se había adaptado a las condiciones locales, pues no requería de insumos externos.

Al paso de los años, con la llegada del cambio técnico durante el gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970), el sistema de cultivo y el manejo del espacio agrícola se reorientó con la introducción del modelo industrial que implicaba el uso de paquetes tecnológicos y maquinaria agrícola inducidos por medio del crédito agrícola. La nueva lógica productiva ya no requería tanto de los insumos locales, pues lo que ahora se planteaba era mayor intensidad en el uso del suelo, provocando la especialización espacial en monocultivos mediante la utilización de semillas híbridas de sorgo y maíz, así como de insumos industriales de origen externo.

Poco tiempo después, la producción y productividad aumentaron, aunque en detrimento de las sinergias que había entre las actividades agrícolas y ganaderas, así como del manejo del espacio que existió por muchos años. Es decir, la simbiosis que hasta ese tiempo había entre la milpa y el hato, que prácticamente ocupaba de manera integral los mismos espacios, cedió su lugar a la modernización productiva.

Con excepción de la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 (Aboites, 1998:179), después de la década de los años cincuenta del siglo pasado no se hicieron modificaciones sustanciales al marco legal hidráulico, pero desde la perspectiva institucional, durante la década de los sesenta se instrumentaron dos programas de suma importancia para la pequeña irrigación: el Plan Benito Juárez y el Plan Nacional de Pequeña Irrigación (Escobedo, 1997).

Fue así que a finales de los sesenta y principios de los setenta, bajo los auspicios del Plan Nacional de Pequeña Irrigación se construyó la presa José Antonio Torres en lo que fuera la antigua presa de La Providencia, que había quedado inutilizada años atrás. Con una capacidad inicial de dos millones de metros cúbicos, dicha presa fue diseñada para regar una superficie aproximada de 260 hectáreas, beneficiando a 76 usuarios, en su mayoría del ejido de Rincón Grande.

En esos mismos años, en la parte baja de la cuenca del valle de Ecuandureo se inició la perforación de los primeros pozos profundos para uso agrícola. Pero no fue sino hasta los años ochenta, que a través del Pronadri se realizaron alrededor de 100 perforaciones, la gran mayoría en terrenos ejidales.

En el caso del municipio de Ecuandureo, el Pronadri fue un programa que hábilmente supo monopolizar el ayuntamiento. Prácticamente desde su inicio se convirtió en mediador del desarrollo

hidroagrícola. Lo que a su vez le serviría de bandera política para la suma de adeptos y se traduciría en mayor cantidad de votos en las elecciones estatales y federales para el Partido Revolucionario Institucional.

En el caso del ejido Rincón Grande, para el año de 1987 empezaron a funcionar tres de sus cuatro pozos y el último arrancó en 1995. Con la perforación y puesta en funcionamiento de estos pozos, nominalmente se crearon cuatro unidades de riego para 76 ejidatarios, por lo que de esta forma se incorporaron al riego 260 hectáreas, adicionales a las 220 existentes. Pese a ello, la presa José Antonio Torres muy pronto vio reducida su capacidad de regadío a causa de los malos temporales y a su rápido azolve. Actualmente no cubre más de 65 por ciento de su superficie original.

Para los pozos profundos la suerte no sería tan diferente, ya que el potencial de riego de tres de ellos sería muy reducido desde el principio, que en promedio era del 32 por ciento de su capacidad total. Sin embargo, la situación se pudo mejorar a raíz de la introducción de modernos sistemas de irrigación por aspersión y de compuertas tipo californiano.

No obstante las deficiencias descritas, a raíz de la introducción de pequeño riego en el ejido de Rincón Grande se intensificaría, aún más, el uso de los espacios en las áreas de regadío. En muchos casos las parcelas fueron reacondicionadas, pues se construyeron caminos para realizar el desempiedre. Sin embargo, no sucedió lo mismo con otras áreas que empezaron a quedar en la periferia debido a la pérdida del interés de los miembros del ejido, derivado en gran parte por la falta de agua y lo difícil que resultaba efectuar las labores mecanizadas.

En ese sentido, los impactos del pequeño riego sobre la organización socioespacial local se empezaron a evidenciar en varios aspectos, a saber: la organización de trabajo individual y colectivo cambiaría; la introducción de cultivos de tipo especulativo, como las hortalizas, provocaría la subordinación de los espacios dedicados a los granos, impulsando el alejamiento entre las actividades agrícolas y ganaderas. Lo que a la postre se traduciría en el cambio del esquema en la adopción de decisiones y la disminución de la autosuficiencia alimentaria. Un proceso que también impactó al resto del municipio de Ecuandureo, aunque de forma diferenciada entre los regímenes de propiedad así como entre los propios ejidos, donde el agua de regadío sería el punto de referencia.

En este proceso la participación del Estado fue el detonante de mayor importancia para el desarrollo hidroagrícola local, pero un

elemento que está presente en la articulación espacial del pequeño riego son las remesas que envían los emigrantes locales que trabajan en Estados Unidos. Pues a partir de ellas fue como localmente capturaron el capital necesario para sufragar los gastos derivados de las gestiones realizadas para la obtención de los permisos y la perforación de pozos profundos. Algo similar ocurriría con el equipamiento y la introducción de modernos sistemas de irrigación en cuatro de las cinco unidades de riego.

Cuando no había riego en el ejido de Rincón Grande, fueron los granos los que dominaron en el paisaje, primeramente el verde del maíz, el frijol y la calabaza, y después el rojo del sorgo. A raíz de la introducción del pequeño riego los campos se empezaron a teñir de verde oscuro entre los meses de diciembre y abril por la presencia de las siembras de trigo, y de dorado entre abril y mayo debido al color que adquieren sus espigas.

En principio, los cultivos dominantes en las unidades de pequeño riego fueron el maíz y el trigo, pero muy pronto las estrategias de las unidades de producción estarían limitadas por la organización socioespacial de la comunidad de regantes y el ejido.

Dado que el agua de regadío no ha sido abundante en Rincón Grande y que ésta se requiere no sólo para el riego en el ciclo otoño-invierno, sino que también se extendió a los cultivos adelantados o punteados y para el auxilio de las siembras en los casos de sequía, resultaba muy necesaria la flexibilidad de los regantes para adoptar acuerdos, pues en muchos casos las tensiones podían aflorar, sobre todo en las épocas de mayor escasez. Sus impactos se podían observar más claramente en la unidad de la presa José Antonio Torres.

No pasó mucho tiempo desde la llegada del riego al ejido cuando empezaran a arribar productores de hortalizas de las ciudades de La Piedad e Irapuato, quienes empezaron con la renta de unas cuantas parcelas para el cultivo del jitomate y en algunos casos llegaron a acuerdos de aparcería con productores locales. El hecho de ser tierras de reciente integración al regadío las hacía bastante apetecibles para lograr excelentes cosechas de jitomate, un cultivo tan sensible a la falta de agua.

No obstante que en ese momento el jitomate era un cultivo relativamente novedoso, en el ejido había algunos productores que ya conocían de sus labores producto del conocimiento adquirido en la familia. Aunque en este caso no eran tan sofisticadas, ya que se basaban en la siembra de semillas y no en la plantación de almácigos como lo hacían los recién llegados.

Una vez que los productores locales lograron aprender las nuevas técnicas de cultivo del jitomate, con el apoyo de las remesas —pues no contaban con crédito formal—, se iniciaron en una difícil y riesgosa empresa: la horticultura. No transcurrieron muchos años para que los espacios cultivados de jitomate se incrementaran de manera sustancial, lo que implicaba mayor utilización de agua y obligaba a los regantes, sobre todo de la unidad de la presa, a pactar acuerdos para su distribución, ya que el conflicto estaba latente.

Cuando se presentaron los conflictos, generalmente se resolvían en el ámbito local y las resoluciones eran socialmente aceptadas. Pero cuando éstos surgían a causa de las fuertes sequías durante el temporal de lluvias, la estructura de la autoridad fue rebasada en varias ocasiones. Por tal razón se vieron en la imperiosa necesidad de acudir a otras instancias fuera del ejido: la CNA en la ciudad de Zamora.

La introducción de hortalizas también tendría implicaciones en la organización socioespacial del terreno ejidal, ya que los cultivos tradicionales de la región como el maíz y el frijol, de nueva cuenta serían relegados hacia áreas marginales que no tenían riego y que dificultaban la mecanización de las labores agrícolas. A la larga, uno de los mayores impactos sería observado en la autosuficiencia alimentaria, ya que los granos básicos, especialmente el maíz de autoconsumo, se confinarían a terrenos con menor potencial productivo; tal fue el caso de los pequeños sembradíos ubicados en las tierras de orientación ganadera, conocidos localmente como "ecuaros".

Bajo esta nueva lógica productiva, las actividades ganaderas siguieron una suerte similar, pues no tardó mucho tiempo para que a los ganaderos se les impidiera el acceso a las áreas que ocupaban las unidades de riego, orillándolos a utilizar sólo los espacios de común aprovechamiento y algunas parcelas sin regadío, ocasionando su desarticulación espacial. Además, como muchos productores que contaban con algunas cabezas de ganado se internaron en la horticultura, el manejo del tiempo y la organización del trabajo se harían más complejos por falta de brazos en la familia a causa de la emigración, restándoles posibilidades para atender sus hatos. Como estrategia, muchos decidieron estabularlo prácticamente todo el año, una opción que les requeriría utilizar parte de la cosecha de sorgo como alimento.

Más tarde, debido tal vez a la inexperiencia y la falta de asesoría especializada, no pudieron controlar los efectos ocasionados por la emergencia de fuertes plagas ocurrida en la segunda mitad de los ochenta del siglo pasado, producto del uso continuo de los espa-

ios de regadío para el jitomate, sobre todo en el ciclo de otoño-invierno. Para la mayoría de estos regantes, lo anterior significaba cambiar la estrategia de la organización socioespacial, obligándolos a buscar en la rotación de cultivos una alternativa más viable para el cultivo del jitomate, pero que en este caso se reducía únicamente al temporal de lluvias.

Esta época también coincidiría con el retiro del extensionismo y del sistema de financiamiento del Banrural, en 1989. Sin embargo, como en ese tiempo el jitomate era financiado principalmente con remesas, lo que en realidad sucedió fue que los dólares vinieron a sustituir el financiamiento formal en los cultivos restantes, convirtiéndose, al paso del tiempo, en un instrumento muy eficaz. No sería hasta principios de los años noventa que empezaría a operar de nuevo el Banrural, quien ahora incluía financiamiento para las hortalizas, aunque esta vez muy pocos productores obtuvieron crédito.⁹ Por otro lado, el empleo de las remesas en la producción seguiría en aumento y terminaría por financiar prácticamente toda la agricultura rinconense.

Por su parte, el desmantelamiento de la Conasupo poco afectaría la comercialización de granos que se producía localmente, pues la bodega más cercana se ubicaba a 40 kilómetros de distancia, en el municipio de Chavinda, lo que incrementaba fuertemente los costos de producción e inhibía el transporte de la cosecha de granos. Sin embargo, la desaparición del sistema de precios de garantía sí pondría en desventaja a los rinconenses respecto a los acaparadores de granos de la región, localizados principalmente en La Piedad, importante centro porcícola del Occidente del país.

Poco tiempo después, a principio de los años noventa del siglo pasado, algunos productores empezaron a introducir otro tipo de hortalizas, tales como el chile y el tomate de hoja, más resistentes a las plagas, pero que utilizaban el mismo tipo de organización socioespacial. En consecuencia, la práctica de la horticultura requeriría de mayor cantidad de parcelas para completar el ciclo de rotación, que podía ir de dos a tres años. Para ello necesitaban recurrir a prácticas de renta y aparcería que se circunscribirían a las unidades de riego, por lo que bajo este esquema se subordinaba a otros espacios y los cultivos de granos, bajo una lógica diferente a la que se venía practicando en el terreno rinconense.

⁹ Del total de productores rinconenses que llegaron a operar con el Banrural, a partir de los años noventa sólo lo haría un pequeño grupo de doce, un poco más del diez por ciento respecto del total.

En ese orden de ideas, los espacios hasta ese momento destinados a la agricultura de temporal de lluvias y la ganadería, serían objeto de un proceso de desarticulación que terminó por alejar, aún más, las prácticas agrícolas de las ganaderas, sobre todo en cuanto a la organización socioespacial del ejido en su conjunto. Asimismo, marginó a los productores de los estratos más bajos, como los ecuareros, algunos ganaderos, así como a un considerable número de productores que ya no podían participar en la carrera productiva, quienes se vieron forzados a arrendar sus tierras.

La importancia de la pequeña irrigación en el espacio local

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, resulta evidente que las unidades de pequeña irrigación han resultado vitales en el proceso de organización socioespacial del ejido de Rincón Grande. Adicionalmente éstas han implicado una serie de contradicciones que afectan, de forma diferenciada, los niveles de organización individual y colectiva. Dicho proceso se expresa en el incremento de la cohesión social aunque también provoca la desarticulación de los espacios de menor potencial agrícola, fruto de la reorientación productiva.

En lo local, la organización del trabajo, las estrategias de los productores y el manejo de los espacios productivos de una u otra forma son condicionados por el acceso al agua, donde las unidades de pequeño riego son un ámbito importante en la adopción de decisiones que articulan al espacio agrícola local.

La reorientación productiva iniciada a finales de los años setenta del siglo pasado, con la sustitución del maíz y su simbiosis con la ganadería por cultivos de tipo forrajero —como el sorgo—, en gran parte estableció las bases del proceso de modernización ocurrido en Rincón Grande. Sin embargo, la introducción de las hortalizas ocurrida años después no hubiera sido posible sin la entrada del pequeño riego. Un hecho que a la larga amplió el abanico de posibilidades en la organización especializada de los espacios productivos.

En la actualidad, el uso del agua para riego en el ejido de Rincón Grande no sólo se limita al ciclo de otoño-invierno, sino que también fortalece y asegura las cosechas del temporal de lluvias. El caso más claro se puede observar en el sorgo y las hortalizas. En estas últimas, debido a que el mercado en el ámbito nacional resulta muy aleatorio para las pequeñas zonas productoras de hortalizas, se han establecido tres estrategias diferentes con el objetivo de colocar la cosecha de forma segura en el mercado.

La primera de ellas consiste en plantar en forma adelantada o "de punteo" los almácigos en el mes de mayo, ulterior a la aplicación de un riego. Posteriormente, en un plazo de quince días o más, se pueden dar uno o dos riegos ligeros hasta la llegada del temporal de lluvias. El objetivo es obtener la cosecha a partir del mes de agosto, antes que en otras zonas de mayor producción, como en el Valle de Arista, San Luis Potosí.

En otros casos, al igual que la mayoría de los demás cultivos, el ciclo productivo inicia con la llegada de las primeras lluvias, pero las hortalizas se deben plantar antes de que la tierra se humedezca demasiado. Bajo los cuidados derivados de la humedad de la tierra se realizan las demás labores, como la prevención y el combate de plagas, iniciando la cosecha en el mes de septiembre.

Con la intención de ofertar la cosecha antes de la llegada de las primeras heladas, algunos productores se arriesgan e inician el ciclo productivo en el mes de agosto. Como las lluvias normalmente terminan en septiembre, con el agua de las unidades de riego se garantiza el desarrollo del cultivo hasta su cosecha, que se inicia en el mes de noviembre.

Sin embargo, la mayor seguridad que ofrecen las unidades de pequeña irrigación tiene lugar en los periodos de sequía, así como en lo que localmente se denomina como "veranos", que no es otra cosa que la falta de lluvias. Aquí el periodo más delicado es la etapa de floración, ya que las posibilidades para la emergencia de tensiones y conflictos se incrementan, pues para utilizar el agua de la presa, el orden y la distancia en que se encuentren las parcelas de los canales principales también influye.

En vista de ello, la necesidad de flexibilidad para la toma de acuerdos es importante, ya que los regantes con derecho a utilizar el agua para el punteo son únicamente aquellos que no utilizaron su dotación de agua que les correspondía en el ciclo de otoño-invierno. La razón principal se debe a que sembraron garbanzo —que necesita un solo riego— o porque no sembraron toda la parcela.

En los casos de la aplicación de los llamados riegos de auxilio, por cada uno que se aplique se penaliza con 25 por ciento del agua a que se tendrá derecho en el siguiente ciclo, en ese sentido el límite son cuatro. Pese a ello, si el temporal de lluvias se recupera y la presa llega a alcanzar su nivel normal, entonces la penalización se elimina.

En el ciclo de otoño-invierno, según el volumen de agua almacenado en la presa —hasta el 65 por ciento— o el gasto de cada pozo —entre 25 y 85 por ciento— la unidad de medida promedio son cuatro riegos para el cultivo del trigo. En cambio, si son hortalizas que

ecesitan de más agua, la superficie de la presa se reduce hasta 40 por ciento, en el caso que todos los regantes siembren sus parcelas. De no suceder así, en la unidad de la presa existe la posibilidad de comprar agua a otro regante.

Las anteriores prácticas implican un complejo proceso de toma de acuerdos que involucran varios niveles o espacios de decisión, entre los que se puede señalar a las unidades de producción, la comunidad de regantes y el ejido. En ese contexto, las estrategias individuales son limitadas por las decisiones colectivas, sólo en los casos de compra-venta de agua existe la posibilidad de eludirlas, pero para ello se requiere llegar a la negociación.

De manera sintética, a continuación se señalan algunos aspectos relevantes de la adopción de decisiones, que son una expresión de la organización socioespacial local, misma que no sólo involucra a las unidades de riego sino a la totalidad del ejido. Se puntualizará en algunos aspectos como igualdad, equidad, flexibilidad y solución del conflicto. Por su grado de complejidad, se hará mayor énfasis en la unidad de la presa, la cual tiene una estructura de autoridad compuesta por sus representantes (presidente, secretario y tesorero) y el canalero, apoyados por el presidente del comisariado ejidal y auxiliados por la secretaria del ejido.

Es en ese sentido que las primeras actividades que se realizan en el área de regadío son acordadas en una asamblea, la cual se efectúa antes de la cosecha del temporal de lluvias y en ella participan todos los regantes. La toma de acuerdos es por mayoría y cada miembro tiene el mismo derecho a votar, lo que permite condiciones de equidad. Entre las principales actividades que se acuerdan está la limpieza de canales y desagües principales y secundarios, así como la revisión y retiro de maleza de la cortina de la presa. En los pozos sólo se da mantenimiento al equipo exterior, que es mínimo, ya que las bombas son sumergibles.

Algunas actividades o faenas son de carácter obligatorio y colectivo, como la limpieza de los canales principales y la cortina de la presa, en cambio, son individuales la limpieza de los canales secundarios para cada regante, según el tramo que éste recorra en su parcela. El incumplimiento de dichas actividades tendrá una sanción, en el primer caso es una multa y en el segundo se retendrá el riego hasta que cumpla la actividad.

Posteriormente, en el mes de noviembre el técnico de la ahora Sagarpa —una de las pocas veces que es invitado al ejido—, en compañía de los representantes de la unidad de riego y el presidente del comisariado ejidal procede a realizar la estimación del volumen de

agua almacenado en la presa, de ahí se define la superficie a regar. Este acto que pareciera ser de rutina reviste de gran interés e importancia simbólica para los regantes, pues del consenso logrado con el funcionario en la estimación del volumen de agua almacenado dependerá la superficie a sembrar de regadío en el ciclo que está por iniciar.

Ese mismo día se lleva a cabo una asamblea de usuarios de la presa, es justamente ahí donde el técnico de la Sagarpa y los representantes de la unidad informan de manera general la superficie autorizada —negociada— que se podrá irrigar. Inmediatamente después cada usuario manifiesta las clases de cultivo que pretende efectuar que, por lo general es trigo y, en función del agua requerida por cada uno de éstos, se determina superficie de tierra que puede cultivarse.

En teoría todos los regantes tienen los mismos derechos sobre el agua, pues el volumen se reparte de forma homogénea, por lo que las condiciones de igualdad se respetan y todos son tratados de forma similar, siendo el cultivo del trigo el punto de referencia para su distribución.

Además, se establece la programación del riego por parcela y se acuerda el costo del riego por hectárea, cuyo pago debe realizarse por adelantado, ya que no se permite regar sin haberlo cubierto. La secretaria del ejido lleva el control del costo del agua, el tipo de cultivo y la superficie que trabajará cada regante y el canalero ejecuta los acuerdos de asamblea entregando o reteniendo el agua en el canal de cada parcela, según sea el caso.

Por otra parte, la asamblea resulta un espacio adecuado para que los regantes que no deseen sembrar, arrienden sus parcelas y vendan su parte proporcional de agua. Aunque esta práctica no es bien vista por el resto de los regantes, pues la posibilidad de obtener un poco más de agua en conjunto se diluye. Para el caso de los pozos, el pago es por el tiempo en que se use el equipo y no se acepta la venta de agua, lo que permite incrementar la superficie por cada regante.

Una vez establecidas las formalidades para el ciclo de cada unidad, mes con mes se lleva a cabo una asamblea y en caso de suscitarse algún problema, se hará en un periodo menor. Como la aparición del estrés por sequía en el temporal de lluvias, también será necesario convocar a una asamblea para llegar a acuerdos, que requiere de gran flexibilidad dado lo imperioso de la aplicación del riego a los cultivos en riesgo.

La presencia del conflicto ocurre por diversas causas, entre ellas está la realización de labores de mantenimiento y la aplicación del riego, al igual que las tensiones que surgen cuando deja de llover. En

El caso de las primeras, existen dos tipos de sanciones: las económicas y las sociales.

Las sanciones económicas se relacionan principalmente con infracciones derivadas del desperdicio del agua y de su robo, es decir, cuando no se respeta el calendario de riego. En cambio, las sociales se aplican cuando se incumple la superficie de siembra acordada, incluyendo el agua comprada. En estos casos se penaliza reduciendo la superficie hasta lo definido originalmente, bajo la amenaza de perder el riego para todo el ciclo en caso de negarse a cumplir. Cuando se genera alguna disputa entre regantes, existe la negociación bajo la amenaza de suspender el agua sino muestran flexibilidad para conciliar intereses.

Con la ocurrencia de sequías en el temporal de lluvias se pone a prueba la estabilidad social de la presa, ya que se necesita mucha flexibilidad de los regantes, sobre todo de los dueños de parcelas que se ubican al final del canal principal. Esto ocurre sobre todo cuando la falta de humedad es grave, por lo que la estructura de autoridad es rebasada y la tensión aumenta de forma considerable.

De esta forma, la incidencia de la pequeña irrigación en los diversos niveles de toma de decisiones, tanto individuales como colectivos, impacta la organización socioespacial. A ello habría que agregar el abanico de posibilidades que se abren para los regantes en la transferencia de tecnología, con la participación del ayuntamiento en la mediación del desarrollo, el juego político y la lucha por el poder local.

Entre la modernización hidroagrícola, la mediación social y la participación política en el ámbito municipal ecuatoriano

Es indudable que el agua, en cuanto que es un bien escaso, territorialmente ha condicionado las civilizaciones a lo largo de la historia. Como recurso ha permeado en las acciones cotidianas, en las relaciones individuales, colectivas, privadas, públicas y hasta institucionales. Su control ha sido motivo de conflictos, arreglos y mediaciones y, además, directa o indirectamente, forma parte de cualquier proyecto de desarrollo local.

Bajo ese contexto es en el ámbito local donde se puede dar cuenta de la importancia del agua como elemento para la modernización hidroagrícola, de mediación social y de acción política. El resultado de la articulación entre dichos elementos y la forma en que ha sucedido para el caso de terrenos ejidales, como el de Rincón Grande, es

sin duda aleccionador en el conocimiento de los diversos mecanismos de regulación social presentes en los espacios agrícolas locales y municipales.

Con la introducción de la pequeña irrigación en el municipio de Ecuandureo se dio un fuerte viraje a las formas de organización socioespacial de los terrenos ejidales. Para el ayuntamiento de Ecuandureo la promoción de la modernización hidroagrícola representó una buena oportunidad para la creación de nuevas formas de mediación social y de control político, mismas que en un futuro inmediato aseguraron al PRI su permanencia en el poder. A su vez, los grupos locales observaron que el acceso al control político del ayuntamiento reforzaba sus propios proyectos de desarrollo, los cuales se sustentaban en la pequeña irrigación y en la innovación tecnológica.

De esta manera, las unidades de pequeño riego resultaron cruciales en las formas de mediación social, las cuales articulaban los proyectos de desarrollo y las acciones políticas emprendidas, tanto en el ámbito municipal como en el nivel de los terrenos ejidales. En el discurso político esto se expresó mediante señalamientos que definían a Ecuandureo como un municipio eminentemente agrícola, donde la introducción de tecnología para hacer más eficiente el uso del agua de regadío y generar su ahorro, de manera legítima, les permitía aspirar a seguir promoviendo el desarrollo de la pequeña irrigación en los espacios donde aún no había llegado.

En dicho proceso resultó importante la creación de mecanismos de negociación con funcionarios clave en la toma de decisiones para la aprobación de solicitudes de perforación de pozos profundos e hicieran posible las diversas gestiones orientadas a la transferencia de tecnología. Por tal motivo, desde el punto de vista institucional, en el ayuntamiento ecuanquirense fue estratégica la creación del Departamento de Fomento Agropecuario a finales de los años noventa del siglo pasado (Ayuntamiento de Ecuandureo, 1996).

Para tal fin se establecieron dos frentes de negociación y mediación: entre el presidente municipal y los mandos medios y altos de las instituciones del sector agropecuario en el ámbito estatal y federal; y los productores, los representantes ejidales, los funcionarios del distrito de desarrollo rural de la entonces Sagar y de la CNA, ubicados en la vecina ciudad de Zamora.

De esta forma, los vínculos entre el agua de riego, la transferencia de tecnología hidroagrícola y el poder político establecieron el camino que permitió a los productores de los terrenos ejidales aspirar a la reconversión productiva orientada hacia el cultivo de las hortalizas. Por otro lado, también implicó fuertes cambios en la organiza-

ción socioespacial local, lo que a su vez ocasionó la desintegración territorial de las áreas consideradas de menor productividad.

Hasta el año de 2004, en la trayectoria política de los últimos tres presidentes municipales ha estado muy presente el desarrollo de la pequeña irrigación y la transferencia tecnológica en sus terrenos ejidales de origen y, a su vez, éstos han sido sus promotores más fervientes. Aparte de ser ingenieros agrónomos, al menos en dos casos han sido también representantes ejidales, uno de ellos originario de Rincón Grande.

Lo anterior refiere a un proceso de modernización hidroagrícola que se había gestado en el decenio de los años ochenta del siglo pasado. Por lo que en ese sentido, su llegada al poder es consecuencia del proyecto de desarrollo local, en este caso construido entre los propios rinconenses, así como de las acciones políticas que tuvieron que emprender en aras de alcanzar sus objetivos.

De esta manera, lo que para algunos productores del vecino municipio de La Piedad es motivo de recelo por los logros alcanzados en el municipio de Ecuandureo, dado su situación de marginación política respecto a la toma de decisiones relacionadas a cuestiones agropecuarias en su propio ayuntamiento, en cambio para los ecuandurenses es algo de lo que pudieron aprovecharse no sólo sus líderes políticos, sino también los productores de varios terrenos ejidales. Ambos grupos salieron favorecidos y poco a poco se pudieron enfilar hacia su propio proceso de desarrollo local, donde el ejido sería redefinido en su espacio de interacción y de organización social, hasta la apropiación de su territorio.

CONCLUSIONES

A partir de los aspectos descritos es posible decir que en los procesos de organización de los espacios agrícolas ejidales se pueden encontrar una serie de respuestas a la intervención del Estado.

En el actual contexto de globalización económica, el proceso de modernización hidroagrícola también se puede construir, al menos parcialmente, desde abajo y con la visión de los propios actores sociales. Por tal motivo, los impactos de los cambios estructurales no son homogéneos en todo el país, y en el ámbito local puede haber varios aspectos que ayuden a confirmarlo, un ejemplo de ello es el uso de las remesas en la producción. Otro pudiera ser la participación local en el proceso de modernización, donde las unidades de

pequeña irrigación funcionan como reguladoras de la organización socioespacial local.

Desde luego que en estos casos resulta importante la capacidad autogestiva de cada unidad de pequeña irrigación y su relación con los demás espacios de decisión del ejido, por lo que Rincón Grande puede dar cuenta de ello, aunque todavía se está lejos de la igualdad en la articulación de los diversos espacios productivos.

En este aspecto la introducción de las hortalizas, producto de la reorientación productiva, ha contribuido considerablemente a la desarticulación territorial, a tal grado que se ha propiciado la subordinación de espacios con menor potencial productivo, mermando la autosuficiencia alimentaria y también se ha acelerado la separación entre las actividades agrícolas y ganaderas.

Los espacios de agricultura de temporal y del ganado han sufrido una desintegración territorial con respecto al sistema productivo dominante. Aquí la transferencia de tecnología prácticamente no existe y las ventajas comparativas no se observan por ninguna parte. Pero subyace la pérdida de cohesión en la organización socioespacial del ejido en su conjunto. Ya que los productores que se ubican en estos espacios resultan excluidos y tienden a desaparecer, sobre todo quienes cultivan para el autoconsumo.

Es entonces la especialización hacia cultivos de tipo especulativo, como las hortalizas, los que condiciona la producción para la autosuficiencia alimentaria, ya que si bien se han logrado importantes avances en la organización socioespacial, también existe el peligro de que se empiecen a mermar los mecanismos de financiamiento, tales como las remesas.

Nada garantiza que los emigrantes sigan apoyando a la agricultura local de forma indefinida y las hortalizas siempre serán un riesgo latente de quiebra económica para los productores; por ejemplo, para el 2002 las condiciones del mercado prácticamente no permitieron la venta de un kilogramo de su producción hortícola, con la consecuente pérdida total de la cosecha.

Para concluir, se puede señalar que cuando los regantes participan en el proceso de decidir en el ámbito municipal por medio de acciones políticas, es posible vislumbrar proyectos de desarrollo contruidos localmente. En ello las diversas estrategias de negociación y mediación hacen posible la articulación del desarrollo hidroagrícola y el ejercicio del poder político por los grupos de productores al interior del municipio. En ese sentido, el acceso al agua de regadío en las unidades de irrigación ha sido el detonante principal en dicho proceso.

BIBLIOGRAFÍA

- ABOITES, Luis (1998), *El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946)*, México, CIESAS.
- ARREGUÍN, José (1998), *Aporte de la geohidrología en México 1890-1995*, México, CIESAS/Asociación Geohidrológica Mexicana.
- BINFORD, Leigh (2002), "Remesas y subdesarrollo en México", en *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad. Trabajadores transmigrantes en el siglo XXI*, núm. 90, primavera, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 115-158.
- CALVA, José Luis (1993), *La disputa por la tierra. La reforma al artículo 27 y la nueva ley agraria*, México, Fontamara.
- CLAVAL, Paul (1982), *Espacio y poder*, México, FCE.
- COCHET, Hubert, Eric LEONARD y Jean Damian de SURGY (1988), *Paisajes agrarios de Michoacán*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- CORREA, R.L. (1986), "O enfoque locacional na geografia", en *Terra Livre*, vol. 1, São Paulo, pp. 52-66.
- DURÁN, Juan Manuel (1988), *¿Hacia una agricultura industrial? México 1940-1980*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
- ESCOBEDO, Francisco (1997), "El pequeño riego en México", en Tomás Martínez y Jacinta Palerm (eds.), *Antología sobre el pequeño riego*, México, El Colegio de Posgraduados, pp. 241-272.
- GEORGE, Pierre (1982), *Geografía rural*, Barcelona, Ariel Geografía.
- GONZÁLEZ, Ángel (1997), "El pequeño riego en México, la versión oficial y la realidad campesina", en Tomás Martínez y Jacinta Palerm (eds.), *Antología sobre el pequeño riego*, México, El Colegio de Posgraduados, pp. 399-418.
- GONZÁLEZ, Octavio (s.f.), "Las formas de explotación del suelo en el Valle de Ecuandureo, Michoacán", tesis de licenciatura, inédita, Guadalajara, Coordinación de Geografía y Ordenamiento Territorial/Universidad de Guadalajara.
- HEWITT, Cynthia (1978), *La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970*, México, Siglo XXI.
- IBARRA, David (1995), "Problemas institucionales y financieros de la agricultura", en *Comercio Exterior*, vol. 45, núm. 9, México, pp. 639-651.
- JOHNSTON, R.J. (1986), "El estudio internacional de la historia de la geografía" en R.J. Johnston y P. Claval (comps.), *La geografía actual: geógrafos y tendencias*, Barcelona, Ariel, pp. 23-38.
- LINCK, Thierry (1993), "Apuntes para un enfoque territorial. Agricultura campesina y sistema-terruño", en Hermilo Navarro,

- Jean P. Colin y Pierre Milleville, *Sistemas de producción y desarrollo agrícola*, México, ORSTOM/Conacyt/El Colegio de Posgraduados, pp. 100-105.
- _____ (1996), "Una recomposición frustrada: las cadenas hortícolas de México", en Philippe Bovin (coord.), *El campo mexicano. Una modernización a marchas forzadas*, México, CEMCA/ORSTOM, pp. 77-104.
- LOBATO, Roberto (1998), "Espacio, un concepto clave de la geografía", en Graciela Uribe, *Cuaderno de geografía brasileña, cómo pensar la geografía 1*, México, Editorial Centro de Investigación Científica "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., pp. 21-46.
- MAASS, A. y R. ANDERSON (1976), *...And the Desert Shall Rejoice. Conflict, Growth and Justice in Arid Environment*, Cambridge, The MIT Press.
- MARTÍNEZ, Tomás y Jacinta PALERM (eds.) (1997), *Antología sobre pequeño el riego*, México, El Colegio de Posgraduados.
- ORIVE, Adolfo (1970), *La irrigación en México*, México, Grijalbo.
- SANTOS, Milton (1986), "Espacio y método", en *Geo crítica*, núm. 65, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, pp. 3-57.
- VARGAS, Sergio (1996), "La nueva política hidroagrícola", en Hubert Carton de Grammont y Héctor Tejera (coords. generales), *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*, tomo 3, México, UAM-A/IIS-UNAM/INAH/Plaza y Valdés, pp. 149-167.
- ZENDEJAS, Sergio (1995), "Respuestas locales ante el embate reformista: el ejido como forma de organización de prácticas políticas locales", en *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núms. 61-62, invierno-primavera, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 31-56.

EL CULTIVO DEL AGUACATE: ¿UN MEDIO PARA ASEGURAR LA REPRODUCCIÓN DE LOS EJIDATARIOS COMO PRODUCTORES AGRÍCOLAS?

*Cristina Steffen Riedemann**

*Flavia Echánove Huacuja***

RESUMEN

Las instituciones públicas vinculadas al agro han recomendado, de manera reiterada, a los campesinos que supriman de su patrón de cultivos los granos en que México no tiene ventajas comparativas, y que se reconviertan hacia las frutas y hortalizas que pueden ofrecer en el mercado, sobre todo internacional, obteniendo una mayor rentabilidad. En este trabajo se analiza el caso de ejidatarios y comuneros del municipio de Peribán, en el estado de Michoacán, quienes desde hace varias décadas han emprendido la producción de aguacate, producto comercial y potencialmente exportable. El objetivo que se persigue es, por una parte, precisar cuáles son los beneficios que esta actividad ha aportado a los productores y, por la otra, señalar las limitaciones a que se enfrentan al competir en un mercado abierto, controlado por los grandes productores y por las comercializadoras transnacionales.

INTRODUCCIÓN

Los lineamientos emitidos en 1995 por la Organización Mundial del Comercio convirtieron en mandato para los países del Tercer Mundo el someter su producción agrícola a la teoría de las ventajas comparativas. Esto condujo a que se redujeran los mercados a los que tienen acceso los productos de las agriculturas campesinas, a que se

* Profesora del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Correo electrónico: <src@xanum.uam.mx>.

** Investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: <echanovef@yahoo.com>.

fortaleciera el control que tienen sobre ellas las grandes compañías que las abastecen de insumos (Minvielle, 1999:115) y a que se desplomaran en los mercados nacionales los precios de sus productos destinados a abastecer de alimentos básicos a la población nacional, como consecuencia del libre ingreso de bienes de este tipo producidos con altos subsidios en los países capitalistas desarrollados. En síntesis, los campesinos del Tercer Mundo, que cada vez reciben menos apoyos del Estado, han sido sometidos a la competencia con las agriculturas capitalistas de los países desarrollados que sí los reciben y de manera generosa.

A lo anterior hay que agregar los variados factores económicos que limitan la posibilidad de sobrevivencia de los productores campesinos y familiares. Por una parte, los productos que ellos ofrecen en el mercado sufren un proceso constante de devaluación, provocado por los crecientes costos de las nuevas tecnologías que deben adquirir para elevar la productividad y tratar de equipararla con la productividad media de la agricultura a escala mundial. Por otra parte, enfrentan grandes restricciones para acceder al mercado de crédito y dependen de empresas nacionales o transnacionales para la obtención de insumos y para la comercialización de sus productos. Además sus productos exportables sólo disponen de nichos de mercado reducidos y están expuestos de manera constante a la competencia que representan productos semejantes procedentes de países que tienen las mismas ventajas comparativas. Esta última situación se agrava porque los pequeños productores que exportan desconocen los mercados liberalizados, puesto que durante largo tiempo ellos estuvieron excluidos de las labores de comercialización, función que había sido asumida por el Estado (Haubert, 1999:173, 175). De manera que, como ya se señaló, acaban dependiendo de las grandes transnacionales agroalimentarias también para esta etapa de la producción.

A pesar de esta realidad, se ha señalado (Chaléard, 1999:106) que la posibilidad de sobrevivencia con que cuenta esta agricultura campesina o familiar, depende del incremento de su producción para el mercado. Pero esta alternativa no está al alcance de todos los campesinos o lo está de manera muy limitada, puesto que una gran parte de ellos carece de recursos naturales y del capital que requiere este tipo de producción. Además, quienes sí pueden incrementar su producción mercantil sufren las enormes limitaciones ya señaladas cuando se enfrentan a los mercados de productos agropecuarios, las cuales les obligan a optar también por otras alternativas para sobrevivir, entre las que predomina el trabajo asalariado que asumen en empresas

agropecuarias, industriales o de servicios, ya sea en su propio país o emigrando hacia otras naciones. Los ingresos que perciben en esta actividad contribuyen, de manera sustancial, a sostener los cultivos y permiten la reproducción de su familia.

Los ejidatarios mexicanos, como los campesinos de todos los países del Tercer Mundo, están inmersos en una situación como la descrita. Partiendo de esta realidad, esta investigación tiene como propósito analizar el caso de un grupo de pequeños productores, quienes dentro de su estrategia de sobrevivencia han incrementado su vinculación con el mercado por medio de la adopción del cultivo de aguacate, fruta de gran consumo en el país y susceptible de ser comercializada en algunos mercados externos de Europa, Japón, Estados Unidos, entre otros. Estos pequeños productores son miembros del ejido San Francisco Peribán y comuneros de la comunidad del mismo nombre, que se localizan en el municipio de Peribán, estado de Michoacán. El objetivo central que persigue el presente análisis es valorar en qué medida el cultivo del aguacate, producto netamente comercial, ha permitido que los ejidatarios y comuneros estudiados mejoren su calidad de vida y tengan la seguridad de lograr su reproducción como productores agrícolas. Para alcanzar el objetivo mencionado se utilizó la bibliografía disponible y los datos estadísticos citados en el texto. Sin embargo, parte sustancial de la información que permitió realizar el presente análisis proviene del valioso conocimiento de los ejidatarios y comuneros transmitido a las autoras a lo largo de las numerosas entrevistas que realizaron en la localidad mencionada.

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL AGUACATE EN MICHOACÁN

Michoacán ocupa el primer lugar entre los estados productores de aguacate en el país. En el año 2001, por ejemplo, con una superficie cultivada de 78 373 hectáreas que representa 83.3 por ciento de la superficie total nacional, alcanzó una producción de 819 224 toneladas, equivalentes al 90.3 por ciento de la producción nacional (véase el cuadro 1).

El ejido y la comunidad objetos de estudio en este trabajo se ubican en el distrito de Uruapan, destacado por ser el que más contribuye a la producción de aguacate en el estado de Michoacán, como se puede apreciar en el cuadro 2.

Cerca de 10 mil productores están involucrados en esta actividad en el estado. De éstos se considera que 11 por ciento, es decir

CUADRO 1

MÉXICO: SUPERFICIE DE AGUACATE CULTIVADA POR ESTADO, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN, 2001

Estado	Superficie cosechada		Rendimiento (ton/ha)	Producción	
	(ha)	(%)		(ton)	(%)
Michoacán	78 373	83.3	10.1	819 224	90.3
Morelos	2 347	2.5	8.1	19 155	2.1
Nayarit	2 318	2.5	7.9	18 254	2.0
México	2 043	2.2	7.5	15 269	1.7
Puebla	2 407	2.5	4.9	11 853	1.3
Subtotal	87 488	93.0	9.8	883 755	97.4
Total	94 104	100.0	9.6	907 438	100.0

FUENTE: Sagarpa, Centro de Estadística Agropecuaria y Delegación Estatal de Morelia, México, 2002.

CUADRO 2

LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE POR DISTRITO EN MICHOACÁN, 2001

Distrito	Superficie cosechada (ha)	Producción (ton)
Uruapan	38 459	381 847
Pátzcuaro	18 133	216 942
Zamora	20 121	208 875
Zitácuaro	1 275	9 088
Morelia	385	2 472
Total	78 373	819 224

FUENTE: Sagarpa, Delegación Morelia, Michoacán, abril de 2002.

100 son ejidatarios, el uno por ciento comuneros y el resto propietarios privados; 85 por ciento de la superficie cultivada está concentrada en huertos privados grandes, ya que dos tercios de los productores controlan menos del 15 por ciento de la superficie; de hecho hay huertos que se pueden denominar de *traspatio*, puesto que cuentan sólo con 20 o 30 árboles. Una desventaja que enfrentan los ejidatarios y comuneros productores de aguacate es que gran parte de sus cultivos son de temporal, mientras que un porcentaje elevado de los grandes huertos privados dispone de riego o de las tierras de mejor temporal.

En la actualidad se ha constatado una sobreproducción de aguacate en el país porque el cultivo se ha expandido en estados que antes no eran productores e, incluso en Michoacán, ha crecido por encima

de lo recomendable. Se menciona que en los viveros de la entidad están disponibles 1.5 millones de plantas lo que, teniendo en cuenta que el número promedio de árboles plantados por hectárea es de 100, podría significar un incremento de unas 15 mil hectáreas de la superficie plantada.

Productores y funcionarios del sector agrícola han esperado que una alternativa para mitigar los efectos de la sobreproducción sea la exportación hacia Estados Unidos, abierta en noviembre de 1997 después de que el gobierno mexicano logró anular una parte de las innumerables barreras levantadas por ese país desde inicios del siglo XX. Sin embargo, las exportaciones no han sido considerables, debido a las restricciones temporales y geográficas impuestas por Estados Unidos (Ochoa y Ortega, 2002:15). Para el ciclo agrícola 2001-2002, por ejemplo, se exportaron unas 50 mil toneladas de fruta en fresco y entre 45 mil y 50 mil procesadas (guacamole, pasta, trozos, aceite) que equivalen a unas 100 mil en fresco, volumen poco significativo si consideramos que en ese ciclo la producción total nacional fue cercana a las 900 mil toneladas. Por otra parte, 80 por ciento de estas exportaciones fue llevada a cabo por tres trasnacionales: Mission, Calavo y Fresh Direction, puesto que los aguacateros nacionales no disponen de suficiente capital de trabajo para llevar a cabo las operaciones de exportación.

EL EJIDO Y LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PERIBÁN

Según el expediente que la Procuraduría Agraria abrió para iniciar los trámites de certificación de los derechos de los ejidatarios, hoy el ejido San Francisco Peribán tiene 125 ejidatarios y dispone en total de 2 213 hectáreas, superficie algo superior a la que originalmente se les otorgó en 1936, debido esto probablemente a alguna ampliación. Esta superficie se desglosa fundamentalmente en tierras de cultivo y de uso común (véase el cuadro 3). Todos los ejidatarios cuentan hoy con el título de propiedad de sus parcelas, de su solar urbano y de su derecho sobre las tierras de uso común; los posesionarios con los de sus parcelas y solar urbano y los avecindados sólo con el de su solar urbano. Acorde con las reformas a la ley agraria de 1992, el certificado parcelario que poseen hoy los ejidatarios ya no garantiza la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable de su parcela, abriendo así las puertas a su enajenación.

En el ejido hay 85 posesionarios, muchos de ellos hijos de ejidatarios que a lo largo de los años fueron abriendo al cultivo tierras de

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DEL EJIDO
SAN FRANCISCO PERIBÁN, 1997

<i>Tipo de tierras</i>	<i>Superficie (ha)</i>
Área parcelada	1 605.00
Uso común	1 052.00
Asentamientos humanos	42.00
Ríos y arroyos	2.50
Infraestructura	52.00
Total	2 213.50

FUENTE: Procuraduría Agraria (1997). Carpeta Agraria, ejido San Francisco Peribán, Uruapan, Michoacán.

agostadero o monte, por lo general ubicadas en las orillas del ejido. A ellos el Procede les asignó parcela con la anuencia de los ejidatarios. Sin embargo, los ejidatarios se han negado a otorgar la calidad de ejidatarios a los posesionarios porque éstos adquirirían de manera automática derechos sobre las tierras de uso común. No todos los ejidatarios habitan en el poblado de San Francisco Peribán; una parte de ellos vive en ranchos ubicados fuera de él, los cuales son denominados anexos del ejido, como Orúscato, Yerbabuena, Los Pastores e Imbaracuaro. En este último anexo están asentados, además, 92 avecindados.

Al interior del ejido persiste un problema con los ejidatarios que habitan en los anexos. Éstos son quienes han trabajado las tierras de uso común, pues viven de la extracción de la resina de los pinos y, para asegurarse estas tierras, han solicitado la división del ejido; los demás ejidatarios han manifestado su acuerdo siempre y cuando se dividiera proporcionalmente la tierra de uso común entre todos, solución contraria a los intereses de los resineros, cuya intención es retener todo el bosque para ellos.

El 6 de enero de 1976, el *Diario Oficial de la Federación* publicó la resolución que otorgó el reconocimiento y titulación de los bienes comunales de San Francisco Peribán. Allí se reconoció la existencia de 159 comuneros, dueños inmemoriales de una superficie de 1 968 hectáreas 80 áreas, dejando constancia de que estos terrenos comunales eran inalienables, imprescriptibles e inembargables. La resolución presidencial se ejecutó el 30 de noviembre de 1976 (*Diario Oficial de la Federación*, 1976:24). Para entonces, una parte de los so-

licitantes originales habían tenido que emigrar a Estados Unidos para poder sobrevivir y vendieron sus derechos a otros pobladores. Las tierras que se reconocieron a la comunidad estaban cubiertas de bosque en donde predominaban los pinos.

A pesar de que la comunidad se manifestó en contra de las reformas de 1992 a la ley agraria, en 1998 ingresó al Procede. Según información recabada por la Procuraduría Agraria en ese año, la comunidad está formada por 184 comuneros que disponen de 1 968 hectáreas, de las cuales 600 están parceladas y 1 368 continúan siendo de bosque. La comunidad no tiene una zona de urbanización ya que su poblado, que existía desde antes del reconocimiento, no se localiza al interior de sus tierras, sino en el núcleo urbano de San Francisco Peribán en donde sus solares constituyen propiedad privada (Procuraduría Agraria, 1998).

Los comuneros no quisieron que se parcelara la comunidad, por lo tanto el Procede sólo actualizó el padrón de comuneros y el derecho de cada uno de éstos se asignó en un porcentaje, respetando el que todas las tierras fueran de uso común. Al interior de la comunidad hay personas que tienen parcelas que compraron ilegalmente, por lo cual ésta no los reconoce como comuneros, aunque sí acepta que tienen el terreno. En la comunidad no se reconoce la figura jurídica de posesionario, así es que tampoco se les puede considerar como tales.

LA EVOLUCIÓN DEL PATRÓN DE CULTIVO EN EL EJIDO Y LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PERIBÁN

Cuando los ejidatarios recibieron la tierra en los años treinta del siglo pasado, las dedicaron esencialmente al cultivo de maíz y frijol y una parte menor al chile, jitomate y camote. En las áreas de agostadero engordaban algunos animales e incluso llegaron a tener algunos potreros. Según lo narrado por los ejidatarios, estas actividades productivas les proporcionaban una sobrevivencia bastante precaria.

Un cambio muy importante en el patrón de cultivos del ejido fue la introducción de la caña de azúcar, producto comercial, a inicios de la década de los años cincuenta del siglo XX. Este hecho ocurrió en el contexto de la gran expansión de la caña de azúcar en el país, expresada en un incremento del 88.7 por ciento de la superficie cosechada entre 1950 y 1960. Ya desde los años cuarenta el presidente Ávila Camacho había emitido un decreto mediante el cual se esta-

blecía la obligación de producir caña de azúcar para quienes cultivaban tierras en zonas de abastecimiento de los ingenios y se condicionaba cualquier apoyo, sobre todo el crédito, a que este decreto fuera respetado (Robles, 1988:60-61). Y, probablemente, éste fue el caso de San Francisco Peribán ubicado en las cercanías del ingenio San Sebastián. En los años cincuenta los precios de la caña fijados por el gobierno fueron bajos y en la década siguiente, aunque experimentaron un incremento temporal como consecuencia del aumento de las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos —país que redujo drásticamente la compra de este producto a Cuba cuando triunfó allí la revolución en 1959—, descendieron a tal grado que, como lo señalan algunos investigadores, 34 por ciento de los cañeros del país tenían un ingreso anual inferior al de los jornaleros rurales (Rubio, 1988:221-228). Sin embargo, en cierta medida estos bajos precios eran compensados porque estaban garantizados por el gobierno y, por lo tanto, protegidos de los vaivenes del mercado. Además, otras ventajas que ellos tuvieron con respecto a los demás campesinos fueron la afiliación al seguro social a través de este cultivo y el crédito para la producción que les siguieron otorgando a pesar de las deudas impagables que mantenían con los ingenios.

Lo anterior contribuye a explicar por qué, a pesar de los aspectos negativos del cultivo de la caña en la época referida, los ejidatarios de San Francisco Peribán consideran que la posibilidad de sembrarla les proporcionó cierta mejoría en sus condiciones de vida.

Pero, el periodo en que mayores beneficios les suministró la caña a los ejidatarios de San Francisco Peribán, según sus propias afirmaciones, comenzó con la estatización de los ingenios llevada a cabo por los presidentes Echeverría y López Portillo, en la década de 1970, época en que este cultivo fue rentable para los cañeros del país. Esto, sobre todo, debido a las luchas que éstos emprendieron (Otero y Singelman, 1996:186-187) y que condujeron a suprimir, al menos parcialmente, los descuentos injustos en los precios del producto y el respeto por parte de los ingenios del pago de la parte estipulada del valor de los subproductos de la caña, tales como el bagazo, melazas y alcohol. Además conservaron el seguro social y obtuvieron reconocimiento al derecho a la jubilación desde que completaban 500 semanas como productores de caña. Por otra parte, el ingenio los apoyaba para perforar los pozos destinados a regar la caña. Estas ventajas ocasionaron que prácticamente todas las tierras cultivables del ejido estuvieran cubiertas de caña, desplazando al maíz y el frijol, que ya sólo excepcionalmente se continuó cultivando para el autoconsumo.

Sin embargo, la bonanza de los cañeros llegó a su fin en la segunda mitad de los años ochenta, cuando el gobierno implanta el modelo neoliberal en el país, lo que para el campo significó, entre otras medidas, la privatización de las empresas paraestatales. Entre 1988 y 1992 el gobierno vendió los 62 ingenios de la paraestatal Azúcar S.A.; de ellos 59 pasaron a manos de empresarios que utilizan el azúcar como materia prima en la fabricación de bebidas y ciertos alimentos, y tres a uniones locales de productores afiliadas a la Confederación Nacional Campesina (De la Fuente y Mackinlay, 1994:125). Los ingenios Santa Clara y San Sebastián, que eran los compradores tradicionales de la caña producida en San Francisco Peribán, pasaron a manos del consorcio privado Porres. A partir de entonces, si bien los ingenios refaccionan a los productores para que adquieran los insumos, les piden como garantía copia notariada del título de la parcela y les cobran por el financiamiento 12 por ciento de interés anual. El contrato firmado entre el ingenio y el productor que antes era anual, ahora tiene una duración de cinco años. El deterioro del precio de la caña a menudo ocasiona que muchos productores queden debiendo a los ingenios a la hora de hacer cuentas; por otra parte, no tienen participación en el valor de los subproductos de la caña y, además, los ingenios condicionan la compra de la caña a que los ejidatarios paguen el transporte. En cuanto a las prestaciones, disminuyeron de manera significativa: el escaso ingreso impide pagar el seguro social a la mayoría de los productores y hoy, para que se les reconozca el derecho a jubilación, deben demostrar haber producido caña durante 25 años y tener más de 65 años de edad.

Sumado a lo anterior, en los últimos dos años los ejidatarios se ven enfrentados a la amenaza del cierre de los ingenios. En efecto, en abril de 2002 el dueño del ingenio San Sebastián manifestó que tomaría este camino, ante lo cual el gobierno del estado de Michoacán prometió apoyar la propuesta de los obreros quienes pretendían asumir el control del ingenio (Elorriaga, 2002:32).

Esta última incertidumbre, junto con el desplome de la rentabilidad de la caña de azúcar, han provocado una progresiva reducción de la superficie destinada a este cultivo en toda la región de Peribán, en donde se señala que antes llegaba a seis mil hectáreas y hoy sólo queda la mitad. En el caso del ejido San Francisco Peribán aún se destinan alrededor de 200 hectáreas a la caña y una superficie no determinada en la comunidad. En ambos, muchos productores han ido arrancando la caña para sustituirla por aguacate; este proceso ha sido gradual porque el árbol de aguacate tarda cinco años en producir la fruta, años en los cuales si el productor no cuenta con otro

cultivo, no tendría como sostener a su familia. En menor medida el agave tequilero, la guayaba y el durazno están también ocupando tierras que fueron cultivadas con caña. De durazno se estima que hay 20 hectáreas en el ejido, superficie que ya consideran excesiva los productores porque en la región hay una sobreproducción que ha causado el derrumbe de los precios.

Con respecto a las tierras de uso común, una superficie considerable de ellas, tanto del ejido como de la comunidad, está cubierta de bosque, el cual es explotado mediante dos actividades productivas: la recolección de resina y el corte de madera.

Las cerca de mil hectáreas de monte de las tierras de uso común del ejido son aprovechadas, como ya se mencionó, por algunas de las familias de ejidatarios que viven en el anexo Orúscato y que se dedican a extraer resina de los pinos que luego venden en algunas fábricas de Uruapan. El beneficio para el conjunto de los ejidatarios radica en que las empresas que compran la resina tienen la obligación de entregar al ejido 10 por ciento del valor de cada tonelada del producto que adquieren. El monte en general está bastante destrozado, la reforestación es muy precaria y los propios ejidatarios no velan de manera eficaz por la conservación de este recurso. Por otra parte, talamontes clandestinos de Angahuan, poblado cercano, llegan armados por las noches a cortar los árboles para fabricar en sus aserraderos cajas de madera que venden a los grandes empresarios de Sinaloa que producen y empaican jitomate.

Los comuneros reciben cada diez años un permiso institucional para cortar árboles de un área específica del monte con la finalidad de obtener madera para la venta. Para llevar a cabo esta operación firman un contrato de compraventa con una empresa compradora, la cual corta y transporta la madera y además se compromete a reparar los caminos y a costear los arbolitos para que los comuneros reforesten. De igual manera que en el bosque del ejido, es muy frecuente la tala clandestina llevada a cabo por dueños de aserraderos que vienen de fuera. Incluso el antiguo jefe de tenencia de San Francisco Peribán permitía que entraran los talamontes clandestinos que han destruido el bosque.

EL AGUACATE EN SAN FRANCISCO PERIBÁN

La expansión del aguacate en Peribán se inscribe en el incremento de la superficie ocupada por este cultivo en el nivel nacional y que se da durante la década de 1970; en efecto, ésta creció a una tasa de

2 por ciento anual entre 1970 y 1982 (Rubio, 1990:129). Aunque la mayor parte de esta superficie fue controlada por los empresarios privados, involucró a cierto número de pequeños productores, como es el caso de los que se estudia en este trabajo.

Al inicio, el cultivo del aguacate en el ejido fue asumido por los productores con la esperanza de contar con un producto que les reportara un ingreso complementario al generado por la caña y, desde fines de la década de los ochenta, como una alternativa frente a la decadencia de ésta.

Empezaron a cultivar esta fruta en 1976, cuando comprobaron la buena rentabilidad que estaban obteniendo con ella otros productores del municipio de Peribán y alentados por los créditos que les ofreció el Banco de Crédito Rural (Banrural) para establecer los huertos, pagaderos en un plazo de cinco años, lapso en el que, como se mencionó, el árbol empieza a producir.

Es en ese mismo año cuando el gobierno otorgó el reconocimiento legal a la comunidad San Francisco Peribán. Los comuneros recibieron tierras que eran de monte cubierto con pino, pero, a fin de que dispusieran de un ingreso más permanente, el Banrural les entregó crédito refaccionario y de avío para que talaran una parte del bosque y establecieran huertos de aguacate. De esta manera, tanto el ejido como la comunidad se convirtieron en productores de aguacate, en el primer caso desplazando al maíz y frijol y en el segundo al monte.

Características del cultivo

Resulta difícil establecer con precisión la superficie cultivada con aguacate en el ejido y en la comunidad debido a que, por lo general, los productores no declaran ante las instituciones la totalidad de las tierras que tienen ocupadas con este árbol. Los datos más confiables parecen ser los que provienen de los presidentes del comisariado ejidal y del comisariado comunal, quienes han señalado que en el ejido hay unas 300 hectáreas de aguacate y en la comunidad cerca de 500.

El tamaño de las huertas de aguacate es muy variable. A partir de los datos proporcionados por el presidente de la Asociación de Aguacateros de San Francisco Peribán, se constata que la mayor parte de los ubicados en el ejido cuenta con una superficie de una a tres hectáreas; algunos tienen entre cuatro y seis hectáreas y, como excepción, aparece alguno de siete u ocho hectáreas. Cuando se reconocieron los derechos de la comunidad, cada comunero dispuso

de un huerto de dos hectáreas para cultivar aguacate, pero en la actualidad, si bien la superficie promedio continúa siendo ésa, hay algunos que disponen de hasta cinco hectáreas. Tanto en el ejido como en la comunidad existen pequeños huertos de traspatio que llegan a tener entre 10 y 15 árboles.

Casi la totalidad del aguacate cultivado por el ejido y la comunidad es de temporal, ya que el agua de los cinco pozos de que dispone el ejido se destina al riego de la caña de azúcar. Con este mismo fin, se usa el agua de la Barranca Seca, a la que tiene acceso la comunidad; pero hay que destacar que los manantiales de la región se están secando. Cuando se establecieron los huertos en la comunidad, los árboles pequeños se regaban con agua del manantial Zipicha que conducían con mangueras hasta cada parcela; pero tan pronto éstos crecieron se retiró el riego. Sin embargo, a medida de que la caña es sustituida por aguacate, algunas de las nuevas huertas tienen riego; tal es el caso de un comunero exproductor de caña que tiene en la actualidad una huerta de aguacate en producción de 1.5 hectáreas y otra de tres recientemente establecida, ambas cuentan con riego.

Aunque el Banrural dispone de una línea de crédito de avío para que los productores den mantenimiento a los huertos, único apoyo oficial que se ofrece al cultivo del aguacate, son pocos los que acuden a esta institución porque la condición para ser acreditados es entregar al banco en garantía las escrituras de la parcela, de la casa-habitación o de alguna maquinaria. Como consecuencia de lo anterior y del escaso capital de que disponen los productores, los huertos no reciben la atención requerida, muchos de los árboles son demasiado viejos y cada productor sólo aplica los fertilizantes, estiércol y plaguicidas que está en capacidad de adquirir. Sin embargo, un número reducido de productores llevan adelante sus cultivos con todos los requerimientos tecnológicos. Por ejemplo, en los meses del año 2002 en que se realizó la investigación de campo, se acababan de implantar de manera experimental dos huertas orgánicas con siete hectáreas de aguacate, abonadas con composta y fumigadas con plaguicidas orgánicos. Los resultados de esta experiencia, señalaron los involucrados, podrán evaluarse cuando los árboles empezaran a producir.

Para que una huerta de la región de San Francisco Peribán tenga una buena atención, debe comprender una aplicación anual de estiércol (gallinaza), fertilizantes químicos, plaguicidas y varias labores de cultivo que incluyen desvaradas y acondicionamiento de los cajetes de los árboles. Esto implica que el productor debería invertir cerca de 25 mil pesos por hectárea al año. Pero, la información proporcionada por numerosos productores indica que ninguno gasta

esta cantidad y que los costos de producción que ellos estiman oscilan entre 10 mil y 18 mil pesos por hectárea. Por ejemplo, don Salvador Ayala mencionó que en su huerta de 1.5 hectáreas plantadas con 160 árboles, él invierte al año alrededor de 17 600 pesos por hectárea. Por otra parte, uno de los tres comuneros que exportan aguacate mencionó que él desembolsa 14 500 pesos por hectárea.

También hay situaciones extremas provocadas por la falta de recursos, en las cuales las huertas no reciben ningún tipo de mantenimiento, pero a pesar de ello, los árboles dan fruto y reportan algún ingreso al productor.

En los rendimientos del cultivo influyen tres factores fundamentales. Dos que no dependen directamente de la acción de los productores, como las variaciones y siniestros climáticos y la altura sobre el nivel del mar en que está establecido el huerto, ya que a más de dos mil metros no se puede esperar un buen rendimiento. El otro factor tiene que ver con el mantenimiento: una huerta de la región bien atendida debe producir entre 10 y 12 toneladas de fruta por hectárea al año. Este volumen no es el que obtienen todos los productores de San Francisco Peribán, de hecho quienes no aplican fertilizantes y plaguicidas en las cantidades necesarias llegan a cosechar sólo la mitad de esta cifra.

Por lo general, el trabajo en las huertas es realizado por los hombres de la familia. Hay huertas pequeñas que no reciben mantenimiento cuando el propietario es migrante. En el periodo de la cosecha se involucran las mujeres en las tareas menos pesadas. Como se vio en otra comunidad en donde las huertas son más grandes, la tendencia es que cuando falta el jefe de familia e hijos varones mayores, la mujer contrata un administrador o jornaleros para realizar las labores.

La comercialización

El árbol de aguacate, que florece durante casi seis meses del año, permite cosechar la fruta durante un largo periodo que se extiende de agosto a marzo del año siguiente. Pero la cosecha más abundante en la región se realiza entre septiembre y enero. La modalidad que asume el corte depende del nivel de los precios del aguacate vigente en el mercado: cuando éste es bajo, la fruta se corta al jalón y se recoge del piso, por el contrario cuando el precio es alto, se corta con bolsa para evitar el deterioro de la fruta que ocasiona la caída.

Cuando los huertos son de dos o tres hectáreas, es posible llevar a cabo el corte con los miembros de la familia, pero si la superficie es mayor el productor debe recurrir a la contratación de jornaleros. Por

otra parte, la mayoría de los productores se encarga del corte porque cuando delegan esta función al comprador, el personal enviado por éste escoge sólo la fruta más bonita, dejando el resto en el árbol.

Una parte de los productores suele vender su producción "al parar", modalidad que se da cuando la fruta ya está madura e implica que, por una suma fija anual, el comprador puede realizar de dos a tres cortes de fruta. Sin embargo, por lo general, se evita esta alternativa porque el comprador pone un precio demasiado bajo. Menos frecuente, porque el precio establecido por el comprador es aún inferior, es la venta "al tiempo" y que consiste en vender la huerta en pie.

Los productores tienen dos opciones para ofrecer en venta la fruta, ya sea entregarla a los empaques que están establecidos en el municipio de Peribán y en el mismo poblado de San Francisco Peribán, o a "los coyotes" que se estacionan con sus camionetas en las encrucijadas de la carretera y en los accesos al poblado.

Se estima que en el municipio hay alrededor de 100 empaques, de ellos tres en San Francisco Peribán. Los productores prefieren vender su fruta a los empaques, sobre todo los que disponen de un mayor volumen de ella. Ellos cortan la fruta y la llevan en sus camionetas hasta el empaque. El empacador y el productor hacen un convenio de compra a la palabra, en el cual aquél fija las fechas en que recibirá el producto y establece que el pago será de acuerdo con la calidad y tamaño de la fruta. En el momento de la entrega, el empacador pesa el aguacate y luego lo turna a las máquinas que proceden a clasificarlo en fruta de "primera", "segunda", "tercera" y "canica", cuando es muy pequeña. Durante este último proceso el productor no está presente, por lo tanto no tiene capacidad de control sobre él y sólo recibe la notificación del resultado de dicha selección. Por otra parte, de la clasificada como de "primera", el empacador selecciona la mejor fruta para la calidad "extra", pero el sobrepeso que consigue con ella no le es reconocido al productor. Por lo general, éste recibe el pago de su producto 15 días después de haberlo entregado al empaque.

En ciertas ocasiones, como cuando el productor no tiene medio de transporte propio, el empaque se encarga de cortar la fruta con sus cuadrillas de trabajadores, pero paga un precio único por kilogramo sin distinción de tamaño y calidad. Por otra parte, el volumen cosechado por el empaque no puede ser verificado por los productores, quienes deben atenerse al dato proporcionado por el empacador. También hay productores que solicitan préstamos a los empacadores para dar mantenimiento al cultivo y se comprometen a pagar la deu-

a con la fruta en el momento de la cosecha. Estos convenios tienen sus riesgos, como se vio en el caso de un productor que solicitó un préstamo para comprar el estiércol; pero como sus árboles fueron afectados por una plaga, perdió la cosecha y hoy está endeudado con el empaque. Por otra parte, se dan casos como el de un empacador del municipio que desapareció de la región debiendo más de tres millones de pesos a los productores.

Otra práctica empleada por los empacadores es tener a su servicio "coyotes" que se encargan de comprar aguacate para completar su abastecimiento. Éste es el caso de un "coyote", hijo de un pequeño propietario que tiene huertos de aguacate y durazno, que se instala todos los días, de once de la mañana a cinco de la tarde, en un punto de compra cercano a San Francisco Peribán. Él entrega 90 toneladas de aguacate a la semana a un empacador, quien periódicamente le financia la compra. Ejidatarios y comuneros de San Francisco Peribán, quienes son productores pequeños carentes de los medios de transporte propio para acudir al empaque, o que enfrentan la necesidad urgente de contar con dinero en efectivo, acuden a los "coyotes" para vender su aguacate. Hay dos tipos de coyotes, los que compran el aguacate por cuenta propia y los empleados por los empaques ya mencionados. En ambos casos el pago de la fruta al productor es inmediato y ésta es la razón principal por la que el productor recurre a ellos, según la opinión mayoritaria de los entrevistados.

Como ya se mencionó, el precio de la fruta al productor varía según el tamaño y la calidad de ésta; influye también la oferta, ya que cuando hay escasez de aguacate no se toman en cuenta estas consideraciones, sino que se paga un precio único por kilogramo, y además cambia de acuerdo con las condiciones del corte y del transporte de la fruta al empaque o a los puntos de venta establecidos por los "coyotes". Una situación de los pequeños productores ejidatarios y comuneros que motiva el descenso del precio, es que éstos por lo general deben mucho dinero y no pueden detener el corte de la fruta, aun cuando ésta no haya llegado a la madurez. Su urgencia permite que los empacadores y "coyotes" impongan el precio.

Por otra parte, el alto grado de concentración de la producción en manos de los grandes empresarios privados, mencionados anteriormente, permite que ellos sean quienes desempeñan el papel determinante en la fijación del precio de la fruta.

La exportación de aguacate que constituye una aspiración para muchos de los ejidatarios y comuneros, únicamente la han podido llevar a cabo tres comuneros de San Francisco Peribán. Cada uno de

ellos sólo puede exportar dos toneladas de fruta por hectárea y por temporada. Estos productores deben asumir algunos gastos adicionales al costo de producción promedio: deben pagar 710 pesos por hectárea para cubrir la revisión fitosanitaria de su huerta, 0.12 dólares por tonelada por derecho de exportación y las etiquetas y el acrílico con el nombre de la comunidad y que se debe adherir a cada caja. Deben hacer un contrato con una empresa exportadora, Calavo por ejemplo, que se encarga de realizar el corte de la fruta y paga al productor en un plazo de ocho días. Para el año 2002, diez productores habían logrado ser registrados como exportadores, pero aún no lograban iniciarse como tales.

*La organización de los ejidatarios
y comuneros productores de aguacate*

En San Francisco Peribán hay una Asociación Agrícola de Productores de Aguacate que agrupa a 42 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la localidad y que tienen huertos de un máximo de ocho hectáreas. El objetivo de esta organización es obtener un crédito de un millón de pesos para poder compactar la compra de los insumos que se requieren para la producción y así adquirirlos a mejor precio. Sin embargo, no se ha logrado cumplir con el objetivo y, de hecho, sus socios no tienen una participación activa porque existe desconfianza entre ellos.

Los ejidatarios y comuneros aguacateros pertenecen, además, a la Asociación Estatal de Productores de Aguacate y a la Asociación Agrícola Local, aunque señalan que no les reporta ningún beneficio la pertenencia a dichas asociaciones.

Por otra parte, todos los productores de aguacate deben ser socios de la Junta de Sanidad Vegetal que revisa, periódicamente, las huertas para evitar la invasión de plagas. Este tipo de organismo se creó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a fin de que los socios comerciales de México pudieran asegurarse de que los cultivos mexicanos estuvieran libres de plagas. A través de estas juntas, los técnicos del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) controlan y convalidan la limpieza de los productos susceptibles de ser exportados. Cada productor de San Francisco Peribán, independientemente de que sea exportador o no, está obligado a pagar cada año una cuota de 180 pesos para financiar el salario de la ingeniera que lleva a cabo el control de los huertos y de la secretaria de la oficina que tiene la Junta de Sanidad Vegetal en el poblado.

Es un hecho que el escaso desarrollo de la organización, tanto en el ejido como en la comunidad, incide de manera determinante en la débil capacidad que tienen los productores para defender sus intereses ante empaques y "coyotes".

REFLEXIONES FINALES

Ejidatarios y comuneros coinciden en afirmar que el cultivo del aguacate, en términos generales, les ha aportado un claro beneficio. Con respecto a las condiciones de trabajo muchos lograron comprar tractor y camioneta, máquinas necesarias para hacer más eficientes los cultivos y la comercialización de sus productos; en lo que atañe a las condiciones de vida, la gente mejoró la calidad de sus viviendas y se logró pavimentar las calles del pueblo.

Para los comuneros, por ejemplo, el ingreso más importante que perciben proviene de la venta del aguacate. Esto lo demostró el presidente del comisariado comunal, comparando lo que ganan con la venta de la madera y del aguacate. En efecto, en dos hectáreas de bosque se les permite explotar 100 metros cúbicos de madera al año por los cuales reciben 35 mil pesos; en cambio de una huerta de aguacate de dos hectáreas, pueden obtener en ese mismo lapso hasta 80 mil pesos de utilidad.

Sin embargo, el beneficio no ha sido parejo para todos los productores, ya que éste se relaciona de manera directa con el tamaño de la huerta. Algunos productores señalaron que sólo con huertas de cinco hectáreas se puede vivir del aguacate, pero quienes tienen menos, que constituyen la gran mayoría, deben asumir actividades productivas adicionales para poder subsistir.

Por lo tanto, sólo muy pocos productores pequeños han logrado iniciar un proceso incipiente de capitalización a partir de la producción del aguacate y, cuando ha sido posible, es porque han incrementado la superficie de sus huertas. Como sucede en todo el campo mexicano, es muy difícil obtener información certera y exhaustiva de la dinámica del mercado de tierras en San Francisco Peribán; sin embargo, las entrevistas arrojaron algunos datos que indican la existencia de ventas de parcelas ejidales cultivadas con aguacate; al menos tres de dos hectáreas y una de seis han sido vendidas. Por otra parte, el presidente del comisariado ejidal estimó que 10 por ciento de las parcelas se habría enajenado. Con respecto a la renta de tierras de cultivo, señalaron que ésta es relativamente frecuente en el caso de los huertos de aguacate y que los contratos pueden durar de

uno a cinco años. Sin embargo, la expansión de las huertas que han conseguido estos pocos ejidatarios y comuneros, aunada al mayor uso de fertilizantes y plaguicidas, no son garantía de que podrán competir con éxito con los grandes productores de aguacate que concentran 85 por ciento de la producción nacional y con las transnacionales que controlan su comercio internacional. De acuerdo con lo anterior y sin olvidar las enormes diferencias en cuanto a los recursos productivos de que disponen, el futuro de los ejidatarios y comuneros aquí estudiados puede asemejarse al de los granjeros y agricultores familiares de los países desarrollados quienes, por más que expandan sus granjas e incorporen todas las nuevas tecnologías, no pueden competir de manera ventajosa en el mercado globalizado con las grandes transnacionales, ni lograr su reproducción como agricultores a partir de la producción agropecuaria. La mayor parte de ellos han tenido que abandonar el campo y los que allí sobreviven, lo hacen realizando otras actividades complementarias (Wiebe, 2002:4). Por lo tanto, la posibilidad de sobrevivencia de la agricultura campesina o familiar no parece depender de la profundización de su vínculo con el mercado de productos.

Aunque el aguacate sea la principal fuente de ingresos en efectivo para la mayoría de los ejidatarios y comuneros, es un componente más dentro de la estrategia de sobrevivencia que han construido. Desde hace muchas décadas ellos se han visto en la necesidad de practicar la pluriactividad y la introducción del cultivo del aguacate, salvo escasas excepciones, no significó el desplazamiento de dicha pluriactividad.

En este sentido, los ejidatarios y comuneros de San Francisco Peribán y sus familias sobreviven gracias a la combinación de varias actividades. En el ámbito agrícola, los cultivos de aguacate y caña son los más importantes, pero como este último paulatinamente ha perdido rentabilidad se han visto obligados a ensayar otras alternativas con mejores expectativas de mercado. La explotación del bosque constituye una fuente de ingreso que llevan a cabo, legalmente cuando la Semarnat lo permite, o de manera clandestina si el apremio es muy grande.

Un elemento muy importante dentro de la estrategia de sobrevivencia de la familia es el trabajo asalariado. En éste se involucran, tanto el jefe de familia cuando la huerta de aguacate es pequeña, como los hijos que permanecen en el ámbito familiar. Pero el trabajo asalariado extraparcelario más difundido en San Francisco Peribán es el que se realiza fuera del país, en Estados Unidos. Partes significativas de la mayoría de las familias están asentadas en ese país y

el dinero que envían a sus familiares (monto que no fue posible dimensionar en el ejido y comunidad), además de contribuir a mejorar el consumo y la vivienda, permite en muchos casos darle un mantenimiento más adecuado a los huertos de aguacate. Es decir, este cultivo no ha incidido en una disminución de la migración en la región estudiada.

La gran cantidad de pequeños y hasta diminutos expendios comerciales que proliferan en el pueblo indica que el pequeño comercio también es practicado por muchas de las familias ejidales y comuneras como una actividad complementaria. Finalmente, una fuente adicional de ingresos para muchos productores de aguacate de edad avanzada es la jubilación del seguro social y que reciben como prestación por el trabajo de largos años en la producción de caña de azúcar.

En síntesis, tal como acontece con otros cultivos netamente comerciales de frutas y hortalizas, para la mayor parte de los ejidatarios y comuneros, el aguacate es un componente de la estrategia familiar de reproducción que genera un ingreso monetario importante para mejorar, parcialmente, las condiciones de vida, pero que no facilita por sí solo la capitalización de la gran mayoría de ellos. Uno de los principales obstáculos que enfrentan en el cultivo del aguacate, como en el de todos los productos orientados al mercado que llevan a cabo los ejidatarios y comuneros, se genera en el proceso de comercialización: cuando entregan la fruta al comprador no pueden controlar la clasificación que éste hace de ella, ni verificar que el peso que se les reporta es el correcto; tampoco cuentan con los medios para exigir el pago oportuno; pero, sobre todo, reciben precios bajos que no tienen capacidad de modificar, viéndose obligados a aceptar el que se les ofrece porque deben pagar sus deudas y financiar los gastos cotidianos de subsistencia. Un factor negativo adicional que empezó a afectarlos a partir de diciembre del 2001, es que las emparadoras comenzaron a exigirles factura para respaldar sus pagos, en cambio los productores no pueden recibir documentos de este tipo que comprueben los gastos en que incurren cuando contratan mano de obra o cuando adquieren el estiércol. Por lo tanto, mientras la Secretaría de Hacienda dispone de constancias oficiales de sus ingresos, los productores no pueden comprobar legalmente una parte considerable de sus gastos.

De esta manera, si bien el ampliar sus vínculos con el mercado a través del cultivo del aguacate, les ha significado una mejoría en sus condiciones de vida a los ejidatarios y comuneros de San Francisco Peribán, su reproducción como tales no ha sido garantizada por este

medio, sino a través de la práctica de variadas actividades entre las que destaca, en primer lugar, el trabajo asalariado. Es pues la vinculación cada vez más estrecha con el mercado de trabajo la clave que explica su reproducción social.

BIBLIOGRAFÍA

- CHALÉARD, Jean-Louis (1999), "Les conditions de viabilité de la production paysanne", en *L'avenir des paysans*, París, Tiers Monde/PUF, pp. 93-106.
- DE LA FUENTE, Juan y Horacio Mackinlay (1994), "El movimiento campesino y las políticas de concertación y desincorporación de las empresas paraestatales: 1989-1994", en Bassols (coord.), *Campo y ciudad en una era de transición*, México, UAM-Iztapalapa, pp. 105-146.
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1976), 6 de enero, México, p. 24.
- ELORRIAGA, Ernesto (2002), "Apoyará Cárdenas Batel que ingenio San Sebastián pase a manos de los cañeros", en *La Jornada*, 18/5/2002, p. 32.
- FORERO, Jaime (1999), "La formation et les transformations de l'économie paysanne", en *L'avenir des paysans*, París, Tiers Monde/PUF, pp. 77-90.
- HAUBERT, Maxime (1997), "Sociétés paysannes et développement", en *Les paysans, l'Etat et le marché*, París, La Sorbonne, pp. 9-15.
- _____ (1999), "Conclusion générale", en *L'avenir des paysans*, París, Tiers Monde/PUF, pp. 165-178.
- MINVIELLE, Jean Paul (1999), "L'articulation des paysans au marché", en *L'avenir des paysans*, París, Tiers Monde/PUF, pp. 107-121.
- OCHOA, Raúl y César ORTEGA (2002), "El aguacate mexicano frente a la apertura del mercado norteamericano", en *Claridades Agropecuarias*, núm. 110, octubre, México, Sagarpa/Aserca, pp. 3-20.
- OTERO, Gerardo y Peter SINGELMAN (1996), "Los cañeros y el Estado en México: garantías sociales y reestructuración económica en la industria azucarera", en Grammont y Tejera (coords.), *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*, vol. IV, México, INAH/UNAM/UAM/Plaza y Valdés, pp. 181-202.
- PROCURADURÍA AGRARIA (1997), Carpeta Agraria del Ejido San Francisco Peribán, Uruapan, Michoacán.
- _____ (1998), Acta de la Asamblea Comunal que se levanta en la comunidad indígena San Francisco Peribán, 27 de abril, Mich.

- OBLES, Rosario (1988), "Estructura de la producción y cultivos 1950-1960", en *Historia de la cuestión agraria mexicana 1950-1970*, vol. 7, México, Siglo XXI/CEHAM, pp. 13-83
- UBIO, Blanca (1988), "Estructura de la producción agropecuaria y cultivos básicos 1960-1970", en *Historia de la cuestión agraria mexicana 1950-1970*, vol. 7, México, Siglo XXI/CEHAM, pp. 146-276.
- (1990), "Agricultura, economía y crisis durante el periodo 1970-1982", J. Moguel (coord.), *Historia de la cuestión agraria mexicana*, vol. 9, México, Siglo XXI/CEHAM, pp. 15-137.
- NIEBE, Nettie (2002), entrevista realizada por Tania Molina Ramírez, "Agricultores de Canadá y Estados Unidos cuentan su historia", en *Masiosare, La Jornada*, 8 diciembre, México, pp. 3-5.

ENTREVISTAS

- AYALA PAGUA, Salvador (21/2/02) y (1/5/02), ex presidente del comisariado ejidal de San Francisco Peribán, Michoacán.
- CARTAGENA, Jesús (5/4/02), presidente del comisariado comunal de San Francisco Peribán, Michoacán.
- ENTREVISTA COLECTIVA (23/2/02), dirigentes y miembros del ejido y la comunidad de San Francisco Peribán, Michoacán.
- GUERRERO, Leonardo (5/4/02), suplente del jefe de tenencia, San Francisco Peribán, Michoacán.
- GUERRERO, Miguel (22/2/02), ingeniero de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Peribán, Michoacán.
- HERRERA, Norma (16/2/02), ingeniera encargada de la Junta de Sanidad Vegetal de San Francisco Peribán, Michoacán.
- MIRELES, Sergio Amado (3/5/02), ingeniero, Procuraduría Agraria, Uruapan, Michoacán.
- OBELLEIRO, José (23/2/02), gerente general de la Comisión Michoacana del Aguacate, Uruapan, Michoacán.
- ROMERO, Salvador (30/4/02), presidente del comisariado ejidal del ejido de San Francisco Peribán, Michoacán.
- ROSALES, Alejandro (1/5/02), comunero y pequeño propietario, ex representante de los cañeros en la CNC, San Francisco Peribán, Michoacán.
- SÁNCHEZ, Margarito (30/4/02), presidente de la Asociación Agrícola de Aguacateros, San Francisco Peribán, Michoacán.
- SANTACRUZ, Heladio (3/5/02), agrobiólogo especialista en aguacate, Uruapan, Michoacán.
- VELÁZQUEZ, Mari (5/4/02), pariente de comuneros, dueña de una tienda, San Francisco Peribán, Michoacán.

AGROINDUSTRIALIZACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO
DE LOS TRABAJADORES EN LA COSCUBA DEL ANGO

DE LA

UNIVERSIDAD

DE LA

CIUDAD DE LA

**AGROINDUSTRIALIZACIÓN, MIGRACIONES
LABORALES, IDENTIDADES SOCIALES
Y RELACIONES DE PODER**

El presente trabajo se enmarca en el área de la sociología agrícola y rural, específicamente en el estudio de las relaciones de poder y las migraciones laborales en el sector agroindustrial de la coscuba del Ancho. El objetivo principal es analizar cómo la agroindustrialización ha transformado las condiciones de trabajo y las relaciones sociales en este sector, así como el papel de las migraciones laborales en este proceso. Para ello, se realizó un estudio de caso en una zona agroindustrial de la coscuba del Ancho, donde se observó la presencia de grandes explotaciones agroindustriales que han generado un tipo de relaciones laborales caracterizadas por la explotación y la precariedad. Se encontró que las migraciones laborales son una consecuencia directa de la agroindustrialización, ya que los trabajadores se ven obligados a desplazarse en busca de mejores condiciones de trabajo y salarios más altos. Este fenómeno ha generado un tipo de relaciones sociales basadas en la explotación y la desigualdad, donde los trabajadores se ven sometidos a largas jornadas de trabajo, bajos salarios y falta de derechos laborales. En consecuencia, se concluye que la agroindustrialización ha generado un tipo de relaciones laborales que son perjudiciales para los trabajadores, y que las migraciones laborales son una consecuencia directa de este proceso. Por lo tanto, se recomienda que se tomen medidas para mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones sociales en este sector, así como se promueva el desarrollo de pequeñas explotaciones agroindustriales que permitan a los trabajadores obtener mejores condiciones de trabajo y salarios más altos.

Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación "Agroindustrialización y relaciones laborales en la coscuba del Ancho", financiado por el Ministerio de Educación Superior de la Universidad de la Ciudad de La Plata. El autor agradece a los participantes del estudio por su colaboración y a los miembros del equipo de investigación por su apoyo y colaboración.

ORIGEN, COMPOSICIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS JORNALEROS EN LA COSECHA DEL ANGÚ EN MORELOS

*Kim Sánchez**
*Adriana Saldaña***

RESUMEN

El objetivo de este documento es presentar los resultados preliminares de una investigación sobre las condiciones de trabajo de los jornaleros migrantes en la cosecha del angú en el estado de Morelos, tomando como referencia los datos recopilados durante la temporada 2002-2003. El angú u okra es una hortaliza no tradicional, cuyo destino es el mercado internacional. El caso analizado trata de una empresa extranjera que introdujo el cultivo de este producto a la entidad hace aproximadamente dos décadas, la cual controla y coordina el proceso que va desde su producción en el campo hasta su exportación. Con el tiempo, Río Grande se fue constituyendo como la principal empresa en el manejo del angú en Morelos. Las condiciones climáticas, tierra y mano de obra barata fueron los principales factores que atrajeron su atención hacia el estado. En el mercado de trabajo creado por el cultivo del producto se puede distinguir entre la mano de obra local y la migrante originaria del estado de Guerrero, esta última es la que nos interesa aquí. Los jornaleros migrantes que se enganchan al corte del angú provienen de ocho comunidades del vecino estado, para la mayoría de ellas este empleo representa su principal ingreso, que complementan con otras actividades que llevan a cabo en sus localidades o fuera de ellas.

* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Correo electrónico: <kimsa1910@yahoo.com.mx>.

** Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Correo electrónico: <adrianasr_99@yahoo.com>.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de una hortaliza no tradicional de exportación en Morelos, ha generado un nuevo espacio para la migración estacional de familias indígenas del vecino estado de Guerrero.¹ Se trata del angú u okra, un producto "exótico" que se destina exclusivamente al mercado internacional, sobre todo estadounidense. Su producción está coordinada estrechamente con las actividades de procesamiento y exportación, bajo el esquema de una estructura corporativa articulada a una cadena global de frutas y hortalizas frescas.

La configuración del mercado de trabajo ha estado marcada por las necesidades de desarrollo de la empresa, que tiene el liderazgo de esta actividad. Ejemplo de ello son algunos cambios recientes en la composición de la población jornalera, los cuales sin embargo no han sido determinados unilateralmente por la demanda creciente de trabajo, sino también como respuesta a dinámicas generadas en el ámbito de la oferta. La reorientación a nuevos destinos migratorios de parte de la fuerza de trabajo que tradicionalmente se hacía cargo de la cosecha, ha llevado a incorporar a otras comunidades indígenas a esta tarea. Ello ha dado lugar a diferentes ajustes en la interacción entre oferta y demanda, así como ha introducido diferenciaciones entre los propios jornaleros.

LA PRODUCCIÓN DE ANGÚ
EN MÉXICO Y MORELOS

La okra o angú (*Hibiscus esculentus* o *Abelmoschus esculentus*), es una hortaliza de origen africano que pertenece al selecto grupo de los productos no tradicionales de exportación.² En México es un pro-

¹ Este estudio forma parte de una investigación más amplia y en proceso acerca del papel de la horticultura en la conformación de los mercados de trabajo rural en el estado (Sánchez, 2001).

² Su origen fue posiblemente la región que hoy ocupa Etiopía y era cultivada en el antiguo Egipto en el siglo XII a.C., desde donde se extendió al norte de África y Medio Oriente. En cada país recibe diversos nombres, tales como: Lady's finger, gombo, quimbombó, ochro, bamia, bhindi, entre varios otros. Se cree que el nombre *okra* deriva de uno de los grupos lingüísticos del Níger-Congo, y como tal, el término fue incorporado al idioma inglés a fines del siglo XVIII. A fines de ese siglo ya era una hortaliza común en el sureste de Estados Unidos, donde fue introducida por esclavos africanos (*Food Reference Website*).

producto poco conocido fuera de las zonas donde se cultiva, si bien ocupa una superficie de entre tres y siete mil hectáreas anuales en unas cuantas regiones agrícolas del país.

Desde las primeras siembras, en la década de 1970, su producción ha estado orientada a las necesidades del mercado estadounidense, como ya se ha mencionado.³ La mayor parte se vende como producto fresco, aunque hay una pequeña cuota que se exporta congelada.

La principal región productora se localiza en el estado de Tamaulipas, con alrededor del 80 por ciento del volumen total exportado. Entre las restantes regiones agrícolas donde se ha cultivado las hortalizas con presencia constante se localizan en los estados de Guerrero y Morelos.

La producción de estos últimos estados, pese a su reducida escala, tiene una enorme ventaja competitiva: su estacionalidad, ya que mientras en la región norteña la temporada de cosecha va de mayo a julio, en Morelos y Guerrero se cosecha entre noviembre y abril. Además, en el caso de Morelos, el rendimiento promedio por hectárea casi duplica a la obtenida en Tamaulipas.⁴

Al igual que ocurre con otras frutas y hortalizas frescas que ingresan la privilegiada lista de productos no tradicionales de exportación, el desarrollo del cultivo del angú en México ha sido parte de la conformación de cadenas globales de mercancías que integran procesos interconectados de producción en el campo, actividades de procesamiento, empaque y exportación, así como aquéllas relacionadas con su comercialización y consumo (Raynolds, 1994).

El tipo de empresas involucradas y las estrategias que impulsan para mantener su competitividad, dentro de un mercado restringido y selecto, son variadas. En este apartado analizaremos algunos de los principales rasgos de la compañía que encabeza la producción de angú en el estado de Morelos.

En esta entidad el productor mayoritario es "Río Grande de Morelos", una empresa creada con capital estadounidense que actual-

³ Actualmente, en este país el abastecimiento está asegurado tanto por su propia producción (región sur y sureste), como por México y República Dominicana. Su mercado está formado por población afroamericana, de origen árabe y asiático, pero en época reciente se ha ampliado hacia otros sectores como parte de la tendencia a incorporar en las pautas de consumo más productos frescos y "saludables".

⁴ Entre 1990 y 2002, el rendimiento promedio nacional fue de 6.27 toneladas por hectárea; pero en el nivel de entidad federativa, Tamaulipas tuvo un rendimiento de 5.81 toneladas por hectárea, en tanto Morelos alcanzó 11 toneladas por hectárea (Sagar, 2003).

mente controla tres campos agrícolas, una planta empacadora y una fábrica de envases, concentrados en Tehuixtla y Puente de Ixtla, dos localidades al sur del estado.⁵

En el transcurso de una breve historia de casi dos décadas, esta empresa no sólo fue pionera en la introducción del cultivo en la entidad, sino que además ha modernizado sus diferentes sistemas de producción, procesamiento y transporte, así como modificado su estrategia de aprovisionamiento para reducir costos e incrementar su capacidad competitiva en el mercado.

El mayor de estos cambios, que permitió una completa reestructuración productiva, ocurrió entre 1996 y 1997, cuando la empresa decidió rentar la tierra para encargarse directamente de la producción, en lugar del sistema de agricultura por contrato que venía desarrollando con algunas dificultades.⁶ La apertura de su primer campo agrícola, "La Brasilerá", fue aparejada de grandes transformaciones en la forma de cultivar el producto, ya que permitió la introducción de maquinaria agrícola, la instalación de un sistema de riego por goteo, la planificación de diversos aspectos en el manejo del cultivo, entre otras. Como es fácil imaginar, esto significó un salto cualitativo en la organización del trabajo, en la productividad y la calidad del producto, así como en la racionalización de sus gastos. Junto con esta reestructuración y desarrollos tecnológicos, el procesamiento también fue mejorado, en particular por el uso de un sistema de enfriamiento antes del embarque y de transporte refrigerado hasta la frontera.⁷ Cabe mencionar que estos cambios también han estado marcados por la necesidad de satisfacer estrictos estándares establecidos en el mercado internacional de frutas y hortalizas frescas,

⁵ En Estados Unidos, figura como la Rio Grande Okra Sales Inc., con sede en Texas, la cual a su vez está ligada a otra compañía de mayor alcance, Atkin & Porter, con presencia en Tennessee y Florida.

⁶ Por razones de espacio no ahondaremos en cómo ocurrió este reemplazo de estrategias, sin embargo constituye un proceso de particular interés para explicar la relación entre la empresa y los ejidatarios de la región y, en general, de la forma de articulación de esta actividad en su economía.

⁷ En su planta empacadora la fruta es seleccionada, envasada y preparada en embarques especiales; durante y después de esta última actividad se somete a un proceso de enfriamiento que le permite llegar en condiciones adecuadas a su destino. Esta empresa trabaja en la tarde, con la carga que va llegando de los campos, y termina hasta que toda haya sido envasada y estibada a los transportistas. Al día siguiente de ser cosechado, el angú ya se encuentra cruzando la frontera por vía terrestre. Esta eficiencia amplía el margen para su distribución, ya que su vida de anaquel es de cinco a siete días.

bre todo porque el producto debe pasar por control fitosanitario en la frontera.⁸

A partir de estos importantes cambios, Río Grande de Morelos ha aumentado paulatinamente su superficie de siembra. De las 60 hectáreas que originalmente ocupó "La Brasilera", ahora cuenta con cerca de 500 hectáreas, distribuidas en dos campos agrícolas más, bien no sólo incluyen la siembra de angú.⁹ Cerca de una tercera parte de esta extensión es rotada en descanso y, en el área sembrada, programan tres etapas escalonadas con un mes de diferencia, lo cual permite cosechar desde noviembre hasta abril.

Sin embargo, las innovaciones tecnológicas no han modificado esencialmente las condiciones en que se cosecha el producto, que continúa realizándose de forma manual. Debido a la escasez relativa de mano de obra local para cubrir esta demanda específica, se ha generado el característico mercado de trabajo estacional al que concurren jornaleros agrícolas migrantes y el cual hoy en día brinda empleo a algo más de 300 trabajadores.

Antes de referirnos a los antecedentes de este mercado laboral y su composición actual, trataremos de describir brevemente algunos aspectos de la cosecha para explicar las particularidades de la demanda y el consumo de la fuerza de trabajo.

La okra o angú crece rápidamente, entre 55 y 60 días después de la siembra y no requiere cuidados especiales durante su desarrollo, bien lleva un riguroso plan de riego, fertilización y control fitosanitario. La cosecha, en cambio, es una fase crítica que exige gran atención y revisión, ya que luego de cinco o seis días de su floración, la planta debe comenzar a ser pizcada manualmente cada día, cuando los frutos están tiernos y alcanzan el tamaño adecuado (de lo contrario el fruto madura y endurece). Además, el rendimiento ulterior de la planta depende de que se realice un buen corte. Esta labor, estimada a razón de dos trabajadores por hectárea, requiere que utilicen guan-

⁸ Pero en realidad, las normas que rigen este tipo de mercancías no sólo responden a cuestiones de seguridad fitosanitaria, sino también tienen que ver con su apariencia física. Aunque a primera vista, esta última refiere a propiedades que debe tener un producto vegetal para que sea apto para el consumo humano (que no contenga residuos tóxicos o esté seriamente dañado a causa de enfermedades, insectos, materias extrañas u otros), también incluye supuestas características idóneas de frescura, ternura, forma, tamaño y otras difícilmente clasificables como *naturales*, tales como "bien presentada" o "no muy deforme", que invitan a pensar hasta qué punto constituyen una barrera de entrada impuesta por estas redes globales.

⁹ Éstos son "La Brasilera Chica" y "Torres Burgos", en el límite de Tehuixtla con Puente de Ixtla.

es de goma ya que la fina pelusa que recubre el fruto es muy irritante para la piel.

La cosecha se prolonga por alrededor de tres meses, dependiendo de la calidad de la planta. Como antes mencionamos, el escalonamiento del cultivo en etapas amplía este periodo a cinco meses y, en igual medida, el margen de tiempo en que se introduce fresco al mercado. Cada etapa tiene, a su vez, un periodo "pico", concentrado en cerca de cuatro o seis semanas intermedias en que las plantas alcanzan su mayor potencial y en las cuales se debe tratar de cosechar al máximo, ya que el fruto madura rápidamente (si éste no es cortado cuando alcanza el tamaño requerido, no puede aprovecharse al día siguiente).

Entonces, dando por descontado que el productor ha cubierto las medidas e inversión necesarias para obtener un buen cultivo, la productividad está determinada por el corte. La labor de los cortadores, por lo tanto, es fundamental no sólo para garantizar el suministro continuo de materia prima para abastecer la empacadora y cubrir las cuotas de exportación previstas, sino que también constituye el primer proceso de selección de mercancías con "calidad de exportación".

La empresa ha tenido claro, desde un principio, el carácter decisivo de la cosecha y sus requerimientos de mano de obra. Por lo mismo, aun en tiempo del esquema de agricultura por contrato, la empresa se encargaba de suministrar y distribuir los cortadores entre los productores locales, de acuerdo con las demandas particulares de trabajo que éstos tuvieran, pero también del interés preferente que la empresa tuviera sobre las mejores cosechas o para adecuarlas a las cambiantes condiciones del mercado.

Organización de la cosecha y condiciones de trabajo

Ya hemos adelantado aspectos centrales de la organización del trabajo y su relación con la estrategia productiva de la empresa. Algunos de estos elementos estaban ya presentes en la época en que compraba las cosechas a los productores locales, tales como el escalonamiento de la siembra¹⁰ y la necesidad de hacer constantes ajustes en el

¹⁰ Durante el tiempo en que los productores locales se encargaban del cultivo, la empresa condicionaba a éstos el momento en que debían sembrar, de acuerdo con una planificación que trataba de asegurar el suministro continuo durante este lapso de cinco meses.

ministro de fuerza de trabajo acorde con los altibajos previsibles e imprevisibles de la cosecha.

Asimismo, la forma de pago se ha apoyado, desde el principio, en un sistema doble que alterna el pago por día o jornal en las semanas de menor rendimiento, con el pago a destajo en las semanas "pico". En este último caso, la búsqueda de mayores ingresos resulta el medio para involucrar a los jornaleros en la intensificación de la jornada de trabajo. El pago siempre ha estado a cargo del productor y los jornaleros consideran que éste es más seguro bajo la administración empresarial, ya que sus otrora patrones (los ejidatarios), no siempre cumplían en los términos acordados.

Sin embargo, el sistema de administración laboral y las condiciones de trabajo se han transformado, en general, bajo las nuevas políticas de la empresa, alcanzando mayores niveles de explotación y productividad. Anteriormente, por ejemplo, si bien la empresa suministraba a cada ejidatario los cortadores necesarios de acuerdo con la extensión cultivada, a la vez que ejercía un control indirecto de su desempeño por medio de los enganchadores y del proceso de selección de la empacadora, la organización y gestión directa de la cosecha quedaba a cargo de los propios productores. También ellos establecían, de acuerdo con su criterio y experiencia, los horarios de trabajo de los jornaleros.

En cambio, bajo la dirección centralizada en los campos agrícolas, existen múltiples mecanismos para supervisar estrechamente la calidad y rendimientos del corte de cada trabajador. Por ejemplo, los campos agrícolas se dividen en unidades de menor tamaño, denominados módulos, y en éstos los cortadores son distribuidos en pequeñas cuadrillas, asignando a cada cual determinados surcos con una extensión equivalente a cinco tareas (media hectárea). El hecho de que estos surcos sean los mismos que trabajará durante toda la cosecha,¹¹ se ha vuelto el principal instrumento que garantiza la calidad óptima del producto cortado, pues cualquier descuido del trabajador se refleja directamente en sus ingresos, sobre todo cuando el pago es a destajo. Paradójicamente, ahora son los jornaleros quienes se responsabilizan, en primera instancia, del cuidado de la planta, cuando antes era labor de los productores-ejidatarios. Sin embargo, el trabajo del cortador está, en los hechos, bajo una doble fiscalización: por un lado, del enganchador que los reclutó y que luego cumple la función de capataz; por el otro, de un empleado de la empresa que

¹¹ En rigor, los cortadores de la primera etapa, vuelven a ser ocupados en la tercera etapa, donde se les asignarán otros surcos en un módulo diferente.

lleva el control general de los módulos (su rendimiento diario) y las nóminas de pago.¹²

Otro aspecto que hay que resaltar es el grado de división del trabajo que surgió con el funcionamiento de los campos agrícolas. Actualmente, además de los cortadores, existe la función de "carretillero" y de "apuntador"; el primero se encarga del acarreo de las cajas que cada jornalero acumula al pie de los surcos asignados; además, durante las semanas en que se paga por caja, este trabajador o un apuntador llevan el registro de la cantidad realizada por cada uno y entrega esa información al empleado de la empresa antes mencionado. Existen tantos carretilleros como módulos en operación, la duración de su jornada es menor y recibe un sueldo fijo por día durante toda la temporada.

Esta especialización en el corte también ha evolucionado desde que iniciaron los propios campos agrícolas, ya que al principio los jornaleros eran ocupados en diversas tareas que ahora son parcial o totalmente mecanizadas, tales como la siembra y la aplicación de fertilizantes. Esto no significa que en caso de requerirse, la empresa utilice uno o varios jornaleros para otras labores. Más bien apuntamos el hecho de que, bajo el esquema de trabajo actual, se trata de aprovechar al máximo la habilidad y capacidad de los jornaleros para el corte mismo.

Para desarrollar esta labor, los cortadores se cuelgan una caja vertical de madera o bote de plástico a la espalda y avanzan cortando el fruto apropiado, escogido a la vista y al tacto. Estas cargas personales son vaciadas en cajas de 11 a 12 kilogramos que están a la orilla de sus respectivos surcos, donde se van apilando mientras el carretillero comienza a trasladarlas hasta una "enramada" donde se les protege del sol. A partir del mediodía, los camiones se encargarán de trasladar el producto hasta la empacadora para iniciar el siguiente eslabón de la cadena.

Estas características y su relación con las restantes fases de la secuencia, determinan los ritmos de actividad en campo.¹³ Desde el punto de vista de la demanda diaria de trabajo, las semanas "pico"

¹² De hecho, los módulos constituyen la unidad básica de organización y control de la producción. La calendarización de tareas (siembra, riego, fertilización, etc.), el control de los gastos de inversión y la productividad, así como los requerimientos de mano de obra, son todos ellos planificados y supervisados con base en módulos.

¹³ Toda vez que el producto cosechado debe ser seleccionado, envasado y embarcado día a día, la producción de campo debe estar coordinada con la capacidad de la empacadora.

presentan jornadas de alrededor de nueve horas, mientras que las manas previas y posteriores la duración de la jornada es de cinco horas o menos.

Para dar una idea de los rendimientos del trabajo se puede mencionar que, en la cosecha 2002-2003, el volumen de producción en temporada baja era de mil a 1 500 cajas (o menos), mientras que en temporada alta era de dos mil a 2 500 (o más), correspondientes a una superficie total cercana a las 300 hectáreas. Hay que recordar que estos rendimientos no corresponden al producto del trabajo de todos los cortadores, pues el escalonamiento del cultivo condiciona que la llegada y salida de la población jornalera no sea uniforme; entonces, podría decirse que sólo en periodos de mayor producción (enero a marzo) hay pleno empleo para el conjunto de los migrantes.¹⁴

Estos pocos elementos permiten ilustrar el nivel de especialización, productividad, disciplina laboral y flexibilidad de los cortadores para ajustarse a los requerimientos de la cosecha. El angú es un ejemplo más de cómo los flujos de migración rural-rural se han orientado a satisfacer las necesidades de mano de obra de este tipo de cultivos intensivos orientados a la exportación.

ANTECEDENTES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO ESTACIONAL DEL ANGÚ

El cultivo del angú fue introducido en Morelos a principios de la década de 1980 desde el colindante estado de Guerrero, donde se sembraba años antes por iniciativa de comercializadores estadounidenses. De acuerdo con nuestros informantes, en la zona de Iguala, Guerrero, había *brokers* que financiaban a productores locales y pequeños empresarios que rentaban tierras para ese fin. Entre estos últimos se encontraban algunos ejidatarios morelenses de Tehuixtla y Puente de Ixtla que habían incursionado en cultivos comerciales como el melón.

Su papel fue determinante en la difusión del cultivo en el sur de Morelos, pues fungieron como intermediarios de los capitales extranjeros para reunir los diferentes componentes necesarios para desarrollar una actividad independiente en nuevas tierras. Respecto a la mano de obra, los primeros jornaleros traídos a Morelos para cubrir la cosecha del angú fueron reclutados de aquella zona agrícola de

¹⁴ En enero, la primera etapa está terminando, la segunda está en plena producción y la tercera está iniciando.

Guerrero, utilizando tanto el sistema de enganche que ya operaba en ese lugar, como la contratación directa de trabajadores independientes.

En este proceso y debido a la relación preferente de los nuevos intermediarios morelenses con ciertos enganchadores, pronto predominó la población jornalera originaria de una comunidad del norte de Guerrero: Tula del Río, del municipio Mártir de Cuilapan.

Ellos eran también migrantes temporales en aquel mercado laboral, a quienes ahora se les ofrecía buscarlos directamente en su comunidad y llevarlos al término de la cosecha. La elección se vio favorecida por la proximidad de Tula del Río a Puente de Ixtla, además de tener acceso directo a la carretera México-Acapulco.

En aquellos años, la empresa Río Grande utilizaba su propia empaedora como punto de llegada de los jornaleros agrícolas, desde donde los distribuían en las parcelas con quienes tenía contrato. El transporte local también estaba a su cargo, pues así podía reubicar a los trabajadores una vez que terminaban la cosecha de cada huerta. Este sistema de movilización de la mano de obra tenía sus inconvenientes, sobre todo porque la empresa llegó a depender de ejidatarios dispersos en un amplio radio de operación.¹⁵ Por su parte, los jornaleros consideraban la repartición como una cuestión de suerte, ya que había productores que no cuidaban la planta o que no invertían suficiente para que el producto "se diera bien", lo cual se reflejaba directamente en el ingreso de los trabajadores.

Cada productor asignaba a los jornaleros un espacio para instalarse mientras trabajaran su tierra. Se les suministraban escasos materiales para construir su vivienda temporal, consistentes en cartón y zacate de arroz.¹⁶

Durante todo este primer periodo, los jornaleros se fueron haciendo expertos en el corte del ángu y formaron a sus hijos como mano de obra de recambio. Posteriormente, las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros se ajustaron a la reestructuración que representó el control corporativo de la producción, pero también a algunas presiones que los trabajadores hicieron, por medio de sus encargados. Fue así como la empresa construyó galerías de lámina galvanizada dentro de los terrenos rentados, donde se aloja toda la población migrante. Ahora existen dos campamentos a los que se les

¹⁵ Habiendo establecido como sede de sus operaciones los municipios de Tehuixtla y Puente de Ixtla, a la larga se habían extendido a 10 municipios más (SARH, 1987, 1988, 1992, 1993).

¹⁶ Algunos trabajadores recuerdan que esos materiales atraían muchos alacranes y sufrían frecuentes picaduras.

hecho algunas mejoras en la calidad de la construcción y dotación de servicios, aunque la empresa siempre se resiste a invertir en obras duraderas, argumentando que los terrenos no son de su propiedad.¹⁷

Hasta hace un par de años, la cosecha era un mercado laboral casi exclusivo de la gente de Tula del Río. Sin embargo, desde hace dos temporadas se han incorporado nuevos contingentes que provienen de otras comunidades también de Guerrero. Su integración a la cosecha del angú resulta de conexiones directas entre trabajadores independientes y empleados de Río Grande, ya que no tienen ningún contacto con los de Tula. En virtud de estos contactos, la empresa adoptó la iniciativa de ofrecerles el puesto de "encargados" (engañadores y capataces) de la gente que pudieran reclutar en sus respectivas comunidades. Este incremento de la población jornalera sólo fue resultado de la extensión de la superficie cultivada, sino también de una contracción en la cantidad de trabajadores que Tula del Río podía ofrecer, debido a la creciente tendencia a que los jóvenes migren hacia Estados Unidos.

La búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento de mano de obra resultó una necesidad imperiosa, lo cual ha significado mayores gastos para su reclutamiento y traslado, ya que las comunidades de origen están localizadas a mayor distancia y las vías de acceso no son tan expeditas, si bien varias de ellas son próximas entre sí y se concentran en Olinalá como punto de embarque. Por otra parte, esta mano de obra no cuenta con el nivel de especialización que los trabajadores habían alcanzado.

En contraparte a estas limitaciones, los nuevos jornaleros han demostrado gran capacidad de adaptación al cultivo, tienen altos rendimientos y, al parecer de los empleadores, resultan más disciplinados que sus antecesores a las directrices laborales. De acuerdo con encuestas realizadas en los campamentos, la mayoría de esta mano de obra tenía experiencia previa como jornaleros temporales en el cultivo de hortalizas en otras regiones agrícolas, donde las condiciones de trabajo, los salarios, la vivienda y otros aspectos de sus condiciones de vida eran aún más penosas y precarias.

La empresa ha sabido aprovechar esta circunstancia, exigiendo la total disposición de los nuevos jornaleros para ajustarse a las fluctuaciones en la demanda de trabajo. Por su parte, entre los cor-

¹⁷ En ello ha influido directamente la intervención del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, que cuenta con promotores en ambos campamentos: "La Brasileña" y "La Brasileña Chica"; este último cubre las necesidades de mano de obra del campo Torres Burgos, dada su proximidad.

tadores de Tula existe la preocupación de ser desplazados en futuras cosechas, debido a los elogiosos comentarios que los empleadores hacen de los recién llegados. Esta situación genera competencia y cierta hostilidad latente entre los grupos de jornaleros, todo lo cual brinda ventajas adicionales a la empresa para administrar la fuerza de trabajo. Estas divisiones son remarcadas por el hecho de que la población de Tula está concentrada en un campamento ("La Brasileña Chica"), mientras los restantes grupos se encuentran en el otro ("La Brasileña").

De cualquier manera, lo cierto es que la relativa diversificación de las estrategias migratorias de la comunidad de Tula, ha llevado a que la empresa multiplique también sus fuentes de aprovisionamiento de mano de obra. La institucionalización de los canales de reclutamiento en las nuevas comunidades y su incorporación definitiva al área de influencia del angü deberá de verificarse en las próximas cosechas.

ACERCA DE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN

Los jornaleros que se enganchan al corte del angü en Morelos provienen de ocho comunidades nahuas ubicadas en municipios que pertenecen a las regiones Centro, Norte y Montaña del estado de Guerrero (véase el cuadro 1). Estos municipios se encuentran colindantes con el estado de Morelos, con excepción de Cuálac. De todas ellas, Tula del Río, Xitopontla y Chiaucingo, son las más relevantes por el volumen de mano de obra que aportan a la cosecha del angü.

También cabe destacar que, salvo en el caso de Santa Catarina, las restantes localidades del municipio de Ahuacotzingo son vecinas menores de la comunidad de Xitopontla. A su vez, Xitopontla y Chiaucingo, aunque divididas administrativamente en dos municipios distintos, son comunidades con múltiples vínculos y sus vías de comunicación confluyen en Olinalá.

La mayoría de éstas son localidades pequeñas, con menos de 500 habitantes, pertenecientes a municipios catalogados como de alta y muy alta marginación. Para ilustrar los bajos niveles de bienestar de estas comunidades, podemos mencionar elevados índices de analfabetismo y de déficit en la dotación de servicios a la vivienda.

En cuanto al grado de escolaridad y analfabetismo en las principales localidades proveedoras de migrantes, los datos censales indican que en Xitopontla, 22.5 por ciento de niños entre los seis y los 14 años no asisten a la escuela. Mientras que para el mismo grupo,

CUADRO 1
COMUNIDADES DE ORIGEN DE LOS MIGRANTES ESTACIONALES

<i>Localidad</i>	<i>Municipio</i>
Xitopontla	Ahuacotzingo
Santa Catarina	Ahuacotzingo
Ocotepec	Ahuacotzingo
Tlalchichilco	Ahuacotzingo
Xumiltepec	Ahuacotzingo
Chiaucingo	Cuálac
Tula del Río	Mártir de Cuilapan
Tehuaxtitlán	Olinalá

FUENTE: Pronjag, Coordinación Estatal Morelos. Temporada noviembre 2002-abril 2003.

en Chiaucingo es de 9.28 por ciento y para Tula del Río es del 21.29 por ciento.

En cuanto al nivel de analfabetismo, 64.93 por ciento de población de 15 años y más en Xitopontla es analfabeta. Mientras que para el mismo grupo en Chiaucingo es de 43.23 por ciento y para Tula del Río es de 62.67 por ciento.

En cuanto a los servicios a la vivienda, por ejemplo, en Chiaucingo sólo la mitad de la población cuenta con agua corriente y apenas una cuarta parte con drenaje (INEGI, 2000). Asimismo, en el conjunto de las comunidades, entre ocho y nueve hogares utilizan como combustible la leña.

Estos índices se encuentran matizados en el caso de Tula del Río, ya que es la localidad que tiene mayor cobertura en servicios, pues casi la mitad de sus viviendas habitadas cuenta con agua, luz y drenaje, así como un menor porcentaje de viviendas que utilizan leña.

Como ocurre en muchas otras comunidades rezagadas en sus respectivas regiones, su principal actividad es la agricultura de subsistencia de minifundio, cuya baja rentabilidad y déficit obliga, necesariamente, a buscar otros medios para obtener ingresos, tales como la actividad artesanal de elaboración de rollos de palma para el tejido de sombreros que venden a intermediarios extrarregionales. Además, los hombres con frecuencia se emplean en la albañilería dentro de sus comunidades o en pueblos y ciudades cercanas (Olinalá, Iguala, Chilpancingo) y, en el caso de Tula, que está a la orilla del río Balsas, también se dedican comercialmente a la pesca para mercados locales.

Sin embargo, la falta de fuentes de empleo local lleva, por lo común, a la migración dentro y fuera del estado. Al parecer, la mayoría de estos desplazamientos se realizan en temporada de "secas", debido a que los restantes meses del año se dedican a la siembra del maíz, frijol, cacahuete y chile, destinados básicamente para el autoconsumo, utilizando la mano de obra familiar. Sin embargo, la carencia de tierra y/o su baja productividad ha llevado en algunos casos, como en Tula, a cierto abandono de la actividad agrícola.

Las trayectorias de los migrantes muestran diversidad de destinos y ocupaciones. En el medio urbano se emplean en actividades como la albañilería y en servicios de baja calificación, mientras que en el medio rural se concentran en mercados estacionales de trabajo asociados a cultivos intensivos de mano de obra.

Estos migrantes no sólo se han empleado en el corte del angú, también se ha identificado su afluencia en otras regiones agrícolas. Por ejemplo, la población de Xitopontla se ha contratado en los cultivos de melón en Ciudad Altamirano, Guerrero, y de jitomate y chile en Sinaloa. Mientras que la gente de Chiaucingo se ha desplazado a La Paz, Baja California Sur, para el corte del melón. Desde esta última comunidad también han migrado hacia la ciudad de México para el trabajo de obras, de "lavautos" y, en el caso de las mujeres, en el servicio doméstico y como cocineras; asimismo, hay evidencia de migración hacia Estados Unidos.

En el caso de Tula del Río, la mayoría de los migrantes estacionales sólo se habían empleado en el angú. De acuerdo con las encuestas y entrevistas a personas de esta comunidad, anteriormente su principal vínculo con el mercado de trabajo de las cosechas fue en la región agrícola de Iguala, donde se han cultivado diferentes hortalizas, en especial el melón. A partir de la introducción del angú en ese lugar, esos jornaleros agrícolas temporales se especializaron en este cultivo, cuestión que fue alentada al promover su reorientación a los campos de Morelos.

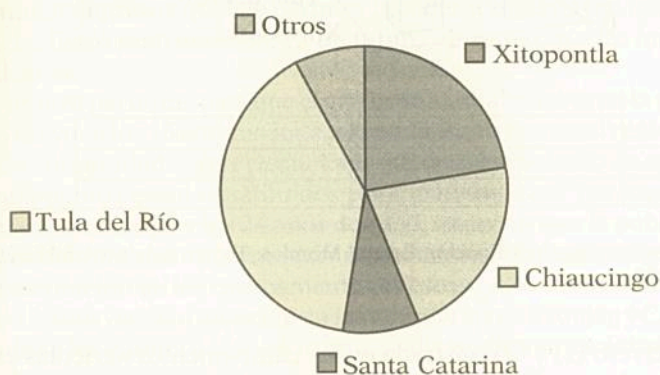
En este contexto, la evidencia disponible permite afirmar que la migración estacional al corte del angú se ha convertido en una de las principales (o exclusiva) fuentes de ingreso monetario, que permite complementar la limitada economía de estas comunidades, en particular en los casos de Tula y Xitopontla.

Además, como suele ocurrir en otros casos, dado que el empleo en la cosecha es de noviembre a abril (en la temporada de secas), en principio es una ocupación que no excluye el trabajo en las propias parcelas. Los migrantes retornan con tiempo suficiente para preparar la tierra y esperar las primeras lluvias.

Los migrantes en la cosecha del angú en 2002-2003

La cédula básica para población migrante (familias) de Pronjag-Morelos capturada en la temporada 2002-2003, reporta la presencia de 557 personas provenientes de ocho comunidades del colindante estado de Guerrero. Como ya lo mencionamos anteriormente, tres son las más importantes por su participación proporcional en este flujo migratorio, lo cual puede ilustrarse en la siguiente gráfica.

GRÁFICA 1
PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL DE LAS COMUNIDADES EMISORAS

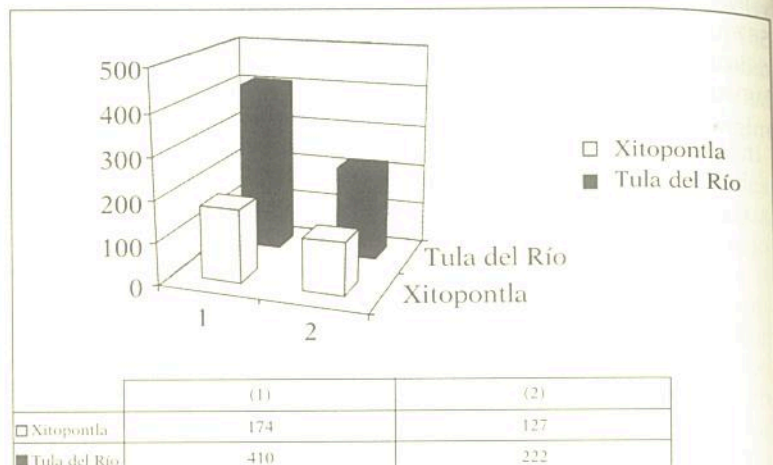


FUENTE: Pronjag, Coordinación Estatal Morelos. Temporada noviembre 2002-abril 2003.

De la población total de 557 personas, las tres comunidades predominantes conjuntamente suman 83.66 por ciento de los migrantes. Para los casos de Tula y Xitopontla, su participación es más significativa si se compara con sus comunidades de origen.

Esta relación muestra que entre noviembre y abril, momento en que las comunidades se contratan en el corte del angú; para el caso de Xitopontla, 72.98 por ciento de la población total se encuentra en los campamentos, mientras que para el caso de Tula del Río, 54.14 por ciento. Se puede decir que un pequeño grupo de Xitopontla se queda en sus comunidades y pueden corresponder a las personas de mayor edad. La otra mitad de la población de Tula del Río puede recaer en los grupos de migrantes internacionales y grupos de mayor edad que se quedan a cuidar las viviendas y los animales. En la gráfica 2 se muestra la población total censada en esas localidades

GRÁFICA 2
POBLACIÓN EN LAS "BRASILERAS" EN COMPARACIÓN
CON SUS COMUNIDADES DE ORIGEN



FUENTE: Pronjag, Coordinación Estatal Morelos. Temporada noviembre 2002-abril 2003.

en Guerrero (1) y la registrada en los campamentos agrícolas en el periodo de cosecha (2).

Sobre la composición de la población migrante

Los campamentos albergan un total de 132 unidades domésticas. En orden de importancia, por lugar de origen, son: Tula (49), Xitopontla (30), Chiaucingo (28) y Santa Catarina (12), mientras las poblaciones restantes suman 13 unidades.

La población está subdividida en dos campamentos: "La Brasilerá Chica", donde se encuentran 43 unidades provenientes de Tula del Río, equivalentes a 183 personas. En el otro campamento, "La Brasilerá" están distribuidas 89 unidades, con una población total de 375 personas, correspondientes a los migrantes de las restantes localidades, además de seis unidades originarias de Tula del Río que han sido ubicadas en este lugar por la gran cantidad de módulos con que cuenta.

En conjunto, básicamente se trata de una migración familiar, ya que sólo 5.30 por ciento del total corresponde a migrantes solos. En

cuanto a la migración familiar, se detectan diferentes variantes: matrimonios sin hijos, nucleares y extensos.¹⁸

Dentro de las modalidades familiares de migración, la más importante es la de tipo nuclear con 64.39 por ciento del total de todas las unidades (incluyendo en éstas las familias monoparentales). Deagregando los datos por comunidad encontramos que, en el caso de Tula, de la totalidad de unidades familiares, 71.4 por ciento corresponde a unidades nucleares. Para Xitopontla y Chiaucingo, 66.6 por ciento y 53.5 por ciento, respectivamente.

También es de notar que 12.9 por ciento de la totalidad de unidades domésticas pertenece a matrimonios sin hijos, quienes son parejas jóvenes para quienes esta empresa constituye la oportunidad de acumular ingresos que les permita acceder a una mayor independencia. Estos matrimonios, en un futuro, se sumarán a las familias nucleares.

Por otra parte, destaca que el grado de analfabetismo en la población mayor a los 15 años en los campamentos es menor al registrado en las comunidades de origen. Esto puede ser resultado de que los campamentos están constituidos principalmente por personas que oscilan entre los 15 y los 24 años de edad, mientras que la población mayor habitualmente permanece en sus comunidades de origen y su representación en los campamentos es escasa. Los niños entre los 0 y los 12 años reciben atención en las guarderías de Pronjag y Conafe, donde se les enseña a leer, escribir y realizan diferentes actividades escolares.

Los jornaleros agrícolas

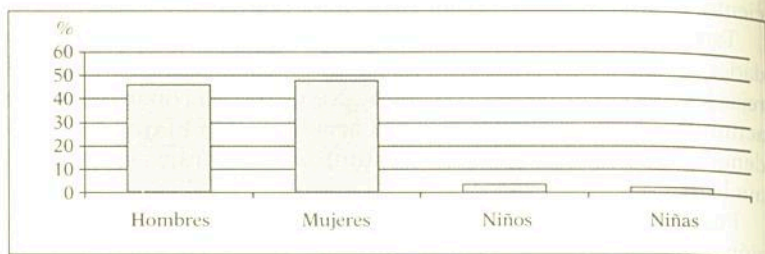
De esta población de 557 personas, el número correspondiente a los jornaleros asalariados es de 306 personas que representa 55 por ciento de la población total dentro de los campamentos.

En cuanto al porcentaje de jornaleros dentro de la población migrante en las tres comunidades más importantes es superior al 50 por ciento, excepto el caso de Santa Catarina, donde los jornaleros representa 63.8 por ciento del total de la población originaria de esa comunidad. La mayoría de los acompañantes que no trabajan son los hijos menores de 14 años.

¹⁸ Otra categoría adicional, de escasa representatividad, son las unidades compuestas, las cuales están básicamente integradas por grupos de hombres mayores de 15 años vinculados por lazos de amistad y parentesco.

Por otra parte, se puede señalar que en el total de la población jornalera, los adultos varones equivalen al 46.08 por ciento, las mujeres adultas al 48.04 por ciento, los niños jornaleros corresponde al 3.27 por ciento, mientras que las niñas jornaleras representan 2.61 por ciento (véase la gráfica 3).

GRÁFICA 3
JORNALEROS ADULTOS Y NIÑOS POR SEXO



FUENTE: Pronjag, Coordinación Estatal Morelos. Temporada noviembre 2002-abril 2003.

La baja presencia de la mano de obra infantil es el resultado de políticas de la empresa que, formalmente, emplea trabajadores a partir de los 16 años (edad mínima legal en condiciones específicas). Aunque en la práctica los admite desde los 14 años sin registrarlos en su nómina, situación que no les permite gozar de seguro social o prestaciones. Aun en el caso de los trabajadores de 16 a 18 años, la ley establece que deberían realizar trabajos que no sean penosos, impliquen manejo de sustancias tóxicas o peligrosas y otras normas sobre horarios, duración de la jornada y lugares de trabajo, condiciones que no se cumplen.

Si consideramos los grupos de edad, destaca que la población de 15 a 24 años representa un porcentaje mucho más alto que en sus comunidades de origen. Si tomamos en cuenta a las tres comunidades más importantes, los jóvenes de estas edades encarnan 13.93 por ciento de su población mientras que en el nicho migratorio son 25.20 por ciento. Destaca Chiaucingo, en donde la diferencia es más marcada ya que los jóvenes en la comunidad son 15.73 por ciento de su población, mientras que en el nicho migratorio comprenden 31.62 por ciento. Si consideramos que éstos son los grupos más importantes como fuerza de trabajo, es de notar que la mano de obra es muy joven, lo cual resulta adecuado para obtener altos niveles de productividad e intensificación del trabajo en la cosecha.

Asimismo, la gráfica 3 nos muestra que el número de mujeres en el corte es mayor que el de los hombres, lo cual permite hablar de la feminización de la mano de obra que corresponde a la tendencia general en el trabajo rural observada en diferentes regiones agrícolas del país.

Esta feminización de la mano de obra se encuentra más marcada en el caso de Tula, ya que 59.16 por ciento de cortadores provenientes de esta comunidad son mujeres. Mientras para el caso de Xitopontla es de 53.03 por ciento. En el caso de Chiaucingo menos de la mitad de la población jornalera son mujeres. Entre las otras comunidades con poca población en los campamentos cabe mencionar que los provenientes de Santa Catarina contribuyen con 9.80 por ciento de la mano de obra, de los cuales menos de una cuarta parte son mujeres trabajadoras (23 por ciento).

En el caso de Tula del Río, la incorporación de mujeres al trabajo asalariado está en relación directa con la ausencia de hombres en sus comunidades de origen, como resultado de la creciente tendencia a la migración internacional, hacia donde se ha reorientado la mano de obra masculina.

CUADRO 2
JORNALEROS POR SEXO

<i>Localidad</i>	<i>Hombres (%)</i>	<i>Mujeres (%)</i>	<i>Total</i>
Tula del Río	40.83	59.16	120
Xitopontla	46.96	53.03	66
Chiaucingo	55.73	44.26	120

FUENTE: Pronjag, Coordinación Estatal Morelos. Temporada noviembre 2002-abril 2003.

Siguiendo con el caso de Tula del Río, el grupo de mujeres que laboran en el corte del angú representa una presencia importante en los grupos entre los 15 y los 25 años, donde hay una clara ausencia de hombres que, según nuestros informantes, migran como ya se mencionó, hacia Estados Unidos.¹⁹ Como se ha constatado en otros casos, estos primeros migrantes internacionales son mayoritariamente hombres jóvenes.

¹⁹ De acuerdo con estas fuentes, los jóvenes de Tula del Río entre los 15 y los 25 años están migrando principalmente hacia California, Chicago y Houston.

Esta afirmación es corroborada por el hecho de que la población masculina que se encuentra en el campamento (sin considerar los menores de 15 años) se concentra entre los 35 y 55 años de edad. En efecto, algunos de los encuestados en este rango de edad habían viajado al "norte", pero regresaron después de una corta estancia, en tanto otros no estaban dispuestos siquiera a embarcarse en un proyecto tan incierto.

Eso impacta en el hecho de que las mujeres no viajan solas sino que son dependientes de un hombre por su calidad de acompañantes de padres, esposos o suegros. Por lo mismo, la feminización no se corresponde con una importante presencia de hogares jefaturados por mujeres, los cuales alcanzan apenas 15.29 por ciento (con respecto al total de familias nucleares).

En suma, estos elementos sobre la composición interna de la mano de obra y sus acompañantes ayudan a entender cómo se interrelacionan las estrategias de incorporación de las familias migrantes a este empleo estacional. Para profundizar en ello será necesario ampliar estos estudios en las siguientes temporadas. Por ahora se puede afirmar que si bien la afluencia significativa de jóvenes y de mujeres ocurre en todas las comunidades de origen, estos fenómenos son especialmente notables entre los migrantes de Tula del Río debido a la mencionada incursión de los jóvenes varones en una migración de largo alcance.

Por su parte, la empresa capitaliza en su beneficio las características de las comunidades proveedoras de mano de obra, aprovechando en su relación con cada contingente de trabajadores sus antecedentes migratorios, grado de especialización y disciplina laboral.

CONCLUSIONES

La introducción del cultivo del angú en Morelos no sólo ha significado cambios en *qué* se produce, sino también en *cómo*. En definitiva, la firma Rio Grande Okra Sales Inc. constituye una empresa global que, en Morelos, ha dirigido la construcción de una amplia red que interconecta trabajo y servicios de origen regional y extrarregional, cuyo nodo local se sitúa en las localidades vecinas de Tehuixtla y Puente de Ixtla.

En el actual contexto de deterioro de las bases materiales de reproducción de la pequeña agricultura en Morelos y su área de influencia en municipios colindantes de Guerrero, la empresa ha tenido la posibilidad de acceder a recursos estratégicos.

Tierra y trabajo baratos compensan, en mayor o menor medida, el incremento relativo de los costos derivados de producir en la periferia y a gran distancia de sus centros de distribución en Estados Unidos, sobre todo por el carácter perecedero del angú. La evidencia apunta a confirmar la idea de la importancia que tiene en ese tipo de cadenas productivas la dislocación de sus fuentes de aprovisionamiento, no sólo por el acceso a estos recursos sino, además, porque permite un mayor control de espacios de mercado, pues dispone de un producto *exótico* de alta calidad en invierno. Así, un discreto volumen puede ser un factor poderoso para asegurar su presencia durante todo el año en este peculiar nicho de mercado.

Obtener un producto de calidad consistente en los montos y tiempos requeridos exige una alta inversión de capital en infraestructura tecnológica, uso flexible e intensivo de la mano de obra, así como eficiencia administrativa. Todo ello no estaba al alcance de los pequeños productores morelenses, quienes además carecían de los contactos apropiados para ingresar al mercado de exportación. En cambio, han preferido limitarse a rentar sus parcelas a la empresa, obteniendo el ingreso adicional del programa oficial de Procampo por el hecho de no dejar sus tierras en desuso (aunque ellos mismos no siembren).

Entonces, a diferencia de quienes sostienen que el cultivo de productos no tradicionales de exportación es una vía redituable en el nivel microrregional, el angú no ha resultado rentable en extensiones compactas, ni ha permitido ingresar a un mercado "abierto", libre de monopolios. En ese sentido, la producción de este cultivo no ha representado una alternativa real de desarrollo sustentable para los pequeños productores agrícolas de la región sur del estado de Morelos, pese a que a corto plazo represente para los rentistas un ingreso "sin riesgos".

Por otra parte, la integración de los jornaleros migrantes en la cosecha, ha sido uno de los pilares de su alta rentabilidad y se ha logrado por medio de refuncionalizar estructuras y prácticas preexistentes, tales como la tradicional migración de campesinos-jornaleros desde Guerrero a Morelos y los sistemas de intermediación laboral, que articulan su demanda con una apreciable oferta de fuerza de trabajo en regiones de menor desarrollo y altos índices de marginación.²⁰

²⁰ En Morelos ha sido extendida la práctica de categorías intermediarias como cabos y capitanes, cuya principal función consiste en reclutar trabajadores, formar cuadrillas y organizar la labor del corte.

La falta de oportunidades de empleo en su zona de origen y de mejores alternativas en otros mercados laborales accesibles, ha facilitado la ampliación y diversificación de vínculos de la empresa con nuevos contingentes de jornaleros agrícolas. Para sus comunidades de origen esto representa, al mismo tiempo, la posibilidad de multiplicar o reemplazar sus fuentes de ingreso externas. Para el caso de los habitantes de Tula del Río, esto se ha articulado de manera creciente con la búsqueda de su inserción en nuevos nichos laborales allende las fronteras y la construcción de las correspondientes redes sociales para trasladarse, cruzar ilegalmente y mantener vínculos con los emigrados.

En tanto que para los pobladores de Xitopontla, el empleo estacional en Morelos ha desplazado parcialmente su presencia en otras regiones agrícolas, donde el ingreso es menor, para el caso de los jóvenes de Chiaucingo este nuevo destino les ha ofrecido la ocasión de viajar en familia y con empleo para las mujeres, en contraposición a otras alternativas socorridas como era la migración urbana e internacional que es predominantemente masculina.

Así, pese a las limitadas dimensiones de este mercado estacional, la cosecha del angú amplía el impacto social y económico de la agricultura comercial de Morelos sobre la agricultura de subsistencia de los pueblos campesinos-indígenas de Guerrero.

Viejos y nuevos migrantes tratan de consolidar su presencia en este mercado estacional: unos, apelando a su grado de especialización, probada lealtad y antiguos vínculos informales con empleados de la empresa; otros, mostrando su disposición a cubrir e incrementar, si es necesario, su oferta en las condiciones requeridas. Ello ha dado lugar a diferentes ajustes en las relaciones laborales entre Río Grande y el conjunto de los jornaleros, así como ha brindado, por ahora, mayor margen de maniobra para la flexibilización e intensificación del uso de la fuerza de trabajo en provecho de aquélla, minando las posibilidades de organización y cohesión de los trabajadores.

Ciertas características particulares del empleo ofrecido por la empresa agroexportadora constituyen, sin duda, ventajas relativas para los jornaleros, si las comparamos con las condiciones que imperan en otros mercados de trabajo análogos, sobre todo en lo que respecta en el nivel de ingresos en el pago por jornal. Este hecho ha contribuido a la apertura de nuevas fuentes de reclutamiento de trabajadores agrícolas, propiciando reacomodos en los flujos de migración laboral originados en Guerrero y que se orientaban convencionalmente a otras regiones agrícolas del occidente y noroccidente del

más, si bien la magnitud de los desplazamientos está condicionado por las necesidades de trabajo de la empresa.

Sin embargo, no habría que perder de vista el grado de intensificación del trabajo al que son sometidos, el grado de especialización adquirido por estos jornaleros y, sobre todo, los grandes beneficios que reportan a la empresa. En síntesis, para una empresa transnacional el carácter eventual del empleo, el alto grado de productividad y la calificación de su fuerza de trabajo, la ausencia de sindicatos, así como su bajo costo relativo y la posibilidad de transferir parte del costo de esta reproducción a los propios trabajadores (en función del modo en que las familias se ajustan para sobrevivir durante su estancia en los campamentos), constituyen un conjunto de ventajas comparativas que se suman a la conveniencia de producir en contratemperada. Reconocer el papel estratégico de estos trabajadores, así como de los recursos naturales de la región sur del estado sería un buen punto de partida para que las diferentes comunidades involucradas busquen una relación más equitativa con la empresa.

BIBLIOGRAFÍA

- GRAMMONT, Hubert Carton de *et al.* (coords.) (1999), *Agricultura de exportación en tiempo de globalización. El caso de las hortalizas, frutas y flores*, México, CIESTAAM/CIESAS/IIS-UNAM/Juan Pablos.
- FOOD REFERENCE WEBSITE, *Okra*, <www.foodreference.com>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (2002), *XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Integración Territorial, Guerrero*, Aguascalientes, México, INEGI.
- PROGRAMA NACIONAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS (2001), *Los jornaleros agrícolas*, México, Sedesol.
- _____, Coordinación Estatal Morelos (2002-2003), *Cédula Familiar de Familias Migrantes, Campamentos "La Brasilera" y "La Brasilera Chica"*, temporada noviembre 2002-abril 2003.
- RAYNOLDS, Laura (1994), "Institutionalizing Flexibility: A Comparative Analysis of Fordist and Post-Fordist Models in the Third World Agro-Export Production", en Gary Gereffi and Korzeniewicz (eds.), *Commodity Chains and Global Capitalism*, Westport, Connecticut, Praeger, pp. 143-161.
- RUBIO, Blanca (1995), "Agricultura mundial, estructura productiva y nueva vía de desarrollo rural en América Latina (1970-1992)", en Hubert Carton de Grammont, *Globalización, deterioro am-*

biental y reorganización social en el campo, México, Juan Pablos/UNAM, pp. 19-58.

- _____ (2001), *Explotados y excluidos*, México, Plaza y Valdés/Universidad Autónoma Chapingo.
- SIN AUTOR (1999), "Okra, la potencialidad de una hortaliza", en *Claridades*, núm 73, pp. 22-31.
- SAGARPA, *Sistema de Información Agropecuaria de Consulta en Línea*: <www.sagarpa.gob.mx>.
- SÁNCHEZ, Kim (1996), "Migración de la montaña de Guerrero. El caso de los jornaleros estacionarios en Tenextepango, Morelos", tesis de maestría en Antropología Social, México, ENAH.
- _____ (2001), "Horticultura en Morelos y migración laboral", proyecto de investigación (2001-2005), en proceso, Cuernavaca, Facultad de Humanidades/UAEM.
- SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS (1977-1979), *Anuario estadístico de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos*, México, SARH.
- SARH, Delegación Estatal Morelos (1987-1993), *Anuarios estadísticos de la producción agrícola*, Cuernavaca, SARH.
- TEXAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE, *Produce Growers and Shippers Guide*.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, *Okra Production*, 2000, 2001, <www.nass.usda.gov:81>.

AGRICULTORES ANTE EL MODELO AGROINDUSTRIAL Y LA LEALTAD TERRITORIAL. EL CASO DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ

*José Javier Maisterrena Zubirán**

RESUMEN

Este artículo analiza la relación entre el modelo agroindustrial y la lealtad con el municipio, a raíz del encuentro entre la historia municipal de Villa de Arista, en el desierto potosino, con la llegada de la agroindustria que provoca procesos de desertificación en el ecosistema y de diferenciación social en sus habitantes. La elite minoritaria, identificada con su condición empresarial, accede a privilegios, cuenta con el capital para prescindir del municipio y con la disponibilidad para abandonarlo, es itinerante, migra y depreda. El grupo de agricultores periféricos y medios es el que defiende el territorio, que tiene lealtad y que por su prestigio local participa en el campo político.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva histórica, el municipio de Villa de Arista se constituye asociado con la aparición de los cultivos agrícolas a principios de la década de 1970. Gracias a sus condiciones de agua en el suelo, durante tres décadas este municipio fue receptor del modelo agroindustrial de empresas hortícolas, lo que resultó en el abastecimiento de su agua y el empobrecimiento de su suelo. A pesar de esa amenaza, la población valora y relaciona la oportunidad de trabajo que brinda la agroindustria y la solvencia que le permite al municipio. Ese proceso productivo conformó una diferenciación de los agricultores en función de su capital y sus relaciones con el mercado,

* Profesor-investigador de El Colegio de San Luis. Correo electrónico: maisterrena@colsan.edu.mx.

lo cual mostramos en una tipología de los agricultores. A partir de esta tipología planteamos que hay una tendencia opuesta entre la agroindustria y la sustentabilidad municipal, asociada con el hecho de que a mayor riqueza y privilegios de los empresarios, menor es su lealtad territorial. Los agricultores que conservan lealtad territorial participan en el campo político como candidatos o alcaldes en el municipio para plantear alternativas a la creciente desertificación por la aplicación del modelo agroindustrial.

ANTECEDENTES

El municipio de Villa de Arista, a 86 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, limita al norte con los municipios de Charcas y Villa de Guadalupe, por el oriente con Villa Hidalgo, al poniente con Moctezuma y Venado, y por el sur con la delegación de Bocas, municipio de San Luis Potosí (véase mapa 1). Arista fue fundada como villa en 1857 por el gobierno liberal de Juárez¹ y permaneció 89 años en esa condición. La categoría de villa se le quitó el 4 de octubre de 1946, en el contexto de la emergente institucionalidad política estatal y nacional del partido-gobierno.

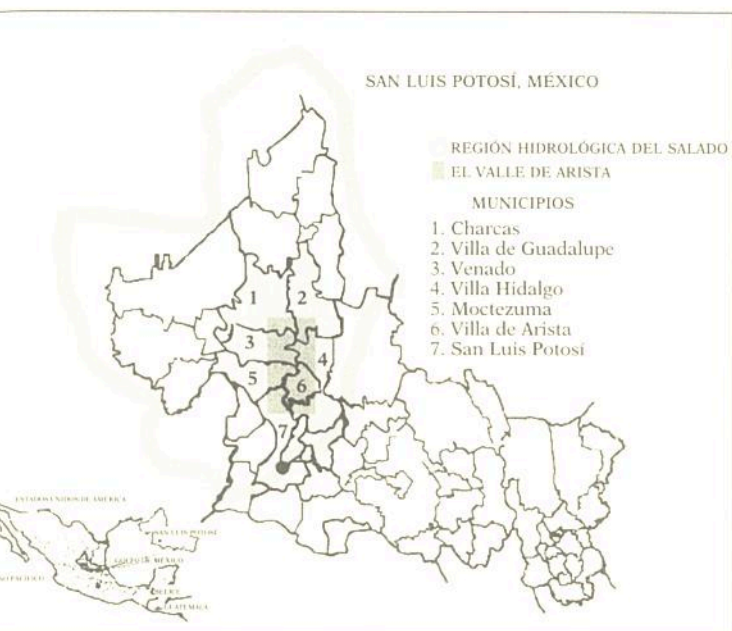
Gonzalo N. Santos,² gobernador del estado (1943-1949), caracterizado por formas verticales centradas en su poder unipersonal, con intención de controlar y someter a los grupos cedillistas, uno de los cuales eran los aristenses,³ adoptó la decisión de hacer que Villa de Arista pasara a ser delegación de Villa Hidalgo.

¹ Como tiene constancia don Erasmo Serrato, uno de los descendientes de los fundadores del municipio de Arista, en un documento impreso en seda y que guarda con cuidado, del cual hay copia en Archivo Histórico de San Luis Potosí. Decreto núm. 20 del 13 de octubre de 1857, Fondo Secretaría General del Gobierno, Colección de Leyes y Decretos 1824 a 1938, consultado 1855-1863, Colección de Leyes 1857 (31-10-95).

² Gonzalo N. Santos había hecho carrera política desde el naciente PNR en tiempos de Calles, luego en el PRM con Cárdenas y finalmente en el PRI con Ávila Camacho. En el ocaso del cardenismo y el cedillismo, se había acomodado y se apoyaba en las redes que lo vinculaban con el partido de Estado. Era la etapa de la institucionalidad del partido en el gobierno. Los agraristas y cedillistas, como los de Arista, se tuvieron que replegar mientras duró el dominio de Santos. Éste constituyó un "maximato" potosino y mantuvo el poder por detrás de la silla del gobernador en turno (Monroy y Calvillo, 1997).

³ Por "aristense" me referiré a los originarios del municipio de Villa de Arista, aun cuando tengan tierras o trabajen en el "Valle de Arista", que comprende a varios municipios como Moctezuma y Venado. Según don Rafael

MAPA 1
EL VALLE DE ARISTA



ENTE: Mora y Maisterrena (1999:15).

En ese perturbado contexto político-administrativo y bajo el ximato santista, los ganaderos de Villa de Arista con más recur-, como don Ramón Gámez, abrieron pozos en los años cincuenta, e posteriormente fueron utilizados para riego.⁴ Con ese emergen- potencial, el agua fue adquiriendo un nuevo uso y significación ra los aristenses. Al inicio el riego se usó para los requerimientos la ganadería, el autoabasto y la agricultura de alfalfa, maíz, frijol más adelante, jitomate.

Sólo el pequeño grupo de adinerados arriesgaba exploraciones la agricultura. La Congregación de Arista con sus ejidos Derra- daderos, Rincón de Leijas, Salitrillos, El Mezquite, El Tajo y los ran- os de la Tapona, Guardarraya, Refugio de Luz, Corazón de Jesús,

las guardias rurales en Villa de Arista estaban relacionadas con el gene- Cedillo. N.C., 1998 (ejidatario y padre de un agricultor periférico medio x presidente municipal).

⁴ Don Ramón Gámez, V.A., 1996; Juan M., V.A., 1998 (ganadero).

la Pelotera y Maguey, según el censo de 1960, contaba con 4 032 habitantes. En la delegación habitaban 684 personas. En la pequeña escuela sólo se impartía hasta cuarto año de primaria y era una minoría la que contaba con la posibilidad de terminar su primaria en la ciudad.

La base de la alimentación era el frijol y el maíz de temporal que almacenaban durante el año en unas especies de pirámides denominadas "alimoñas", construidas con quiotes de maguey. Como afirma don Tacho:⁵ "Los que nacieron después del riego ya vinieron con pancita llena, antes se tomaba atole de maíz de teja, mataban ratas, esquites, calabazas y un jarro de miel de maguey". Como actividad complementaria al cultivo y cuidado del ganado tallaban un tipo de maguey espinoso llamado lechuguilla para obtener la fibra del ixtle. El uso del agua con fines agrícolas provocó un cambio en el régimen de autosubsistencia.

LA EMERGENTE AGRICULTURA DE RIEGO Y EL RESCATE DEL MUNICIPIO

El grupo político de Villa de Arista, don Ramón entre ellos, estaba buscando una oportunidad para relacionarse y conseguir apoyos para desarrollar la región y recuperar su "independencia"⁶ municipal. Inició, entonces, una etapa de contactos con el gobierno federal. En los inicios de 1958, el diputado local por el distrito planteó con ese grupo político de conocidos y amigos ganaderos locales, la posibilidad de conseguir apoyos para perforar pozos para riego y sugirió que se organizara una comisión para solicitarlo al secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz, aprovechando que se encontraba en la ciudad de San Luis Potosí. El funcionario acudió personalmente a verificar la existencia de agua en el subsuelo y lo factible del proyecto de perforación. El secretario, en su visita a Villa de Arista, dictó un acuerdo y concedió crédito para 25 pozos, 13 ejidales y 12 de propiedad privada.⁷ Así, los habitantes de la delegación recibieron los primeros créditos del Banco Agrícola para perforar pozos con fines de riego. Con esas oportunidades algunos ganaderos con tierras y agua se fueron convirtiendo en agricultores.

⁵ Don Tacho G., Villa de Arista, 1997 (trabajador de don Leobardo M.).

⁶ Don Ramón Gámez, V.A., 1996, se refería a conseguir la "independencia" del municipio de Villa Hidalgo cuando eran delegación.

⁷ Información de Ignacio I., V.A., 1998 (comerciante y dedicado a la compraventa de tierras).

El triunfo de Salvador Nava en la alcaldía de San Luis Potosí,⁸ en abierta oposición a Santos, propició la caída del gobernador Manuel Álvarez, subordinado del cacique, y en su lugar, en enero de 1909 el gobierno federal nombró como gobernador interino a Francisco Martínez de la Vega, acontecimiento que marcó el inicio del fin del cacicazgo de Santos. El apoyo directo del centro —es decir, de la presidencia de la República— al gobernador interino, le permitió una política de acción frente al dominio de Santos. No obstante el control de la federación, el cambio fue un alivio para los aristenses. Este gobernador interino respaldó mucho a Villa de Arista, apoyó la construcción del camino que conectaba a Arista con la carretera 57 (México-Laredo), facilitó la electrificación de la zona urbana de la delegación, hizo posible el crédito para pozos de riego e incentivó la agricultura en Villa de Arista.⁹

En la planeación de cuencas hidráulicas se había determinado la primera veda para perforar pozos en la región desde 1961. Para Arista era un anuncio anticipado de sus límites a la vez que contradictoriamente su desarrollo agrícola futuro dependía de la violación a esa norma.

En la congregación de Arista, con la experiencia incipiente del riego, los ejidatarios y pequeños propietarios se fueron expandiendo en la búsqueda de cultivos cada vez más comerciales: alfalfa, avechía, algodón y jitomate. Los de mayores recursos experimentaron el cultivo de jitomate en unas cuantas hectáreas. Estos cultivos rebasaban las condiciones para el autoconsumo, por lo que desde su concepción estuvieron pensados para el mercado. Los aristenses buscaron compradores. Primero fue con un bodeguero en la central de abasto de la ciudad de San Luis, quien fue el primer comprador "en abierta" y proveedor de crédito para el jitomate. En sus primeras excursiones con el jitomate, los aristenses buscaron alternativas de venta si bien se los pudiera comprar a mejores precios y obtener mayor ingreso; con esta motivación establecieron nuevas redes y se vinculaban con compradores de la central de abasto de Guadalajara. Algo que le asombró a un nuevo comprador que provenía del occidente, fue la organización, disciplina y discreción de los trabajadores del campo en torno a don Ramón.

La invitación era con un señor Ramón Gámez que era el que tenía la huerta, entonces, una de las cosas que me llamó mucho la

⁸ Monroy y Calvillo, *op. cit.*

⁹ Ignacio I., V.A., 1998.

atención cuando llegué aquí fue que le llamaron [a don Ramón], él no salía todavía de su casa. Entonces salió, ya nos atendió, nos dijo, "horita en un rato más les invitamos un café y horita vamos a ver la huerta", y fuimos a ver la huerta [...] que yo iba a comprar. En eso que íbamos a llegar a la huerta se le arrimó una persona ahí que era el encargado, el mayordomo de él y le dijo: "¿oiga don Ramón, cuantas gentes vamos a llevar?", dijo: "que se queden seis", correcto, entonces, yo me le quedé viendo, estaba aproximadamente a unos veinte metros, treinta metros, y estaba haciendo bastante frío, eran aproximadamente unas treinta o cuarenta gentes y nadie se avisó sino que se fueron dando la media vuelta o sea que quedaron los seis como sea. Esto se me grabó mucho. ¿Éstos como saben? ¿Quién se queda? ¿El que aguanta más? ¿O qué? Fue en un ratito que se fueron dando vuelta y nomás se quedaron seis y los demás se fueron a su casa. Entonces me causó mucha impresión.

De esta anécdota se puede inferir el prestigio local de don Ramón, su dirección, la jerarquía informal de mandos, la confianza, la fidelidad, y la disponibilidad de apoyo inmediato de unas cuarenta gentes o más en el momento en el que los necesitara. Ese momento descrito fue el inicio de encuentros futuros entre el comprador y don Ramón. Esas condiciones garantizaban el abasto regular del producto que iba a comprar. A partir de entonces, don Ramón estableció una relación de confianza que le permitió solicitar apoyos: "Don Ramón me propuso: ¿y usted por qué no nos ayuda para sembrar?". Así, en la década de los años sesenta se abrieron los primeros cultivos para el jitomate con financiamiento del comprador de Guadalajara a los recomendados por don Ramón. Los nacientes agricultores locales fueron desmontando el valle y transformándolo en campos de cultivo. La condición que ponía para "refaccionar"¹⁰ (prestarle para el cultivo sin intereses) era que le vendiera la huerta o que le pagara el dinero antes de cortar el jitomate. La gente que le pedía crédito se extendió rápidamente, en un principio eran 30 agricultores para unas 300 hectáreas y después según él, "fueron cientos".

Este inversionista consideró la potencialidad del municipio para la producción del jitomate: agua, tierra rica en potasio, clima seco con abundantes horas de sol y mano de obra confiable y disponible; con estas condiciones optó por trabajar él mismo la tierra. Com-

¹⁰ El informante Horacio A. (V.A., 1998, agroindustrial de conquista), usó la palabra "refaccionar" refiriéndose no al financiamiento para refacciones e implementos, sino para el cultivo de jitomate.

ó tierra en el plano a precios muy baratos¹¹ e inició experiencias de cultivo con jitomate en gran escala. La tierra en Villa de Arista, móvil por naturaleza, socialmente se dinamizó y se hizo mercancía cuando se inició la compra y el acaparamiento de las tierras. Al respecto comenta el intermediario:

Fui comprando ranchos recomendados por gentes de la región, que aquí, que allá. Gentes viejitas que trabajaban aquí. Porque trabajaban en el rancho fulano. Aquí todo se vendía [...] Cuando comencé a comprar tierra, nomás dije "voy a comprar" y no más pos de las que yo quería, todo el mundo vendía. Yo tenía trabajadores que ellos me decían: "yo tengo 200 hectáreas, se las vendo, ahí lo que sea", ¡ay caray!, pero yo siempre procuré zonas donde me decían que era más buena.¹²

Varios lugareños también entraron en el mercado de la tierra: Pudimos conseguir un terreno que casi nos lo regalaron. Así empezó a desarrollarse Villa de Arista".¹³ Otros sin ser ni pretender ser agricultores se dedicaron a especular: "Me dediqué a comprar y vender terrenos. Los compré a cuatro pesos y los vendí a seis pesos [...] a diez pesos la hectárea".¹⁴ La especulación de tierras se agilizó porque el comprador-inversionista invitó a agroindustriales de Sinaloa a cultivar en Villa de Arista, como comenta un agricultor:

Como pagaba muy barato y aquí no había comunicación. No sabíamos ni a cómo andaba el jitomate ni nada. Siempre trataban de no darnos a saber nada. Así tenían el negocio, verdad. Y después ya no, se agarró y se hizo compadre de los meros ricos de la gente de Sinaloa [...] y lo ayudaron, me imagino yo, y aprovechó aquí la mejor época de Arista.¹⁵

La agricultura de hortalizas articuló la tierra, agua y el dinero; en esta lógica de capital agrícola casi podríamos afirmar que juntos

¹¹ Algunas de las tierras del área con potencial de riego pertenecían a gente pobre de Villa de Arista que se ocupaban como trabajadores en las empresas agrícolas o eran de familias que habían migrado a Monterrey o Estados Unidos. Los dueños de esas tierras no tenían los medios o el interés para explotarlas para la agricultura de riego y muchos las vendieron a bajo precio.

¹² Horacio A., V.A., 1998.

¹³ Joaquín C., V.A., 1999 (agroindustrial en transición).

¹⁴ Ignacio I., V.A., 1998.

¹⁵ Herminio G., V.A., 1997 (agricultor periférico medio local, ex presidente del PRI).

llegaron a ser símbolos de riqueza. La relación suelo-cultivo fue una adaptación mutua del producto a la tierra y de los nuevos agricultores al producto en un proceso de ensayo y error. La variedad de jitomate que se comenzó a sembrar fue la ACE-VF-55, tipo bola, que se caracteriza por su redondez y gran tamaño. La superficie cosechada por el agricultor no rebasaba las 10 hectáreas y el rendimiento era de 10 a 15 toneladas por hectárea.

Poco a poco el jitomate de Arista llegó a tener una posición preferencial en el mercado. La perspectiva de la congregación de Arista que se vislumbraba para el inicio de la década de 1970 se puede mostrar en una descripción hecha por Cabrera Ipiña (estimada en 1969:352-353).

Pero hoy [1969], debido al surgimiento del pueblo al convertirse aquello en una región agrícola, impulsada por los bancos oficiales, está reclamando su soberanía oficial que con seguridad alcanzará muy pronto.

Con seguridad que este naciente municipio será de gran significación en la producción agrícola del estado, pues las tierras se han hecho de riego con la perforación de docenas de pozos de buen rendimiento.

El empeño puesto por la elite local para lograr la "independencia" municipal, el incremento en la generación de riqueza mediante la productividad agrícola en Arista, el debilitamiento del control caciquil de Gonzalo N. Santos por la presión del movimiento civil del doctor Salvador Nava en la capital del estado, y la presencia impuesta del gobierno federal, crearon las condiciones para que los habitantes de Villa de Arista reconquistaran su condición como municipio en enero de 1972. Según don Ramón, fue un grupo reducido de Arista el que gestionó la recuperación de la "independencia" del municipio de Villa de Arista. Comenta que "cuando el gobernador Rocha visitó Villa de Arista, le propusimos la independencia". A partir de entonces, el riego y el auge económico agrícola se asociaron con la obtención de la autonomía municipal.

En este momento fundacional de la recuperación del municipio se presentó el encuentro del apoyo corporativo de las instancias federales de gobierno con la emergencia de empresarios locales asociados con la producción de hortalizas en la región. Es decir, el municipio se constituyó articulado con la expansión agroindustrial y con el apoyo del gobierno federal; el desarrollo agrícola se retroalimentó con el impulso del nuevo municipio y por el apoyo federal; esto se

cilitó con el potencial agrícola y las condiciones de constitución como municipio. En esa coyuntura hubo una confluencia de voluntades en torno a un mismo proyecto: la constitución del municipio. Ahí confluyeron desde los apoyos federales con fines “domesticadores”, hasta las alianzas con niveles macrosociales con intenciones de resistencia e “independencia” por la recuperación del territorio.

Entre algunos ganaderos hubo resistencias y críticas al proceso que se anunciaba para con sus respectivos campos; aunque en ese momento emergente sus planteamientos contaban con pocas condiciones de receptividad, debido al oasis de promesas que ya se empezaban a experimentar por la agroindustria. Luego de un par de décadas en que sus dudas quedaron latentes, las inconformidades permanecieron hasta que apareció el deterioro ecológico.

EL AGOTAMIENTO

Para los años noventa, el modelo agroindustrial mostró su limitación e inviabilidad en la región, seguramente recrudecida por las decisiones del gobierno federal. La política económica de corte neoliberal —impulsada por los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo— aplicó el adelgazamiento del Estado, el cual quedó manifiesto entre otras cosas, en el retiro del subsidio a la energía eléctrica, la disminución de su participación en el sector y en el traslado del financiamiento de la banca de desarrollo a la banca privada.

La eliminación del subsidio a la electricidad afectó la rentabilidad de las agroindustrias asentadas en el Valle de Arista. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se incrementó 354 por ciento el costo de la electricidad para la extracción del agua debido a la eliminación de 78 por ciento de subsidio en 1992. Además de lo anterior, acontecía que durante dos décadas había estado descendiendo el espejo del agua alrededor de cuatro metros anuales,¹⁶ lo cual tenía repercusiones en el uso de mayor energía eléctrica para su extracción. Ese año los jitomateros no recibieron precios costeados a sus inversiones y muchos de ellos no alcanzaron a cubrir ni la mano de obra por el trabajo de cosecha, en esas condiciones decidieron dejarla a medias. Esa situación localmente desafió a los agroindustriales, quienes implementaron sistemas de riego más sofisticados con

¹⁶ De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

mayor rendimiento. Dentro de esa lógica, a mayor cantidad de hectáreas irrigadas más rentable resultaba lograr un mayor rendimiento del agua. Con un mismo pozo se llegó a regar del doble al triple de tierra por medio del riego por goteo. No todos pudieron costear la nueva tecnología, lo cual estableció un filtro para diferenciar a los agroindustriales de los agricultores, quienes tenían similares aspiraciones capitalistas pero menos capital.

Burlando las inspecciones fitosanitarias, las plagas llegaron al jitomate. En estos años se menciona la invasión de una plaga conocida como "virosis", que "enchina" la planta.¹⁷

Otro momento crítico fue en 1995, cuando se suspendieron abruptamente los créditos por la banca comercial; muchos agricultores que obtenían financiamiento se vieron imposibilitados para continuar el proceso productivo por falta de liquidez, y perdieron la cosecha, padecieron grandes pérdidas y quedaron, además, endeudados con los bancos.

Sea por abatimiento del acuífero, por empobrecimiento del suelo, por emplagamiento, por deudas, o por todo eso junto, el modelo agroindustrial fue *depredatorio* del valle, como lo había sido antes en otras regiones, y provocó condiciones de abandono *itinerante* de la región en busca de otras nuevas. Así lo hicieron importantes agroindustrias durante la década de 1990.¹⁸

EL TERRITORIO ARISTENSE

En los recuerdos de la gente persiste la asociación entre la agroindustria y la recuperación del municipio en 1972, y en ese sentido los aristenses otorgan relevancia al campo económico. La mirada cultural también valoró lo económico, por ello a aquella época se le denominó "los pozos"; las fiestas, los monumentos como la pila de agua potable y los emblemas de las emergentes empresas locales tomaron como referente simbólico al jitomate. En la perspectiva de los aristenses, "jitomate, trabajo e independencia" estaban íntimamente relacionados. Consideraban que la ocupación agroindustrial los distinguía respecto a las demás poblaciones de la región del altiplano potosino: "aquí sí hay trabajo" afirmaban. En la plaza, la

¹⁷ Esta información fue amablemente proporcionada por el ingeniero Juan M., V.A., 1999.

¹⁸ Véase Maisterrena y Mora (2000).

alcaldía también anunciaba públicamente su reconocimiento al trabajo en el depósito de agua potable. En ese redondo recipiente del líquido, pintado como gigantesco jitomate, la presidencia municipal tenía escrita una leyenda: "Bienvenidos a Villa de Arista, lugar de trabajo". Las escalas de prestigio local estaban asociadas con los cargos ocupados en la agroindustria. Muchas relaciones afectivas se establecían dentro de sus empaques.¹⁹ Incluso los trovadores locales de los ranchos de La Escondida o Salitrillos, cuando le cantan a Villa de Arista, hacen referencia al trabajo y a los notables agroindustriales.

El nicho territorial que nos ocupa es el referido a la "matria" municipal²⁰ de los aristenses, al cual podemos considerarlo como extensión del hogar que brinda protección y seguridad. La interrogante que nos planteamos es: ¿qué sucede con las identidades espaciales y con sus lealtades correspondientes, en un contexto agroindustrial como el de Villa de Arista? Reconocemos que hay múltiples identidades con las que se entrecruza, interseca y compite, como las empresariales.²¹ Dentro de esta imbricación predominantemente económica, en función de su identificación, relación, distancia o alejamiento con el modelo agroindustrial, podemos inferir que hay diferentes formas de territorializarse por cada tipo de agricultor en Villa de Arista. En esta coyuntura, como hemos intentado mostrar, la participación en la agroindustria se constituye en una de las mediaciones más relevantes para definir las diferentes disponibilidades, acciones y sentidos de los aristenses para con su territorio.²²

LOS AGRICULTORES

A continuación definimos el perfil de los agricultores a partir de criterios económicos. Para la denominación de los diferentes tipos de agricultores tomamos como pauta el modelo agroindustrial,²³ por-

¹⁹ Al respecto véase el trabajo de Isabel Mora (2002).

²⁰ El municipio puede ser referido como la "matria" afectiva, perceptiva e identitaria, como define Luis González (1992:477 y ss.) a ese espacio geográfico que acoge y protege, claramente identificado por sus pobladores y más pequeño que una región. Giménez (1998:16, 25) se refiere a ellas como "microsociedades municipales llamadas 'matrías'".

²¹ Otras pueden ser las religiosas, las partidarias.

²² En este punto nos referimos a la articulación entre lo económico y lo identitario.

²³ Para mayor detalle sobre el modelo agroindustrial véase Maisterrena y Mora, *op. cit.*

que es la actividad local más relevante en relación con el abatimiento del acuífero y en cuanto a las perspectivas futuras de desertificación en Arista.

Los tres aspectos principales que intervienen e inciden en la relación del agricultor con el territorio son: la dimensión en la disponibilidad de recursos, el tipo de tecnología utilizada y la integración al modelo agroindustrial. En lo referente a los recursos, consideramos el agua con la propiedad de pozos, el tipo de tenencia y la cantidad de tierras trabajadas. En cuanto a la tecnología tomamos en cuenta el tipo de herramientas, maquinaria e insumos, el tipo de riego y el tipo de semilla utilizados para sus cultivos. Respecto a la integración al modelo, consideramos las fases de la producción cubiertas por el agricultor, la articulación con el mercado y la diversificación de cultivos como aspectos que pueden indicar la proporción de especialización del agricultor con el modelo (véase el cuadro 1). Son aproximaciones que nos permiten subrayar ciertas tendencias de identificación con el modelo; por lo tanto, nada impide que un agricultor periférico se encuentre tan identificado con el modelo en su lógica migrante, itinerante y depredatoria como cualquier otro agroindustrial de conquista. Esa disponibilidad se puede inferir del hecho de que de los 20 periféricos medios, doce son extrarregionales y cinco cuentan ya con su propio empaque. Es decir, que la imitación a los referentes puede ser equivalente al involucramiento con el modelo.

A partir de los criterios que hemos definido, los perfiles de los agricultores locales pueden ser: temporaleros,²⁴ periféricos (marginal y medio), agroganaderos y los agroindustriales de transición; todos ellos se conforman como una pirámide de mayor a menor en cantidad de individuos y de menor a mayor en propiedad, capital, acceso al agua, tierras, tecnología y mercado.

Los empresarios agrícolas son quienes ocupan trabajadores asalariados durante la época de plantación y cultivo de hortalizas. Estos empresarios son los principales impulsores y reproductores del modelo agroindustrial en Villa de Arista. La importancia relativa y el involucramiento con la dinámica del modelo agroindustrial por par-

²⁴ Los que están a mayor distancia de los empresarios agrícolas son los criadores de ganado menor, muchos de ellos son ejidatarios con cultivo de temporal y otros son pobladores de las localidades. Su referente de reproducción es de tipo campesino (véase Chayanov, 1974 y Palerm, 1998). Muchos de ellos se incorporan como trabajadores de las agroindustrias o emigran a Estados Unidos. Esta población no cuenta con acceso directo al agua, a diferencia de los demás agricultores.

	Temporalero		Agricultor periférico		Agroganadero		Agroindustrial	
	Procedencia	Criador	Marginal	Medio	Diversificado	En transición	De conquista	
	Local	Local	Local	Local/foráneo	Local	Local o regional	Extrarregional	
Recursos	Agua	No	Propietario de pozo $x \leq 1$	Propietario de pozo $x \leq 1$	Propietario de pozo $1 < x \leq 7$	Pozoteniense de $x > 7$	Pozoteniense de $x > 7$	
	Tenencia	Ejidal	Ejidal y pequeño propietario	Mediano propietario local	Mediano propietario con ganado	Gran propietario	Con propiedades en otro estado	
	Dimensión	Micro $x < 5$ ha	Pequeños. $x < 40$ ha	Medianas $40 < x < 200$ ha	Medianas $40 < x < 200$ ha	Grandes $200 < x < 700$ ha	Muy grandes $200 < x < 1\ 500$ ha	
Tecnología	Tecnología	Rústica	Rudimentaria	Mecanizada	Mecanizada	Sofisticada	Sofisticada	
	Riego	No	Rodado	Rodado	Rodado/goteo	Goteo	Goteo	
	Semillas	Criollas (autoabasto)	Criollas	Criolla/híbrida	Criolla/híbrida	Híbridas	Híbridas	
Integración	Fases	Participan como trabajadores temporales en la agroindustria	Sin empaque Sin invernadero	Algunos tienen invernadero Otros tienen empaque rústico	Produce y vende hortalizas sin empacarlas	Produce y empaca con o sin invernaderos	Produce y empaca con o sin invernaderos	
	Articulación con el mercado	No	Sin relación directa Vende la huerta	Asocia con el comprador Vende a pie la huerta	Articulado por un socio o familiar al mercado regional Vende a pie la huerta	Articulado al mercado nacional y parcialmente al mercado internacional	Articulado al mercado nacional e internacional.	
	Diversificación	Alta	Alta	Media	Alta	Baja	Baja	

FUENTE: elaboración propia con datos de trabajo de campo, 1997-2001.

te de cada uno de los tipos de empresarios agrícolas se pueden observar en el cuadro 2.

Los agroindustriales del modelo

A los agroindustriales extrarregionales del modelo los definimos de "conquista" a partir de sus actitudes respecto de la región, es decir, tienen intereses prioritarios con su empresa y su región de origen, y su posición local es principalmente extractiva.²⁵ Este agroindustrial foráneo es superior al local, denominado "de transición", tanto en cantidad de individuos como en capital, disponibilidad de recursos y acceso al mercado. Las empresas de "conquista" provienen de Sinaloa y sus establecimientos locales son filiales de los de su casa matriz. Estas empresas mantienen inversiones y tienen contactos con familiares de los propietarios, en las centrales de abasto en Guadalajara, Monterrey, México o Estados Unidos. El punto de referencia para la toma de decisiones sobre los procesos productivos de las agroindustrias en Arista se encuentra fuera del ámbito local. El nivel de influencia exógeno es significativo en las empresas, los modelos productivos, la tecnología y el mercado. El valle se ha convertido en un enclave que responde, principalmente, a los intereses del mercado y a la rentabilidad de estas empresas.

Los empaques de estas agroindustrias son los de mayor dimensión y sofisticación respecto del resto de los que se encuentran localizados en Arista.²⁶ En el interior de los empaques de las agroindustrias se efectúa la colocación del producto en cajas de madera; es el proceso final de la producción del jitomate para pasar al mercado. Los empaques son lugares que tienen nombre y apellido. La mayoría de las empresas son familiares y mantienen un carácter de identidad en donde se vincula la marca y el prestigio de la familia asociada al jitomate. El prestigio está vinculado con la marca y la calidad ofrecida al mercado.

Las mejores tierras del valle son propiedad de las empresas de "conquista". Dentro de este grupo están "Chelita", "Escamilla", "El Vergel", "Los Pinos", "San Javier", "Quintanilla" y "Paredes", entre

²⁵ Este desempeño de conquista es planteado por Humberto González (1994) para el caso de Autlán, Jalisco.

²⁶ Con diferencias en calidad, prestigio y dimensión, los ocho empaques locales restantes, los de transición (3), los de los periféricos locales (2) o extralocales (3), todos reproducen el referente agroindustrial (véase el cuadro 2).

Tipo	Periférico			Agroganadero		Agroindustrial	
	Marginal	Medio		Diversificado	En transición	En conquista	
Procedencia	Local	Local	Foráneo	Local	Local	Local	Foráneo
Presencia relativa							
Empresarios	28	8	12	8	3	3	8
Empaques		2	3		3	3	8
Tierras (ha)	622 8.2%	567 7.5%	994 13.1%	693 9.1%	1 017 13.4%	398 47.2%	
Riego goteo	53 1.8%	25 0.8%	151 5%	95 3.1%	922 30.5%	1 735 57.4%	
Charolas para invernaderos	15%	30 200 28.9%	58 000	14 000 7%	34 200 17.2%	6 300 31.8%	
Trabajadores	735 8.3%	460 5.2%	1 430 16.1%	710 8.0%	900 10.2%	4 370 49%	
Disponibilidad espacial	Arraigo	Arraigo	Migración	Arraigo	Migración	Migración	Migración
Permanencia	Continua	Continua	Itinerante	Continua	Itinerante	Itinerante	Itinerante

FUENTE: información propia.

otros. Utilizan²⁷ 47.2 por ciento (3 598 hectáreas) de las tierras; 57.4 por ciento (1 735 hectáreas) del riego presurizado; 31.8 por ciento (63 900) de las charolas para la elaboración de plántula y 49 por ciento (4 370) de los trabajadores del valle.

Sólo tres empaques son del perfil de transición.²⁸ Aun cuando sólo utilizan 1 017 hectáreas (13.4 por ciento), es significativo que disponen de 30.5 por ciento (922 hectáreas) del riego por goteo en el valle. Es decir, que 90.7 por ciento de sus tierras cuentan con riego por goteo. Los agricultores de transición reproducen localmente el modelo agroindustrial y a partir de 1999 los hermanos Castillo han incursionado en Yurécuaro, Michoacán, y los otros cuentan con tierras en otras regiones. Dos de estos agroindustriales radican en la ciudad de San Luis y se dedican principalmente al cultivo de hortalizas. Reproducen el modelo dominante y toman relativa distancia de lo político; es poca su participación en ese campo y se preocupan principal y casi exclusivamente por su negocio familiar. Sólo la familia Castillo radica en Arista y participa directamente en el campo político en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos de los hermanos han ocupado la alcaldía en 1988 y 2003. Su referente son los de conquista, sólo que aún conservan un sentido de pertenencia con la "matría".

Los agroganaderos

Los agroganaderos de Villa de Arista articulan y complementan la producción agrícola con la producción ganadera. La diversificación de los productos que generan es mayor respecto a los agroindustriales. Así, por ejemplo, producen alfalfa, maíz, frijol y cosechan vaina de mezquite como parte del forraje y alimentación del ganado. No obstante, también incursionan en los cultivos hortícolas, con la alternativa de que si el precio está muy bajo, las vacas cuentan con un importante complemento alimenticio de jitomate. En varias ocasiones durante la temporada nos encontramos con rebaños de vacas con el síndrome del hocico rojo.²⁹

²⁷ "El Gato" y "Santa Anita" fueron importantes agroindustrias de este tipo instaladas en Arista, las cuales desde 1995 ya no producen jitomate en la región aunque aún conservan instalaciones y propiedades en el municipio.

²⁸ De este grupo sólo el de los hermanos Castillo participa en la política local.

²⁹ Debido a que los alimentaban con el jitomate de desecho por su bajo precio.

Los agroganaderos disponen de 9.1 por ciento (693 hectáreas) de tierra de riego; 8 por ciento (710) de los trabajadores y sólo 3.1 por ciento (95) de las tierras con riego por goteo. No obstante lo anterior, el agroganadería compensa los riesgos de la agroindustria. Aunque son pocas las familias de ganaderos los que pertenecen a la asociación,³⁰ sólo ocho agroganaderos tienen una importante presencia en cuanto al ganado y la producción de leche. Esta asociación ganadera apoya al Partido Acción Nacional (PAN). Uno de los dirigentes de la asociación ganó la primera presidencia municipal de oposición local en 1991, los agroganaderos respaldaron al candidato del PAN electo en 1997 y la candidatura de otro panista en el año 2000.

Los periféricos medios

Los periféricos medios disponen de 20.5 por ciento (1 561 hectáreas) de tierra con riego; algunos de ellos, con 43.9 por ciento (88 200) de invernaderos y charolas e invernaderos, producen plántula que venden a otros agroindustriales. Son empresarios comparativamente pequeños respecto de los agroindustriales, ocupan 21.2 por ciento (1 890) de los trabajadores y cinco de ellos cuentan con empaques de una sola banda, instalados en el campo. Al interior de este perfil, 60 por ciento (1 125) son agricultores de otras regiones que posiblemente estén asociados con comerciantes menores de las centrales de abasto.³¹ Este tipo de periféricos foráneos los podemos comparar con los compradores de huerta, sólo que controlan la responsabilidad de todo el proceso agrícola; es decir, hacen la huerta y no sólo la compran. En la circunstancia de los foráneos la asociamos directamente con los distribuidores menores de jitomate de las centrales de abasto. Su comportamiento y disponibilidad para con el territorio es semejante a la de los de conquista y reproducen el modelo en lo itinerante, en la migración y en lo depredador.

³⁰ Existe una asociación ganadera en Villa de Arista que cuenta con 83 socios inscritos, se conforma de un presidente, un secretario y un tesorero. Para ser miembro de la asociación se requiere ser comprador y vendedor de ganado. La asociación busca apoyos del gobierno a través del Programa emergente a la Sequía para adquirir forraje. Según el presidente de la asociación, muchos pertenecen a la asociación porque de este modo pueden conseguir visa en Estados Unidos. Sin embargo, ahí también participan los agroganaderos para obtener oportunidades y apoyos gubernamentales.

³¹ Esto pudo ser debido a que en el momento de recopilar los datos con el informante, la disponibilidad y el trabajo de las huertas estaba en manos de los foráneos y los locales ya se habían desentendido del proceso.

Diferentes de los foráneos, los agricultores locales pertenecientes a los periféricos medios, cuentan discreta pero firmemente con un significativo capital económico y simbólico local, y mantienen un explícito interés regional. Cinco de los ocho agricultores aristasenses con este perfil han tenido participación en el campo político municipal. Uno de ellos fue presidente municipal por el PRI de 1980 a 1982 y regidor del ayuntamiento de 1983 a 1985; otros tres llegaron a ser alcaldes por el partido tricolor en 1985, 1994 y el año 2000 respectivamente; otro ganó las elecciones municipales en 1997 por el PAN con el respaldo de los agroganaderos. Lo anterior implica una explícita opción política que es menos manifiesta en los de transición y agroganaderos; dentro de los locales es un perfil importante en la "matria". Los periféricos medios locales venden en las centrales de abasto donde ya tienen conocidos y, en menor medida que los agroganaderos, tienen presencia en múltiples actividades como el comercio, la ganadería, el cultivo de alfalfa y maíz que complementan con la horticultura.

Los empresarios de Arista, incluyendo los periféricos medios, los agroindustriales de transición y de conquista, se proveen con firmas comerciales de aspectos esenciales y genéticos de la tecnología para la producción de jitomate. Son usuarios de productos desde semilla, el medio de su germinación, los fertilizantes, pesticidas, fungicidas y los sistemas de riego que abastecen de patentes extranjeras, bajo la recomendación y supervisión de un técnico de esas compañías. Los procesos fundamentales para la existencia y persistencia de la planta de jitomate son asesorados por agrónomos y otros que contratan directamente los agroindustriales.

Marginales

Tanto los pequeños propietarios como los ejidatarios, o combinados,³² cuentan con algo de derecho de agua para riego y están ubicados principalmente dentro del grupo periférico marginal.³³ Aunque con base en los datos proporcionados por nuestros informantes, sólo tenemos registrados a 28 periféricos marginales, pueden ser más quienes se encuentren dentro de este perfil.³⁴

³² Ejidatarios con pequeña propiedad o viceversa.

³³ El tipo periférico marginal es aquel que vende la huerta a los compradores de la central de abasto que acuden a Villa de Arista.

³⁴ En esta posición se encuentran algunos de los ejidatarios de Derramaderos, El Mezquite (con anexo el Corazón de Jesús) y Las Milpas. El ejido de Derramaderos se constituyó en 1938 con 28 ejidatarios y ya hoy suman

Los periféricos marginales son los que menos trabajadores cuentan por unidad de producción, pero cuentan con el apoyo del trabajo familiar. Este grupo comparte el uso de los pozos con otros ejidatarios o pequeños propietarios. Se caracterizan por vender a "venta de huerta"; es decir, poco antes de que comience la cosecha venden la huerta incluyendo el derecho al uso del pozo. El marginal, luego de la transacción, se desentiende de todo el gasto para la cosecha y venta del fruto. Si no vende la huerta antes de la cosecha comienza a perder, porque carece de financiamiento, recursos y mercado para asegurar la cosecha. Por lo regular, este perfil no empeña todas sus tierras en el jitomate, sino que diversifica con otros productos como chile y alfalfa. Los agricultores de este perfil son aliados y participantes de apoyo para los grupos políticos contendientes.

RELEVANCIA DEL MODELO AGROINDUSTRIAL

En base en los datos que disponemos, hay 44 empresarios locales que diversifican, combinan el referente agroganadero con el agroindustrial y cuentan con un mayor arraigo territorial. Por el otro lado, hay 23 empresarios integrados al modelo agroindustrial con mayor y menor dimensión. Si integramos a los del modelo en un solo bloque, incluyendo los periféricos medios foráneos, los agroindustriales en transición y los de conquista, observamos que disponen de 5 609 hectáreas que corresponden a 73.7 por ciento de las tierras del valle, de las cuales 2 808 son regadas por goteo y cuentan con 156 100 arolas (77.9 por ciento) para la producción de plántula en invernadero y ocupan a 6 700 (75.3 por ciento) trabajadores. Es decir, los agroindustriales del modelo ocupan tres cuartas partes de los recursos de Valle de Arista.

La presencia dominante del modelo agroindustrial alude a la idea de que el territorio se "fabrica" mediante la interacción humana, es construido y pensado por el hombre. La implantación de la agroindustria fue una forma constructiva adoptada por los aristenses.

10. El ejido cuenta con siete pozos para riego que se turnan por número de ejidatarios (información del comisariado ejidal de Derramadores, 1996). Los ejidatarios de El Mezquite tienen establecida la división por tiempo de riego. En el anexo, los ejidatarios cuentan con dos pozos para riego que comparten 22 socios. Las Milpas, pequeño ejido al que le han restituido tierras recientemente, en 1980, ubicado entre los ejidos de Derramaderos y Rincon de Leijas cuenta con un pozo de riego que comparten en sociedad los ejidatarios. Véase el cuadro 2.

En el territorio se establece la correlación de fuerzas entre la apropiación y desapropiación del mismo. En el territorio hemos podido observar una jerarquía socioeconómica, manifiesta en la desigual disponibilidad de recursos para el uso del espacio. El territorio es un entramado de relaciones simbólicas que están mediadas por el uso instrumental de los agroindustriales.

En la coyuntura del encuentro histórico entre el modelo y la "matria" coincidieron los intereses de la agroindustria, su modelo expansivo y los del municipio, en el cual ambos se fortalecieron; sin embargo, a partir de la manifestación de signos itinerantes, depredatorios y migrantes característicos del modelo y tangibles en el municipio, se hizo evidente para algunos aristasenses que cada uno (el municipio y el modelo) tenía un sentido distinto. Como afirma don Roberto:³⁵ "Los ricos se han llevado toda el agua de Arista, por eso los pozos se han secado".

El parteaguas que define la lealtad respecto al territorio descansa sobre la disponibilidad y posibilidad de adquirir (o rentar) tierras en otras regiones. Esa capacidad muestra que el privilegio y capital del agroindustrial ya no radica sólo en las tierras de la "matria"; sino que va más allá y trasciende sus fronteras. Los que cuentan con la oportunidad de explotar otras tierras actúan como los de conquista,³⁶ tanto en otros lugares como en su propio municipio. Otro es el caso de aquellos agricultores periféricos medios locales que no pueden adquirir campos para cultivo en otras regiones, migrar les implicaría la desatención de sus propias tierras, el de sus animales y de su prestigio sólo reconocido en la "matria". Su principal capital económico y simbólico radica en su tierra. Algo similar ocurre con los agroganaderos, que por la atención permanente al ganado no pueden abandonar la "matria", salvo al costo de dejar de ser lo que son. Estos actores tienen lealtad territorial porque están directamente implicados con el territorio y su futuro. Esa "lealtad" está asociada con la idea de prestigio que otorga el lugar de residencia.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

Uno de los aspectos de mayor incidencia en el ámbito político local fue el acceso a mayores recursos y a mayor autonomía para los municipios. Lo anterior fue sustentado mediante una reforma electoral

³⁵ Roberto A., V.A., 1998 (agricultor periférico medio).

³⁶ Véase González Chávez (1994:77-79).

difundida con una significativa presencia en los medios. Con estas medidas se propició una forma individualizada de participación electoral del tipo consumista, predominantemente pasiva, o en el mejor de los casos, partidista. La participación ciudadana se enfocó, principalmente, a la vigilancia de los procedimientos para garantizar su confiabilidad y al impulso de los partidos. En consecuencia, el objetivo fue legitimar el procedimiento para que éste a su vez legitimara el poder con la participación de los electores.

Los ayuntamientos son un espacio de encuentro entre el ámbito local y el gobierno nacional, donde participan los agricultores periféricos medios locales, en relación o en oposición con caciques y otro tipo de mediadores. Es un punto de articulación entre niveles socioculturales en términos de Wolf (1980:19-39). Los municipios reciben de la federación las reglas de procedimiento de las elecciones, por lo general las respetan y las adaptan a sus circunstancias. La población adopta la democracia tanto en cuanto procedimiento y normatividad, como en cuanto principio de legitimidad;³⁷ por ello se puede llegar a cuestionar o redefinir los vínculos de poder informal preestablecidos al interior de los municipios.

Los agricultores y el campo político

El campo político en la coyuntura actual es el más indicado para plantear una respuesta alternativa frente a la depredación del municipio. Es ahí donde se define el futuro de la "matria". Ya hemos planteado que la lealtad con el territorio radica, principalmente, en los agroganaderos y en los periféricos medios y marginales; intentaremos analizar algunos aspectos del poder.

En lo que respecta a la acción política de los agricultores, quienes más participan directamente como candidatos son los periféricos medios³⁸ y si acaso uno de los agroindustriales, pero con menor consenso. Los agricultores marginales apoyan a los medios, forman parte del equipo de campaña y son representantes políticos en su localidad. Los agroganaderos y agroindustriales en defensa de sus intereses presionan, indirectamente, mediante su amistad y relaciones con los candidatos o con quienes ocupan la alcaldía.

³⁷ La democracia —en tanto principio de organización y en tanto principio de legitimidad— tiende a propiciar la multiplicación, diversificación y hasta la individualización de los sentidos posibles de futuro en los sujetos, a preservar o profundizar la inequidad, y a pulverizar la cohesión social.

³⁸ Recordemos que cinco de los ocho agricultores de este tipo han participado como candidatos y alcaldes.

El ámbito espacial de influencia, tanto de los agroganaderos como de los periféricos medios, se acota al ámbito municipal; los marginales se sustentan en su localidad y en el caso de los agroindustriales mantienen redes en el nivel regional, estatal y hasta nacional en función de sus negocios.

La diferencia partidaria está definida más claramente entre los agroindustriales que apoyan al PRI y los agroganaderos que se respaldan en el PAN; los agricultores periféricos (medios y marginales) se encuentran divididos entre los dos partidos y no con una rígida definición partidaria.

La combinación del prestigio personal asociado con la propiedad de empresas solventes y estables, y ser considerados "triunfadores" con su disposición de participación en el campo político, posibilita que los periféricos medios reunieran los atributos y los términos para ocupar el cargo en la alcaldía. La coincidencia de los intereses de prestigio de los agricultores periféricos medios con la valoración del territorio constituye el punto específico que posibilita la defensa del municipio. Estos agricultores son electos por el conjunto de los aristenses como "conductores" del devenir municipal. Ellos son quienes los electores consideran que mejor pueden orientar el sentido del municipio. Al parecer, aún no han sido cooptados, o no lo han sido totalmente, por la inercia dineraria establecida con el modelo agroindustrial.³⁹ No tienen una identidad negativa, su prestigio se sustenta en el territorio y conservan una lealtad para con el mismo. A diferencia del resto de los agricultores aristenses, estos personajes han incursionado en el campo político. Eso marca desde la posibilidad constructiva hasta el empantanamiento o confusión con otro tipo de inercias. Desde ahí se enfrentan o negocian con el "poder del dinero" de la agroindustria la opción entre empleo y depredación.

Lo representativo de los políticos

El conjunto de la población aristense centra sus expectativas constructivas y colectivas en este grupo de agricultores periféricos medios metidos en la política. Los habitantes se identifican y creen en ellos y les confieren confianza independientemente de la coincidencia o diferencia partidaria. Por su parte, este grupo asume esa responsabilidad e incluso la desea, anhela el acceso al poder, pretende realizar una "conducción" adecuada de los destinos del municipio. En ese sen-

³⁹ Al parecer hay un cierto rechazo para con aquellos que están más inmersos con el modelo agroindustrial.

tido podemos ubicar el comentario de don Cenorín,⁴⁰ refiriéndose al presidente municipal sobre que "Juanillo"⁴¹ les iba a hacer un pozo para La Escondida; "el agua es vida" aseveró. "En el desierto la necesidad del agua es más sentida".

En vista que la propuesta agroindustrial como perspectiva futura para el municipio se agotó junto con el agua, la solución alternativa está en el campo político. Los aristenses se dan cuenta de ello en mayor o menor medida y con mayor o menor claridad. Por ello le confieren al campo político una particular relevancia. En eso parecen coincidir todos los aristenses.

Uno quisiera que su municipio fuera para arriba siempre. Simplemente yo creo que este periodo de este señor, si hubiera sido una persona capaz de aprovechar todas las ayudas que le dio el gobierno, hubiera habido un cambio muy significativo en el municipio. [...] Ojalá que el próximo, aunque sea del partido que sea, sea una gente de aquí de Arista. Pero que haga algo por el municipio.⁴²

Congruente con esa posición que favorece la dinámica inercial, se deslinda de lo positivo de la presencia agroindustrial que ahora resulta insuficiente y, como el caso de don Herminio, considera que la fuerza del dinero es la que hace posibles los apoyos del gobierno: "Si aquí hubiera más ricos, ya se hubiera solucionado lo de la luz. Yo sé que en otra parte donde la gente está más rica, tienen subsidios para la luz. Los subsidia el gobierno, pero aquí no".

El análisis de estos políticos resulta referencial de Arista y de sus posibilidades frente a las consecuencias depredadoras, migratorias e itinerantes del modelo agroindustrial en el territorio. Ellos son resultado de la historia municipal inmediata y mediata, desde el agotamiento de los recursos por la agroindustria hasta la constitución municipal; en ellos se encuentra lo local en su especificidad micro a la vez que se hace presente la dimensión macroespacial. Ellos cuentan con la coincidencia de la identidad afectiva con la instrumental hacia la autonomía de la "matria"; ellos cuentan con la relación de apoyo de los temporaleros de las localidades y los vínculos con los agroindustriales y agroganaderos.

Estos personajes se encuentran, precisamente, en el punto de inflexión del poder en el momento del encuentro entre el poder ins-

⁴⁰ Cenorín R., V.A., 2001 (temporalero y criador).

⁴¹ Juan M. (agricultor periférico medio, en ese entonces (2001), presidente municipal).

⁴² Herminio G., V.A., 1999.

tituido con el poder-hacer de ser los personajes mejor reconocidos y apreciados en lo local. El desafío de ese encuentro de poderes está asociado con el logro de la autonomía y sustentabilidad o no de la "matria".

Personajes y poder

Los políticos que hemos estado describiendo han participado directa o indirectamente y de manera significativa en la conformación del escenario político local. Los agricultores locales mantienen una distancia con la dinámica inercial del modelo agroindustrial, aunque lo conservan como referente de progreso. Estos personajes tienen iniciativa, creatividad y apego con el territorio. En la medida de su interés y disponibilidad por participar en la política, reconocen, buscan y valoran el poder del poder. Conciben al poder como instancia transformadora por excelencia. Conservan su arraigo y su autonomía territorial, razón por la cual incursionan en la política. El interés por el poder es para obtener una mayor autonomía territorial. La máxima escala de poder institucional asumida por los locales ha sido la alcaldía. En ese contexto, la participación de los políticos locales con la dinámica inercial política aún no ha amenazado la ruptura de la lealtad territorial. La solución la esperan del poder. A pesar de su posición crítica, le dejan al poder institucional la respuesta a sus necesidades.

Yo creo que es muy necesario hacer peticiones donde nos oigan, acá con el gobernador o gobierno, donde sea, para lo de la luz y pues otras cosas más, como decirle para los tractores. Necesitamos una manita del gobernador.

El gobierno del estado, los programas que ha presentado no son más que píldoras para aliviar momentáneamente el dolor. Lo que necesitamos es una solución de fondo, una solución integral que nos permita ir saliendo de este atolladero en el que estamos, porque de otra forma no vamos a salir.

[...] Porque realmente lo que a nosotros nos interesa, a la gente que vivimos aquí en el Valle de Arista, es el futuro de nosotros y de nuestros hijos, porque todos no nos vamos a poder en un momento cambiar de actividad. Necesitamos seguir trabajando en lo mismo y seguir produciendo para que en el país haya que comer, si no a donde vamos a dar.⁴³

⁴³ Carlos A., V.A., 2000 (agricultor periférico medio miembro de El Barzón).

CONCLUSIONES

Los momentos históricos son fundamentales para entender las relaciones de alianzas y fidelidades que se establecen a pesar de dirigirse en sentidos opuestos, como es el caso de la agroindustria y la sustentabilidad municipal, que en el devenir histórico de la patria estableció, por decirlo metafóricamente, una especie de matrimonio que prometía progreso y desarrollo para todos. Algo semejante nos sucede en el nivel nacional con el encuentro entre la nación y las empresas transnacionales de "conquista". No obstante, pasados los años, el prometido progreso se convirtió en desertificación y falta de alternativas por la depredación de los recursos tan vitales, como es el agua en el desierto. En ese contexto se comienza a vislumbrar un divorcio de una relación todavía tolerada.

La presencia de la agroindustria comenzó a dividir a sus mismos habitantes a partir del alcance de privilegios por algunos de ellos y estableció diferenciaciones sociales más marcadas en función de la disponibilidad de capital y de las relaciones con el mercado. El resultado de esta diferenciación fue que a mayor privilegio menor lealtad con la patria. Los únicos que mantienen su lealtad son aquellos agricultores periféricos medios que sustentan su prestigio local en el municipio y no cuentan con las condiciones para salir de sus límites y conservarlo.

En ese contexto, los locales emprenden la búsqueda de alternativas en el campo político, donde participan estos agricultores periféricos medios. No obstante, existe el riesgo de que su participación política se pueda convertir en el acceso a otro tipo de privilegios provenientes de recursos de fuera y se pierda la lealtad, como lo han hecho los agroindustriales. El aliado "natural" del poder del poder es el poder del dinero, es previsible la alianza de los políticos con la agroindustria y que persista el modelo agroindustrial a pesar de sus previsible consecuencias apocalípticas, hasta que no sea posible la vida en Villa de Arista. La respuesta, a mi parecer, no se encuentra afuera de la patria, ni en el gobierno ni en el capital, sino en ellos mismos, para encontrar alternativas de sustentabilidad y futuro para ellos, su patria y sus familias. ¿Cómo? Es la pregunta política que sólo ellos pueden contestar.

BIBLIOGRAFÍA

ANKELSON, Dudley (1994), *El caudillo agrarista*, México, Gobierno del Estado de San Luis Potosí/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

- CABRERA IPIÑA, Octaviano (1969), *San Luis Potosí*, San Luis Potosí, edición de autor.
- CHAYANOV, Alexander (1974), *La organización de la unidad económica campesina*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- GIMÉNEZ, Gilberto (1998), "Cultura y territorio. La región sociocultural", en *Culturas Contemporáneas*, época II, vol. II, núm. 4, pp. 9-30.
- _____ (1998), *Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural*, mecanoescrito.
- GONZÁLEZ CHÁVEZ, Humberto (1994), *El empresario agrícola en el jugoso negocio de las frutas y hortalizas de México*, México, s.e.
- GONZÁLEZ, Luis (1992), "Patriotismo y matriotismo, cara y cruz de México", en Cecilia Noriega Elio (ed.), *El nacionalismo mexicano*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- LECHNER, Norbert (1990), *Los patios interiores de la democracia*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.
- MONROY, María I. y Tomás CALVILLO (1997), *Breve historia de San Luis Potosí*, México, FCE.
- MORA LEDESMA, Isabel (2002), "Mujeres, cultura laboral y agroindustria: un estudio de caso en el Valle de Arista, S.L.P.", tesis de doctorado en Antropología Social, México, A-FFYL-UNAM.
- _____ y José Javier MAISTERRENA (2000), *Oasis y espejismo. Proceso e impacto de la agroindustria del jitomate en el Valle de Arista, S.L.P.*, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí/Sistema de Investigación Miguel Hidalgo/Conacyt.
- PALERM, Ángel (1998), *Antropología y marxismo*, México, CIESAS.
- WOLF, Eric (1980), "Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas", en Michael Banton (ed.), *Antropología social de las sociedades complejas*, Madrid, Alianza Universidad, pp. 19-39.

EMBLEMÁTICA SINALOENSE. MIGRACIÓN FEMENINA EN CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN DE JITOMATE

*María Isabel Mora Ledesma**

RESUMEN

Históricamente Sinaloa ha sido no sólo el principal productor nacional de hortalizas, sino también semillero de una mano de obra especializada en las distintas tareas en torno a esta producción, que cubre desde la siembra hasta el empaque para el mercado. Dentro de esta mano de obra se destaca el trabajo de las mujeres en los distintos espacios productivos de jitomate. En su mayoría son trabajadoras con una gran trayectoria y experiencia en esta actividad, atributos que les son reconocidos, otorgándoles un gran prestigio en el ámbito nacional. Estas trabajadoras, especializadas sobre todo en el empaque de jitomate, son valiosamente cotizadas para realizar esta tarea en otras regiones del país productoras de esta hortaliza. En este trabajo trataré el caso de estas trabajadoras sinaloenses que emigraron al Valle de Arista, en San Luis Potosí. Lugar donde son contratadas como mano de obra de "lujo" que no todos los empaques pueden darse. Veremos cómo llegan, cómo son contratadas, cómo son vistas y cómo son imitadas.

MIGRACIÓN Y TRABAJO EN LOS SISTEMAS AGROINDUSTRIALES

Los estudios sobre la fuerza de trabajo femenina en los contextos agroindustriales tienen una historia de 20 años. El interés en analizar a las mujeres en este medio laboral se inició en la década de

* Profesora-investigadora de El Colegio de San Luis. Correo electrónico: <imora@colsan.edu.mx>.

1980, en el marco de la crisis económica que afectó al país, igual que al resto de América Latina, y que coincidió con las tendencias recesivas de la economía mundial, a las que se suman los desequilibrios estructurales de la economía del país (Calva, 1988).

El impulso a la agricultura comercial de exportación y a la agroindustria fue una de las tendencias más notorias en este periodo. La agricultura comercial, que utilizaba mucha mano de obra asalariada, subsistió gracias al deterioro de los salarios. Los empresarios más favorecidos fueron los dedicados a cultivos como jitomate, fresa, melón, entre otros.

Estas políticas oficiales dirigidas al agro polarizaron aún más la estructura agraria del país. En consecuencia, mayor número de unidades familiares rurales de autosubsistencia pasaron a ser unidades semiproletarizadas o proletarizadas, lo que significó para algunas mujeres adultas, madres de familia, una situación más estable; y para las mujeres jóvenes de estas unidades, la apertura de nuevas oportunidades de participación, determinadas más por factores de corte ideológico que económico: ellas deseaban incorporarse a empleos remunerados y poder salir de sus hogares, no tanto para ayudar a sus familias, sino para buscar pareja más libremente, ganar su propio dinero, y "ver mundo" (Rosado, 1988). Durante la década de los ochenta, la incorporación de las mujeres al mercado asalariado se aceleró. Dos han sido las tendencias más características de su participación: su incorporación a los mercados de trabajo locales, en las agroindustrias¹ o manufactura rural; y su migración y trabajo asalariado en los mercados de trabajo agrícola.

El análisis de este sector comienza a ser foco de interés en el ámbito académico, con el objetivo de hacer visibles sus problemáticas. Seguramente, este interés estuvo relacionado con la crisis nacional que afectó y agudizó la problemática del campo, así como con el fomento a la agroindustria como esperanza de la política oficial para salvar el agro. Así que no es casual que las primeras investigaciones en México se hayan realizado, precisamente, en Sinaloa, polo de desarrollo de la agricultura comercial y agroindustria de exportación del país. Los estudios de Martha Roldán (1981) y Díaz Ronner (1981) fueron las primeras aportaciones sobre las asalariadas agrícolas. El trabajo de Roldán en los empaques de jitomate en el valle de Culiacán, es un análisis de la proletarianización femenina rural a partir de la introducción de la agroindustria del jitomate. Por su parte, Díaz

¹ Sobre todo en los estados del norte del país, como Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en las regiones cañeras de Morelos y Guerrero.

Ronner en Baja California muestra a las obreras de la agroindustria como personal muy joven, de entre 12 y 15 años de edad, y su salario es parte importante de los ingresos familiares. En Ensenada, las trabajadoras enfrentaban pésimas condiciones laborales, recibían salario por destajo (cuando no había suficiente materia prima, o no trabajaban, su salario se reducía), sufriendo las consecuencias de un empleo inestable, ya que no siempre contaban con servicios de seguridad social, y tenían una escasa o nula participación en agrupaciones y gremios sindicales que pudieran defender sus intereses. A pesar de todo, estas mujeres preferían este tipo de trabajos, porque la única alternativa que tenían era quedarse en casa, realizando trabajos domésticos, o ser empleadas en trabajos mal remunerados.

En el contexto del modelo sinaloense, Díaz Ronner desde principios de los años ochenta destacaba el proceso de modernización en la producción, desde el punto de vista técnico, y de la integración al mercado nacional e internacional. En este proceso la mano de obra femenina de Sinaloa es requerida en otros contextos agroindustriales, y menciona que los empresarios de Ensenada preferían contratar personal femenino, considerando más la destreza y experiencia que la edad de la mujer, lo que explica una migración estacional de las obreras de Sinaloa hacia Ensenada. De forma adicional, las mujeres de Ensenada, quienes realizan las actividades peor remuneradas, se ven obligadas a aumentar el ritmo de trabajo, para mantener determinado nivel de ingresos, por lo que la demanda del trabajo femenino en estos espacios no es homogénea, sino que está marcada por una selectividad en función de las tareas. Esto es, por un lado, están las mujeres empacadoras que llegan de Sinaloa (mano de obra más experimentada que la local), de superior jerarquía que las trabajadoras locales en cuanto a tareas y *puestos*. Por otro lado, se considera que hay mayor disponibilidad de trabajadoras locales, quienes se encargan de la selección del jitomate (sorteadoras o rezagadoras), por lo que son peor pagadas que las de Sinaloa. El grupo de edad de las rezagadoras de Baja California era de 15 a 25 años. La edad, para la autora, es una variable significativa para el rendimiento y productividad de esta categoría, razón por la que se prefiere personal joven. En Sinaloa, Gilda Salazar (1986), bajo el mismo planteamiento de Díaz Ronner en torno al prestigio laboral de las empacadoras sinaloenses, vistas como personal seleccionado y reconocido por los encargados como eficiente y experimentado, escribe que el personal que se presenta no identificado es ocupado para seleccionar y rezagar, mientras que las empacadoras son obreras con "estatus": constituyen un sector privilegiado dentro del conjunto de su clase; pueden

obtener elevados ingresos semanales en relación con las rezagadoras; sus condiciones de trabajo exigen orden y mayor higiene que el del resto de las trabajadoras y, además, requieren capacitación.

Estas trabajadoras tienen empleo asalariado la mayor parte del año, siempre siguiendo el ciclo del jitomate: van como empacadoras a Baja California, Sonora, Jalisco y San Luis Potosí, y regresan para participar nuevamente en la producción sinaloense.

El Valle de Arista, en San Luis Potosí, comenzó a ser parte de este circuito a partir de la década de 1980, cuando empresarios sinaloenses llegaron a esta zona a producir jitomate. Con ellos llegaron las técnicas y el personal capacitado para realizar las tareas de producción y de embalaje de esta hortaliza.

LA CONFORMACIÓN DEL VALLE DE ARISTA COMO POLO AGROINDUSTRIAL

La región denominada Valle de Arista está ubicada al norte del estado de San Luis Potosí, en la zona del altiplano. Está constituido por los municipios de Villa de Arista, Bocas y parte de los municipios de Moctezuma y Venado. Si bien, Villa de Arista es casi en su totalidad agrícola, los municipios de Venado y Moctezuma están dedicados, en su mayor parte, a la ganadería; actividad que alternan con la agricultura. Ambos municipios pertenecen a la Mesa del Norte (ubicada en la parte noroeste del altiplano), zona de los pastos. En el caso del municipio de Villa de Arista, ubicado entre la zona de pastos y la zona ixtlera, se ha desplazado casi en su totalidad la talla de lechuguilla² y la ganadería, por la actividad agrícola de producción de jitomate.

En la década de 1980, las condiciones favorables de clima, mano de obra disponible, acceso a créditos bancarios y el subsidio eléctrico de hasta 78 por ciento, permitieron la ampliación de la superficie de riego, lo que impulsó la agricultura comercial en el municipio (Maisterrena y Mora, 2000). En este contexto regional, el jitomate se volvió el principal producto agrícola del Valle de Arista, este acontecimiento estuvo vinculado con la llegada de los inversionistas de Sinaloa, con experiencia y acceso al mercado de dicha hortaliza. El jitomate desplazó algunos cultivos como la alfalfa y el chile que al-

² La lechuguilla es un cactus del que se saca una fibra con la que fabrican los lazos, costales entre otros productos.

unos productores locales, en el caso de la alfalfa, sembraban vinculada a la ganadería.

Los empresarios sinaloenses hacían visitas domiciliarias para invitar a la gente a trabajar en el desmonte. Dada la poca alternativa laboral, hombres y mujeres comenzaron a realizar este trabajo.

Poblaciones que se dedicaban al tallado de lechuguilla fueron abandonando esta actividad para trabajar como jornaleros en los ranchos agrícolas. Alquilarse como peones les proporcionaba un salario más seguro que el tallado de lechuguilla, aunque fuera en forma temporal. En estos trabajos también había mujeres, sobre todo viudas o separadas, ya que no era bien visto que las casadas o solteras trabajaran fuera de su casa. Doña Paula, viuda, con siete hijos, que lavaba y molía "ajeno" para mantenerlos, fue pionera en el trabajo asalariado, y señala que no era bien visto. Recuerda que fueron unas 15 mujeres, todas con hijos, soportando la crítica del pueblo porreverse a hacerlo. Antes de ir a trabajar, hacían las tareas domésticas y la comida para los niños; algunas dejaban a los hijos al cuidado de la abuela o de la suegra, y quien no contaba con este apoyo, los dejaban en la plaza: "Ahí nos esperaban los pobrecitos hasta que egresábamos", menciona doña Paula.³

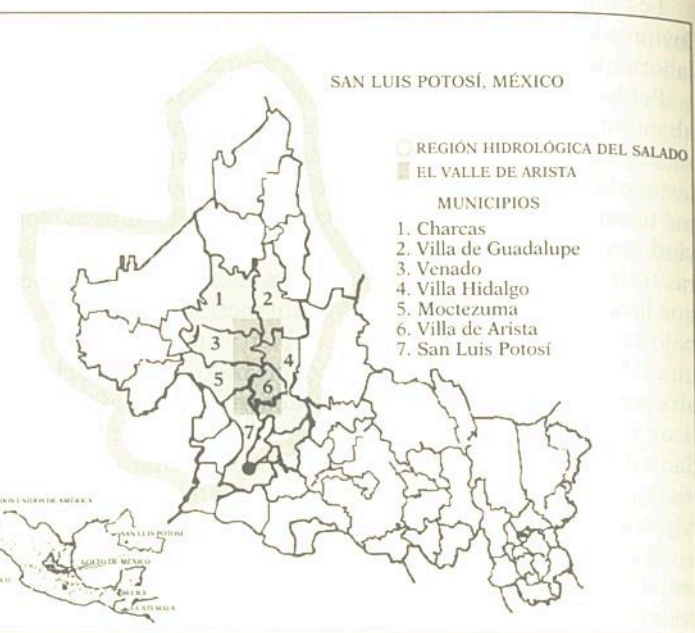
Al principio, el trabajo era igual para hombres que para mujeres: desmontar con el azadón, sembrar, emparejar la tierra con el astrillo, cortar el jitomate. En ese entonces no se contrataba a niños, pero de acuerdo con los testimonios de doña Paula: "los patronos preferían a las mujeres; eran más dóciles, trabajadoras y no faltaban, a diferencia de los hombres que seguido tomaban y no iban a trabajar".

Años después, el trabajo agrícola comenzó a ser familiar; las esposas se alquilaban como jornaleras junto con sus esposos e hijos mayores de ocho años, lo que seguramente tuvo que ver con una estrategia de supervivencia de la unidad doméstica, practicada simultáneamente con el tallado de lechuguilla. Al tener mayores ingresos, las familias construían sus casas de adobe y ya no de palma.

En las décadas de 1960 y 1970 se suscitaron cambios significativos, propiciados por la nueva economía de la región, que implicaron otros ritmos cotidianos. La gente conoció y aprendió el cultivo de productos que desconocía.

³ Paula Martínez Puente (82 años), "Historia de vida", Villa de Arista, marzo de 2000.

MAPA 1
UBICACIÓN DEL VALLE DE ARISTA



E: Mora y Maisterrena (1999:15).

EL CIRCUITO MIGRATORIO SINALOA-VALLE DE ARISTA

La implantación de un nuevo modelo agrícola basado en la agroindustria del jitomate revolucionó el trabajo en el Valle de Arista, cambiando las antiguas formas de trabajo de tipo familiar, por modernos sistemas de trabajo inspirados en los métodos de producción científica (tayloristas y fordistas). Los cambios tecnológicos causaron efectos más importantes en el trabajo: se multiplicaron las plantas y se elevaron notablemente los requerimientos de mano de obra temporal. La composición de la fuerza de trabajo se modificó, apareciendo nuevas categorías que definieron las nuevas relaciones laborales, asociadas con la demanda creada por las nuevas empresas agroindustriales de la región.

Por su vez, la nueva estructura laboral en el Valle de Arista determinó modos de vida radicalmente distintos, alteró la vida cotidiana

de la población e implicó una separación entre espacios laborales y domésticos. En el campo se emplearon mujeres y niños para las tareas de plantación y cosecha, población trabajadora compuesta por habitantes de las comunidades del valle y de migrantes indígenas originarios principalmente de los estados de Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. Por su lado, los trabajadores locales, que ya desde años atrás laboraban en tareas agrícolas de la región, empezaron a incorporarse a la nueva demanda de mano de obra creada en los empaques e invernaderos.

No obstante, el acontecimiento que tuvo efectos cruciales en el empleo de la región fue la instalación de los empaques. Las tareas relativas a este proceso (selección y empaque), eran totalmente desconocidas por la población local. A principios de los años ochenta, llegaron al Valle de Arista trabajadores especializados en el empaque de jitomate, procedentes de Sinaloa, que fueron llevados para hacer enseñar estas tareas. Personal de confianza de los empresarios sinaloenses, compuesto principalmente por mujeres, de mucha experiencia, que habían aprendido, a su vez, el oficio de sus madres.

De este modo, la agroindustria generó dos cambios importantes: el aumento de la importancia del trabajo femenino e infantil, y las migraciones laborales hacia el Valle de Arista, desde otros lugares del país.

Este nuevo modelo de organización laboral determinó una nueva cultura laboral en la cual el personal que llegó de Sinaloa tuvo particular influencia. Se aprendieron nuevos oficios, se generaron nuevos puestos de trabajo, pero, ante todo, se creó toda una estructura ocupacional en la cual el personal llevado de Sinaloa ocupó los espacios de mayor prestigio y se convirtió en modelo de referencia para la población local (Mora, 2002).

LAS EMPACADORAS SINALOENSES EN EL VALLE DE ARISTA

Desde que llegaron al Valle de Arista, en los años ochenta, las trabajadoras de Sinaloa se volvieron actores principales en los empaques de jitomate, y su presencia influyó notablemente en el trabajo femenino de la región. Ellas se dieron a la tarea de invitar a las jóvenes de la región a trabajar en los empaques; de casa en casa, y aun con la resistencia de los padres, lograron que algunas jóvenes se integraran como rezagadoras. Así, reclutaban personal y eran responsables de su aprendizaje y eficiencia ante los empresarios, quienes, gracias a estas trabajadoras pioneras, resolvieron el problema de la mano de

obra en una región que iniciaba la producción agroindustrial basada en el jitomate.

Las trabajadoras de Sinaloa contaban con toda la confianza de los empresarios, quienes les otorgaban gastos de pasaje, traslado, vivienda con servicios y, algunos, hasta les pagaban utilidades, lo que las colocaba en mejores condiciones laborales, en relación con la población receptora.

Las sinaloenses llegan al Valle de Arista en grupos, bajo la responsabilidad de una mujer de edad, que fungía como enganchadora, quien negocia con los patrones el pago, hospedaje, tiempo y algunas otras prestaciones, como el pago de traslado y servicios; y a la vez, es responsable de la eficiencia de este personal, sobre todo en la etapa más intensa del trabajo. Además de contar con gran experiencia en el trabajo, esta mujer mantiene vínculos filiales con los patrones, con quienes ha trabajado varios años; de ahí que goza de toda la confianza de aquéllos. Las enganchadoras sinaloenses están en la más alta jerarquía del personal femenino; su función en el empaque es supervisar las cajas empacadas y el trabajo en general. Las empacadoras son contratadas exclusivamente para realizar el empaque. Mientras que las mujeres locales se dedican a la tarea del rezago que consiste en seleccionar el jitomate por tamaño y color, y que las empacadoras colocan en las cajas por calidad. El rezago requiere un aprendizaje que consiste en conocer las diferentes variedades y seleccionarlas con rapidez. La empacadora asume la responsabilidad final del empaque, para su traslado al mercado, por eso las empresas prefieren contratar personal capacitado de Sinaloa, que les garantice la calidad y eficiencia requeridas.

Las mujeres locales que realizan el rezago son, en su mayoría, jóvenes solteras que cuentan con algún pariente, sobre todo hombre, trabajando en el empaque, "que le proporcionaba respeto", factor fundamental para adquirir el permiso. En sus inicios el trabajo en los recién instalados empaques era considerado como "descarado", al estar asociado a las mujeres sinaloenses, que viajaban solas, se arreglaban mucho e iban a los bailes.

De esta manera las jóvenes locales, bajo la tutela de algún pariente, empezaron a incursionar en el nuevo oficio como rezagadoras, tarea que aprendieron de las sinaloenses.

La relación de las empacadoras con las rezagadoras fue y sigue siendo desigual, ya que las primeras son reconocidas en una jerarquía superior a las locales; las empacadoras son pagadas a destajo, su salario depende de su productividad (cajas empacadas), mientras que las rezagadoras ganan por día. Además, las empacadoras tienen

un alto reconocimiento por parte de los empresarios, quienes les proporcionan algunos reconocimientos adicionales, tales como pago de utilidades, pasaje, servicios de salud, etcétera.

No obstante, de una implícita rivalidad, las rezagadoras ven en las empacadoras un modelo que imitaban hasta en la forma de vestir y maquillarse.

La llegada de las mujeres sinaloenses no sólo impactó en lo relativo al trabajo, sino en cuanto a nuevos “modos de ser mujer”, que se objetivizaban en comportamientos abiertos de lenguaje y actitudes, y en nuevas formas de vestir y maquillarse, y que resaltaban su personalidad. Ellas eran mujeres experimentadas en su oficio, que habían viajado a distintas regiones tomateras del país (lo que les otorgaba una personalidad particular en el ámbito laboral). Además, contaban con una red de relaciones amistosas con supervisores, ingenieros y empresarios, lo que les daba ciertos privilegios en relación con las trabajadoras locales, como puestos de supervisión. Desde su llegada las sinaloenses fueron vistas con respeto y recelo por el sector femenino, como lo ilustra el testimonio de doña Seferina:

Cuando venían nos asustábamos todas porque ellas venían muy bonitas, muy arregladas, muy bien vestidas, bonitas muy altas y todo, pero ya empezó la gente con ellas conociéndolas más. Las muchachas de aquí las veían muy distintas pero luego empezaron ellas a aprender a arreglarse también, pos traían todo lo bonito ellas.

Y eran admiradas por el sector masculino: “ellas nos trajeron alegría y hasta a bañar nos enseñaron”, tal como lo afirmó un productor.

Podemos suponer que, en ese tiempo, la imagen de las mujeres sinaloenses, como trabajadoras eficientes, autónomas y bellas, constituyó el referente femenino para las mujeres locales, es decir, el modelo de trabajadora en estos espacios laborales (Mora, 2002).

LA EXPERIENCIA SÍMBOLO DE PRESTIGIO

El empaque está sujeto al cumplimiento de un requisito: la experiencia; por eso todas las empacadoras de Sinaloa son portadoras de una excelente calificación y que viene de generaciones. De 50 trabajadoras entrevistadas, el 77 por ciento de ellas empezó a trabajar

entre los 12 y los 16 años de edad. Sus edades, en el momento de la entrevista era de 20 a 25 años, y contaban con una experiencia de nueve a 13 años.

Díaz Ronner (1981) encontró, para el caso de Baja California, que 80 por ciento de las trabajadoras son migrantes provenientes de Sinaloa, y portadoras de una excelente calificación. Las mujeres que participan como empacadoras (locales y migrantes) reúnen ciertas características que las distinguen del resto de las trabajadoras. Si bien, encontró que participan casi la misma proporción de jóvenes (54 por ciento y mayores de 25 años, 46 por ciento), la edad no es una limitante para desempeñar esta ocupación, siempre que vaya acompañada de un mínimo de años de experiencia (aproximadamente cinco años). Entre las jóvenes la edad promedio fue de 19 años y una experiencia media de 6.5 años. Para las mujeres mayores de 25 años, el promedio obtenido en cuanto la edad fue de 34 años y una experiencia media de 14 años. En ambos grupos observó una incorporación al trabajo en los empaques desde muy temprana edad; lo que explica la habilidad y destreza adquirida a través de sus años de experiencia.

Las empacadoras sinaloenses suelen tener más de 10 años de experiencia, lo que indica que han seguido una carrera laboral con pocas interrupciones y la mayoría ha trabajado siempre para el mismo empaque. Los datos muestran su gran experiencia en el oficio y en la migración, y que poseen relaciones laborales con los dueños de los empaques.

Las sinaloenses, a excepción de un caso (trabajó en una enlatadora), han trabajado sólo en el trabajo agrícola; 45 por ciento señaló haber trabajado en el campo y 50 por ciento, en invernaderos. El resto sólo lo ha hecho en el empaque, donde 50 por ciento de las sinaloenses inicia su vida laboral, 68 por ciento de estas trabajadoras continúa trabajando cuando termina la temporada en Valle de Arista. Entre ellas, 57 por ciento regresa a los empaques de Sinaloa, y 11 por ciento emigra a otras regiones. La experiencia es un factor determinante para la contratación y preferencia de las trabajadoras en los empaques, que además les proporciona diferentes condiciones y relaciones laborales.

La búsqueda de un capital simbólico⁴ dentro de los empaques cobra significado en las expectativas de las trabajadoras. Tener pres-

⁴ Capital cultural, en términos de Bourdieu (1991), consiste en ciertas propiedades que parecen inherentes a la naturaleza de la gente, como son la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la honorabilidad, la notoriedad, el talento, el don, el gusto, la inteligencia, etc. El capital, así entendido, "no es más que el capital económico o cultural en cuanto cono-

tigio, o reconocimiento como "buenas trabajadoras" las ubican en otra posición dentro del espacio laboral, concretamente en las bandas, pero se traduce en un reconocimiento social. Una "buena trabajadora" es la que conoce el oficio, pero es también una mujer desenvuelta, que sabe arreglarse, que ha salido de la comunidad, que mantiene una serie de contactos en otros lugares; estos atributos las colocan en mejores posiciones en la estructura laboral, pero también les abre mayores oportunidades en cuanto a oferta matrimonial y les proporciona certidumbre laboral.

ESTRUCTURA LABORAL

Una rígida división sexual de tareas permite a los empresarios contar con mano de obra local calificada y disponible, según las exigencias del mercado, lo que ha provocado una segmentación en el mercado de trabajo, con dos componentes: exclusión de las mujeres de puestos de dirección o trabajos calificados, y desvalorización del trabajo femenino en empaques e invernaderos, donde no es reconocida ni remunerada su calificación (Lara, 1998). En su estudio Lara analiza los saberes y ejercicios de la actividad agroindustrial, su aprendizaje y transmisión, para dar a la noción de calificación una dimensión genérica, evidenciando la relación diferencial de hombres y mujeres frente a las mismas. El trabajo para estas mujeres estructura su vida personal, conformando su identidad como trabajadoras. La autora incorpora el concepto de flexibilidad del trabajo en estas empresas, la contratación de mano de obra femenina da a los empresarios mano de obra flexible, barata, de calidad y fácil de controlar.

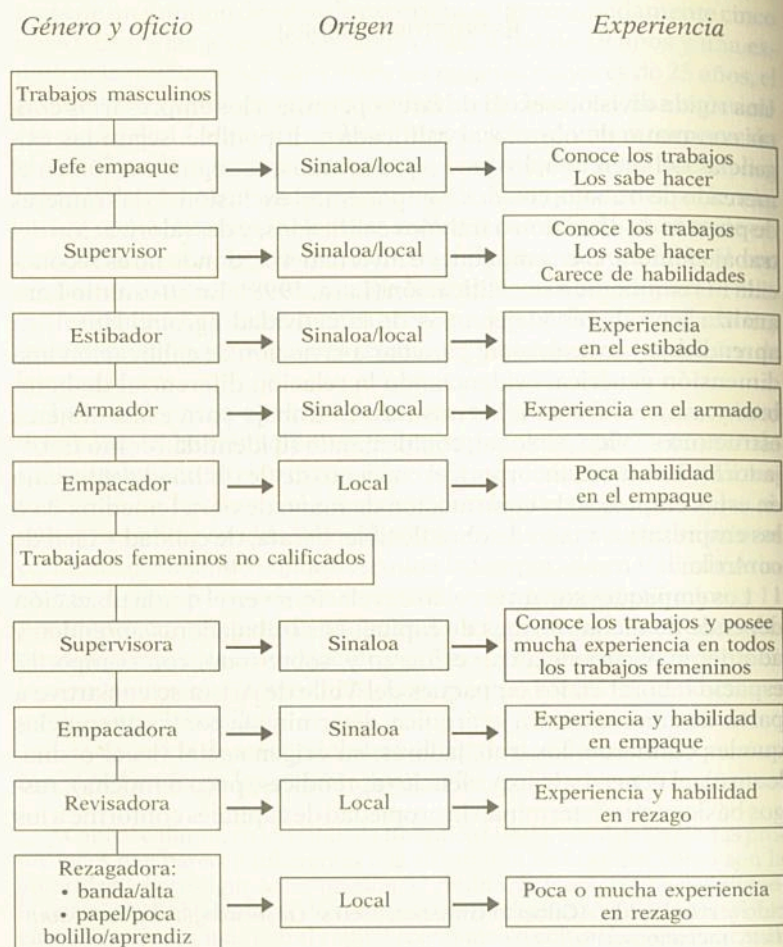
Los empaques son un espacio de relaciones en el que la ubicación depende de dichas formas de capital. Las trabajadoras aprenden y adquieren experiencia con esfuerzo y, sobre todo, con tiempo. El espacio laboral en los empaques del Valle de Arista se construye a partir de una estructura jerárquica, determinada por las diferencias que les confiere a los trabajadores: su origen social (local o sinaloense), el género y la experiencia (aprendices, poca o mucha), rasgos básicos que determinan la propiedad de capitales conforme a los

cido y reconocido" (Gilberto Giménez, 1997a, *La sociología de Pierre Bourdieu*, mecanoescrito).

principios de diferenciación más eficientes para la productividad: adquisición de conocimientos (capital cultural) que conduce a reconocimientos (capital simbólico) y produce mejores condiciones laborales (capital económico).

Con base en estos criterios representamos la estructura laboral de los empaques en el siguiente esquema:

ESQUEMA 1
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL EMPAQUE POR GÉNERO,
ORIGEN Y EXPERIENCIA



COMO CONCLUSIÓN

Las empacadoras sinaloenses, un personal de "lujo" que no todos los empaques pueden tener

La agroindustria en el Valle de Arista ha dependido de los recursos naturales (agua y tierra), además de su articulación con un paquete de tecnología importada, como las semillas híbridas estadounidenses, el sustrato verniculita canadiense donde éstas germinan, los abonos y pesticidas procedentes de Estados Unidos y la tecnología hidráulica israelita. Estos factores sostuvieron el modelo, pero también lo hicieron vulnerable. En la segunda mitad de la década de 1990, el uso intensivo del agua y la tierra propiciaron su agotamiento; los empresarios sinaloenses comenzaron a abandonar la región. El desconocimiento de los procesos de recarga de los mantos acuíferos, de la realidad hidráulica local y de la historia de esta región desértica, son factores que pasaron desapercibidos en la explotación agrícola del valle. Lo que limitó el uso del agua no fue la planeación, sino la disponibilidad de recursos para su extracción y, en ocasiones, las condiciones del mercado.

Lo anterior ha obligado a disminuir la producción y como consecuencia las fuentes laborales. Hoy en día, de los 15 empaques que estaban funcionando, únicamente tres, los más grandes y de origen sinaloense, "pueden" traer empacadoras de Sinaloa. El resto ha optado por contratar hombres quienes están sustituyendo a las presiguiadas sinaloenses en la tarea del empaque.

De este modo, las sinaloenses, como personal calificado, leal y flexible, en el Valle de Arista, se ha constituido en un personal reservado para las grandes empresas, sobre todo de exportación, tal como expresa el principal productor del valle: "Yo traigo a empacadoras de Sinaloa, véalas son muy eficientes y vea a las de aquí, platican mucho entre ellas y constantemente abandonan el trabajo", señalando a un grupo de rezagadoras.

Podemos señalar que la agroindustria ha logrado subsistir aprovechando las cualidades diferenciadas de una mano de obra heterogénea, aspectos que propiciaron un mercado laboral femenino local con características específicas en los empaques, bajo el referente del modelo sinaloense.

En los empaques del Valle de Arista se generó una nueva etapa del trabajo femenino local, debido a las formas de organización. La figura de la empacadora sinaloense se volvió central en el referente laboral de las mujeres locales, ya que el éxito de la empresa en el

mercado dependía, en parte, de la calidad del empaque, y las mujeres que realizaban esta estratégica tarea poseían habilidades para realizar el trabajo con rapidez y eficiencia, en la perspectiva de reducir el tiempo entre la cosecha y la venta del producto. Su absoluta disponibilidad para trabajar en cualquier horario y durante toda la temporada, incluidos sábados y domingos, han distinguido a este sector de trabajadoras y al modelo de trabajadora en estos espacios laborales.

De este modo, el empaque es el espacio en donde las mujeres locales han adquirido los conocimientos necesarios de un oficio (el de empaquetadoras), que les permite incorporarse a un mercado de trabajo, pero es también el espacio que les permite conectarse con un mundo extralocal, fuera de su familia y de su comunidad. Al mismo tiempo, y sobre esta base de una organización jerarquizada del trabajo en la agroindustria, las trabajadoras locales han resignificado su práctica laboral en los empaques, convirtiendo éstos en un espacio de construcción de nuevas identidades, que tienen como referente la figura emblemática de la empaquetadora sinaloense.

En este artículo hemos referido cómo para acceder a este mercado de trabajo, segmentado, flexible y fuertemente competitivo, las mujeres de Valle de Arista tuvieron que poner en marcha una serie de estrategias que les permitieran participar en estos espacios laborales. Pero estas estrategias no son únicamente la respuesta al cambio tecnológico y organizativo que implantaron estas empresas para hacerse de un personal eficiente; son también producto de las aspiraciones que las trabajadoras han hallado en los empaques de jitomate, ante las limitadas posibilidades de empleo locales, recordando que las mujeres en el ámbito rural tienen grandes dificultades para encontrar trabajos estables.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRÓN, Antonieta (1999), "Las migraciones en los mercados de trabajo de cultivos intensivos en fuerza de trabajo: un estudio comparativo", en Grammont, Gómez, González y Schwentesius (coords.), *Agricultura de exportación en tiempos de globalización*, México, Red de Investigaciones Socioeconómicas en Hortalizas, Frutas y Flores/Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mexicana/Instituto de Investigaciones Sociales/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Juan Pablos.

- BOURDIEU, Pierre (1991), *El sentido práctico*, Madrid, Taurus.
- CALVA, José Luis (1988), *Crisis agrícola y alimentaria en México. 1982-1988*, México, Fontamara.
- DÍAZ RONNER, Lucila (1981), "Las mujeres asalariadas en los cultivos de exportación: el caso del municipio de Ensenada, Baja California Norte, México", trabajo realizado para la Organización Internacional del Trabajo, "Seminario Tripartito Regional para América Latina. Sobre el Desarrollo Rural y la Mujer", Pátzcuaro, Michoacán.
- GIMÉNEZ, Gilberto (1997), *La sociología de Pierre Bourdieu*, mecanoscrito.
- LARA, Sara María (1998), *Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana*, México, Juan Pablos/Procuraduría Agraria.
- MACÍAS, María de la Luz (1995), "El trabajo femenino en el proceso de trabajo de tres cultivos de exportación en México", tesis de maestría en Economía, México, Facultad de Economía-UNAM.
- MAISTERRENA, Javier e Isabel MORA (2000), *Oasis y espejismo. Proceso e impacto de la agroindustria de jitomate el Valle de Arista, S.L.P.*, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí/Sistema de Investigación Miguel Hidalgo/Conacyt.
- MORA LEDESMA, Isabel y Javier MAISTERRENA ZUBIRÁN (1999), *El caso de un modelo agroindustrial de riego en zonas áridas: el Valle de Arista, S.L.P.*, cuaderno de trabajo, México, Sistema de Investigación Miguel Hidalgo/Área de Desarrollo Social, Cultural y Humano.
- MORA, María Isabel (2002), "Mujeres, cultura laboral y agroindustria: un estudio de caso en el Valle de Arista, SLP", tesis de doctorado en Antropología Social, México, IIA-UNAM.
- ROLDÁN, Martha (1981), "Trabajo asalariado y condiciones de la mujer rural en un cultivo de exportación: el caso de las trabajadoras de tomate en el estado de Sinaloa, Méx.", trabajo realizado para la Organización Internacional del Trabajo, "Seminario Tripartito Regional para América Latina. Sobre el Desarrollo Rural y la Mujer", Pátzcuaro, Michoacán.
- ROSADO, Georgina (1988), "Las mujeres de San Pablo: trabajo y vida cotidiana", en J. Aranda (comp.), *Las mujeres en el campo*, México, UABJO.
- SALAZAR, Gilda (1986), "Las obreras agrícolas en un cultivo de hortalizas. Estudio de caso en el Valle de Culiacán, Culiacán, Sin.", tesis de licenciatura en Antropología Social, México, ENAH.

MIGRACIÓN E IMPACTO DEL RETORNO DE MIGRANTES A SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN*

*Angélica Navarro Ochoa***

RESUMEN

En México, la migración de trabajadores a Estados Unidos ha tenido una dinámica constante por más de un siglo. Ésta generó transformaciones importantes en las localidades involucradas, en la forma de vida de los habitantes y en las estrategias económicas que siguieron. El interés por analizar estas transformaciones me llevó a estudiar una localidad con altos niveles de migración masculina desde mediados del siglo pasado. El objetivo fue conocer las condiciones sociales que dieron origen al proceso migratorio que hoy continúa; además, analizar cómo el migrante que regresa a la localidad de origen puede convertirse en un agente dinamizador y de cambio social. El retorno, la permanencia o la migración recurrente son las opciones que tienen los migrantes en los procesos migratorios, sin embargo este trabajo tenderá a analizar una de estas opciones: el retorno. Con base en los testimonios de los involucrados se examinan las implicaciones sociales del regreso de migrantes a Santiago Tangamandapio; se resaltan los cambios económicos, políticos, demográficos y culturales a partir de los cuales se construyeron y construyen los ciclos migratorios de los habitantes de esta localidad, y cómo estos cambios influyeron en la transformación de los patrones de conducta, la educación, las relaciones sociales y familiares.

* Este trabajo es parte del resultado de la investigación realizada para optar por el grado de licenciatura en historia y que finalizó en diciembre de 1999.

** Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Rurales, Promoción 2002-2007, del Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Correo electrónico: <angelica9_mx@yahoo.com.mx>, <angel32@colmich.edu.mx>.

INTRODUCCIÓN

interés por conocer los procesos migratorios de los trabajadores mexicanos me llevó a estudiar una localidad del valle de Zamora, donde la migración hacia Estados Unidos es algo común desde principios del siglo pasado. El primer objetivo del estudio fue encontrar características particulares de Santiago Tangamandapio que fueron origen al proceso migratorio que hoy continúa, pero también tuvo presente la necesidad de analizar cómo el migrante retornaba se convertía en un agente dinamizador y de cambio social en la comunidad de origen.¹

En la historia migratoria de Santiago Tangamandapio se identifican, por lo menos, cuatro generaciones vinculadas a coyunturas históricas específicas. Fueron generaciones que emigraron gracias a las facilidades que proporcionó la legislación migratoria estadounidense, pero también gracias a la situación económica de México y las estrategias familiares surgidas en las cambiantes condiciones locales. Las condiciones de vida de las familias santiagueñas llevaron al jefe de familia a buscar las oportunidades de empleo o de seguridad que localmente no se tenían. Y así comenzaron a transformar su localidad de origen. El impacto de las remesas fue inmediato: más allá de las remesas, el migrante regresó a su país con nuevas especializaciones laborales, que respondieron o se adaptaron a las necesidades locales cuando el migrante tuvo la voluntad y la oportunidad de emplearlas (García, 2003:14).

El migrante se mueve en dos espacios geográficos distintos: el lugar de trabajo y residencia en Estados Unidos y su comunidad de origen, dos realidades y cotidianidades distintas, donde el uso del sentido común es fundamental para sobrevivir.² Ellos conviven en dos tipos de cultura —o más— y en cada una de ella juegan distintas

¹ En el momento en que se llevó a cabo la investigación y por las experiencias de los migrantes de esta localidad, se observó una importante tendencia de individuos que “retornaban” a Santiago; este retorno fue “normal” en las primeras generaciones, pero también se presentó entre los jóvenes, aunque en estos últimos no puede afirmar que su experiencia migratoria tuviera concluida. Buenas y malas experiencias llevaron al migrante a tomar la decisión de regresar a la localidad y reintegrarse. No obstante, se constató la existencia de un buen número de santiagueños que permanecieron en los lugares de destino y que rompieron todo lazo con la localidad.

² Un sentido común que según Peter L. Berger y Thomas Luckman (1991: 10): ayuda al individuo a interpretar la vida cotidiana, a sobrevivir en ella adoptando decisiones; a su vez le permite interpretarla y darle un significado de un mundo coherente.

identidades, transforman su forma de vida, de ser y actuar. Por ello en este ensayo pretendo rescatar parte de las vivencias y experiencias de algunos santiagueños que emigraron a Estados Unidos con la intención de observar los cambios culturales; a la vez, analizar el impacto del fenómeno migratorio en su forma de vida y, en general, el de la localidad.

El trabajo está dividido en tres apartados. En el primero se ubica a los actores sociales involucrados en el proceso migratorio dentro de un marco histórico regional y del flujo migratorio hacia Estados Unidos. En el segundo se muestra el impacto de la migración de habitantes en la vida cotidiana santiagueña, y se recurre a los testimonios para analizar el regreso de santiagueños a la localidad de origen y, finalmente, concluyo con una pequeña reflexión sobre una de las caras del fenómeno migratorio: el retorno.

ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA MIGRACIÓN EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO

Santiago Tangamandapio es una población ubicada al noroeste del estado de Michoacán, considerada como parte de la zona de influencia zamorana (Verdusco, 1992: 20). A lo largo del Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, Santiago estuvo en manos de hacendados y grandes propietarios (algunos vecinos de Chavinda, Jacona y Zamora) como fueron los García, Ochoa, González, Igartúa, Del Río, Planarte, Jaso, Méndez y Cacho, quienes poseían 22 grandes ranchos por medio de los cuales mantuvieron el control económico y político de la localidad.³ En ese entonces, las principales actividades productivas eran la agricultura, la arriería y la ganadería. Según el censo levantado en 1900, en el distrito de Zamora existían 828 arrieros que se repartían de la siguiente manera: en Zamora 175, Ixtlán 145, Santiago Tangamandapio 106, Purépero 104 y 83 en Tlazazalca, entre otros (Ochoa y Uribe, 1990:24). Los datos referidos muestran la importancia que adquirió este oficio en Santiago Tangamandapio, rebasando pueblos de gran tradición en la arriería como era el caso de Purépero y Tlazazalca.

Estos datos nos indican de que existía una fuerte actividad productiva y comercial en la localidad; sin embargo, un creciente número de campesinos y jornaleros se veían obligados a buscar trabajo

³ Archivo Municipal de Zamora (AMZ), Fomento, 1904, exp. 30, leg. 1. Esto es confirmado en el trabajo de Tapia Santamaría (1992:48-49).

tera de Santiago. En ese entonces fue común que los vecinos del lugar, como de otras poblaciones vecinas, se dirigieran rumbo a la ciénega de Chapala, Zamora o tierra caliente en busca de trabajo.⁴ Si bien estos movimientos de población se dieron primeramente en busca de trabajo, más tarde sirvieron para huir de la inseguridad que reinaba en la localidad, provocada por los constantes ataques de avillas de bandoleros, como fueron los de Inés Chávez, en diciembre de 1917, que bajo la bandera villista entró al pueblo y provocó la huida masiva de su gente. Así lo recuerda don Marcos Sandoval:

Estaba chiquillo cuando oía de Pancho Villa, pero de Inés Chávez me acuerdo bien. Salfamos de la escuela como a la una de la tarde y encontramos la primera levantada [...] alrededor de la plaza estaba la caballada. Mataron a una hermana de Chole, la del petróleo porque no quiso irse con él; era una grita de mujeres ahí en el cuartel de todas las mujeres que abusaban (1998).⁵

La población vivía en constante temor por los bandidos. Las personas que podían escapar se iban a las ciudades más grandes y seguras, o huían al cerro. Evadiendo las condiciones de inseguridad algunos vecinos "acomodados" de Santiago llegaron a Estados Unidos —necesitado entonces de fuerza de trabajo por su participación en la Primera Guerra Mundial—, pero sólo algunos regresaron y contaron sus experiencias, sembrando así el interés por ese "norte" tan lejano y extraño.

Después de este ajeteo llegó una paz relativa a Santiago, relativa porque los ánimos volvieron a encenderse con las luchas por la tierra entre agraristas y los grandes propietarios. Durante la Revolución y hasta 1917, los campesinos habían procurado recuperar u obtener un pedazo de tierra (Gutiérrez, 1984). En Santiago no existe

⁴ En esta época la región de Chapala y Zamora despuntaban con un dinámico crecimiento agrícola, debido al empuje de una pequeña burguesía comercial y terrateniente, cómo lo muestra Brigitte Boehm (1994:334-352), Sánchez (1991) y documentos encontrados en el AMZ, Gobernación, 1917, caja 103, exp. 57; tierra caliente en manos de unos cuantos hacendados, como fueron los Cusi, también demandaban gran cantidad de fuerza de trabajo para la producción de arroz (Barret, 1975).

⁵ Entrevista a Marcos Sandoval, Santiago Tangamandapio, 29 de diciembre de 1998 y 18 de febrero de 1999. Don Marcos nació en 1905 y fue hijo de un guarachero. Le tocó vivir el ataque de Chávez, más tarde estando ya casado se integró a las filas cristeras de las cuales desertó por su deseo de irse al "norte". Una vez que regresó definitivamente de Estados Unidos, ocupó cargos importantes en la policía municipal.

evidencia de participación directa en la lucha revolucionaria, sólo se sabe de la conformación de un grupo de más de 20 personas que hizo suyas las ideas agraristas que pregonó la Revolución y solicitó la restitución y dotación de tierras; este grupo fue mal visto, rechazado, criticado, acusado de "comunista" y reprendido por la Iglesia católica. Así recuerda esos días, doña María:

Los agraristas se distinguían por un listón rojo en el sombrero, decían ahí vienen los agraristas. ¡Ay! Cómo sufrimos cuando eso, no los querían, eran puros sustos y por más que los padres trataban de quitarles sus ideas no pudieron (1999).⁶

La guerra cristera interrumpió, temporalmente, el proceso de la reforma agraria en la localidad. Este conflicto enfrentó a los santiagueños. Por un lado, había agraristas que apoyaron al gobierno y buscaron la desintegración del latifundio y, por el otro, campesinos que respaldaban a la Iglesia y defendían la tierra en contra de los agraristas. No obstante, se notó mayor apoyo hacia la Iglesia. Localmente surgieron varios caudillos cristeros como Eulalio Torres, Antonio Quintero y Antonio Campos, quienes respondieron a las ordenes de José María Méndez y Ramón Aguilar. El pueblo, según el testimonio de don Reducindo Campos —un viejo canastero—, era una "cueva de cristeros". El gobierno amenazó con quemarlo y provocó que la gente huyera a las poblaciones vecinas. Las tropas gubernamentales invadieron Santiago en dos ocasiones y los parientes de los cristeros fueron los primeros que salieron. Sobre esto comentaba don Alfonso Torres:

El gobierno ahí en la torre del templo hizo fortines, el colegio era el cuartel y todo el curato estaba lleno de gobierno. En el 29 ahí en La Loca [cerro cercano a Santiago] tuvieron un combate y Eulalio [estaba] aquí en la casa, con la gente escondida. Vivíamos en constante miedo por temor a que lo atraparan. La gente de aquí lo ayudó mucho, andaba un señor con una canasta por las calles juntando tortillas pa' llevárselas al cerro donde a veces se comían

⁶ Entrevista a María Torres, Santiago Tangamandapio, 29 de enero de 1999. Nació en 1913, muy pequeña le tocó vivir el ataque de Inés Chávez y más tarde las correrías y persecuciones del gobierno contra los cristeros. Entre las filas cristeras contó con varios parientes, como fue el caso de su primo, el mayor Eulalio Torres y su hermano Manuel Torres, por lo que su familia fue constantemente perseguida. Más tarde se casó y tuvo una familia numerosa. Hoy en día, la mayoría de sus hijos viven en Estados Unidos y uno de ellos en la ciudad de México.

la carne cruda de las reses que mataban por no echar humo. Nosotros nos tuvimos que ir a vivir a Jacona, la cosa aquí en el pueblo estaba muy difícil (1999).⁷

Desde que comenzó el conflicto las familias más privilegiadas se habían ido, y las que tenían miembros involucrados en la guerra trataron de sacarlos del conflicto. Ése fue el caso de Manuel Torres, quien su madre lo retiró de la contienda:

Mi tío Manuel anduvo con mi tío Eulalio [líder cristero del pueblo] y mi abuelita para sacarlo de la bola lo dejó ir a Estados Unidos. Fue por él ahí por Los Chilares [manantial cercano al pueblo], ya andaba todo encarrilado y armado y que le dijo: "Vengo por ti". "No, que no me voy". "Pos' te vas a ir, prefiero que te vayas a los Estados Unidos que andes en la bola". Y lo mandó allá, aunque ya después lloraba porque no le escribía y después de 14 años de no saber de él, fue a buscarlo (1999).⁸

No fue el único caso. Estados Unidos fue uno de los caminos al cual se dirigieron los jóvenes a petición de sus padres para que no intervinieran en el conflicto, como nos cuenta el cristero Marcos Andoal:

Deserté, sucede que tenía mucho entusiasmo de irme p'al norte, mi padre sabía eso y me echó una mentirota pero de aquellas, me dijo: "tengo el dinero pa'que te vayas al norte. Don Pedro Lomelí me prestó una vaca y la vendí y te tengo el dinero pa'que te vayas". Por eso deserté allá, en el cerro azul cerca de Jacona [...] pero como le digo, fueron puras mentiras de mi padre por eso años después me fui a escondidas y sin su permiso (1999).

⁷ Entrevista a Alfonso Torres, Santiago Tangamandapio, 29 de diciembre de 1998, 29 de enero y 6 de abril de 1999. Don Alfonso es miembro de una familia reconocida por su apoyo a las filas cristeras. Él nació en 1915 y tiene una gran experiencia migratoria, primero hacia la ciudad de México después a Estados Unidos; emigró como bracero para trabajar en el campo agrícola californiano, después logró establecerse en una fundidora en Oakland, donde trabajó hasta pensionarse. Regresó al pueblo y podría decir que es uno de los exmigrantes más prósperos de Santiago.

⁸ Entrevista a Jesús Torres, Santiago Tangamandapio, 8 de enero de 1999. Nació en 1946, como hijo de migrante siguió el camino de su padre. Toda su vida ha trabajado en *canerías* [empacadoras de productos agrícolas] en California y hoy ya jubilado sigue yendo a trabajar temporalmente cada año.

Una vez terminado el movimiento cristero, el pueblo no volvió a ser el mismo, muchas rancherías fueron abandonadas o quemadas y la gente se fue a radicar a Santiago. Estos cambios de residencia sí bien fueron necesarios, también fueron conformando la experiencia migratoria de los santiagueños, misma que influyó años más tarde en el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Con la llegada de nuevas familias y el regreso de las originarias, el pueblo empezó a crecer así como sus necesidades. La tierra se convirtió en un recurso escaso y deseado. Las solicitudes ante la Comisión Local Agraria iniciadas desde 1915 se reactivaron y consiguieron resultados en la década de los años treinta, cuando se formaron dos ejidos: el Santiago en 1932 y el Jerusalén en 1938; años más tarde, en 1955 se fundó el de La Presa.⁹ Para muchos santiagueños el recibir una parcela significó cometer pecado o una falta de hombría que se manifestó en la incapacidad de adquirir la tierra y el sustento por ellos mismos. Esto es claro para don Alfonso Torres, quien al recordar aquellos años comenta:

Éramos pobres, pero no me interesó recibir un pedazo de tierra, no me gustaba eso. De San Antonio [Guaracha] venía un señor que había solicitado las tierras de El Saucillo y me invitaba pero no quise. Tuve tierras hasta que las pude conseguir por mí mismo (1999).¹⁰

Muchos antiguos cristeros, por razones morales o religiosas, rechazaron la posibilidad de obtener tierras por medio de los ejidos y prefirieron comprarlas; una manera de conseguir recursos para su adquisición fue, precisamente, irse de braceros.

Las dificultades de los ejidos fueron muchas desde su origen, defendieron la tierra con las armas en la mano y después desde la presidencia municipal cuando los ejidatarios accedieron a los cargos de elección local. Los ejidatarios enfrentaron la falta de capital para financiar la producción y se vieron obligados a buscar otras alternativas laborales o emigrar temporalmente hacia Estados Unidos. De esta manera, la obtención de recursos fuera de la entidad permitió financiar los costos de la producción agrícola, completar los ingresos familiares o incursionar en alguna otra rama de la producción, como fue la industria textil y el comercio formal e informal.

⁹ Archivo del Registro Agrario Nacional, Morelia, exps. 732, 1438 y 1680.

¹⁰ Don Alfonso compró sus tierras con los recursos obtenidos en Estados Unidos, por eso manifiesta orgulloso su adquisición y critica a quienes se las regalaron o robaron como considera que fueron las tierras de los ejidatarios.

La migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos fue acompañada de constantes movimientos de retorno voluntario y de repatriaciones; en ocasiones estos movimientos fueron rutinarios, en otras masivos y forzados debido a las continuas recesiones económicas que sufría ese país, como sucedió en 1907-1908, 1919-1922 y 1929-1932 (Alanís, 1991:1-13). Desde la crisis de 1929 hasta 1940, la migración de santiagueños casi se paralizó debido a dos razones. En primer lugar, la crisis repatrió a muchos y su regreso desalentó a otros, luego el reparto agrario de los años treinta mantuvo a algunos con la esperanza de obtener un pedazo de tierra. Fue hasta los años cuarenta y con los programas braceros que el flujo migratorio en Santiago se revitalizó y se ampliaron los lugares de destino. Se mantuvo una mayor presencia de santiagueños en varias ciudades y poblaciones de California, pero también comenzaron a dirigirse hacia otros estados, tales como Texas, Arizona, Oregon, Washington, entre otros.

Las condiciones creadas por la Segunda Guerra Mundial permitieron que México iniciara una nueva etapa de desarrollo económico. Mientras tanto, Estados Unidos necesitaba con urgencia fuerza de trabajo para cubrir los puestos dejados por los que se fueron a la guerra, además de que urgía mantener el abastecimiento de alimentos; de ahí que este país se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para conseguir mano de obra mexicana, y así se negociaron los programas de braceros (1943-1964). Sólo entonces el interés sembrado por los primeros migrantes santiagueños pudo satisfacerse, como bien señala don Chema:

Estaba en México en un colegio militarizado trabajando como mesero cuando estalló el volcán Paricutín en el 43 y Estados Unidos necesitaba trabajadores porque estaba la guerra con Alemania, que fue cuando los braceros contratados [...] Yo me contraté en México, compré un certificado. Les daban la preferencia a los afectados del volcán para que se alivianaran, y como yo venía de Michoacán fue fácil. Me entré por Juárez empezando el 44 y contratado por seis meses, pero mucha gente se fue de *mojarrilla* y no los sacaban porque necesitaban trabajadores (1999).¹¹

¹¹ Entrevista a José María Lúa, Santiago Tangamandapio, 5 y 6 de abril de 1999. Don Chema nació en 1920, muy chico llegó al pueblo procedente de Jiquilpan; trabajó desde pequeño con los "ricos" de vaquero, ordeñador, yuntero y en la carretera (1938). Después emigró a la ciudad de México donde trabajó en un colegio, estando en la capital se contrató como bracero y, posteriormente, fue cada temporada a la Unión Americana. En Santiago se

Este testimonio muestra la relevancia que tuvo para los pueblos de la región la erupción del volcán Parícutín en febrero de 1943. La erupción paralizó las actividades agrícolas y ganaderas del algunos pueblos de la meseta purépecha, y los gobiernos estatal y federal tuvieron que brindar una serie de apoyos a los pueblos afectados (Mohen, 1985:171). Uno de los apoyos fue darles preferencia en los contratos de braceros, pero no sólo la región afectada se vio beneficiada sino también otras regiones y poblaciones michoacanas. Esto provocó que en algunas comunidades sólo quedaran mujeres, niños y ancianos. Muchos michoacanos emigraron gracias a estas facilidades, pero no todos los que se fueron lograron el propósito de encontrar trabajo, como fue el caso de don Marcos:

Tenía muchas ganas de irme p'al norte [...] pero no pude y me fui a trabajar a Guadalajara [...] después regresé al pueblo y en el 43 cuando estaba haciendo erupción el volcán Parícutín, me acuerdo clarito porque se divisaba aquel resplandor en lo nublado y harta ceniza que caían, me fui al norte con unos amigos y sin permiso de mis padres pero así me fue. Me entré como 200 veces [las numerosas ocasiones que intentó cruzar la frontera lo hacen exagerar la cantidad] las mismas que me sacaron [...] yo decía es la diferencia con mi padre y me dije no vuelvo más acá. No pude agarrar trabajo por eso me regresé (1999).

Pero casi nadie quiso quedarse con las ganas, así lo atestigua el profesor Jesús Campos:

Me fui de 16 o 17 años de alambrista en el 47, siguiendo la tradición de esa época, todo el mundo se fue ¿por qué yo no? y me eché a la aventura. Intenté cruzar la frontera, no se acostumbraba el coyote en ese tiempo tanto como hoy, caminamos por el cerro de noche y de día nos escondíamos, fueron como ocho días. Trabajé nada más unos meses para regresarme pero cómo me sirvió, me hizo madurar y cuando regresé entré a la secundaria y tomé los estudios en serio. Conocí otra forma de vida más difícil donde se sufre mucho y sólo echándole ganas sobrevive uno, fue una experiencia muy dura (1999).¹²

integró a un grupo que solicitó tierras ejidales y cuando él ocupó el puesto de comisariado ejidal logró la dotación del ejido La Presa. Cultivó su tierra pero continuó yendo anualmente al norte. Los recursos obtenidos en el país del norte le permitieron adquirir bienes materiales de los que hoy vive cómodamente.

¹² Entrevista a Jesús Campos, Santiago Tangamandapio, 22 de febrero de 1999.

Al finalizar los programas braceros, el fenómeno migratorio en Tlaxiaco se había consolidado al igual que los problemas de los migrantes. El gobierno estadounidense creó una serie de mecanismos para contrarrestar el flujo de ilegales; la "migra", la operación Wetback o "espaldas mojadas" fueron estrategias policíacas que deportaron masivamente a ilegales durante y después de los programas braceros. Los maltratos fueron constantes y las llamadas de auxilio a las autoridades mexicanas fueron frecuentes, aumentando a partir de la segunda mitad de la década de 1950. Ejemplo de ello fue el incumplimiento de los contratos y las condiciones de trabajo; así lo testifica una de las numerosas cartas enviadas al gobierno federal:

Los contratos no nos lo hacen valer acá en los campamentos [...] y lo peor del caso es que nos tratan como si fuéramos marranos; los alimentos que nos proporcionan son pésimamente malos y poco higiénicos. El contrato nos marca un salario de 40 centavos la hora y la pagan a 28 [...] y si no sabemos hacer el trabajo nos maltratan usando palabras obscenas o nos amenazan con regresarnos a México. Y como por desgracia no tenemos dinero para regresar a nuestras casas, nos aguantamos todas las humillaciones que nos hacen.¹³

El gobierno mexicano pudo hacer poco por los braceros contratados y mucho menos por los ilegales, tal como sucede en nuestros días. Sin embargo, debido a la necesidad que tenían los empresarios estadounidenses y a la presión de las autoridades mexicanas ante sus similares estadounidenses, se logró legalizar la residencia de un gran número de braceros y "alambres" entre 1950 y 1960. Además, las redes sociales entre el "emigrante"¹⁴ y las comunidades de origen se consolidaron y permitieron la continuidad migratoria de las generaciones venideras. Por otro lado, el migrante de la segunda generación descubrió que la vida en Estados Unidos, llena de explotación, discriminación, malos tratos, hambre y soledad, llegaba a tener sentido sólo en la medida en que se obtenía una mejor forma de vida en México (Durand, 1988:7-21).

¹³ Archivo General de la Nación (AGN), Adolfo Ruiz Cortines, exp. 546. 5/55.

¹⁴ "Emigrante" o "empapelado" fue como llamaron a aquellos migrantes que lograron arreglar su entrada legal a Estados Unidos y ya no como "alambre" o "mojarra".

El grueso de la migración en Santiago, hasta los años sesenta, continuó siendo de "varones solos", solteros o casados, con bajos niveles de escolaridad o que sólo sabían leer y escribir. Para ellos el retorno fue algo natural, nunca perdieron los vínculos con la familia, su barrio y el pueblo. Lograron acumular bienes materiales: casa y terrenos que fortalecieron los sentimientos de arraigo y pertenencia, y que difícilmente permitieron la ausencia definitiva de los migrantes de la bracereada. Como bien apunta don Chema: "Ya después de que me casé iba cada año a los Estados Unidos, cuando no de bracero de mojarrilla; hacía mi siembra aquí y me iba a hacer temporada y me regresaba" (1999).

A partir de los años setenta existió un buen número de migrantes legales, muchos de los braceros habían arreglado papeles y los de varios de sus hijos. Otros prefirieron obtener su pasaporte y visa antes de partir, ya que la situación del cruce les preocupaba, pero la mayoría continuó yendo de manera ilegal. Esta generación —la tercera— estuvo integrada principalmente por los hijos de los braceros que siguieron el ejemplo de los padres; entre ellos existen opiniones de justificación y defensa de la situación del estadounidense, de su forma de vida y del trato que dan a los mexicanos, como es el caso de Arcadio Oregel:

Ahorita no es lo mismo que cuando fue mi padre. A mí todavía me tocó algo bueno del norte que conoció mi padre, pero ahorita está aquello atestado con gente de todo el mundo; ellos están atrapados en un callejón sin salida, no saben qué hacer y por eso se trata mal al mexicano o de cualquier otro país. Pero se trata mal a las personas que son ventajosas, si te das cuenta de aquí de México que es la mayoría de los que están allá una gran cantidad son delincuentes que han hecho algo malo aquí y se van allá. Por eso, por más que las personas de allá quieran comportarse bien con uno no pueden porque nosotros los hemos hecho cambiar, te brindan lo mejor que tienen y el mexicano todo el tiempo trata de abusar. Es difícil que uno quiera que lo traten bien, cuando uno no merece eso. Porque a veces te brindan la confianza y uno se aprovecha y los defrauda todo el tiempo, te digo esto porque yo duré más de 19 años allá.

¿Por qué crees que tratan de poner tantas mallas y guardias? Por que entre más migrantes hay, menos trabajo y más delincuentes. México no puede darles empleo a toda su gente y es lo mismo en Estados Unidos, no tiene trabajo para su gente y como va estar aceptando más gente que sólo le va a producir problemas. Se nos trata mal y hay tantos muertos, pero a mí se me hacen po-

cos para los que debería de haber ya que la situación es muy difícil y ellos lo único que hacen es defender sus derechos, su patria. Te aseguro que si a nosotros nos invadieran haríamos lo mismo (1999).¹⁵

Las opiniones de los que fueron en esta época son controvertidas y contrastan con otras que son más de denuncia, pero como se dice "cada quien habla de la feria como le va en ella", como me decía uno de mis informantes: "es que si a alguien le fue bien allá te va hablar bien de la forma de vida de allá, de los gringos, de sus leyes y actitudes, pero si les va mal sólo hablarán pestes y de las tragedias por las que pasaron".¹⁶ No obstante estas opiniones, el flujo migratorio se mantiene, aunque los cambios económicos y políticos registrados en las últimas décadas están modificando la dinámica, composición y dimensiones de dicho flujo en la entidad.

A partir de la década de 1980 con la entrada en vigencia de la Ley Simpson Rodino o IRCA, el flujo de migrantes se intensificó contrario a lo que se pretendía con su aplicación. En estos años el aumento de santiagueños en los campos laborales estadounidenses fue considerable, dando origen a la cuarta y última generación de migrantes

¹⁵ Entrevista a Arcadio Oregel, Santiago Tangamandapio, 6 de junio de 1999. El "güero", como le llaman, es el hijo mayor de un bracero. Ante la ausencia de su papá por sus idas al norte tuvo que tomar parte activa en el trabajo familiar, además de que se trasladaba todos los días a Zamora a estudiar la secundaria; cansado de esta situación decidió irse a buscar otros horizontes, siempre con la meta de trabajar, juntar algo de capital y regresar al pueblo. El regreso definitivo le llevó casi 20 años, ya en el pueblo incurrió en el campo donde aplicó su experiencia y conocimientos adquiridos "en el otro lado", pero las condiciones del mercado local le impidieron sobresalir y decidió experimentar en la industria textil, donde a la fecha continúa y, según él, ha tenido más satisfacciones.

¹⁶ Entrevista a Fernando Muratalla, Santiago Tangamandapio, 27 de junio de 1999. "Fer", es hijo de un ex bracero, es un joven emprendedor y de espíritu empresarial dueño de un pequeño taller de prendas de vestir; él parte cada año a California con la meta de trabajar una temporada de cuatro a seis meses y regresar con un capital que invierte en el negocio. A los 17 años se inició como agente de ventas de uno de los grandes talleres textiles del pueblo, al poco tiempo ya era de varios; no dejó el estudio, fue a la universidad a estudiar odontología pero el ambiente de la ciudad y de la escuela no le gustaron y los abandonó. Su experiencia en el mercado manufacturero lo llevó a independizarse, pero las condiciones económicas en el país ante la crisis de 1994 lo obligaron a buscar otras alternativas de trabajo en Estados Unidos. La facilidad de tener papeles lo ayudó a conseguir trabajo y poder salir de sus apuros económicos más rápido; hoy en día su taller se mantiene y expande, da empleo a seis jovencitas y dos señores.

considerada en este trabajo. En esta última generación, la presencia femenina fue más evidente a diferencia de las pasadas, en que predominó un flujo migratorio masculino. Gracias a esta ley (IRCA), muchos santiagueños pudieron emigrar con sus esposas e hijos, lo que dio lugar a que muchas familias se reunieron de nueva cuenta. Pero también generó, en opinión de mis informantes, una serie de condiciones desfavorables como fueron: "familias echadas a perder" o desintegradas, mayor competencia laboral, rivalidad entre los que consiguieron papeles y los que no, los de más experiencia en aquel país y los que acaban de llegar; además empezó a ser innegable el deterioro y la segmentación de las redes sociales entre paisanos. Así lo manifiesta Arcadio:

Desde los ochenta empecé a deslindarme de allá, ya se veía venir el aumento de migrantes y todo este problema que es hoy. A mí todavía me tocó la oportunidad de trabajar en lo que quería y el tiempo que quería, y a muchas personas les fue bien. Había manera de hacer dinero porque te pagaban mejor que aquí y si ibas con la intención de ahorrar algo y venírte a trabajar acá podías hacerlo. Ahorita ya es difícil, porque la situación económica tanto en México como en Estados Unidos está mal, aunque los norteamericanos no lo acepten. Antes a uno le daban todas las facilidades: casa y carro, pero ahorita ni siquiera ellos pueden a veces tener esto. Antes llegaba un paisano y le echaban la mano, ahora se quiere estar más lejos de ellos porque son puros problemas (1999).

Otro caso semejante es lo que platicó Fernando Muratalla:

En Estados Unidos, que nacionalidad tienes y eres lo que cuestas, es una forma muy diferente de vivir y decir. Allá valen más los anglosajones, los güeros o gabachos, como les quieras llamar; porque los negros son otra cosa y nosotros otra, aunque los mexicanos nacidos allá valen más que los mexicanos que llegan como ilegales y no valen nada. Te tratan como quieren. Si tienes papeles, vales un poco más y tienes más posibilidades, pero siempre quieren verte en los peores trabajos. En el trabajo también hay un distanciamiento entre nosotros los mexicanos: es que éste es más grande que yo, que tiene más tiempo, lo quieren más y gana más. Hay pues personas que no aceptan la antigüedad y dicen: si gana más que yo, tiene que trabajar más. Pero también hay personas que dicen: yo soy el jefe aquí y no trabajo, tú eres el gato aquí. Así se siente el ambiente lleno de discriminación (1999).

Es pues claro que la situación del trabajador mexicano en este país se ha complicado a raíz de la situación económica y a la ofensiva legal, social y cultural que trata de controlar la migración mediante leyes y operaciones policiacas. Pero todas estas condiciones adversas no han logrado que los migrantes dejen de intentar cruzar la frontera con el fin de cumplir un "hipotético sueño americano". Y los jóvenes de esta comunidad continúan enfrentando, cada día, los factores adversos que representa ese "norte" y que no rara vez termina su intento de lograr "el sueño americano" en una cama de hospital, curando sus heridas o lo peor, en un ataúd con destino al tumblo.

Mientras este fenómeno no se detenga, los santiagueños seguirán el camino de sus abuelos y padres, enfrentando toda la problemática que hoy implica cruzar la frontera. Continuarán emigrando con un objetivo siempre posible: ir, trabajar y regresar con "éxito" a su viejo hogar. Las experiencias presentadas en este trabajo muestran que este objetivo no siempre es posible, sino que en no pocas ocasiones se trunca o diversifica en una serie de ideales y propósitos que no siempre terminan con el "retorno" exitoso a la localidad.

CAMBIOS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN SANTIAGO

Los migrantes se mueven en dos espacios geográficamente distintos: el lugar de trabajo y residencia en Estados Unidos y la comunidad de origen. Son espacios donde el migrante se enfrenta a una serie de ideas, informaciones, costumbres y formas de vida que provocan una serie de cambios que producen y reproducen pautas de conducta, normas y valores (López, 2003:22). Los efectos de la migración en el individuo son muy heterogéneos y pueden depender del grado de desarrollo de las redes sociales en lugar de destino y las que establece o mantiene con la comunidad de origen. Pero también, la adopción de nuevos hábitos, costumbres, actividades y conocimientos, tienen efectos distintos en cada uno de ellos y pueden llegar a marcar distinciones, sobre todo, entre quienes logran sobresalir y mejorar sus condiciones de vida, y los que no salen de una situación socioeconómica y cultural "inferior".

La conciencia de los migrantes, gracias a la experiencia en otro país y al conocimiento de otro tipo de cultura, se transforma y amplía. Tratan de comprender la cultura estadounidense, pero también van depurando imágenes, costumbres, recuerdos y compromisos de su cotidianidad anterior (Berger y Luckman, 1991:37). La subjetivi-

	<i>Situación local</i>	<i>Actividades productivas</i>	<i>Consecuencias</i>
1900-1940	Hacendados Explotación marginal Inestabilidad social-económica-política Gobierno contra hacendados Gobierno contra cristeros Reforma agraria Migración por seguridad	Mediero-aparecería Agricultura temporalera Ganadería Migración interna y escasa al exterior en búsqueda de seguridad	Migración externa: privilegiada, masculina Aventura, errática en su temporalidad y destino
1940-1964	Desarrollo estabilizador Migración económica Contratos braceros Consolidación de redes migratorias Migración temporal Desarrollo agrícola en el valle de Zamora	Pequeña propiedad y ejidal abandonadas Arrendamiento y venta de tierras ejidales	Caída de producción ejidal Ejidatario emigra como ilegal o bracero Cambio a cultivo hortícola Ingresos de subsistencia familiar Legalización de migrantes

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)

	<i>Situación local</i>	<i>Actividades productivas</i>	<i>Consecuencias</i>
1964-1986	<p>Terminan contratos braceros Pequeña y mediana empresas textiles Migración especializada y familiar por sector Comercio Intermediarismo agrícola, educación, inversión en la agricultura, profesionistas</p>	<p>Migrante amplía su rango de acción en el comercio o a la industria textil Los hijos de braceros los sustituyen Poder económico de migrantes Casas estilo americano</p>	<p>Migración legal de jóvenes, hijos de braceros Gran número de ilegales jóvenes Mayor inversión de migrantes: casas, tierras, negocios</p>
1986-1999	<p>Nueva y mayor migración profesionalizada, a partir del IRCA Amenaza residencia definitiva en Estados Unidos Crisis, industria textil, cambio de productos Aumento problemática política Agricultura comercial</p>	<p>Servicios, comercio, agricultura comercial Mayor poder adquisitivo de migrantes Industria manufacturera, enseres para el hogar</p>	<p>Mayor inversión de capital de emigrantes en infraestructura urbana Mayor migración ilegal, uso de "coyote" Periodos largos de migración Aumento problemática de ilegales Deterioro de redes sociales migratorias</p>

* La información contenida en este cuadro es el resultado de la investigación que realicé y concluí en diciembre de 1999. Sin duda, en los últimos años el fenómeno y sus implicaciones sociales han tomado otros matices y contrastes que sólo con una nueva investigación podrían comprenderse y profundizarse; lo que será parte de otro trabajo.

dad y las dimensiones culturales del migrante mexicano, en este caso el santiagueño, chocan y cuestionan la modernidad estadounidense tan ajena muchas veces a lo acostumbrado en la localidad de origen. La tecnología, la industria cultural y el sentido ferozmente competitivo, colocan al migrante ante una nueva construcción de la realidad, la cual directa o indirectamente modifica su conciencia y sentido común, y a la vez le permiten coexistir en la nueva sociedad en que conviven.

Al retornar a su comunidad de origen lleva consigo un cúmulo de gustos y necesidades adquiridas en Estados Unidos. La nueva visión del mundo y la catalización de una serie de conocimientos le ayudan —no sin problemas— a readaptarse a la comunidad de origen. Además del impacto personal se da también uno social, el cual se ve reflejado en la vida de los pueblos, tanto social como económicamente, como es el caso que nos ocupa en este trabajo.

A partir de la generación de los braceros, la migración en Santiago Tangamandapio comenzó a tener características que la distinguieron al interior de una región, donde todos van al "norte". Este fenómeno significó para la gente de Santiago un ingreso extra que le permitió sortear las "malas épocas" y transformar la forma de vida local. La mayor parte de los dólares enviados o traídos por los migrantes se usaron para la manutención familiar y mejoramiento de la vivienda; esto cambió la fisonomía del pueblo, permitió el crecimiento de la agricultura y el desarrollo de otras actividades en la localidad, como la industria textil.

Desde los años cincuenta del siglo pasado, la localidad se transformó de manera paulatina y no sólo por los efectos de la migración, sino también por aquéllos provocados por la modernidad y el desarrollo social de la población; por ejemplo, la educación hasta esos años sólo se había impartido por maestros particulares y los grados escolares alcanzados no rebasaban el tercer o cuarto año de primaria. La construcción de la primera escuela pública y el colegio de religiosas fue un gran logro, según los atestigua don Agapito Campos, quien como presidente municipal construyó el primer plantel y apoyó el segundo.

Hice la escuela Justo Sierra con al ayuda del pueblo no yo solo, todo el pueblo cooperó con trabajo y los que pudieron con dinero. Muchas veces pasaba a la cantina de Chabela y me llevaba a trabajar a los que estaban ofreciéndoles una tequila. En una ocasión pasó el presidente [Miguel Alemán] aquí por la carretera, que salgo y le pedí ayuda. Cuando iba por los contratos de braceros a

Morelia pa'repartirlos entre los más pobres, también traje el plano para la escuela y hacerla de cemento, pero no la quisieron así y por eso la hicimos de adobe. Además, cuando estuve se promovieron las clases en el colegio Victoria (1999).¹⁷

Creció la población y con ello la demanda de servicios, tales como agua potable, drenaje, electricidad, teléfono y servicio postal. Los recursos para realizar las obras han sido en muchas ocasiones de origen tripartito: federal, estatal y de la comunidad. Esto comenzó a practicarse desde la década de 1950 con la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material Local (organizada a partir de la gubernatura de Dámaso Cárdenas del Río), que se integró con varios de aquellos migrantes, como fue el caso de don Alfonso Torres quién fungió como encargado de varias obras de empedrado y pavimentación en el pueblo.¹⁸ El crecimiento de la población y los recursos traídos del exterior se vieron reflejados en el desarrollo y expansión de la localidad, y en el cambio de su fisonomía urbana; sus casas altas y de techos rojos fueron sustituidas por las de concreto, don Chema da cuenta de ello:

Aquí todas las casas de adobe se están tumbando, la situación cambió y ya no hay tanta rata como antes que se metían en el adobe y era un pulgal. Mi casa la hice en 1961 con lo que Dios me había socorrido allá [Estados Unidos], era la primera que se hacía de material en el pueblo [...] era una admiración: ¡qué casa de tabique, qué de altos, qué de baño, que quien sabe cuanto! Pero eso lo traía de fuera, si no hubiera salido la hago de adobe, pero allá admiraba casitas de material "decentitas" [...] Por eso digo, hay que irse acomodando y vivir no en la época de antes sino en la época que vivimos, con su baño y todo; aquí no se acostumbraba el baño, todo mundo hacía sus necesidades corporales en el campo y donde primero y a la hora que fuera, raro era el que tenía fosa (1999).

¹⁷ Entrevista a Agapito Campos, Santiago Tangamandapio, 21 de febrero de 1999. Don Agapito durante la cristiada participó en las fuerzas armadas del gobierno. Años más tarde se convirtió en ejidatario y después ocupó el cargo de presidente municipal, durante los años de 1948 y 1949; fue el primer ejidatario que llegó a ocupar este puesto. Lo dicho por él se confirmó en el Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán (AGHPEEM), Tangamandapio, 1944-1965, exp. 17, caja 1. Una vez que terminó su gestión se fue como bracero, siguiendo la costumbre de ese tiempo.

¹⁸ AGHPEEM, Tangamandapio, 1944-1965, exp. 4-17, caja 1.

Así, Santiago experimentó transformaciones sin precedente. Los migrantes introdujeron nuevos hábitos, costumbres, actividades productivas y conocimientos que hicieron al pueblo más dinámico. Las remesas llegadas del "norte" permitieron mejorar la situación de la población en los aspectos de alimentación, salud, habitación, vestido y educación. La gente mayor recuerda al pueblo, como dice don Reducindo:

Aquí el pueblo ha crecido de hace poco pa' acá. Al pueblo no le da vergüenza que vengan visitantes hasta de otro mundo. Hoy hay más respeto y más cosas pa' las personas que vengan. A como estaba antes, horroroso, ha cambiado muchísimo. Unas personas anticas [antiguas] dicen: que bonito antes, que volviera antes, pero ni siquiera el pueblo, ni siquiera él desearía que volviera. Y luego a la gente le iba re'mal comía puro chile y tortillas po's no había trabajo, pero ahorita que, la jovenazas van a los trabajos y hasta "perjumando" la "cay" [calle]; antes no había trabajo para nadie, ahora hasta para las mujeres y antes cuando. Ahora se visiten, comen y se asean y antes el puro mechero, cuando bien nos iba nos bañábamos el domingo y aquel piojal, chinches, pulgas y niguas y si ahorita se cría una chinche en una cama es como un lujo (1999).

Este testimonio muestra la idea que tienen las personas mayores de que el progreso vino con los nuevos tiempos, y que con ellos llegaron otros hábitos de limpieza e higiene; pero también, es innegable que el "progreso" llegó gracias al aumento de la educación y a una mayor oportunidad de empleos que contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de vida de los santiagueños. Con esto no quiero afirmar que todo en Santiago vaya por buen camino, porque no deja de haber ciertos rezagos en cuanto a servicios públicos y justicia social.

Por otro lado, estos "nuevos tiempos" no trajeron la prosperidad para todos los sectores sociales. En el campo, ante la falta de recursos para obtener herramientas y otros implementos de trabajo, los ejidatarios se vieron en la necesidad de rentar sus tierras, encargárselas o dejarlas en mediería, mientras ellos emigraban en busca de recursos, situación que actualmente se sigue presentando. Una vez que los recursos son conseguidos, algunos ejidatarios migrantes llegan a convertirse en arrendatarios e incursionan en otros negocios complementarios, como la venta directa de sus productos en el mercado local, regional o más allá—donde se requiere de vehículos y más trabajadores—; otros negocios fueron los relacionados con el cam-

o, como la apertura de comercios de semillas y agroquímicos. Ejemplo de ello es el caso de Manuel Muratalla, quien logró sobresalir como agricultor.

Obtuve mi parcela ejidal en el 57 por solicitud de compraventa, no era legal pero se hacía. La dejaba a cargo de mi esposa, ella facilitaba lo que se necesitaba para trabajarla; dejaba un peón encargado o en ocasiones la pasé a personas de mucha confianza, porque no podía dejarla de trabajar. Pero también una misma persona no podía trabajarla por más de dos años porque empezaban los problemas de que quería quedarse con la tierra.

Ya cuando me vine definitivamente, en el 78, ya tenía modo de comprometerme con una droga más grande y ponerme a trabajar. Solicité el tractor a la John Deere en Zamora y lo estuve pagando en letras por casi año y medio. Ya con mi tractorcillo sembraba cuatro o cinco parcelas que rentaba y de allí me he hecho para vivir y mejor que cuando andaba por allá. Aquí nadie quería utilizar semillas seleccionadas, abonos o fumigantes, no confiaban en ellos, no querían meterle nada a la siembra y po's no servían las cosechas [...] Trabajé con un ingeniero agrónomo que nos mandaron de Zamora y en mi tierra se experimentaron semillas de maíz, a mí me convino porque me apoyaron con abonos y a ellos también porque sirvió para que la gente viera que si funcionaban, además de que a mí me fue rebién porque coseché como nunca lo había hecho. Mis productos los vendí aquí, porque aquí vienen a comprármelos y si no los llevó directo al mercado a Zamora (1999).¹⁹

Con el tiempo, la migración marcó distinciones al interior de la sociedad local principalmente entre aquellos migrantes que regresaron o regresan "exitosamente" y que sobresalen en la localidad económicamente, y migrantes desafortunados o residentes locales, que no pudieron mejorar sus condiciones de vida. Aspectos materiales como la tierra, tanto urbana como agrícola, quedaron fuera del alcance de mucha gente excepto de algunos migrantes. Por eso, convertirse en migrante, fue y sigue siendo la meta de muchos jóvenes que aspiran irse al "norte" en vez de estudiar y terminar una carrera profesional en México. Ellos ven la experiencia migratoria y el desempeño en alguna actividad productiva en Estados Unidos, una forma de desarrollarse profesionalmente. Es el caso de Rogelio Rivera, quien me decía:

¹⁹ Entrevista a Manuel Muratalla, Santiago Tangamandapio, 27 de junio de 1999, ejidatario de 71 años, que inició su carrera migratoria en 1957 como bracero.

A los 17 años termine la secundaria, tarde porque de chico mi madre nos llevó al "norte" y perdí años de escuela. Veía que la carpintería económicamente daba buen resultado y le entré. Hubo muchos de mi generación que se metieron a estudiar una carrera, pero todos con una etapa de cinco o seis años para recibir un título que les permitiera trabajar. Yo dije: si éstos se van a estudiar para ser contadores o lo que fuera cuando ellos terminen yo ya tengo buena experiencia en la carpintería, ésa iba a ser mi carrera y me resultó. En el pueblo hay cinco carpinteros y no soy uno de los mejores pero ya me recibí de carpintero.

Trabajar en el oficio en el "norte" me permitió dar un paso más en mi aprendizaje. Por eso el estudio de la carpintería y su especialización fue mi estudio; vi la forma en que se trabajaba aquí y cómo se trabajaba allá y es muy diferente, pero unidas dan una buena carpintería y más rápida. La carpintería de México es muy artesanal, rústica, de serrucho, garlopa, escoplo y unir todo con espigas es muy lento y requiere de más trabajo. En cambio la carpintería de Estados Unidos es más rápida porque es a base de tornillos y de taladros, de maquinaria de corte 45, de discos de carburo, incluso *router* con brocas de carburo. Pero las dos unidas dan trabajos rapidísimos y de buena calidad, porque le estás poniendo la calidad de la artesanal y la rapidez de la norteamericana (1999).²⁰

Este tipo de experiencias sigue alentando a los jóvenes a emigrar, pero también ha servido para transformar las formas de vida de los santiagueños. Para ellos, el ser migrante representa prestigio y reconocimiento social por lo que apenas esperan salir de la secundaria para irse al "norte" a juntar dólares. Por otro lado, el poder adquisitivo de los migrantes y los bienes materiales traídos de Estados Unidos, así como los adquiridos a su llegada, han facilitado los trabajos del hogar y las actividades productivas; además, la posesión de bienes ratifica el estatus de las familias donde existe un migrante.

El migrante santiagueño regresa, pues, con nuevos gustos y necesidades, adopta nuevos valores y establece necesidades imitativas; compara dos formas de vida y hace juicios, ya sea para admirar la

²⁰ Entrevista a Rogelio Rivera, Santiago Tangamandapio, 26 de junio de 1999. La historia migratoria de Rogelio se originó por razones económicas, como en muchos otros casos; su visita laboral a Estados Unidos fue corta: de dos años, pero él la considera como un "paso más" en su "carrera" de carpintería. Su experiencia laboral le permitió "modernizar" su técnica con la ayuda de máquinas que vio y trajo de allá. Tiene su taller del cual vive cómodamente, por lo que descarta definitivamente, regresar al "norte".

forma de producir y trabajar de los estadounidenses o bien para rechazar su forma de vida. Al respecto opina Fernando Muratalla:

En mis planes a futuro no está irme definitivamente a Estados Unidos, sino seguir como hasta ahora: ir sólo uno o dos meses al año. Además mientras mis padres vivan no creo que lo haga; por otro lado no me gustaría que mis hijos crecieran allá sino aquí con la educación y las ideas de aquí, más unidos con más respeto a sus padres y los demás, que convivan con sus abuelitos [...] Una de las cosas que me gusta de allá es la disciplina para trabajar y cómo quieren a su país, crecen con una bandera en las manos, en la pared de su casa, es pues su orgullo. Son cosas buenas y malas, pero hay que traernos lo bueno y no lo malo. Me han ofrecido ser ciudadano de allá, pero no quiero porque yo estoy orgulloso de ser mexicano. Aparte siempre a los mexicanos o latinos nacionalizados son los primeros que mandan a la guerra como carne de cañón y eso no me gusta (1999).

Generalmente el migrante que regresa a Santiago no deja de rechazar ciertas costumbres estadounidenses, porque éstas representan un ataque a sus privilegios patriarcales, como lo manifiesta don Chema Lúa:

Estados Unidos es la nación más rica que puede haber en el mundo pero también la más corrupta, de sus sectas, de sus malos vestuarios, mariguanos, rateros y de todo. Es muy libre allá, pero también no puedes hacer muchas cosas; aquí se acostumbra golpear a los hijos, allá no porque te castiga la ley y por eso están tan echados a perder. Luego la mujer manda allá y eso no, el hombre nació para mandar y la mujer para obedecer (1999).

Las opiniones en este sentido son numerosas y si bien es cierto que admiraron muchas cosas, también rechazan el cambio hacia una educación familiar menos rígida —y sin golpes— ya que consideran que la falta de esta educación genera que los hijos se “echen a perder”. Además, por supuesto, rechazan cualquier aspecto que represente que la esposa pueda estar por encima de ellos, que los puedan “mandar” o que se ocupe de otras cosas que no sea del hogar. No obstante, ellos no dejaron de reconocer la importancia de ellas como “buenas” esposas encargadas de su hogar y de sus hijos.

Así, en las entrevistas logradas con los jefes de familia, además de reflejar las vicisitudes de su experiencia migratoria y su idea de ir al “norte” por un tiempo a “juntar unos dólares” que les permitieran

vivir bien, construir o mejorar su vivienda, abrir su propio negocio, comprar tierra o maquinaria que les facilitara el trabajo en el campo —objetivos que no siempre se cumplieron o tardaron más tiempo de lo planeado—, también surgieron comentarios acerca de la importancia que tuvieron las esposas para lograr sus deseos y administrar sus bienes. Por ejemplo, don Alfonso, un migrante de la “bracereada”, me dijo:

Logré algo por ella [su esposa], porque supo cuidar lo que le enviaba. No sólo mantuvo a los hijos sino que ayudó a mi madre, compró esta casa que estaba medio destruida y la reparó, y hasta p'a unas vacas y una mula le alcanzó; ya cuando yo me vine tenía en que trabajar aquí, unas tierras y hasta la mula para trabajarlas.²¹

Mientras ellos iban y venían del “norte”, la familia permaneció en el terruño —o lugar de origen (véase González, 1995)— y fue un ancla para que el migrante no se desarraigara, sobre todo en las tres primeras generaciones; fue entonces la familia el aliciente que requirió el migrante para trabajar, ahorrar y volver.

En tanto que el jefe de familia emigraba, las esposas se vieron en la necesidad de convertirse en jefas de familia de facto durante la ausencia del marido.²² Las mujeres si bien, generalmente, habían apoyado a sus cónyuges en el cuidado del ganado y en las tareas del campo, además de realizar las actividades propias del hogar, una vez que ellos empezaron a emigrar tuvieron que hacerse íntegramente cargo de estos trabajos. Otras dependieron de la “gratitud” de sus padres o suegros para mantener a su familia, y cuando no fue así tuvieron que ocuparse de actividades fuera de su casa para mantenerla mientras que las remesas del marido llegaban o escaseaban. El trabajo doméstico, el textil, los jornales en el campo o el despate de fresa en las congeladoras de Jacona y Zamora, fueron las actividades que ellas realizaron a la par con sus trabajos en el hogar. De esta manera las actividades femeninas se diversificaron y el trabajo extradoméstico comenzó a ser común en las mujeres de Santiago Tangamandapio.

La aportación monetaria femenina al sustento del hogar y al mejoramiento del nivel de vida familiar comenzó a desencadenar cambios en las relaciones que se establecen en el ámbito familiar, además de

²¹ Entrevista a Alfonso Torres, 29 de diciembre de 1998, Santiago Tangamandapio.

²² Situación estudiada por Gail Mummert (1988), en Quiringuicharo, Michoacán.

que posibilitó la modificación de las relaciones de género. Dichos cambios generaron una serie de transformaciones en las actividades, prácticas, identidades y posicionamientos, sobre todo de las mujeres, tanto en la familia como fuera de ella. De esta manera, se observó —aunque no se detalló a profundidad— que la transformación de dichas relaciones creó una serie de conflictos y negociaciones en la pareja, pero también permitió la creación de nuevas identidades del *ser* y *hacer* de las mujeres.

Ellas tuvieron mayor injerencia en la adopción de ciertas decisiones (educación de los hijos, gastos, aporte de salario, etc.) lo que les permitió ejercer ciertos grados de poder, pero dicho ejercicio lo debemos analizar con mucho cuidado; no puede generalizarse ni es ajante. Puede ser temporal, ya que al regresar el marido todo vuelve a la “normalidad” y se desvanece el ejercicio del *empowerment*, como bien afirma Woo (2001:28). Es decir, que si bien la mujer se ocupó de actividades remuneradas y aportó recursos al sostenimiento del grupo familiar, al regresar el marido y ocupar su papel de jefe del hogar, ella pierde toda la autonomía ganada (Ariza, 2002; González y Salles, 1995). No obstante estas afirmaciones, considero que la situación de las esposas de migrantes —y no migrantes— debe matizarse, ya que ellas no sólo responden a las circunstancias tanto familiares como sociales que se les presentan, sino que también tienen una capacidad de agencia²³ que les permite decidir tanto en la familia como fuera de ella.

La incursión de la mujer en el flujo migratorio en Santiago fue escasa hasta los años ochenta; generalmente los migrantes preferían dejar a sus esposas en casa por diversas razones: mayor ahorro, ya que él podía viajar solo y obtener ingresos que tenían mayor fruto en México, dado el alto costo de la vida en Estados Unidos; para que tanto la esposa como los hijos no fueran “contaminados” por la sociedad estadounidense, actitud que tenía doble cara: proteger a la familia de posible contaminación, pero también el migrante se protegía de los derechos asegurados a la mujer por las leyes, que en sus palabras significaba que “se le subiera al *cogote*”. Sin embargo, este patrón se ha transformado paulatinamente y, en cierta medida, gracias a cambios en la legislación estadounidense. Tal fue el caso de la

²³ Retomando a Giddens y su teoría, podemos entender que el actor/agente participa en la constitución de procesos sociales o prácticas sociales, en los cuales puede tener una capacidad de modificar los resultados y “crear la diferencia”, pero también nos hace conscientes de que dicha capacidad de transformación, bajo ciertas restricciones sociales y materiales el agente no puede modificarlas (Cohen, 1996).

IRCA o Ley Simpson Rodino en 1986, que permitió que muchos migrantes pudieran obtener la documentación legal tanto de esposas como de los hijos para entrar a Estados Unidos sin problemas y así se posibilitó una mayor reunificación familiar.

Por otro lado, se observó cómo la migración de la población de esta región ha sido una amenaza para el catolicismo imperante, ya que permitió el arribo de sectas y de migrantes convertidos. En Santiago la presencia de otra religión que no sea la católica es escasa y la más notoria es la de los Testigos de Jehová; esta religión fue adoptada y traída generalmente por estos "norteños" o aquéllos convertidos por evangelizadores que llegan al pueblo. Esta situación ha llevado a los encargados de la fe católica a modificar y crear mecanismos para mantener a los fieles y evitar la fuga hacia otras religiones (Espinosa, 1997). Las fiestas religiosas o eventos deportivos son uno de los mecanismos utilizados por los sacerdotes católicos para proteger la integración y cohesión de la familia y de la comunidad; a la vez, se convierten en un mecanismo que fortalece las relaciones entre los migrantes, el pueblo y la Iglesia. Dichas festividades en Santiago se realizan en fechas relacionadas con ciertas celebraciones importantes, como el 10 de mayo o las fiestas decembrinas, que es cuando los migrantes regresan a la localidad. Estos días también son aprovechados para realizar otras fiestas familiares: matrimonios, primeras comuniones y bautizos, que se convierten en eventos muy costosos.

En la política local, también los migrantes han participado y lo vimos desde las primeras generaciones con el caso de don Agapito Campos, quien llegó a la presidencia municipal, o don Marcos a la comandancia del pueblo. En la actualidad es evidente su participación, en mayor número, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Apoyan los proyectos encabezados por el municipio y gracias a su financiamiento, el aspecto que da el pueblo es bastante diferente al de hace 25 o 30 años. El alumbrado público y sobre todo la pavimentación o empedrado de calles no han tenido un efecto pasajero, de hecho favorece una actitud de cambio.

La migración en Santiago no rompió los lazos entre la localidad y los migrantes, primero porque existe una tendencia al "retorno" y a una permanencia de las familias en la localidad de origen; lo que considero se debe a las difíciles condiciones de vida en Estados Unidos, lo que provoca que, en ocasiones, sea indeseable la migración definitiva. Con lo anterior no quiero afirmar que no existen santiagueños que hayan roto todo lazo con la comunidad de origen, porque efectivamente los hay. Es el caso de aquellos que huyeron de

problemas legales, familiares y laborales, pero también los que lograron establecerse allá y conformaron nuevas familias y bienes que se arraigaron en aquel país. Pero también existen aquellos que después de varios años de ruptura con su familia y el pueblo, reactivaron los lazos muy productivamente; regresaron y establecieron negocios familiares relacionados con la experiencia laboral adquirida en los Estados Unidos. Así se abrieron restaurantes, talleres mecánicos, de carpintería, autolavados, talleres textiles, se adoptaron nuevos métodos en la agricultura, entre otros. Estos migrantes son considerados gente próspera, exitosa y muchas veces un ejemplo a seguir.

De esta manera, considero que la experiencia adquirida por el migrante influyó positivamente en la localidad, pero también es cierto que su regreso se asocia con consecuencias negativas y que en mi opinión de mis informantes son causa de desintegración familiar (esposos que no regresan por diversos motivos como la formación de otro hogar, por vicios, descarrilamiento de hijos por el abandono del padre, etc.), de una mayor estratificación social, de fricciones políticas y laborales, de exaltación del machismo, de vicios (alcohol, drogas, mujeres, etc.) y enfermedades (VIH, cánceres, obesidad, lesiones lumbares, amputaciones de miembros, etc.), entre otros. Aspectos que en voz de muchos santiagueños son consecuencia de la migración, pero también es necesario tener en cuenta que estos "efectos negativos" no necesariamente están relacionados con la migración, porque llegan a presentarse en familias donde no existe ninguna relación con este fenómeno social.

REFLEXIÓN FINAL

La migración de santiagueños ha respondido a razones económicas, pero también, en ciertas etapas de la historia de Santiago, se registró por la búsqueda de seguridad personal; pero también, no ha estado exenta de la búsqueda de aventuras²⁴ por quienes intentaron e intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El movimiento de personas es muy heterogéneo y complejo, y obedece a su vez a la

²⁴ A lo largo de la historia migratoria santiagueña existen varios casos de jóvenes que viajaron a Estados Unidos a conocer, gozar y disfrutar la vida; "fueron a conocer para que no les contaran". La libertad y diversión fueron ideales que los llevaron a huir de las responsabilidades que tenían en su familia; sin embargo, mucho de ellos "volvieron al buen camino" y tomaron las cosas con mayor responsabilidad, como fue el caso del profesor Jesús Campos, que ya presentamos en este trabajo.

conjunción de una serie de factores socioeconómicos, demográficos y políticos, y aquéllos propios de la modernidad.²⁵ Sin duda, este movimiento generó una serie de cambios en la mentalidad de las personas de varias generaciones y formó nuevos valores culturales. Así sucedió entre los santiagueños de las generaciones estudiadas en este trabajo y lo manifestaron en sus opiniones. Al respecto me decía don Chema:

Todo lo que vi nuevo me interesó [...] todo lo andado me formó. Hay que tener siempre en la mente salir adelante, progresar y no regresar atrás como los cangrejos, sino siempre hacia delante. Porque si yo me hubiera quedado aquí sentado no me iba a caer nada y hoy anduviera como un indito cargando leña (1999).

Estos cambios no fueron homogéneos ni generalizados, muchos de los migrantes los rechazaron y trataron que en sus familias todo permaneciera igual. Siendo ellos jefes de familia indiscutibles, donde tanto la esposa como los hijos le debían obediencia. No obstante, el desempeño de las mujeres en las familias migrantes se transformó, sobre todo porque ellas jugaron un nuevo papel en la "toma de decisiones" y tuvieron una mayor participación laboral. Estos cambios, aunque no radicales ni generalizados, se dieron de manera gradual e implicaron un avance en la valoración de la mujer, tanto en el ámbito familiar como social.

Por otro lado, la migración de santiagueños a Estados Unidos no respondió a circunstancias de marginación y pobreza extrema, sino que fue parte de las estrategias familiares tendientes a mejorar el nivel de vida y, por lo tanto, se apoyó el desarrollo local. El movimiento de personas marcó las bonanzas y penurias de los habitantes, y en ciertas etapas de la historia santiagueña se convirtió en una "válvula de escape" para diversos problemas locales: religiosos, agrarios y económicos.

Los migrantes de esta localidad salieron, y salen actualmente, con la ilusión de que algún día regresaran exitosamente, con un capital que les permita adquirir casa propia, tierras o crear un patrimonio para sobrevivir en su terruño —metas que no siempre se llegan a cumplir, sobre todo cuando emigra toda la familia y los hijos desarrollan otros proyectos de vida en aquel país. El regreso de migrantes a Santiago y la continuidad de lazos —familiares, religio-

²⁵ Una modernidad impregnada de racionalismo y cada vez más al servicio de las demandas y necesidades de una sociedad de consumo.

y comunitarios— favoreció, en cierta manera, una integración familiar; además, el sentimiento de arraigo y de pertenencia son factores que contribuyen al regreso de los migrantes. Igualmente se fortalecen los ciclos migratorios, el intercambio de bienes e ideas, el fortalecimiento de identidades y, sobre todo, la formación de una cultura migratoria santiaguense.

Este movimiento de santiagueños a Estados Unidos no ha sido ajeno a ciertos efectos negativos. En opinión de mis informantes, la migración trajo vicios, enfermedades, pierde a los jóvenes, crea mayor desigualdad entre quienes logran el éxito (material) con sus idas “al norte” y quienes nunca emigran; además provoca que el trabajo en el lugar de origen no sea atractivo para los santiagueños y que se estén abandonando ciertas actividades, sobre todo por las nuevas generaciones, como es la agricultura. Pero como ya afirmé anteriormente, esto no lo podemos generalizar.

En mi opinión, la migración de habitantes permitió que se recuperara tanto social como económicamente esta localidad. Los santiagueños a lo largo del siglo XX aprendieron, como muchos otros pueblos involucrados en la migración, a convivir con este fenómeno, a beneficiarse de él y a convertirse ellos mismos en “agentes de cambio”; transformadores de la economía local, de las relaciones familiares y de la educación de las nuevas generaciones. Además, ellos buscaron otras alternativas para permanecer en su terruño, como el cambio de una agricultura tradicional a una agricultura más comercial (hortalizas y forrajes), la adopción de la industria textil y manufacturera, así como el comercio regional.

El migrante que regresa se incorpora a la comunidad, muchas veces, jugando un nuevo papel y obligaciones que lo ponen de ejemplo a seguir cuando ha tenido una vida “exitosa” material y socialmente; común que le pidan favores—sobre todo económicos—, pero también es un individuo al que se escucha y se le solicitan consejos, y generalmente es al que buscan para hacerlo compadre. Aunque también en ciertos casos, se le teme por las mañas y vicios que pudo haber adquirido en Estados Unidos.

Así, Santiago Tangamandapio es una localidad que cambia a un ritmo constante. No es que vaya más rápido que otras, sino que aquí la migración inyectó gran dinamismo en todo el ámbito social y permitió el crecimiento de la población y de sus servicios. Así, la migración de santiagueños ha creado un espacio social transnacional, una red compartida entre Estados Unidos y Santiago, donde los migrantes forjan y sostienen una serie de redes sociales (económicas, religiosas, políticas y familiares) que no sólo ayudan a que el flujo

migratorio continúe, sino que fortalecen los lazos entre migrantes y su localidad de origen; pero también, estas redes pueden llegar a romperse cuando se presentan intereses dispares y tensiones entre quienes emigran y quienes permanecen en la localidad.

Considero que el fenómeno migratorio es tan complejo que es difícil poder obtener conclusiones tajantes sobre su desarrollo y efectos en la población involucrada, precisamente porque es un proceso construido por sujetos que continuamente lo están modificando. Ante esto sólo nos queda matizar y contrastar las experiencias de los sujetos involucrados, y tratar de entender los procesos en que se ven involucrados y que de manera constante están modificando. Es por esto que no podemos hacer calificaciones ni juicios tajantes sobre los efectos que produce el movimiento de personas en las comunidades de origen, sino más bien es necesario intentar comprender las experiencias de estos migrantes, sus proyectos de vida, interacciones y redes sociales y económicas que han impactado la vida y práctica de los involucrados en la migración internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- ALANÍS, F. (1991), *El gobierno de México y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos 1934-1940*, México, El Colegio de México, manuscrito.
- ARIZA, M. (2002), "Género y migración femenina: dimensiones analíticas y desafíos metodológicos", en D. Barrera y C. Oehmichen, *Migración y relaciones de género en México*, México, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A.C./Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM.
- BARRET, E. (1975), *La cuenca de Tepalcatepec. Subdesarrollo moderno*, México, SEP (SepSetentas).
- BERGER, P. y T. LUCKMAN (1991), *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Amorrortu.
- BOEHM, B. (1994), "La desecación de la ciénega de Chapala y las comunidades indígenas...", en *Sistemas hidráulicos, modernización de la agricultura y migración*, México, El Colegio Mexiquense, pp. 334-352.
- COHEN, I. (1996), *Teoría de la estructuración. Anthony Giddens y la constitución de la vida social*, México, Universidad Autónoma Metropolitana.
- DURAND, J. (1988), "Los migradólares: cien años de inversión en el medio rural", en *Argumentos*, núm. 5, México, UAM.

- ESPINOSA, V. (1997), "El día del migrante: un ritual de purificación espiritual para los que regresan del norte y la pastoral migratoria en una parroquia de los altos de Jalisco", ponencia, "XIX Coloquio de Antropología e Historia Regionales", Zamora, El Colegio de Michoacán.
- GARCÍA ZAMORA, Rodolfo (2003), *Migración, remesas y desarrollo local*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas.
- GONZÁLEZ, L. (1995), *Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- GONZÁLEZ, S. y V. SALLES (1995), "Mujeres que se quedan, mujeres que se van... Continuidad y cambios de las relaciones sociales en contextos de aceleradas mudanzas rurales", en S. González y V. Salles, *Relaciones de género y transformaciones agrarias. Estudios sobre el campo mexicano*, México, El Colegio de México, pp. 15-52.
- GUTIÉRREZ, A. (1984), "Investigación histórica y lucha ideológica. El caso de las comunidades michoacanas", en A. Gutiérrez, *La cuestión agraria: revolución y contrarrevolución en Michoacán*, México, UMSNH.
- MOHENO, C. (1985), *Las historias y los hombres de San Juan*, Zamora, El Colegio de Michoacán/Conacyt.
- MUMMERT, G. (1988) "Mujeres de migrantes y mujeres migrantes de Michoacán: nuevos papeles para las que se quedan y para las que se van", en Gustavo López Castro y Thomas Calvo (eds.), *Movimientos de población en el occidente de México*, México, Colmich/CENCA, pp. 281-297.
- LÓPEZ, G. (2003), "Diásporas, circulación y movilidad: notas desde Michoacán", en Gustavo López (coord.), *Diáspora michoacana*, Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, pp. 19-31.
- SÁNCHEZ, G. (1991), *Pueblos, villas y ciudades en el Porfiriato*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- TAPIA SANTA MARÍA, Jesús (1992), *Campo religioso y evolución política en el Bajío zamorano*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- OCHOA, A. y A. URIBE (1990), *Emigrantes del oeste*, México, Conaculta.
- WOO, O. (2001), *Las mujeres también nos vamos al norte*, México, Universidad de Guadalajara.

ARCHIVOS

- Archivo General de la Nación (AGN).
 Archivo Municipal de Zamora (AMZ).

Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, Morelia (AGHPEEM).

Archivo del Registro Agrario Nacional, Morelia (ARANM).

ENTREVISTAS

- Campos, Agapito (21/02/99), Santiago Tangamandapio.
Campos, Jesús (22/02/99), Santiago Tangamandapio.
Campos, Reducindo (22/02/99), Santiago Tangamandapio.
Lúa, José María (5-6/04/99), Santiago Tangamandapio.
Muratalla, Fernando (27/06/99), Santiago Tangamandapio.
Muratalla, Manuel (27/06/99), Santiago Tangamandapio.
Sandoval, Marcos (29/12/98 y 18/02/99), Santiago Tangamandapio.
Oregel, Arcadio (06/06/99), Santiago Tangamandapio.
Rivera, Rogelio (26/06/99), Santiago Tangamandapio.
Torres, Alfonso (29/12/98, 29/01/99 y 06/04/99), Santiago Tangamandapio.
Torres, Jesús (08/01/99), Santiago Tangamandapio.
Torres, María (29/01/99), Santiago Tangamandapio.

EL IMPACTO DE LA INICIATIVA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE ESTADOS UNIDOS EN LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS DE MÉXICO

*Belem D. Avendaño Ruiz**

*Rita E. Rindermann***

RESUMEN

La iniciativa de inocuidad alimentaria de Estados Unidos surge como respuesta a un problema de salud pública que en la búsqueda de solución, origina una serie de reglamentaciones que pueden resultar un obstáculo al comercio internacional, convirtiéndose en una barrera técnica al comercio, sobre todo para exportaciones agrícolas de países como México, que no cuentan con la tecnología y los recursos necesarios para adaptarse a los nuevos requerimientos que el mercado impone en materia de inocuidad, como es el caso de las hortalizas frescas de exportación, mercado en el cual México ha mantenido una tasa de crecimiento alta, del 4.49 por ciento anual en promedio para los últimos 11 años. Se presume que la iniciativa tendrá un impacto negativo en las exportaciones de hortalizas frescas en nuestro país hacia Estados Unidos, por dos razones principales: 1) la gran concentración en las exportaciones mexicanas de hortalizas a ese destino, y 2) el alto costo de las inversiones necesarias para producir en condiciones de inocuidad.

INTRODUCCIÓN

La inocuidad alimentaria es un tema que día a día adquiere mayor vigencia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La

* Coordinadora de Posgrado e Investigación, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Correos electrónicos: <belem_avendano@yahoo.com>, <b_avendano@uabc.mx>.

** Directora del CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: <[rsr@avantel.net]>.

disponibilidad de alimentos de buena calidad sanitaria es un reclamo universal, y su demanda es mayor conforme la población adquiere mayor conciencia de la importancia que tiene para su salud el consumo de alimentos contaminados con cualquier tipo de patógenos y sustancias tóxicas.

La producción de alimentos ha evolucionado de una industria local, a una en la cual la producción y los procesos se centralizan en distintas partes de un país y del mundo. El desarrollo del transporte ha proporcionado a los consumidores un mayor acceso a alimentos importados de todas partes del mundo, pero esto a su vez representa nuevos retos, pues se corre el riesgo de importar alimentos contaminados. El reto es aún mayor para los productores agrícolas, ya que su producción se encuentra sujeta a la disponibilidad de los recursos naturales y las condiciones meteorológicas, lo que dificulta un estricto control de calidad y expone el producto a los enemigos invisibles que pueden producir enfermedades alimenticias e inclusive brotes epidemiológicos.

La comercialización de alimentos de calidad e inocuos se está convirtiendo, poco a poco, en la clave del éxito en el comercio internacional, y son los gobiernos de los países importadores los que están recurriendo a la aplicación de regulaciones y normas estrictas, que garanticen que los productos que se introducen, vía importación, cumplan con los más altos estándares de producción, al igual o más altos que los producidos domésticamente, y evitar así poner en riesgo la salud de sus consumidores. De esta manera, las regulaciones domésticas pueden constituir un gran obstáculo al comercio y su uso está proliferando. Sin embargo, puede ser que las barreras técnicas al comercio simplemente se están volviendo más visibles a causa del escrutinio internacional, o más restrictivas al comercio debido a la disminución en las tarifas.

En este documento se plantea la interrogante de si la iniciativa de inocuidad alimentaria instrumentada por Estados Unidos se convertirá en una barrera técnica al comercio de frutas y hortalizas frescas producidas y exportadas por México a ese país.

Definición de inocuidad alimentaria

La inocuidad alimentaria se puede entender como la implementación de medidas que reducen los riesgos, provenientes de estresores, tanto biológicos como químicos, tales como aditivos alimenticios, para proteger a los consumidores de peligros involuntarios (Roberts, 1999).

En una definición técnica, la inocuidad alimentaria se puede considerar como lo contrario al peligro alimentario, la probabilidad de no sufrir algún riesgo por consumir los alimentos en cuestión (Henson y Traill, 1993). Los mismos autores la definen también como una medida restrictiva al comercio, dentro del subconjunto de regulaciones sociales, que son adoptadas por un país y que tienden a proteger el interés público, tales como salud, inocuidad, ambiente y cohesión social (en esta definición se incorporan también medidas ambientales, de comercio, estándares de calidad, etcétera).

La inocuidad alimentaria como barrera técnica al comercio

El Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio (TBT) fue firmado en 1979 y ampliamente revisado en 1994 durante la Ronda Uruguay, en la cual su aplicación se incrementó enormemente, no sólo porque forzaba a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a cumplir con él, sino también porque éstos no pueden objetar las conclusiones del panel sólo porque les sean desfavorables. Este acuerdo cubre regulaciones técnicas, estándares y procedimientos de aseguramiento de la conformidad. Su ámbito se extiende a todos los bienes intercambiables y concierne a todas las regulaciones técnicas y estándares, incluyendo empaque, marcas y etiquetado. En el sector agroalimentario el acuerdo aplica a todas las regulaciones, excepto aquéllas relativas a la vida animal, vegetal y salud humana, las cuales son cubiertas por el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario (SPS).

En tanto el ámbito del acuerdo SPS es extremadamente preciso, cuestiones como nutrición y propiedades alergénicas de ciertos nutrientes son cubiertas por el TBT. Aún más, éste aplica a todo aquello que no concierne explícitamente a la salud. El SPS establece las reglas básicas y estándares para la inocuidad alimentaria y la salud animal y vegetal. Permite a los países establecer sus propios estándares, pero también determina que las regulaciones deben tener bases científicas. Se deberá aplicar sólo hasta donde sea necesario para proteger la salud humana, la vida animal y vegetal, y no deberá discriminar arbitraria o injustificadamente entre países donde prevalezcan condiciones similares o idénticas. Los países miembros son exhortados a utilizar estándares internacionales, guías y recomendaciones donde existan. Sin embargo, los países miembros pueden usar medidas que resulten en estándares más altos si es que existe una justificación científica. El acuerdo también permite a los países utilizar diferentes estándares y métodos para la inspección de productos.

Existen varias definiciones de barrera técnica al comercio y los investigadores han tratado de distinguir entre aquellas que han sido diseñadas para proteger a la industria local, y las diseñadas para proteger a los consumidores. De esta manera, los dos acuerdos, el TBT y el SPS, son de vital importancia para la lucha en contra de los obstáculos técnicos al comercio. Ellos se apoyan sobre una misma idea, las reglamentaciones nacionales (o los procedimientos de aplicación de esas reglamentaciones) no deben contener discriminaciones inaceptables entre los agentes económicos de países diferentes.

Entre las definiciones de las barreras técnicas al comercio se encuentra aquella que las clasifican por el objetivo regulatorio que las justifica. Esta clasificación proviene de reconocer, en primer lugar, tres grandes objetivos sociales de las medidas técnicas que restringen el comercio: 1) proteger el interés económico de los productores; 2) proteger la salud y el interés económico de los consumidores, y 3) la protección del ambiente (Roberts, 1999).

Estos grandes objetivos se pueden desagregar en aquellos que reducen los riesgos biológicos y toxicológicos, y los que no, pero que sirven a algún otro objetivo público.

En este sentido, la inocuidad alimentaria se puede clasificar como una barrera técnica al comercio, que tiene por objetivo regulatorio proteger la salud y el interés económico de los consumidores de enfrentar riesgos involuntarios en el consumo de alimentos (disminuir la posible contaminación de los alimentos por patógenos microbianos).

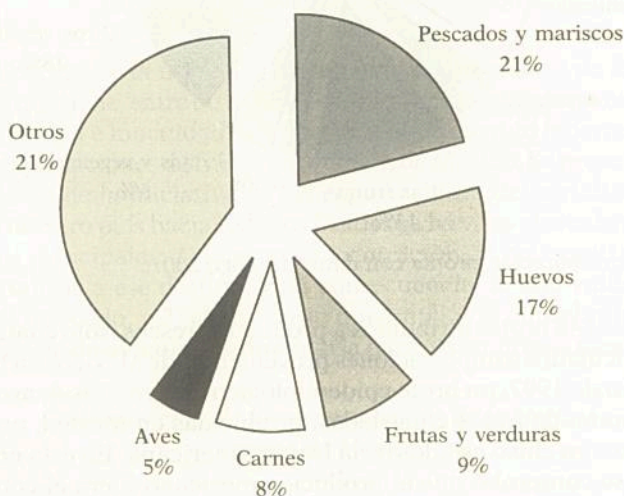
El programa de inocuidad alimentaria de Estados Unidos

En los últimos años se han dado algunos casos, muy publicitados, de brotes epidemiológicos asociados al consumo de frutas y hortalizas, y algunos otros asociados a alimentos importados. En 1997 se detectó un brote de hepatitis A en fresas (presumiblemente producidas en México, distribuidas a través del Programa de Productos para Alimentos Escolares del USDA), que provocó más de 200 enfermos en cuatro estados del país. En 1998, un brote de *Shigella sonnei* en perejil y cilantro, ocasionó un número similar de enfermos en tres estados, y en 1999 el patógeno *S. bairdson* en un brote asociado a jitomates, ocasionó molestias a más de 80 personas en siete estados de la Unión Americana.

Los brotes epidemiológicos atribuidos al consumo de alimentos no han cesado. En un recuento de 1990 al 2001 (CSPI, 2001) se han

detectado en Estados Unidos un total de 1 589 brotes que implicaron 73 425 casos. Los cinco principales alimentos causantes de estos incidentes, sin incluir aquéllos relacionados con el consumo de alimentos multi-ingredientes, fueron: pescados y mariscos, con 340 brotes que representan 21 por ciento del total; huevos, con 271 brotes o 17 por ciento; frutas y verduras frescas, provocaron 148 brotes que equivalen al nueve por ciento del total; carne, con 134 brotes, o ocho por ciento; y aves con cinco por ciento del total, equivalente a 79 brotes.

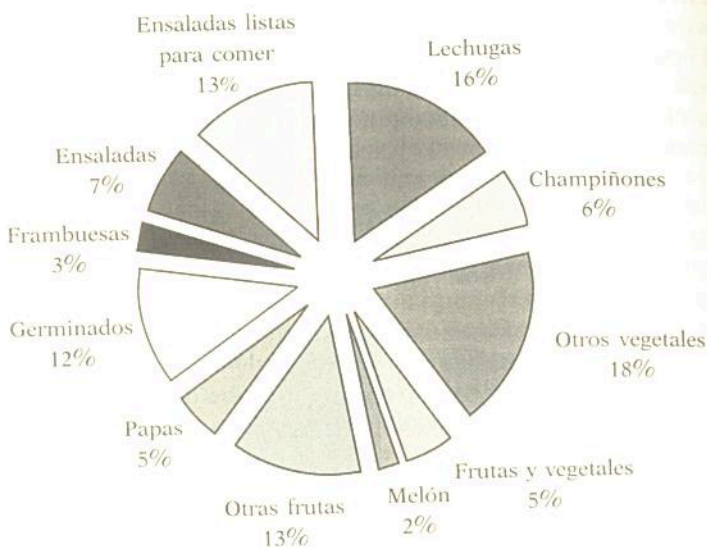
GRÁFICA 1
ESTADOS UNIDOS. DISTRIBUCIÓN DE BROTES ALIMENTICIOS
POR VEHÍCULO, 1990-2001



FUENTE: elaboración propia con información del CSPI, 2001.

De los 148 brotes y 10 504 casos atribuidos a frutas y hortalizas, 78 por ciento (115 brotes) estuvieron vinculados directamente a vegetales con 6 155 casos, en tanto las frutas fueron el vehículo para 26 brotes con 4 018 casos (17 por ciento). También se detectaron siete brotes con 331 casos en los que los causantes fueron ambos, frutas y hortalizas. La categoría de productos frescos tiene un promedio de 71 casos por brote. La distribución de brotes por producto durante el periodo 1990-2001 en Estados Unidos, es la siguiente:

GRÁFICA 2
ESTADOS UNIDOS. BROTES EPIDEMIOLÓGICOS EN FRUTAS
Y HORTALIZAS, 1990-2001



FUENTE: elaboración propia con datos del CSPI, 2001.

De los 148 brotes atribuidos a productos frescos, sólo cuatro han sido vinculados a importaciones provenientes de México. En frutas, en enero de 1997, un brote epidemiológico de hepatitis A, asociado al consumo de fresas congeladas, producidas en México, provocó 56 casos en cinco estados de la Unión Americana. En esta ocasión nunca se comprobó que el productor mexicano fuera el contaminante. En septiembre de 1992 se registró un brote de *E. coli* 0157:H7 en vegetales que afectó a cuatro personas; y en septiembre de 1995, nuevamente un brote de *E. coli* 0157:H7 en lechuga iceberg de origen mexicano, ocasionó 30 casos. Recientemente, en abril del 2002, se detectó un brote en melón atribuido a productores de la costa de Guerrero, en México.

Como se puede observar, los brotes epidemiológicos atribuidos a importaciones mexicanas de productos frescos difícilmente alcanzan dos por ciento del total registrado durante el periodo de 1990 al 2001 en Estados Unidos.

Como respuesta a tales brotes, el 2 de octubre de 1997 la administración Clinton anunció la Produce and Imported Food Safety

initiative (Iniciativa de Inocuidad Alimentaria en Productos Domésticos e Importados). Esta iniciativa busca elevar los estándares nacionales de inocuidad alimentaria y fortalecer el sistema de inspección doméstico y los sistemas de inocuidad en países extranjeros, para garantizar que los alimentos de importación sean tan seguros como los producidos en el país. Esta iniciativa busca fortalecer la vigilancia de la Food and Drug Administration (FDA) sobre los productos importados, mejorar y ampliar las actividades de inspección, proveer guía y asesoría a las empresas sobre el uso de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

EL IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS DE MÉXICO

La aplicación de la iniciativa de inocuidad alimentaria de Estados Unidos que tiene, entre otros objetivos, elevar los estándares nacionales de calidad e inocuidad, necesariamente ha tenido repercusiones en las exportaciones de frutas y hortalizas de México. Se presume que el impacto de la iniciativa en las exportaciones de hortalizas frescas en nuestro país hacia Estados Unidos se ha visto afectada por dos razones principales: 1) la gran concentración en las exportaciones de hortalizas a ese destino; y en consecuencia, la alta vulnerabilidad del mercado, y 2) el alto costo que implica el cumplimiento de la iniciativa de inocuidad alimentaria para las empresas mexicanas.

Concentración de las exportaciones de hortalizas frescas de México

Las exportaciones de hortalizas de nuestro país han tenido como destino tradicional a Estados Unidos. Si analizamos el periodo 1990-2001, encontramos que más del 90 por ciento de las exportaciones totales de hortalizas frescas que realiza el país, concurren a este destino (véase cuadro 1).

La principal razón de esta concentración tiene un carácter histórico y geográfico: las relaciones y la cercanía con el país vecino. Sin embargo, esta concentración de las exportaciones hortícolas en un solo mercado la convierte en una actividad altamente vulnerable. Así, los productores mexicanos se ven sujetos a las condiciones del mercado estadounidense, a los cambios en los patrones de compra y consumo de su sociedad y, en general, al ritmo de su economía.

CUADRO 1

MEXICO. EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS POR DESTINO
(MILLONES DE DÓLARES), 1990-2001

año	Exportaciones totales	Exportaciones a Estados Unidos	% Estados Unidos	Exportaciones al resto del mundo	% resto del mundo
1990	1 012.2	981.9	97.0	30.3	3.0
1991	917.3	886.3	96.6	31.0	3.4
1992	940.8	904.7	96.2	36.1	3.8
1993	1 244.8	1 201.2	96.5	43.6	3.5
1994	1 319.4	1 248.0	94.6	71.4	5.4
1995	1 755.6	1 675.3	95.4	80.3	4.6
1996	1 682.5	1 571.5	93.4	111.0	6.6
1997	1 722.9	1 635.1	94.9	87.8	5.1
1998	1 963.9	1 882.1	95.8	81.8	4.2
1999	2 032.2	1 929.2	94.9	103.0	5.1
2000	2 177.3	2 072.6	95.2	104.7	4.8
2001*	2 070.0	1 949.9	94.2	120.1	5.8

Cifras correspondientes al periodo enero-octubre de 2001.

*Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía en <<http://www.economia-snci.gob.mx>>.

Uno de los factores que contribuye a la concentración es la cercanía con las zonas productoras. En México, la principal región productora de hortalizas frescas para la exportación se sitúa en el noroeste, donde se comparte la frontera con uno de los principales centros distribuidores y consumidores de Estados Unidos: California. Cabe mencionar que gran parte de las exportaciones que se realizan a otros países como Canadá, Inglaterra y Japón, cruzan *in-bond*¹ por este país, por lo que aparecen registradas como importaciones estadounidenses, para reaparecer como reexportaciones, en el caso de que éstas se efectúen de manera directa por el productor; pero en la mayoría de los casos, las hortalizas se exportan definitivamente a los distribuidores en Estados Unidos y son ellos quienes realizan las exportaciones hacia otros países, como si se tratara de productos de Estados Unidos y no mexicanos.

La mayoría de las hortalizas se producen en el noroeste del país, porque es ahí donde el suelo y el clima favorecen el desarrollo de los cultivos, sobre todo en el ciclo otoño-invierno, cuando en Esta-

¹ Mercancías que cruzan por Estados Unidos para alcanzar el puerto por el que serán exportadas.

los Estados Unidos se enfrentan a condiciones climatológicas adversas para la producción, propiciando una gran demanda de hortalizas mexicanas. Al ser Estados Unidos uno de los principales productores de hortalizas en el mundo, las de México funcionan como un mercado complementario de su oferta interna. Sinaloa se complementa con Florida en el ciclo otoño-invierno; y Baja California con California en el ciclo primavera-verano. Las principales regiones exportadoras de nuestro país son, de acuerdo con Rindermann y Gómez (2000): Sinaloa, con las regiones del valle de Culiacán, Guasave y Los Mochis; Baja California, concentradas en San Quintín y el valle de Mexicali-San Luis Río Colorado;² en Sonora, los valles del Yaqui y del Mayo; el Bajío, Guanajuato, y algunas áreas de Michoacán y Guerrero.

*El costo de cumplimiento con la iniciativa
de inocuidad alimentaria*

Para las empresas mexicanas, el cumplimiento con el programa de inocuidad alimentaria de Estados Unidos implica no sólo la voluntad de aplicar un programa de Buenas Prácticas Agrícolas y la Guía Voluntaria para reducir al mínimo el riesgo de contaminación microbiana en los alimentos. Una empresa que desee incursionar en la adopción de estos estándares deberá realizar una serie de inversiones que le permitan adaptar su proceso productivo para alcanzar, por un lado, las especificaciones de calidad impuestas por el mercado, y por el otro, el aseguramiento de la conformidad en materia de inocuidad alimentaria. Además, la empresa enfrentará costos de cumplimiento no recurrentes, o bien, aquellos gastos realizados para alcanzar el cumplimiento de la calidad, tales como adaptación del proceso de producción y/o del producto final para facilitar la entrada al mercado, y que se realizan por una sola ocasión, y costos recurrentes, es decir, costos adicionales de producción y otros en que se incurre para demostrar que el producto está cumpliendo con la calidad especificada por el mercado y con los procedimientos de certificación de la inocuidad.

En diagnósticos preliminares realizados por organismos representantes de productores, tales como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y los Empacadores de Mango de Exportación (EMEX), se estima que la inversión requerida en infraestructura y equipamiento rural para adoptar las Buenas

² Perteneciente a Sonora, pero comparte el distrito de riego con Mexicali, Baja California.

Prácticas Agrícolas, por parte de las unidades productivas, ascendía, en el caso de Sinaloa, a 2 648.55 pesos por hectárea aproximadamente. La CAADES evaluó 41 unidades productivas en 1998, y los resultados de la evaluación indicaron que 75 por ciento de ellas obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos en campo, presentando mayores deficiencias en las instalaciones sanitarias y el manejo de agua. En empaque, 58 por ciento de las unidades se evaluaron por debajo de los 70 puntos, con mayores rezagos en instalaciones sanitarias, control de plagas e higiene del transporte.

En resultados de una encuesta aplicada durante 2002 en el noroeste de México,³ los productores manifestaron que los costos más onerosos son los relacionados con la educación y capacitación del personal, pues el bagaje cultural de nuestros trabajadores no les permite asimilar con rapidez los cambios necesarios para laborar en condiciones de inocuidad, la mayoría de los cuales están asociados a condiciones de seguridad e higiene. Sin embargo, están conscientes de que la implementación de este tipo de programas les permitirán obtener mejores productos, incrementar su competitividad y, sobre todo, la aceptación y permanencia en el mercado internacional.

A las empresas se les cuestionó si habían realizado inversiones fijas motivadas por la implementación de la iniciativa, a lo cual 71.4 por ciento respondió afirmativamente. De este porcentaje, 8.6 por ciento son empresas pequeñas, 54.3 por ciento medianas y 37.1 por ciento grandes; asimismo, 28.6 por ciento no ha realizado inversiones fijas, y de éste, 14.3 por ciento son pequeñas y 85.7 por ciento medianas. Como se observa, son las empresas pequeñas y medianas las que se rezagan en las acciones preparatorias al cumplimiento, así como en las inversiones requeridas.

A partir de 1997, 88.2 por ciento de las empresas ha realizado cambios en su proceso productivo, incluyendo equipo, proceso y tecnología.

Las empresas manifiestan diferentes niveles de inversión en costos fijos, atendiendo, principalmente, a su tamaño. Así, la inversión de las empresas pequeñas se presenta en el menor rango de inversión que fluctúa de 50 a 100 mil dólares, ejercido por sólo 4.3 por ciento de ellas. La inversión de las empresas medianas se distribuye a lo largo de todo el rango, predominando entre los 100 y 300 mil dólares. En el caso de las empresas grandes, las inversiones se localizan en los estratos más altos que van de los 500 mil a los dos millones de dólares. Evidentemente, la capacidad de inversión de las empresas

³ Encuesta Inocuidad Alimentaria, PIAI-CIESTAAM-UACH, 2002.

CUADRO 2

MÉXICO. RANGO DE INVERSIÓN FIJA POR TAMAÑO DE EMPRESA
(EN DÓLARES Y PORCENTAJE)

<i>Rango de inversión fija (dólares)</i>	<i>Tamaño de la empresa</i>			<i>Total (%)</i>
	<i>Pequeña (%)</i>	<i>Mediana (%)</i>	<i>Grande (%)</i>	
50 000 a 100 000	4.3	6.5	2.2	13
101 000 a 300 000		8.7		8.7
301 000 a 500 000		4.3		4.3
501 000 a 1 000 000		4.3	2.2	6.5
1 100 000 a 2 000 000		4.3	4.3	8.7
No contestó	6.5	32.6	19.6	58.7
Total	10.9	60.9	28.3	100.0

FUENTE: elaboración propia con datos de la Encuesta Inocuidad Alimentaria, PIAI-CIESTAAM-UACH, 2002.

está en relación directa con su tamaño, al igual que la capacidad de negociación crediticia y acceso a recursos (véase el cuadro 2).

Los costos fijos más frecuentes en que han incurrido las empresas son en orden de importancia: instalaciones sanitarias, maquinaria agrícola, instalaciones de proceso, e instalaciones para el almacenamiento de productos químicos (véase el cuadro 3).

Los costos no recurrentes más onerosos están relacionados con el uso del agua y el manejo posterior a la cosecha. Por ejemplo, una planta tratadora de agua se cotiza alrededor de los 50 mil dólares, en tanto una planta de hielo alcanza los 800 mil dólares. En este sentido, la inversión fija (costos no recurrentes) de una empresa para alcanzar la condición de sanidad, calidad e inocuidad, estará en gran medida determinada por la región productora, el tipo de producto y el tratamiento posterior de la cosecha que requiera durante su proceso. Productos como el jitomate, pepino y chile no requieren el uso de hielo para su conservación, en cambio, el cebollín, rábano o espárrago, dependen, en gran medida, del uso de agua y hielo en su proceso de empaque.

Así 15.2 por ciento de las empresas realizaron la mayoría de las inversiones fijas antes de 1997, lo cual indica que son firmas que están informadas y que se adelantan a los procesos antes de que éstos sean coercitivos. El resto de las empresas realiza sus inversiones a partir de esta fecha, y hasta el 2001, sólo 52.2 por ciento de las mismas había incurrido en algún costo no recurrente.

CUADRO 3

MÉXICO. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN EFECTUADO INVERSIONES FIJAS, POR CONCEPTO (EN DÓLARES Y PORCENTAJE)

<i>Concepto</i>	<i>Porcentaje de empresas (%)</i>	<i>Costo promedio declarado (dólares)</i>
Maquinaria agrícola	64.3	25 000 a 100 000
Instalaciones sanitarias	73.2	15 000 a 30 000
Planta tratadora de agua	41.9	45 000 a 50 000
Cámara de frío	44.2	500 000
Almacén de productos químicos	51.2	5 000
Instalaciones de proceso	57.8	150 000
Planta de hielo	13.3	400 000 a 800 000
Instalaciones para trabajadores	35.6	22 000
Equipo para empaque especial	35.6	No declarado
Equipo de seguridad y sanitización	33.3	No declarado
Equipo para etiquetado especial	26.2	No declarado

FUENTE: elaboración propia con datos de la Encuesta Inocuidad Alimentaria, PIAI-CIESTAAM-UACH, 2002.

Los costos no recurrentes en que han incurrido las empresas han sido absorbidos por las mismas en 76.1 por ciento de los casos, y sólo 2.2 por ciento han registrado la aportación del distribuidor para enfrentar estos gastos.

Respecto a los costos recurrentes o variables asociados a la producción para garantizar la calidad e inocuidad de los productos, éstos se situaron en un rango de los 200 a los dos mil dólares, dependiendo de la región de estudio. En el caso del valle de Mexicali, estos costos alcanzan, en promedio mensual, 800 dólares; en la Zona Costa del mismo estado se sitúan en un rango de 700 a 1 500 dólares y en el caso de Los Mochis, se registraron 200 dólares. El resto de las regiones no declararon el monto de los costos recurrentes aunque 73.3 por ciento señaló enfrentarlos (véase el cuadro 4).

Las empresas tienen claro que el cumplimiento de las normas de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados-destinos, es uno de los factores más importantes para el éxito y permanencia en ellos. El principal destino de nuestros productos es Estados Unidos y 64.4 por ciento de las empresas manifiesta cumplir con su calidad, 28.9 por ciento con la de Estados Unidos y México, y el resto no contestó.

Es esta necesidad de cumplimiento con la calidad de los mercados-destinos lo que obliga a las empresas a realizar cambios en su proceso productivo, a fin de mantenerse en el mercado al obtener pro-

CUADRO 4
MÉXICO. COSTOS ASOCIADOS A LA CERTIFICACIÓN
DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA, 2002 (DÓLARES)

<i>Concepto</i>	<i>Costo (dólares)</i>
Auditorías mayores de rancho	555
Auditorías menores durante cosecha	195
Auditorías a empaque o invernadero	850
Auditorías de almacenes	750
Programas de educación y entrenamiento	115 por hora o 850 por día
Buenas Prácticas de Agricultura	Costo con base en el tamaño de la operación
Buenas Prácticas de Manufactura	Costo con base en el tamaño de la operación
Procedimientos Estándares de Operación	Costo con base en el tamaño de la operación

FUENTE: elaboración propia con datos de la Encuesta Inocuidad Alimentaria, PIAI-CIESTAAM-UACH, 2002.

ductos con la calidad deseada. Por esto, una gran parte de las empresas, 88.2 por ciento, señala haber realizado cambios en el proceso productivo a partir de 1997 (fecha en que se presenta la iniciativa), y que los principales cambios están asociados al uso de equipo, procedimientos y tecnología (61.7 por ciento); 12.8 por ciento sólo realizó cambios en equipo, 8.5 por ciento en procedimientos y 2.1 por ciento en tecnología.

El impulsor del cambio ha sido el propio empresario en 34.7 por ciento de los casos, el distribuidor ha influido en 8.2 por ciento de los casos, una decisión conjunta, empresa-distribuidor en 16.3 por ciento, y la influencia del gobierno, tanto estadounidense como mexicano, así como precursores del cambio, ha sido nula, lo que se puede atribuir en gran medida al carácter voluntario del cumplimiento del programa de inocuidad alimentaria y de la adopción de la Guía Voluntaria para Minimizar el Riesgo de Contaminación Microbiológica, el caso de las frutas y hortalizas frescas, que fue publicada por la Food and Drug Administration y el United States Department of Agriculture, en octubre de 1998. Este documento señala los riesgos microbiológicos en la inocuidad alimentaria y las buenas prácticas agrícolas y de manejo comunes en el cultivo, lavado, selección, empaque y transporte de la mayoría de frutas y hortalizas que se venden

consumidor sin procesar. La guía es una orientación y no una regulación, pero de aplicarse apropiadamente ayudará a minimizar riesgos de contaminación microbiana.

EL PAPEL DEL GOBIERNO MEXICANO EN LA ADOPCIÓN DEL PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

desgracia, 57.1 por ciento de las empresas desconocen el programa que en la materia ha implementado el gobierno mexicano y, asimismo, 80 por ciento desconoce si existe algún apoyo por parte del gobierno, ya sea a través de apoyos o subsidios a las empresas para la implementación de medidas en la materia. Las acciones de nuestro gobierno han sido pobres y poco difundidas, tanto en lo que respecta a apoyos directos a los productores, como en el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para que se desarrollen los servicios necesarios para documentar y certificar el procedimiento.

En la actualidad, los productores no saben si existen laboratorios de pruebas y organismos certificadores mexicanos con reconocimiento internacional. Cabe señalar que sólo el estado de Sinaloa se ha comprometido a desarrollar este tipo de acciones y tiene a la fecha acuerdos con el gobierno estadounidense, que le han permitido certificar técnicos mexicanos que trabajan bajo convenio con organismos certificadores mexicano-estadounidenses.

En opinión de los empresarios encuestados, el gobierno mexicano debería apoyar a las empresas que desean aplicar un programa de inocuidad alimentaria por medio de subsidios directos, capacitación a productores, inclusión de conceptos específicos en el Programa de Alianza para el Campo y brindar apoyo directo para los costos de la certificación. Textualmente se citan algunos de estos comentarios:

- ...el gobierno debe apoyar con programas gratuitos.
- ...el gobierno debe implementar realmente los programas.
- ...el gobierno debe ofrecer programas reales de capacitación del personal.
- ...el gobierno debe negociar con Estados Unidos.

Finalmente, en un análisis costo-beneficio, se pueden distinguir los siguientes conceptos, que a decir de los productores son los más atractivos en la adopción de un programa de este tipo (véase el cuadro 5).

CUADRO 5

MÉXICO. COMPARACIÓN COSTO CONTRA BENEFICIO DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN OPINIÓN DE PRODUCTORES

<i>Costo</i>	<i>Beneficio</i>
Inversión en infraestructura	Acceso a mercados internacionales
Educación de los trabajadores	Permanencia en el mercado
Capacitación del personal	Productos saludables
Apoyo financiero	Mejorar negociación con compradores

FUENTE: elaboración propia con datos de la Encuesta Inocuidad Alimentaria, PIAI-CIESTAAM-UACH, 2002.

Como se puede observar, los principales costos están asociados a los no recurrentes que deben enfrentar las empresas para modificar sus procesos productivos y estar en condiciones de producir con sanidad, calidad e inocuidad.

En segundo término, la educación de los trabajadores es uno de los costos más importantes, además, éste se considera dentro de los costos recurrentes y que la mano de obra presenta en este tipo de actividad un gran índice de rotación, por lo que la capacitación por parte de las empresas debe ser constante y renovarse en cada ciclo agrícola.

La capacitación del personal de la empresa para la implementación del programa es sumamente importante y costosa. Por lo general, se imparte por parte del organismo certificador y alcanza sumas onerosas, alrededor de 850 dólares por hora de capacitación, más el costo mismo de las auditorías y la certificación en sí. Un proceso de certificación de la inocuidad alimentaria lleva más de seis meses, desde el momento mismo de la toma de decisión de implementarlo, hasta el otorgamiento de la misma y llega inclusive a alcanzar un costo de 15 mil dólares por la certificación de cada unidad de operación. Finalmente, el alto costo del financiamiento en nuestro país provoca que la decisión de implementar un programa tan costoso se postergue, en tanto se puede acceder a recursos preferenciales, o bien, a obtener la liquidez necesaria para ir enfrentando en el corto y mediano plazos las inversiones necesarias para cumplir con la inocuidad.

Para las empresas uno de los principales beneficios a alcanzar con la inocuidad alimentaria es la permanencia en el mercado internacional, pues están conscientes que de no contar con un programa de este tipo y al ser involucradas en un brote epidemiológico por con-

sumo de alimentos, puede provocar su salida de los principales mercados, tales como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia; y aún más, no poder ingresar a ellos en el caso de las nuevas empresas. El problema de salud es importante, pues los productores consideran los programas de inocuidad como una estrategia que permitirá ofrecer al mercado productos saludables; sin embargo, se debe recordar que un programa de este tipo no garantiza 100 por ciento la inocuidad del producto, pues trabajan bajo la óptica de reducción del riesgo y no de su eliminación.

Finalmente, cuestiones como el incremento en la demanda, el reconocimiento del consumidor o un mejor y mayor precio, no son considerados por los productores como el objetivo final en la implementación de un programa de inocuidad alimentaria.

CONCLUSIONES

Mantenerse en el mercado internacional implica, para los productores mexicanos, cumplir con programas y regulaciones costosas. El mayor problema reside en el alto costo de las inversiones en las que debe incurrir la empresa para la adecuación de su proceso productivo, para cumplir con el programa de inocuidad; así como la falta de acceso de las empresas al crédito.

La cuestión fundamental para que las empresas se adapten será la accesibilidad a recursos financieros atractivos, de tal manera que se les posibilite como sujetos de crédito para realizar las inversiones necesarias en maquinaria, equipo, procesos, insumos, certificaciones, etc., todo lo que implica la implementación de un proceso de inocuidad alimentaria.

En conclusión, la tendencia del mercado que impactará sobre la producción es la demanda por productos inocuos, la cual se hará extensiva no sólo a los productos de exportación sino al mercado doméstico en tanto se conforma un mercado cada vez más exigente.

Como ya se mencionó, la inocuidad alimentaria puede actuar como una barrera técnica al comercio cuando se utiliza como medida restrictiva del mismo, y en el caso de México, con un mercado de exportación de hortalizas altamente concentrado, el peligro de que esta iniciativa se comporte como un obstáculo al comercio es cada vez mayor.

Así, se espera que el entorno agrícola y agroindustrial se vuelva más complejo con la implementación del Programa de Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos, aunque en muchos países se está tra-

ajando para reducir la rigidez y el número de regulaciones enfrentadas por el sector privado, en Estados Unidos parece que se vuelven más y evidentes.

BIBLIOGRAFÍA

- DC (1999), "Incidence of Foodborne Illnesses: Preliminary Data from the Foodborne Diseases Active Surveillance Network" (FoodNet), United States, March, en <<http://www.cdc.gov>>.
- _____, "Preventing Emerging Infectious Diseases", en <<http://www.cdc.gov/ncidod/emergplan/box08.htm>>.
- ENTER FOR SCIENCE IN THE PUBLIC INTEREST (2001), *Closing the Gaps in our Federal Food-Safety Net*, octubre.
- CONOMIC RESEARCH SERVICE, USDA Briefing Room, *Economics of Foodborne Disease: Overview*.
- OOKER, Neal H. y Julie CASWELL (1999), "A Framework for Evaluating Non-Tariff Barriers to Trade Related to Sanitary and Phytosanitary Regulation", en *Journal of Agricultural Economics*, vol. 50, núm. 2, mayo 1999, pp. 234-246.
- ENSON, Spencer (1999), *Measuring the Impact of Technical Measures on Trade in Agricultural Commodities*, Centre for Food Economics Research, Department of Agricultural and Food Economics/The University of Reading/OECD, Food Safety and Quality, Trade Considerations.
- _____. (1998a), *Regulating the Trade Effects of National Food Safety Standards: Discussion of Some Issues*, OECD, octubre.
- _____, G. HOLT y J. NORTHEN (1998b), *Costs and Benefits of Implementing HACCP in the U.K. Dairy Processing Sector*", Centre for Food Economics Research, the University of Reading, 16 noviembre.
- _____. y B. TRAILL (1993), "The Demand for Food Safety, Market Imperfections and the Role of Government", en *Food Policy*, abril.
- KENNEDY, M., F.J. ANGULO Y THE FOODNET WORKING GROUP (1999), "Incidence of Foodborne Illnesses: 1999 Data from FoodNet", en <<http://www.cdc.gov/foodnet/pub/publications>>.
- OVANDO, L. (2002), "Programa de inocuidad alimentaria para productos de alto riesgo: melón cantaloupe cebollón", presentación en el "IV Seminario Internacional sobre Inocuidad Alimentaria", Ensenada, B.C., agosto.

- RINDERMANN, R. y M.A. GÓMEZ (2000), "Tendencias de desarrollo del sector hortofrutícola de México", en R. Rindermann y M.A. Gómez (coords.), *Internacionalización de la agricultura*, México, Mundi Prensa Libros, pp. 31-76.
- ROBERTS y DEREMER (1997), *Overview of Foreign Technical Barriers to U.S. Agricultural Exports*, Washington, Economic Research Service USDA, marzo.
- ROBERTS, Donna (1999), "Analyzing Technical Trade Barriers in Agricultural Markets: Challenges and Priorities", en *Agribusiness*, vol. 15, núm. 3, pp. 335-354.
- ROBERTS, Joslin (1999), "A Framework for Analyzing Technical Trade Barriers in Agricultural Markets", en *USDA Technical Bulletin*, núm. 1876, Washington, D.C., marzo.
- THE WHITE HOUSE (1998), "Memorandum for the Secretary of Health and Human Services", en The Secretary of Agriculture, *Initiative to Ensure the Safety of Imported and Domestic Fruits and Vegetables*. President Clinton, U.S.A. 1997 U.S. Department of Health and Human Services (DHHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN), 26 de octubre.
- THORNSBURY, Suzanne (1998), *Technical Regulations as Barriers to Agricultural Trade*, Virginia Polytechnic Institute and State University.

GOBERNABILIDAD FURISTA: LAS FISI Y MUJERES VULNERABLES (MILITARES) EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

José María Cuervo Durán*

CRÍTICAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES RECIENTES

El artículo analiza el impacto de las políticas neoliberales en la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, con especial énfasis en las Fisi y Mujeres Vulnerables (MUV). Se discute cómo estas políticas han afectado el acceso a alimentos y servicios básicos, generando inseguridad alimentaria y malnutrición. Se resalta la importancia de la movilización social y las críticas a las políticas neoliberales recientes, así como el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las Fisi y MUV. Se concluye que es necesario implementar políticas más equitativas y sostenibles que garanticen el acceso a alimentos y servicios básicos para todos los ciudadanos.

* Investigador principal del proyecto de investigación "Impacto de las políticas neoliberales en la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia", financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

GOBERNABILIDAD FOXISTA: LAS POBLACIONES VULNERABLES (MUJERES) EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ivonne Vizcarra Bordi*

RESUMEN

En el contexto de reajustes estructurales, el papel del Estado mexicano como rector de la soberanía alimentaria ha sido remplazado por el mercado mundial agropecuario. En estos procesos de reconfiguración, el "buen gobierno" foxista en lugar de dar cabida a la participación amplia de todos los sectores productivos agroalimentarios, los productores de subsistencia o de bajos ingresos y sus familias dejaron de ser actores políticos para convertirse en poblaciones vulnerables de las políticas agroalimentarias y dentro de éstas, las mujeres surgen como población objetivo de los programas de combate a la pobreza. Con la perspectiva de *governance*, este trabajo analiza cómo las mujeres rurales e indígenas se convierten en población vulnerable, lo cual justifica la intervención institucional para aminorar el riesgo a la inseguridad alimentaria que ellas y sus familias sufren frente a la globalización. Se analiza en específico el trato y uso discursivo que se le dan a las mujeres rurales en el "buen gobierno" foxista dentro del diseño de los programas: Alianza para el Campo y el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias (2003), el programa Oportunidades (2002) y la recientemente propuesta iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2005). Se concluye que de seguir con este tratamiento, las mujeres pueden llegar a dudar sobre la posibilidad de un verdadero cambio en

* Investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) de la UAEM. Correos electrónicos: <ivb@uaemex.mx>, <ivbordi@yahoo.com.mx>.

sus vidas, por lo que pueden llegar a preferir seguir siendo pobres y vulnerables.

INTRODUCCIÓN

En los años setenta, las políticas de seguridad alimentaria mexicanas estaban dirigidas hacia el sector agropecuario y, de cierta manera, estaban poco articuladas con las políticas sociales. Desde la década de los ajustes estructurales (los años ochenta) y la década del neoliberalismo posestructural (los años noventa), el mercado mundial y los precios internacionales de granos (de maíz y forrajeros) no sólo fueron ganando terreno en la economía agroalimentaria del país, sino que fueron remplazando el papel del Estado como rector de la soberanía alimentaria.

En efecto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde el 1 de enero de 1994, comprometió a los países socios (México, Estados Unidos y Canadá) en ir desregularizando —en un periodo de 15 años—, las intervenciones estatales sobre el control de los granos básicos y de leche en polvo que los convertían en incapaces de competir en los mercados internacionales (precios de garantía, almacenamiento, distribución y subsidios al consumo). Las distancias competitivas entre los países no ha disminuido, sino al contrario, ha desprotegido a la mayoría de los productores de granos básicos de las grandes importaciones de maíz principalmente, reduciendo por consecuencia sus capacidades no sólo de producir sino también de consumir (Cortés, 2005). El retiro del Estado como único rector de las políticas agropecuarias debería de haber promovido los cambios estructurales rurales que favorecerían a este sector; sin embargo, en el proceso de reconfiguración y dar cabida a la participación amplia de todos los sectores productivos agroalimentarios, los productores de subsistencia o de bajos ingresos, así como sus familias, dejaron de ser actores políticos para convertirse en poblaciones vulnerables de las políticas agroalimentarias y dentro de éstas las mujeres son ahora la población objetivo de los programas de combate a la pobreza, en los cuales se incluyen como líneas estratégicas de intervención: accesibilidad a la alimentación de las familias pobres, mejorar su salud y asegurar la educación de los menores de 18 años.

En este contexto, la pobreza ligada a la inseguridad alimentaria de los hogares rurales en México había sido tratada por medio de acciones gubernamentales enmarcadas por políticas sociales con

corte asistencial. Con la reconfiguración del papel del Estado mexicano y la construcción del “buen gobierno” de la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006), enmarcada a su vez por la tendencia global de la democracia expandida,¹ se esperaría que se fortalecieran las capacidades institucionales para dar respuestas a las demandas reales de este sector, dirigiendo sus esfuerzos hacia una reorientación política productiva y redistributiva. Sin embargo, lo que se observa en las prácticas gubernamentales de desarrollo e inclusión es una continuidad de la política social asistencialista y compensatoria. A menudo la visibilidad de los actores, principalmente las mujeres rurales e indígenas, aparecen en los discursos, planes y estrategias políticas que plantean obtener la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, como poblaciones rurales empobrecidas, en situación de inseguridad alimentaria, o bien como grupos prioritarios o vulnerables.

En este ensayo no se pretende evaluar el desempeño gubernamental en dichas acciones políticas, sino que a través de la perspectiva de gobernabilidad (*governance* en inglés) se analiza cómo en la agenda del “buen gobierno” foxista es usada la figura de las mujeres rurales como parte de la población vulnerable y los grupos prioritarios. Asimismo, se analiza cómo este uso responde a la difusión de prácticas discursivas de orden mundial sobre el desarrollo y la inclusión. En la primera parte se discuten algunos conceptos clave del enfoque de gobernabilidad y el “buen gobierno”. En la segunda, se define la vulnerabilidad de las poblaciones rurales en la seguridad alimentaria en el marco de la liberación de los mercados agroalimentarios; además se destaca la construcción social de las mujeres rurales como parte importante de estas poblaciones vulnerables. En la tercera parte se analizan, en específico, el trato y uso discursivo que se le dan a las mujeres rurales en el “buen gobierno” foxista dentro del diseño de los programas Alianza para el Campo y el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y

¹ La expansión de la democracia o la democracia expandida, se refiere a la toma de decisiones colectivas en todos los aspectos de la vida social (Touraine, 1997). En este sentido, la democracia extendida pretende que todas las instituciones de las sociedades deben responder entre sí (cada una en un ámbito en particular) ¿cómo combinar la unidad de un conjunto social con diversidad de sus componentes, de los intereses, opiniones y valores de sus miembros? (Muñoz, 2004:31). Así, entonces, el paradigma del “buen gobierno” se sustenta en la democracia participativa e incluyente, dentro del cual su evolución y fortaleza depende de su eficiencia en la capacidad de respuesta y capacidad para estimular la creatividad y el respeto a la libertad (Muñoz, 2004).

Seguridad Alimentarias, el programa Oportunidades que responden a la estrategia social Contigo (2004) y la reciente propuesta de iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2005).

EL ENFOQUE DE GOBERNABILIDAD

Dentro del marco conceptual que justifica la pertinencia del enfoque de *governabilidad*, se destaca entre otros elementos teóricos, el análisis de los discursos dominantes, sus formaciones y sus prácticas discursivas como medios de control social y construcción del poder, dentro de los cuales las ciencias sociales contribuyen al saber sobre los sujetos y sus problemas (Escobar, 1995; Sachs y Esteva, 1996). Comulgando con lo que señala Moore (1996), la noción de *governabilidad* indica una cierta comprensión o cierta forma de pensar y construir una clase de problemas, los cuales deben ser resueltos mediante la intervención particular de autoridades o instituciones bajo estrategias específicas.

Bajo este enfoque, las instituciones son concebidas como todas las instancias sociales, económicas y políticas que se definen por normas abstractas y proceden, normalmente, de la evolución o dinámica social para regular sus actividades hacia adentro de ellas y establecen formas de relaciones con otras instancias (jerárquicas o no). En otras palabras, las instituciones como estructuras básicas del orden social (Prats, 2000), tienen como función desarrollar procesos de identidad, de poder y de gobernabilidad, ya que constriñen y facilitan a la vez nuestras vidas. Por ello, no se puede decir que el enfoque de gobernabilidad sea una radiografía organizativa funcional y sistemática, ya que no es el producto de una mente planificadora (Prats, 2000), sino es el estudio de las relaciones sociales que se producen en un largo proceso de interacción histórica entre instituciones y acciones colectivas. Sin embargo, estas relaciones no deben ser observadas ni analizadas en un tono unívoco de dominados y dominantes, o lineal y burocrático del racionalismo constructivista, sino que en el ejercicio del poder, se presencian relaciones contradictorias jerárquicas y asimétricas, colocando constantemente en conflicto las categorías de género, clase, raza y etnia, en cuanto a las representaciones mentales o modelos subjetivos de los actores (ideología, construcciones sociales, usos, costumbres, reglamentaciones y cosmovisiones).

De esta manera, las instituciones creadas para asistir los problemas por lo general responden a mecanismos de control social. Para

observar cómo se transforman las acciones en controles, el análisis de los discursos que dominan en el diseño e instrumentación de esas acciones o programas resultan ser una herramienta eficaz del análisis.

Para Foucault (1996a) el discurso es posible únicamente a partir de una práctica, pues es considerado no sólo como un hecho lingüístico sino también y, sobre todo, como un conjunto de juegos estratégicos de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción, así como de lucha. Siguiendo esta concepción sobre el discurso, se debe señalar que los discursos dominantes generalmente corresponden a discursos oficiales, los que se producen bajo reglas internas y bajo reglas externas, es decir, las determinaciones del medio en el cual aparecen implícitas.

Sin embargo, no todo discurso dominante implica discursos dominados. Según Foucault, (1996b:113) "todo discurso se concibe como una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable, es más bien presentado en un universo de múltiples elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes". En este sentido, no existen sujetos dueños y creadores de todos los discursos, sino que los sujetos se construyen por y dentro de los discursos, según sea el contexto histórico. Morales (1998) afirma que lo anterior no se traduce en sujetos pasivos sin posibilidad de actuar, por el contrario, las prácticas sociales permiten a los sujetos modificar los discursos recibidos a partir de esas mismas prácticas.

La intencionalidad de los discursos no es difundirse de forma vertical y lineal con el fin de ejercer poder y control social. Las prácticas discursivas que se generan con ese propósito no aparecen de forma intencional, sino en ocasiones son contrapuestas o contradictorias, pese a que parecen invariables en diferentes contextos. De esta manera, las prácticas discursivas se producen y difunden en diferentes niveles, ejerciendo niveles jerárquicos de control sobre los sujetos.

Así, por ejemplo, los discursos sobre el "desarrollo" han logrado atravesar todas las sociedades, gracias a tres grandes estrategias: *a*) la incorporación de clientela (los actores sociales); *b*) los mecanismos externos de regulación (declaraciones y programas de las instituciones financieras), y *c*) los mecanismos internos de regulación (los promotores del desarrollo, agencias gubernamentales o no) (Escobar, 1995). La instrumentación de las estrategias que responden a las prácticas discursivas son llamados mecanismos externos e internos de regulación, es decir, son las instituciones u organizaciones burocráticas y sus agentes (mecanismos internos) quienes ejecutan los programas y planes (mecanismos externos) comprendidos en las

políticas sociales, que a su vez responden a discursos del desarrollo y ahora con énfasis a la globalización (Vizcarra, 2002).

EL PARADIGMA DEL "BUEN GOBIERNO"

De lo anterior se puede decir que el paradigma fundamental de la perspectiva de gobernabilidad es la construcción del "buen gobierno", en el cual la elaboración de las políticas públicas (por parte del gobierno) e implementación de éstas (a cargo de las agencias públicas) (Mayntz, 2002), muestren su capacidad y creatividad de dar solución a los problemas sociales, económicos y políticos que interrumpen el desarrollo.

Por lo general, las características del "buen gobierno" se encuentran interactuando en los discursos mundiales que promueven la reinención de los gobiernos o la innovación gubernamental (Bertucci, 2003 en Muñoz, 2004; OECD, 2004), tales como la libertad, la democracia participativa o expansiva, la ciudadanía, el conocimiento, transparencia, cuentas claras, reglamentaciones o mecanismos de ejecución, corresponsabilidades, orientación hacia el consenso, equidad, eficiencia y eficacia, y una visión estratégica.

Impulsar y sostener un gobierno que cueste menos con estas características, no sólo en términos financieros sino sociales, es uno de los grandes retos del "buen gobierno". El primer costo social al que se enfrenta es que la percepción de la seguridad y el riesgo depende de la construcción social y subjetiva de cada población. Una forma eficiente de reducir los costos de la falta de seguridad y de bienestar social, es no hacer caso de estas percepciones y relacionar la inseguridad con problemas de equidad social, de tal suerte que con un mecanismo eficaz del intervencionismo institucional moderno; la inseguridad y la vulnerabilidad de la sociedad cuando se enfrentan a la escasez o la falta de uno de los factores de reproducción humana, se conviertan, precisamente, en los objetivos del Estado (Vizcarra, 2002).

Otro de los costos sociales es establecer un clima de confianza entre la ciudadanía y los inversionistas, que a la vez proteja la expansión del capital a bajo costo y legitime la intervención estatal para conservar sus privilegios, convirtiendo las diversas demandas sociales en fines políticos. De esta manera, la promoción de seguridad, igualdad y libertad, aparecen como compatibles, tanto con el funcionamiento de la sociedad como con el de la economía liberal.

Como si la ciudadanía estuviera de acuerdo con el interés del Estado;² es decir, que al promover la seguridad social a través de garantizar los “mínimos de bienestar” (alimentación, salud y educación), la ciudadanía acepta que sin ellos no tendría mejores oportunidades para desarrollar capacidades acordes con las exigencias del mercado de trabajo, el cual está cada vez más integrado a los procesos de globalización.

Sin duda, una de las herramientas más eficientes del “buen gobierno” que permite compatibilizar las demandas sociales con los intereses de la expansión del capital, es la institucionalización de las nuevas prácticas democráticas (la tolerancia, la pluralidad, la legalidad, la participación, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad y la eficiencia) que difundieron el ideal del desarrollo humano y la inclusión o igualdad de oportunidades con libertad.

Los principios rectores del “buen gobierno” son difundidos desde los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente a través del programa para el Desarrollo (PNUD); la intención es impulsar el desarrollo humano sustentable en el nivel planetario, para lo cual se requiere el mejoramiento de estructuras de gobierno en el mundo. En la actualidad, hay literalmente cientos de acuerdos internacionales que requieren algún grado de cooperación para ser instrumentados.

Al igual que México, la mayoría de los países que transitan en las democracias expandidas no sólo incorporan estos principios rectores como características del cambio estructural y la estabilidad de sus gobiernos, sino que además los colocan como ejes estratégicos o líneas de acción en las políticas y programas que responden a las demandas de la sociedad. Bajo este compromiso y con esta expectativa, el presidente Vicente Fox (2000-2006) creó la *Agenda Presidencial de Buen Gobierno*. Por un lado, ésta consiste en transformar los esquemas tradicionales de la función pública por medio de las diversas líneas de acción: honestidad y transparencia, calidad, profesionalización de los servicios; implementación de tecnologías digitales y mejora regulatoria. Por el otro, pretendía lograr un gobierno que cueste menos y que tenga un mayor impacto en el desarrollo social

² Las políticas sociales orientadas a la protección de los intereses del trabajo: educación, salud y alimentación, si bien no constituyen las únicas políticas del Estado, éstas se encuentran en el corazón del interés público al considerar a las poblaciones-objetivo de los programas sociales en potenciales votantes en favor del partido político que sustenta el gobierno pro-labor (Contreras, 2001).

humano y sustentable. Indudablemente estas acciones y estrategias no son innovaciones del actual gobierno mexicano, sino que son con-venidas por acuerdos y recomendaciones internacionales.

El cuadro 1 muestra cómo los principios rectores de dos políticas foxistas responden a demandas sociales diferentes: uno agropecuario y de desarrollo rural sustentable y otro de desarrollo social, reproducen precisamente el esquema de los principios rectores del "buen gobierno", dictados por los organismos internacionales.

CUADRO 1
MATRIZ DE DISCURSOS SOBRE EL "BUEN GOBIERNO"

<i>Cruce de discursos hacia la buena gobernabilidad y principios rectores</i>		
<i>PNUD/BM (2001)</i>	<i>Acuerdo Nacional para el Campo (2003)</i>	<i>Política social de Fox (2002)</i>
Participación	Participación e inclusión social	Contigo: visión compartida
Marco legal (leyes, reglamentos y derechos humanos)	Modificaciones al marco legal y jurídico	Derechos humanos y la ley de desarrollo
Transparencia y cuentas claras	Transparencia y rendición de cuentas de cuentas	Transparencia en la gestión y rendición
Corresponsabilidad	Corresponsabilidad y no asistencialista: corresponsabilidad	Enfoque subsidiario
Consensos	Reingeniería institucional	Federalismo y coordinación institucional
Equidad	Paridad	Equidad-opportunidades
Eficacia y eficiencia	Ordenamiento administrativo fortalecimiento	Eficiencia (mecanismos de control) institucional
Visión estratégica	Programas para el campo	Combate a la pobreza

FUENTE: a partir de la lectura propia de los documentos maestros.

Ciertamente, una parte fundamental del "buen gobierno" son las demandas sociales. Sin embargo, no a todas las demandas se les atribuyen los principios del "buen gobierno" en términos de inclusión, cuya participación ciudadana pudiera guiar las intervenciones institucionales para responder a las necesidades específicas de cada sector de la sociedad. Más bien, muchas de estas demandas se traducen en programas dirigidos a poblaciones-objetivos definidas *a priori* como vulnerables.

Por lo general, en estos programas se difunde la idea de que la desigualdad social limita el desarrollo del capital humano de los pobres, y que sólo ésta puede ser abatida por una política que promueva la igualdad de oportunidades, en términos de aumentar las capacidades de desarrollo humano (en salud, educación y alimentación). El interés de problematizar las demandas sociales en términos de vulnerabilidad, inseguridad y falta de capacidades estriba en integrar a la población pobre a los procesos más amplios del desarrollo y globalización, por medio de las mismas desigualdades y asimetrías sociales que produce la expansión de capitales.

VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mientras que para los países desarrollados la seguridad alimentaria considera a los excedentes alimentarios como una táctica de mercado con fines de apoderarse del control de éstos y este control lo traducen en libertades sobre la elección nutricional y la seguridad sanitaria e inocua de sus alimentos a consumir (Navas, 2003), para una gran mayoría de los países deficitarios, la seguridad alimentaria "está asociada a un problema de vulnerabilidad social, provocada por problemas de accesibilidad a los alimentos cuyo origen está en las asimetrías del desarrollo" (Torres, 2003:11).³

La vulnerabilidad, la dependencia, la pobreza, la inseguridad y la desposesión no sólo son indicadores que aluden a la asistencia institucional para que las poblaciones pobres puedan asegurar recur-

³ Desde la antropología, también el acceso a los alimentos se convierte en el eje conceptual de la seguridad alimentaria. Así, encontramos que para Maxwell y Frankenberger (1992), la seguridad alimentaria es definida por cuatro componentes: 1) una alimentación suficiente para que la población considerada lleve una vida activa y sana tal como es definida localmente; 2) el acceso a ésta será principalmente por la vía de la producción o por la compra y en un segundo plano por la ayuda alimentaria; 3) la reducción de la vulnerabilidad al riesgo de la pérdida o degradación de los medios de existencia, y 4) la necesidad de considerar la satisfacción alimentaria tanto a largo como al mediano y corto plazos.

tos y así acceder a los alimentos, si no que éstos se hallan presentes en las políticas agropecuarias de los países deficitarios en granos básicos. Es en esta congruencia —entre políticas sociales y agropecuarias— que se da margen de maniobra a los mercados libres reconfigurados en grandes bloques económicos para que regulen la disponibilidad alimentaria regional y mundial (Llambí, 1995). Por una parte, el interés de los nuevos bloques hegemónicos (Estados Unidos y la Unión Europea) es organizarse para regular el comercio mundial agroalimentario en su beneficio (léase la Organización Mundial para el Comercio) y no el de los países del “sur”. La Cumbre de la OMC en Cancún, México, en 2003, ejemplifica el poder de estos nuevos bloques de mercado. En ella, el grupo de los 22 países del “sur” exigían que estos bloques liberaran sus mercados agrícolas, suprimiendo los subsidios a los productores tal y como se les había exigido a los países deficitarios. Sin embargo, Estados Unidos (principalmente) y la Unión Europea sólo presentaron un plan no muy claro de la reducción de algunos subsidios en la exportación de alimentos.

Participar en el mismo juego del mercado liberal con reglas diferenciadas, las que sólo benefician a unos, coloca a los rivales más débiles en una posición de vulnerabilidad y en riesgo de la pérdida de su autonomía, autosuficiencia y su soberanía alimentaria. Esta vulnerabilidad se vuelve aún más profunda para las poblaciones que al interior de los países deficitarios y dependientes, han visto perder su capacidad de producir, comprar y/o mantener los medios de su existencia. Pese a que estas poblaciones no se vuelven pasivas ante las asimetrías de los mercados, ni se sumergen ante ella sin ninguna reacción, las nuevas formas institucionales de cooptarlas de alguna manera en los procesos de reconfiguración del nuevo orden mundial, las mantiene al margen de una real participación ciudadana, tal y como debiera ser uno de los aciertos de la construcción de un “buen gobierno”.

Si bien el reconocimiento de todos los actores en el marco institucional del “buen gobierno” proviene de la presión de los movimientos sociales y de las voluntades de las poblaciones civiles, cuando éstas son incluidas en los procesos de desarrollo como grupos prioritarios o poblaciones vulnerables, quedan sujetas a la intervención de las instituciones modernas (industrias, empresas, gobiernos, Estado) que tienen como finalidad permitir o facilitar la liberación de los mercados de trabajo, de bienes y de capitales.

Por lo general, las poblaciones vulnerables destinatarias de programas sociales que impulsan el desarrollo del capital son llamados

por Escobar (1995) "clientela del desarrollo" (campesinos, mujeres, indígenas y su saber ecológico local), ya que al tomar un lugar aparente para cada tratamiento específico dentro del desarrollo, la vulnerabilidad de estas poblaciones se hacen visibles y presentes para justificar la intervención técnica de las agencias de desarrollo.

Bajo esta óptica, se entiende que dicha clientela sólo reciba un tratamiento marginal dentro de los programas mundiales, regionales y nacionales de desarrollo rural y agroalimentario. Por ejemplo, se sabe que desde sus inicios, las actividades de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se han orientado a mitigar la pobreza y reducir el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria (definida como el acceso de toda la población en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y saludable) (PNUE, 1989). Sin embargo, cuando se diseñan, instrumentan y ejecutan los programas, las demandas sociales de las poblaciones vulnerables se disipan en las soluciones técnicas del hambre y el déficit alimentario. Así, encontramos que en el informe quinquenal de la FAO, de 1985 (FAO, 1991), de los 53 puntos reportados, solamente cinco hablaban de las poblaciones; una de salud, tres de alimentación y otra de pobreza. El acento sobre estos puntos era resaltar las tasas elevadas de crecimiento de la población en los países con deficiencias alimentarias, la migración, la fecundidad y la esperanza de vida, la malnutrición, el hambre y los pueblos con bajos ingresos. El resto del documento se consagró a tratar los problemas ecológicos, de industrialización y a establecer marcos legales para el mercado y la intervención. En este caso, las mujeres no son visibles más que en la planificación de la familia y en las estrategias de subsistencia familiar.

En suma, las políticas y los programas sobre la seguridad alimentaria, combate a la pobreza y desarrollo rural sustentable, visibilizan las poblaciones vulnerables como grupos prioritarios, aunque no se les da atención a lo que estas poblaciones demandan. Este mecanismo permite que las necesidades sociales sean incorporadas en los discursos, colocando técnicamente a los sujetos como poblaciones-objetivos. En este sentido, las poblaciones vulnerables aparecen como sujetos cuando son visibles en las declaraciones y programas del "buen gobierno", y como objetos cuando se ejecutan las acciones como la ayuda alimentaria y el control demográfico.

Entre la población vulnerable destacan las mujeres rurales, quienes son construidas como pobres o desprovistas de poder y libertades. Bien que los estudios de las mujeres y de género no tienen el

propósito de rendir un sujeto-mujer indefensa y vulnerable, sino demostrar las diferencias y desigualdades sociales entre los sexos, las políticas de desarrollo que pretenden incorporar a esta "clientela" en sus procesos, aprovechan el conocimiento producido de su condición para someterlas a nuevos tratamientos de igualdad y justicia social.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES RURALES COMO POBLACIÓN VULNERABLE

Algunos trabajos importantes en las ciencias sociales que han dado cuentas de la situación de las mujeres rurales, han constituido también una base importante de la incorporación de las mujeres al desarrollo. Uno de los trabajos pioneros sobre el papel de la mujer en el desarrollo fue el de Esther Boserup (1970). Su estudio señala las diferencias sociales que existen entre hombres y mujeres del "Tercer Mundo", en el acceso a la tierra. Estos procesos diferenciales de acceso determinaron algunas tipologías de sociedades agrícolas: femeninas, masculinas, cooperativas y otras. En general, se discute que en la mayoría de estos sistemas, aun femeninos, las mujeres presentan serias desventajas sociales y económicas con respecto a la de los hombres, a pesar de que ellas realizan diversas actividades agropecuarias y de manutención familiar.

Otros estudios con influencia marxista, contribuyeron a generar más conocimientos sobre el papel de la mujer en el desarrollo económico capitalista. Por su parte, Claude Meillassoux (1975), reconoce que el trabajo de las mujeres en la producción-reproducción doméstica y en la fuerza productiva, no es visible porque es considerado como trabajo improductivo, pese a que su trabajo sin valor de cambio es el que permite generar una gran parte de la plusvalía de las mercancías. Las aportaciones de Deniz Kandiyoti (1982), refuerzan esta tesis al estudiar el papel del trabajo femenino en los sistemas de producción agrícolas y al igual que estos estudios, Lourdes Benería, Lourdes Arizpe, Carmen Deere y Magdalena León de Leal (1982) hacen una puntual reflexión sobre la división sexual del trabajo en las sociedades rurales, señalando que las mujeres tienen un papel importante en las estrategias de subsistencia, pero que su no reconocimiento las somete a un sistema de explotación patriarcal y capitalista, por lo que es importante adoptar mecanismos de incorporación de las mujeres a los programas y políticas de desarrollo.

Los conceptos de "estrategia de subsistencia" y "mecanismos de adopción" han constituido una etapa importante para que las actividades de las mujeres se hicieran visibles en las políticas económicas implementadas en el desarrollo. Sin embargo, lo que se logra ver en los discursos dominantes es la imagen de mujeres víctimas. Rocheleau y colaboradoras (1996) señalan que esta victimización reduce su propio dinamismo en una defensa a corto plazo sobre sus condiciones de vida dentro del campo de la economía y ecología política, propiciando que a las desigualdades sociales entre los sexos se les atravesara la de clases, etnias, razas y edades.

En efecto, la filosofía basada en la incorporación de mujeres al desarrollo (MED), no se refería a todas las mujeres del mundo, sino sólo aquellas que por procesos políticos, sociales y culturales de su propia región (rurales del "sur") aún se encontraban en situación de subordinación y sin poder económico. Para el logro de este avenimiento se crea DAWN⁴ en Bangalore (India) en 1984. Su objetivo era encontrar entre diferentes ideologías, algunos puntos de concomitancia entre igualdad, desarrollo y paz. Basándose en las aportaciones de Boserup, Benería y otras estudiosas, las mujeres rurales e indígenas de los países del sur fueron definidas por DAWN como pobres y oprimidas, cuyo principal problema radicaba en su insuficiente participación en el proceso de crecimiento y desarrollo, por lo que una mayor participación debería favorecer las condiciones de vida de estas mujeres.

A partir de la década de 1980, las mujeres rurales e indígenas han sido objeto de diversos programas que recomendaban, primordialmente, satisfacer las *necesidades fundamentales* para lograr la subsistencia de sus familias, poniendo el acento en los préstamos y subsidios en proyectos que tuviesen el fin de mejorar la nutrición, la salud, los equipos sanitarios, la vivienda y la educación. Paralelamente, un mejor acceso a los medios de producción e ingreso con respecto a los hombres parecían ser las condiciones necesarias para que su situación económica y social cambiasen verdaderamente.

[...] las nuevas estrategias de subsistencia no pueden lograrse si las mujeres continúan teniendo un acceso reducido y condicionado a los recursos y siguen sufriendo presiones al aumentar su tiempo de trabajo [...] La subsistencia humana es hoy el problema más urgente del mundo, y si las mujeres son esenciales en esta sub-

⁴ Development Alternatives with Women for a New Era, sostenido por el UNIFEM-ONU (véase DAWN, 1992).

istencia, entonces la participación de las mujeres en el poder es indispensable y puede que emerjan soluciones creativas y solidarias a las nuevas crisis (DAWN, 1992:19).⁵

En este sentido, el discurso de DAWN, reproducido por MED, hizo a las mujeres rurales e indígenas del "sur" como oprimidas y oprimidas, quienes sufren por pertenecer a una clase, raza o nacionalidad inferior o menos desarrollada. Estas mujeres reaccionaron ser el principal público del feminismo de los años ochenta, los enfoques de antipobreza (desigualdad social en términos de ingresos entre hombres y mujeres) y eficiencia (acceso a recursos no uso eficiente para el desarrollo), implicarían un modelo de desarrollo económico y social que respondería a las necesidades humanas en equilibrio con la naturaleza y que, además, permitiría un acceso más amplio al poder económico y político (Moser, 1991). Sin embargo, dichas pretensiones sujetaron con un espíritu totalizante y reduccionista de MED, a todas las mujeres huéspedes que buscaban un tipo de equidad.

Las consecuencias de estos programas y proyectos que afectaron a las mujeres rurales e indígenas de los países del "sur", vienen desde el diseño mismo de éstos. Por una parte fueron concebidos en términos occidentales, lo que trajo consigo que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no redujera su explotación, ni les permitiera obtener su emancipación, sino lo que ellas vieron fue un aumento de sus cargas de trabajo (la doble jornada).

Estas experiencias han conducido a poner en duda los postulados de DAWN, pues las consecuencias de los procesos económicos a largo plazo, están ligados al aumento dramático del empobrecimiento y la desigualdad en estos países, aunados a la dependencia, cada vez mayor, del exterior para alimentar a sus habitantes, a la fragilidad de los sistemas financieros, a la degradación ecológica y al crecimiento demográfico que demanda mayores servicios y recursos. El empoderamiento surge como una perspectiva de género en el desarrollo (GED), para compensar las debilidades y contradicciones del MED. Teóricas del género como Moser (1991), Cleaves (1993), Kabeer *et al.* (1995), Batliwala (1997), Kabeer (1997), Rowlands (1997) y Young (1995), plantearon que el poder que se buscaba iba más allá que la independencia económica, o de la visualización de las mujeres como clave del bienestar familiar y, por ende, de sus vidas. Se trataba de una estrategia desde el género, que se desarrollaba a través de la concientización, de la potencialización, del

fortalecimiento, de la autonomía, del control de sus vidas, de la sororidad (*afidamiento*) y de la autosignificación para cambiar las condiciones y situaciones que las someten en estado de subordinación. La IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, retoma precisamente este concepto (empoderamiento) para elevarlo a eje rector de las acciones que emprenderían cada nación para lograr la equidad de género en todas las dimensiones sociales, políticas, económicas, ecológicas, jurídicas, científicas, tecnológicas y socioculturales.

Pese a estas importantes aspiraciones de la teoría de género, los discursos dominantes sobre seguridad alimentaria y desarrollo sustentable difundidos por la FAO, sólo consideran la filosofía del GED en vocablos de "desarrollo integrado económico y global", y ahora más recientemente el del "desarrollo humano sustentable", el cual pretende superar el reducido marco de referencia del crecimiento económico contra desarrollo (véase González, 2001). Esta nueva versión del desarrollo coloca al centro del desarrollo a los seres humanos en armonía con la naturaleza. La posibilidad de que las personas amplíen y usen plenamente sus capacidades humanas para acceder a los recursos (económicos, naturales, culturales) sin poner en riesgo la subsistencia de la generaciones futuras (PNUD, 1995). En esta nueva perspectiva se reconoce que el papel de las mujeres en el desarrollo es esencial para reducir la pobreza, por lo que mejorar su situación de autoestima y otorgarles beneficios directos a través de la capacitación para el empleo productivo y de la integración social, no sólo disminuiría la discriminación de género, sino que mejoraría la gestión de los recursos ecológicos y económicos y, por ende, la vida de sus familias (PNUD, 1997).

Para sustentar sus financiamientos y préstamos de desarrollo a los países del sur o llamados subdesarrollados y del Tercer Mundo, el Banco Mundial (BM) en su borrador preparatorio "Background Papers", retoma dos adhesiones culturales, precisamente las que han sometido a las mujeres a niveles de subordinación por la desvalorización social que tiene el papel doméstico en el ámbito privado: la responsabilidad de preparar los alimentos para sus familias y todas las tareas que aseguran la subsistencia y la reproducción biológica (fecundidad). En este borrador, las mujeres son visibles en los programas de combate (reducción o ataque) a la pobreza y en el deterioro del medio ambiente.⁶ Además de sujetar a los países a una

⁶ Siete documentos comprendieron este gran trabajo. Tres sobre la forma de "serie de documentos de discusión" siendo una de éstas "Poverty,

ancia sobre las políticas demográficas (anticonceptivas), se propone que las mujeres pueden mejorar sus ambientes familiares y sociales si se les capacita sobre sus trabajos domésticos en materia de higiene y reproducción de la fuerza de trabajo, se propone también que esa capacitación les fuera benéfica para generar ingresos propios.

Una estrategia de largo plazo de la FAO es fomentar el desarrollo sostenible, para incrementar la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria a la vez que se conservan y ordenan los recursos naturales. El propósito es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras mediante la promoción de un desarrollo que no degrade el medio ambiente y sea técnicamente viable desde el punto de vista económico y socialmente aceptable. En este tenor, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, de 1996, la FAO se propone como meta primordial reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015 (FAO, 1996). Para ello, reconoce que es preciso contar con la participación plena y efectiva de las mujeres en la agricultura. Este reconocimiento es visto como fundamental para mejorar los niveles de nutrición, incrementar la producción y distribución de alimentos y productos agrícolas, y realzar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Bajo este claro interés, la FAO promueve un plan de acción para la integración de la mujer en el desarrollo (1996-2001), precisamente con la finalidad de proporcionar a la mujer acceso en condiciones de igualdad a la tierra y otros recursos productivos, así como control sobre los mismos, incrementar su participación en los procesos de formulación y adopción de políticas, reducir su volumen de trabajo y aumentar las posibilidades de conseguir empleo remunerado e ingresos propios de que disponen.

Al igual que los programas de combate a la pobreza promovidos por el BM y el BID, la FAO incorpora la filosofía del MED con etiqueta GED, sin hacer caso a las propuestas de la teoría de género que sustentan la filosofía del empoderamiento. Ciertamente, el género en la seguridad alimentaria, desde la FAO, permite que las mujeres tengan presencia en actividades importantes para mejorar sus condiciones de vida; sin embargo no les otorga los principios de la emancipación y la subordinación: como autonomía y poder. La perspectiva de gé-

ulation and the Environment" ("pobreza, población y medio ambiente", cuatro sobre la forma de "Policy research", investigación y políticas del texto, de los cuales se encuentra: *World Development Report Background Papers*, publicado en 1992.

nero en la FAO somete a las mujeres a un reconocimiento de sus potencialidades en la agricultura, en la división del trabajo, en el medio ambiente y su saber ecológico local, en el manejo de los montes, en su papel en la nutrición de sus familias, en la pesca, en la economía rural, en el control del crecimiento de la población y migración, en la educación y extensión, así como en la comunicación comunitaria.

México no se escapa de esta voluntad por incorporar y reconocer a las mujeres rurales. De hecho, desde las décadas de 1970 y 1980, las mujeres rurales e indígenas han sido objeto de diversos proyectos que recomiendan satisfacer prioritariamente las "necesidades fundamentales", poniendo el acento sobre la importancia de los préstamos y subsidios a programas que tienen como meta mejorar la nutrición, la salud, los equipos sanitarios, la vivienda y la educación. Paralelamente, el mejoramiento al acceso a los medios de producción y al ingreso, parecían ser las condiciones necesarias para que su situación económica y social cambiara verdaderamente y, por consiguiente, disminuyera la necesidad de que algún miembro, varios miembros o toda la familia emigrara a otros países.

Ser víctimas y responsables a la vez, así como objetos y sujetos, reproducen sin duda un saber sobre "una verdad" que desea su visibilidad con el fin de aminorar las consecuencias graves de los modelos de desarrollo y que afectan, directamente, a los países de altos ingresos, como es la migración no deseada proveniente de los países pobres. De aquí que la planificación familiar y el control de la fecundidad sean componentes imperantes en las políticas diseñadas para combatir la pobreza y eliminar el hambre.

LAS MUJERES RURALES E INDÍGENAS EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL FOXISTAS

Desde el combate a la pobreza

Aun con el esquema del "buen gobierno", la administración de Vicente Fox tuvo a bien heredar del gobierno anterior una política social diseñada e instrumentada para compensar el proceso de exclusión de la mayoría, tanto de los pequeños productores rurales como sus familias y las mujeres. Pese a que el gobierno actual insiste en que reorientará su política social hacia el enfoque subsidiario y borraré el asistencialismo, lo que observamos es que la difusión de prácticas discursivas sobre el alivio de la pobreza mexicana, basado en el acceso a Oportunidades, obedece más a una lógica de expan-

de los capitales globales que a las propias necesidades de la sociedad, fortaleciendo, así, el propio asistencialismo.

En su efecto, la política del bienestar de la década de 1990 pro-
ujo, subjetivamente entre la población beneficiaria del Programa
Nacional de Solidaridad (Pronasol, 1988-1996), del Programa Na-
cional de Educación Salud y Alimentación (Progresá, 1998-2002) y
el Procampo (1996, vigente), un mal llamado "el padecimiento de
pobreza" (Vizcarra, 2002). A la ausencia de otro tipo de política
que convoque a la participación ciudadana para resolver los proble-
mas generados del modelo neoliberal del desarrollo, a las mujeres
rurales e indígenas no les conviene dejar de ser pobres, porque estos
programas resultan ser la única opción para contar con un apoyo
institucional para "acceder" a los "mínimos de bienestar" en cuanto
a alimentación, salud y educación.

Desde este interés, el programa de desarrollo humano Oportuni-
dades (antes Progresá, 1997) "P-O", fortalece su carácter focalizador
y como su instrumentación y ejecución no sólo para seguir detec-
tando a las familias pobres del medio rural, que por su vulnerabili-
dad ameritan de una intervención institucional, sino que buscan
ampliar su cobertura en cuanto número de beneficiarias y en cuanto
a expansión de nuevos programas sociales, somete a las mujeres
madres de familia a un nuevo tratamiento político de sujeción. Por
otro lado, el P-O transfiere directamente bonos en efectivo para que
en un acto de corresponsabilidad, destinen esos recursos a mejorar
la nutrición de sus hijos, enviarlos a la escuela y vigilar su salud. Si
ellas no cumplen con una serie de reuniones semanales comunita-
rias, en las cuales se les aplica un esquema de control de natalidad,
ellas se sujetan a penalizaciones que pueden llegar hasta perder el
bono. Por otro lado, este programa refuerza su etiqueta de género,
y otorga mayor estímulo a las niñas de esas familias en edad escolar
(pero pequeñas con respecto a la de los niños), con el fin de recom-
pensar las desigualdades de género que culturalmente se construyen
en esas sociedades y así ampliar las oportunidades de sus capacida-
des de desarrollo humano (Vizcarra, 2002). Si bien este programa
no promueve la participación económica de las mujeres a corto pla-
zo, se espera que con esta asistencia institucional en un futuro esas
niñas puedan tener más oportunidades que sus madres.

No obstante, esta premisa compensatoria se basa en la suposi-
ción que la desigualdad entre hombres y mujeres se debe a la pobre-
za y no a las desigualdades sociales entre los géneros sustentadas
en la subordinación, represión y opresión que genera el sistema
patriarcal en la sociedad mexicana. Por consecuencia, cuando las

mujeres pobres son tratadas como población vulnerable bajo esta mirada institucional, en las cuales ellas son las responsables del cuidado de su familia y donde prácticamente se ignoran sus demandas reales, ellas vuelven a posicionarse en el mismo estado de subordinación con respecto a los hombres, pues las estructuras que producen esta condición no sólo quedan intactas sino que se refuerzan con el nuevo papel del Estado del bienestar social.

Con toda y la nueva clasificación de la pobreza foxista basada en tres sustantivos: alimentaria, patrimonial y de capacidades, la inseguridad alimentaria de los hogares pobres encasilla aún más a las mujeres en ese estado de subordinación y dependencia de los programas de combate a la pobreza. Pues se responsabiliza a ellas de la alimentación, del estado nutricional de su familia, del rendimiento escolar de sus hijos y de la prevención de enfermedades, sin otorgarle los principios de equidad de género e inclusión del desarrollo rural sustentable: reconocimiento, empoderamiento, participación ciudadana, autonomía y libertad.

Ser población vulnerable o población-objetivo del P-O no sólo se limita a las mujeres beneficiadas para que amplíen sus oportunidades de generar ingresos o de obtener empleos bien remunerados, sino que se aprovecha su corresponsabilidad o más bien su “disponibilidad obligada” (padrón de pobreza del P-O), para incluirlas al menos en los discursos y en los nuevos subprogramas derivados de la necesidad de atender a la población pobre y malnutrida tales como: “La red de alimentación y nutrición”, “Arranque parejo en la vida”, “Atención y mejoramiento nutricional”, “Diconsa”, “Programa de abasto social de tortilla”, “Programa de abasto social de leche”, “Programa de salud y nutrición de los pueblos indígenas” y el “Programa integral de asistencia alimentaria”.⁷

Abrigar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las sociedades rurales con la misma estrategia de la política social de combate a la pobreza “Contigo” ha traído como consecuencia que las mujeres junto con otros sectores de la sociedad (jóvenes, indígenas, tercera edad, discapacitados) no sólo vuelven a tener el mismo trato por su definida vulnerabilidad construida por el riesgo a sufrir hambre, enfermedad y hasta la muerte, sino que su campo de acción se ha visto sumamente limitada y restringida a unas cuantas acciones institucionales provenientes del “buen gobierno” foxista.

⁷ Para ampliar la descripción de cada programa, referirse a la página web de la Secretaría de Desarrollo Social: <www.sedesol.gob.mx/oportunidades>.

*Desde el desarrollo rural sustentable
y la soberanía alimentaria*

Pese a que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se establece con base en la consolidación de los grandes bloques que reconfiguran el desarrollo con un nuevo orden mundial, su puesta en marcha no se da sin resistencia de los productores y poblaciones afectadas. Dos grandes movimientos brotaron en contra del modelo neoliberal y la globalización: el movimiento zapatista "Ya Basta", surgido el mismo día que entraba en vigor el TLCAN (1 de enero de 1994), y otro más reciente que emana de la activación del rubro agropecuario del mismo TLCAN (en 2003) "El Campo No Aguanta Más". Este último reunió a una gran parte de organizaciones de productores y trabajadores del campo de todo el país, llevándolos a una mesa de arreglos y negociaciones institucionales para atender las demandas sociales del sector agropecuario. De estas negociaciones surge el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias (ACN), redactado por la Secretaría de Gobernación y propuesto para la firma de los involucrados,⁸ ya sea como poblaciones-objetivos de programas asistenciales o como grupos prioritarios en las políticas de desarrollo agropecuario y alimentario.

Al igual que el P-O, instrumento que debiera ejecutar el ACN está cobijado bajo la práctica discursiva "Contigo es Posible", la cual basa su estrategia nacional en fomentar la participación democrática de todos los actores, comprometiéndolos con eso, a la responsabilidad compartida del éxito o fracaso de las políticas. Ciertamente el TLCAN es una representación del modelo neoliberal y el propósito de incluir a los actores corresponsabilizándolos del éxito del desarrollo sólo puede explicarse mediante el fenómeno de la *democracia expandida*.

La corresponsabilidad (junto con la cooperación, la equidad, la sustentabilidad y la seguridad) forma parte de los principios rectores del "desarrollo humano sustentable" promovidos tanto por el PNUD como por el BM. Supuestamente estos principios deben crear un ambiente institucional propicio para ampliar las capacidades de las poblaciones vulnerables, en general, y de las mujeres en lo particular (véase el cuadro 2). Sin embargo, el gobierno de la transición

⁸ La mayoría de las organizaciones de productores y trabajadores del campo firmaron el acuerdo, sólo dos de ellas, se abstuvieron por considerar al proceso un fraude.

CUADRO 2

MATRIZ DE DISCURSOS PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

<i>Principios rectores</i>		
<i>PNUD/BM (2001)</i>	<i>Acuerdo Nacional para el Campo (2003)</i>	<i>Política social de Fox (2002)</i>
Empoderamiento		Capacidades
Cooperación	Cooperación, participación e inclusión social	Contigo
Equidad	Paridad	Equidad-oportunidades
Sustentabilidad	Sustentabilidad y mercado interno	
Seguridad	Soberanía y seguridad alimentaria Desarrollo rural integral	Seguridades: alimentaria, educación, salud y vivienda

FUENTE: a partir de la lectura propia de los documentos maestros.

democrática de Fox (2000-2006)⁹ no ha cambiado el rumbo pautado por el modelo neoliberal, desproveyendo a las poblaciones de herramientas para confrontar la inseguridad alimentaria dado su estado de subordinación al mercado, al sistema patriarcal y a la política social.

Así, no sólo las mujeres, sino también los indígenas y su saber ecológico local, las personas de la tercera edad, las personas con capacidades diferentes, los jóvenes y jornaleros con o sin acceso a la tierra, por ser considerados como poblaciones vulnerables o grupos prioritarios, se les da un tratamiento diferencial y hasta se podría decir excluyente en las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural.

Por ejemplo, con la política de Alianza para el Campo, conocida desde 2003 como Alianza Contigo, precisamente por corresponder a las estrategias del "buen gobierno" foxista, se establecen las *Reglas de operación para el campo para la reconversión productiva; Integración de cadenas agroalimentarias y de pesca; Atención a factores críticos y Atención a grupos y regiones prioritarios* (Alianza Contigo, 2003). En éstas, pese a que son reconocidas como actoras sociales

⁹ Primer gobierno que no es del PRI en México, elegido con base en una participación democrática de la ciudadanía mexicana en el año 2000.

del campo, las mujeres tienen un papel muy limitado, pues son definidas en el punto IV como parte de la población vulnerable al pertenecer a las familias de los "productores de bajos ingresos, en zonas marginadas y no marginadas".

Por su parte, en el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias, las mujeres no aparecen en ninguno de los apartados de los principios rectores y acuerdos básicos de la soberanía y seguridad alimentaria, ni en los aspectos de producción, comercio internacional y desarrollo económico. A pesar que dentro de los *considerandos* se reconoce el papel de las mujeres en el desarrollo rural:

[...] Que la justicia social en el medio rural sólo se logrará con la participación, organización y decisión de los hombres y *mujeres* del campo mexicano, así como con el apoyo decidido del Estado en su conjunto.

[...] Que es preciso reconocer el papel que las *mujeres* del campo desempeñan en la sociedad rural, tanto en el ámbito social y productivo como en la familia.

En los discursos del ANC, se reconoce el papel del gobierno federal para diseñar, instrumentar y ejecutar los programas que impulsan la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, con el fin de eliminar todas las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres acceder a los beneficios de las acciones políticas del acuerdo. Con todo y que se prevé aumentar el monto para apoyar los *proyectos productivos de las mujeres en el sector agrario*, y *fortalecer la organización de las mujeres del medio rural para incorporarlas a circuitos productivos con un enfoque regional*, se tiene evidencia de que cuando la intervención institucional adquiere el tinte compensatorio, las mujeres quedan supeditadas a los mecanismos burocráticos de acceso a éstos, provocando que una gran mayoría queden excluidas de los programas derivados del ANC (Pineda, 2006).

En el mismo documento del ANC, queda de manifiesto que al gobierno federal se le atribuyen las funciones para prevenir, perseguir y castigar a los responsables de delitos en contra de la libertad sexual de las personas, agresiones y violencia contra la mujer rural. Pero donde a las mujeres se le da mayor visibilidad, es por su papel de cuidadora de los bienes de los demás, (apartado sobre la "Defensa del Patrimonio Rural"), así como en su papel fundamental en la reproducción social de los hogares rurales (apartado del "Desarrollo

social del Sector Rural”). Siendo más puntuales en los aspectos sobre su salud reproductiva y nutrición:

170. El Ejecutivo Federal y las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se comprometen a sumar y coordinar esfuerzos para reducir de manera drástica la desnutrición y mortalidad infantil existente en el medio rural; atender los problemas de salud de las *mujeres* del campo en relación al cáncer cérvico-uterino; revertir con carácter de urgente el aumento de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas incluyendo el VIH/SIDA; así como enfermedades de las personas de la tercera edad.

En cuanto a la recién propuesta iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2005), que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, las mujeres aparecen marginalmente en su artículo 121 capítulo V, “Del Programa de Apoyos, Incentivos de Inversiones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional”), donde una vez más se reitera su papel fundamental en la reproducción biológica del hogar y el cuidado de su familia. A cambio del reconocimiento como productoras de alimentos, formadoras de capital, conocedoras del cuidado ambiental y otras atribuciones que la misma FAO difunde, en esta ley ellas aparecen embarazadas y lactando al formar parte de la élite de la región y población prioritaria que sufre inseguridad alimentaria y malnutrición. Y al igual que sucede con Alianza Contigo y el PAN, en esta iniciativa de ley se establece que toda regla de operación o ejecución de programas de apoyo estratégico para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, no deberá por ningún motivo ser discriminatoria y excluyente, sino que debe asegurar la accesibilidad a los beneficios a toda la población rural. Pero apunta, además, que sólo se podrán exigir los requisitos o disposiciones de las mismas reglas de operación de cada programa. Es decir, que las mujeres estén o no embarazadas o lactando, quedarán sujetas una vez más a los mecanismos masculinos de ejecución que han caracterizado el marco legal de las políticas de seguridad alimentaria en México (Vizcarra, 2005).

Finalmente, cabe mencionar que otra característica de la gobernabilidad foxista es la creciente participación de las organizaciones no gubernamentales, agrupaciones religiosas, fundaciones y asociaciones civiles no lucrativas y filantrópicas en la alimentación de los hogares rurales pobres. La mayoría de ellas apoyan a las comunidades con acciones humanitarias, no sólo como ayudas alimentarias, tales como los “bancos de alimentos” y un “Kilo de ayuda”, sino

con proyectos productivos y comunitarios. En teoría, éstos deberían promover una fuerza motriz y de cambio que impulsada desde abajo, se recrearía en otra ética del desarrollo que fundamentara la emergencia de una nueva gobernabilidad (Prats, 2000), pero lo que se observa es que la mayoría de las acciones vuelven a caer en el mismo error institucional: considerar a las mujeres pobres campesinas, como población vulnerable y sin capacidades de reacción. De aquí que la presencia de estas organizaciones no le resta importancia al Estado, ya que gracias a su papel de proveedor de bienes públicos de la seguridad, el Estado sigue legitimándose con sus intervenciones políticas en el desarrollo social, tal y como lo es el programa de Oportunidades.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Como Escobar lo anuncia, para finales del siglo y principios del milenio estamos colocando a las hambrunas en el lugar de la naturaleza (ecología) y a la sexualidad en el lugar de la sobrepoblación y la migración. De esta manera, el remedio que curará los males del "pobre planeta", se está elaborando sobre la última fase del desarrollo, el del desarrollo humano sustentable, el cual requiere de la construcción de un nuevo modelo democrático, donde el "buen gobierno" sirva a los ciudadanos.

Bajo este mandato, las políticas, leyes, programas y planes que surjan para atender el problema de la inseguridad alimentaria de los hogares rurales, han construido sujetos responsables de su situación y víctimas a su vez. Es aquí donde se les otorga un lugar a las *mujeres rurales pobres e indígenas* de los países del Tercer Mundo. Ellas no sólo son visibles como pobres, víctimas del hambre; responsables de la alimentación y nutrición de sus familias, cuidadoras de evitar la degradación de su medio físico, o mujeres a las que le falta poder, sino que también son incorporadas a los discursos como agentes socioeconómicos o sujetos de cambio social al ser objeto de programas de combate a la pobreza y de seguridad alimentaria.

No debemos, sin embargo, negar que cada vez más las mujeres activistas y algunos grupos locales adoptan la gramática del desarrollo rural y el humano sustentable, para exigir la incorporación del género en todas las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, y aunque no engloba todas las tentativas de la perspectiva de género, las mujeres (aparentemente) van abarcando más lugar en estos discursos dominantes.

El desarrollo de capacidades de las mujeres rurales pobres e indígenas, "políticamente correcta" o deliberadamente definidas como vulnerables, grupos prioritarios o de atención especial, definitivamente no se observan a mediano ni largo plazos, pues las políticas sociales que diseñan estos programas no basan sus objetivos en mejorar estratégicamente las oportunidades con base en la redistribución de los ingresos y de los recursos con el ánimo de reducir la brecha de las desigualdades sociales y de género. Por el contrario, al definir las como pobres y vulnerables las encasillan en programas asistenciales aunque pasen en los discursos, leyes, planes y programas como productivas.

El peligro de este mal trato a la población femenina reside en que dado que el cambio social es altamente dependiente de las representaciones mentales o modelos subjetivos de los actores, el aliciente de un sistema inadecuado de conocimientos tenderá a reforzar el *status quo* institucional (Prats, 2000). Por lo tanto, las mujeres pueden ser más remisas a captar o aceptar los beneficios alcanzables con el cambio y, por el contrario, pueden llegar a dramatizar los costos del cambio o la no necesidad del mismo, de ahí que prefieran seguir siendo pobres y vulnerables que cambiar de estatus en la economía política trazada por el "buen gobierno".

BIBLIOGRAFÍA

- ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO, por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias (lunes 28 de abril 2003), México.
- ALBERTI, P. (1995), *Empoderamiento y mujer rural en México*, Texcoco, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas.
- BATLIWALA, S. (1997), "El significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde la acción", en Magdalena de León (comp.), *Poder y empoderamiento de las mujeres*, Bogotá, T.M. Editores, pp. 187-211.
- BENERÍA, L. *et al.* (1982), *Women and Development*, Nueva York, Praeger.
- BERTUCCI, G. (2003), "La innovación gubernamental en el mundo: retos y perspectivas", ponencia presentada en el "V Foro Regional de Gobernabilidad", RPD, núm. 13, p. 8.
- BOSERUP, E. (1970), *Women's Role in Economic Development*, Nueva York-Londres, St. Martin Press.

- CLEEVES, J. (1993), *Half the World, Half the Chance. An Introduction to Gender and Development*, Oxford, Oxfam.
- CONTRERAS, E. (2001), *La negociación para el bienestar. Una apreciación de la política social en Oaxaca, México, 1992-1998*, México, CEIICH-UNAM (Colección Alternativas).
- CORTÉS, L. (2005), "La seguridad alimentaria en la historia del Estado mexicano", en *AgroNuevo*, año 1, núm. 10, México, SRA, pp. 79-98.
- DAWN (1992), *Femmes du Sud. Autre voix pour le xxie siècle*, París, Côté-Femmes Éditions.
- ESCOBAR, A. (1995), *Encountering Development. The Making and the Unmaking of the Third World*, Princeton, Princeton University Press.
- ORGANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (1991), *Assessment of the Current World Food Security Situation and Outlook*, Roma, FAO Committee on World Food Security, 16th Session.
- (1996), *Contexto sociopolítico y económico general para la seguridad alimentaria en los niveles nacional, regional y mundial*, Roma, FAO/ONU.
- FOUCAULT, M. (1996a), *La voluntad de saber, historia de la sexualidad*, México, Siglo XXI.
- (1996b), *La arqueología del saber*, México, Siglo XXI.
- GONZÁLEZ R., M.J. (2001) "Algunas reflexiones en torno a las diferencias de género y la pobreza", en J.M. Tortosa (coord.), *Pobreza y perspectiva de género*, Barcelona, Ikaria/Sociedad y Opinión, pp. 87-112.
- KABEER, N. (1997), "Empoderamiento desde abajo: ¿qué podemos aprender de las organizaciones de base?", en Magdalena de León (comp.), *Poder y empoderamiento de las mujeres*, Bogotá, T.M. Editores, pp. 119-146.
- KANDIYOTI, D. (1982), *Women in Farming Systems*, Serbal/UNESCO.
- LLAMBÍ, L. (1995), "Reestructuraciones mundiales de la agricultura y la alimentación. El papel de las transnacionales y los grandes Estados", en *Agroalimentaria*, núm. 1, Caracas, pp. 61-75.
- MAYNTZ, R. (2002), *Nuevos desafíos de la teoría de Governance*, Barcelona, Serie Documentos del Instituto Internacional de la Governance de Cataluña.
- MEILLASSAUX, C. (1975), *Femmes, granieres et capitaux*, París, PUE.
- MOORE, H. (1996), "The Changing Nature of Anthropological Knowledge: An Introduction", en H. Moore (ed.), *The Future of Anthropological Knowledge*, Londres-Nueva York, Routledge.

- MAXWELL, S. y T.R. FRANKENBERGER (1992), *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. A Technical Review*, Nueva York, UNICEF/IFAD.
- MORALES, C. (1998), "El cuerpo femenino, el discurso médico y las prácticas sociales en la Mixteca Poblana", tesis de maestría, México, Universidad Laval, Québec.
- MOSER, C. (1991), "La planificación de género en el Tercer Mundo: enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género", en Guzmán *et al.* (comp.), *Una nueva lectura: género en el desarrollo*, Lima, Flora Tristán Ediciones, pp. 55-124.
- MUÑOZ G., R. (2004), *Innovación gubernamental. El paradigma de buen gobierno en la administración del presidente Vicente Fox*, México, FCE.
- NAVAS, J. (2003), "Riesgo y escasez alimentaria. Una agresión a nuestra seguridad", en la colección del IICG: *Seguridad sostenible. Gobernanza y seguridad sostenible* <www.iigov.org.es>.
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (2004), *Meeting the Challenges of Public Governance*, Public Governance Committee, OECD.
- PINEDA, S. (2006), "Programa de proyectos productivos para las mujeres mazahuas. El institucionalismo desoculto", tesis de maestría en Ciencias Agropecuarias, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (1995), *Informe sobre el desarrollo humano*, México, FCE/ONU.
- _____ (1997), *Informe sobre el desarrollo humano*, México, ONU.
- _____ (2001), "Governance for Sustainable Human Development-Documento de política", en *Good Governance and Sustainable Human Development*, Washington, PNUD/ONU.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (1989), *L'état de l'environnement mondial*, Nueva York, ONU.
- PRATS, J. (2000), *D.C. North: el neo-institucionalismo y la teoría del desarrollo institucional*, Barcelona, Serie Documentos del Instituto Internacional de la Governance de Cataluña.
- ROWLANDS, J. (1997) "Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el desarrollo", en Magdalena de León (comp.), *Poder y empoderamiento de las mujeres*, Bogotá, T.M. Editores, pp. 213-245.
- ROCHELEAU, D., B. THOMAS-SLAYTER y E. WANGARI (1996), *Feminist Political Ecology. Global Issues and Local Experiences*, Londres, Routledge.

- SACHS, W. y G. ESTEVA (1996), *Des ruines du développement*, Montréal, Les Éditions Écosociété.
- TORRES T., F. (2003), *Seguridad alimentaria: seguridad nacional*, en Y. Trapaga *et al.*, México, Plaza y Valdés.
- TOURAINÉ, A. (1997), *¿Podremos vivir juntos?*, México, FCE.
- VIZCARRA B., I. (2002), "Social Welfare of the 1990's in Mexico. The Case of 'Marginal' Families in the Mazahua Region", en *Anthropologica*, vol. XLIV, Canadá, pp. 209-222.
- _____ (2005), "Políticas de seguridad alimentaria de los años 90 con asignación genérica", en I. Vizcarra y B. Marañón (coords. del tomo 3), *Acciones sociales públicas y privadas contra la pobreza*, Massieu, Chauvet y García (coords. generales), *Los actores sociales frente al desarrollo social*, México, AMER/Editorial Praxis, pp. 111-142.
- WORLD BANK (1992), *Poverty Reduction Handbook*, Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development.
- YOUNG, K. (1995), *Planning Development with Women. Making a World of Difference*, Londres, MacMillan Education.

EL CAMPO NO AGUANTA MÁS: LA IRRUPCIÓN DE LOS PRODUCTORES RURALES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMPO

*Armando Sánchez Albarrán**

RESUMEN

Durante los últimos veinte años las políticas dirigidas hacia el campo no han favorecido a la mayoría de productores agropecuarios; sin embargo, a mediados del gobierno de Vicente Fox, quien se ha caracterizado por el continuismo en la conducción de la economía, las organizaciones campesinas adscritas al movimiento El Campo No Aguanta Más, entre otras, supieron aprovechar, con relativo éxito, la coyuntura de las elecciones federales de julio de 2003, para intentar influir en el diseño de la política sectorial, planteando la ampliación de los recursos económicos en programas productivos y asistenciales; el retiro de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la modificación del Artículo 27 Constitucional, entre otras demandas. Desde un estudio que intenta utilizar el análisis de los movimientos sociales y de las políticas públicas, se pretende investigar hasta que punto el movimiento El Campo No Aguanta Más fue capaz o no de influir en el alcance y contenido de la política pública agropecuaria para el campo. Se concluye que las movilizaciones de las principales organizaciones del campo, si bien no modificaron sustancialmente los programas de desarrollo rural, sí mostraron, que hasta cierto punto ello es posible.

INTRODUCCIÓN

Analizar hasta que punto el movimiento El Campo No Aguanta Más fue capaz o no de influir en el alcance y contenido de la política pú-

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Correo electrónico: <armando_sa2002@yahoo.com.mx>.

blica agropecuaria para el campo mexicano, en la coyuntura de mediados del gobierno presidencial panista de Vicente Fox, es el propósito de este trabajo.¹ Durante los últimos veinte años las políticas hacia el campo han sido, más bien, desfavorables para casi todos los productores rurales; sin embargo, las movilizaciones de las principales organizaciones del campo de noviembre de 2002 y mediados de 2003, si bien, no modificaron sustancialmente los programas de desarrollo rural, sí mostraron que hasta cierto punto ello es posible. El examen de las movilizaciones rurales es contemplado a través del *análisis de las políticas públicas* y del *análisis de los movimientos sociales*, haciendo énfasis en la importancia del momento de la política en el ingreso del asunto o *issue* a la agenda pública, de modo que nos permitan evaluar los logros campesinos en la ampliación de la política agropecuaria conseguidos tras la firma del Acuerdo Nacional para el Campo el 28 de abril de 2003.

La aproximación al análisis de las políticas públicas se realiza desde la mirada, que al respecto hace Luis Aguilar Villanueva² en particular el tomo titulado: *El estudio de las políticas públicas* (1992), ahí reflexiona respecto de la posibilidad de modificar las políticas públicas en la medida en que éstas no son determinadas de una manera racional, desde el Estado, sino más bien éstas van a depender de ciertas coyunturas: políticas, sociales y económicas (Aguilar, 1992). El enfoque de las políticas públicas se utiliza como un recurso analítico auxiliar para la sociología y no como una herramienta administrativa.³

Sin embargo, los asuntos públicos son procesados en el sistema político mexicano y como tal las políticas van a estar en función de la correlación de fuerzas entre los actores sociales involucrados. El

¹ Es oportuno aclarar que en este trabajo se designará como al movimiento El Campo No Aguanta Más, no únicamente a las doce organizaciones que integraron ese frente, sino, en un sentido amplio, a todas las organizaciones del sector social que participaron en dichas movilizaciones, es decir: el movimiento El Campo No Aguanta Más, El Barzón, la Confederación Nacional Campesina y el Congreso Agrario Permanente.

² Luis Aguilar coordinó la colección de antologías de política pública en tres tomos (Aguilar, 1992). Este autor retoma en dicha antología las aportaciones de algunos de los pioneros de dicho enfoque, tales como Harold D. Lasswell, Graham Allison, David Apter o Charles Limblom (Aguilar, 1992).

³ Se parte del hecho de que las políticas públicas pertenecen a todos los ciudadanos y no únicamente a los políticos o a los administradores en las instituciones. Es decir, habría que reconocer que en América Latina aún es reducida la capacidad de los ciudadanos en el diseño y gestión, de manera copartícipe, de las políticas públicas.

sistema político ha pasado de un fuerte autoritarismo que se expresaba en el presidencialismo y el control corporativo por el otrora Partido Revolucionario Institucional, hacia un esquema más democrático.

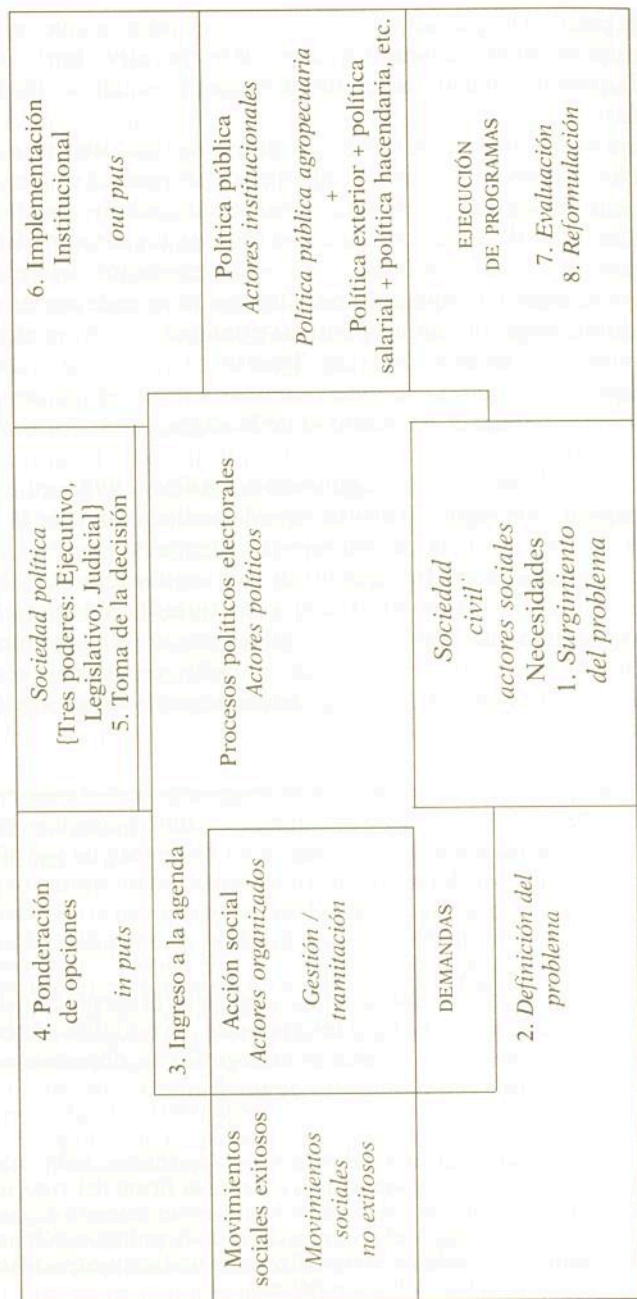
Con el propósito de ayudarnos a comprender la manera en que ingresan los asuntos públicos a la agenda, se propone el esquema 1.

En este esquema podemos ubicar la diferenciación entre la *sociedad política* (arriba) y la *sociedad civil* (abajo), los *actores sociales* y las *etapas de ciclo de las políticas públicas* (numeración del 1 al 8). En el lado izquierdo del esquema, encontramos la zona de *acción social* desde donde se gestionan las políticas públicas, o bien, se expresan los *movimientos sociales*. Del lado derecho se encuentra la zona de la *implementación de las políticas públicas* a través de *planes y programas institucionales*, así como el de la *evaluación/reformulación de los mismos*.

Para fines de exposición, siguiendo a Aguilar (1992), quien a su vez recupera a los pioneros en este tipo de análisis: Charles D. Elder y Roger W. Cobb (1974), retomaremos la propuesta del *ciclo de las políticas públicas* con el propósito de dar seguimiento al proceso seguido por el movimiento El Campo No Aguanta Más para tratar de influir en la política pública. Adaptando algunos de los momentos del movimiento campesino al ciclo de políticas públicas y éste en el esquema del sistema político, podemos identificar los siguientes momentos:

1. Surgimiento del problema (corresponde con el surgimiento del movimiento el 2 de noviembre de 2002 y concluye con las manifestaciones de descontento en diciembre de ese año).
2. La definición del problema (los obstáculos interpuestos por el gobierno para impedir que el asunto entrara en la agenda de gobierno;⁴ y las luchas de interpretación de diagnósticos previos a las mesas de negociación).
3. El ingreso a la agenda pública; a partir de la aceptación de una negociación con vistas a las mesas de diálogo (los compromisos posteriores a las mesas de diálogo; la transformación de las conclusiones en propuestas de programas).

⁴ En efecto, los antecedentes del conflicto lo podríamos haber ubicado desde la crisis de los años ochenta, o bien desde la firma del TLC. Sin embargo, como el propósito de este trabajo es utilizar el enfoque de políticas públicas, y en este caso, desde el esquema del ciclo de políticas públicas. En realidad, el esquema puede ser muy útil y tiene una gran capacidad para adaptarse a casi cualquier política pública.



FUENTE: elaboración propia, sobre la base de David Easton y Luis Aguilar.





4. La ponderación de opciones (las presiones rurales y la creación de mesas de diálogo, proceso seguido de presentación de propuestas campesinas y propuestas institucionales, las negociaciones entre organizaciones rurales e instituciones estatales).
5. La toma de la decisión, la firma del acuerdo y los compromisos sociales e institucionales para implementar la política (la firma del Acuerdo Nacional para el Campo).
6. La implementación; el gobierno utilizó la vía institucional y legal, pero además entregó los recursos a cuentagotas (las comisiones de implementación y evaluación).
7. La evaluación y reformulación de las políticas públicas.
8. Reformulación de las políticas públicas.

Sostengo que más que un procedimiento técnico-administrativo, cada etapa del ciclo se encuentra intervenida en mayor o menor medida por la política. Aguilar (1992) recuperando a Limblom, sostiene que en una gran medida las políticas son definidas más por la política (Aguilar, 1992). Sin embargo, la toma de decisiones de cualquier política pública oscila entre situaciones que tienden hacia una mayor o menor intervención estatal; estas decisiones pueden acarrear un alto o bajo costo económico; puede tratarse de políticas sustentadas en el aumento o disminución del gasto público; así como un cambio en los beneficiarios del subsidio.

En el esquema 2 se considera la composición partidista en el Congreso, ya que es el lugar donde se asigna el presupuesto a los programas institucionales. Así, de lo que se trata es de evitar los extremos debido al riesgo de un fuerte costo económico y político. Sin embargo, si existe un equilibrio en la composición de sus representantes podría conducir a una situación de fuerte legitimidad y que coincida con una mayor relación Estado-sociedad.

BREVES ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO RURAL

Para hacer frente a la crisis de los años ochenta los gobiernos mexicanos adoptaron medidas económicas de corte monetarista y como tal se sustentaron en la restricción del crédito, los salarios y los bajos precios agropecuarios, así como la reducción del gasto público y los subsidios al campo, todo ello con el propósito de reducir la inflación, que se convierte en el principal objetivo de los gobiernos neoliberales. Como antecedentes al movimiento El Campo No Aguanta Más podemos enumerar los siguientes aspectos:

<i>Intervención estatal</i>	<i>Política social</i>		<i>Política económica</i>	<i>Paradigma del libre mercado</i>
Alto costo económico	Aumento gasto social	Bajo costo económico	Disminución gasto social	Alto costo económico
Déficit fiscal	Subsidio a medianos y pequeños productores	Superávit fiscal	Subsidio a grandes consorcios	Déficit fiscal
Débil relación Estado-sociedad	El campo es prioridad	Fuerte relación Estado-sociedad	El campo, no es prioridad	
	Fuente de seguridad alimentaria	Legitimidad	Débil seguridad alimentaria	
	PRD	PRI	PAN	
Alto costo político	Zona de influencia izquierda	Zona de influencia centro	Zona influencia derecha	Alto costo público
Conflictos desde la derecha o de grupos paramilitares				Conflictos desde la izquierda o de redes de la sociedad civil, ONG's alterglobales

FUENTE: elaboración propia.

1. El retiro del Estado de las funciones como promotor del desarrollo agropecuario deja a los productores a la suerte del libre mercado⁵ al tiempo que provocó, en los hechos, la baja productividad agropecuaria.⁶ El retiro de los apoyos al campo será una de las razones que se transformarán en demandas públicas, es decir, en la exigencia de una intervención estatal necesaria y subsidio estratégico para estimular a los pequeños productores rurales (Sánchez, 2004).
2. Diversificación de los frentes de lucha de los campesinos, de la lucha por la tierra a la lucha por el crédito, los recursos naturales, los precios, etcétera.
3. Transformación del campesino, quien pasa de ser el “hijo predilecto del régimen” a pobre; para ello se reforzaron los programas asistencialistas como Pronasol y el programa de apoyo directo a los productores, Procampo.
4. El Congreso Agrario Permanente, creado como una instancia de negociación entre instituciones oficiales, privadas y políticas, y las organizaciones, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, adquirió, en los hechos un esquema de dominación: el neocorporativismo.
5. Modificación del marco jurídico en el campo, con las reformas al Artículo 27 Constitucional, en 1992, lo cual supone el ingreso de las tierras del sector social (ejidal y comunal) al mercado de tierras.
6. Ingreso del país al libre mercado con la firma del Tratado de Libre Comercio, en 1992, lo cual implica la posibilidad de comercialización de los bienes agropecuarios entre México, Canadá y Estados Unidos, sin las barreras a la entrada o aranceles que defendían a los productores.

⁵ Por cuestiones de espacio no se abunda respecto a los procesos económicos, pero se recomienda la revisión de la revista *El Cotidiano*, núm. 124, marzo-abril, 2004, año 19. En dicho número se incluyen varios trabajos que se refieren a los antecedentes económicos y los impactos del TLCAN, como el de Edmar Salinas, “Balance general del campo mexicano (1988-2002)”.

⁶ Desde entonces se ha reducido la inversión pública en el campo, se liberan los precios de insumos agrícolas como energéticos, fertilizantes y maquinaria. Así, agencias internacionales marcan la intensidad de dicho retiro y de cambio en el manejo de los recursos públicos, del retiro del subsidio. Paralelamente, el gobierno adopta tratos económicos con instituciones como el GATT en los años ochenta, hoy OCDE, instancia desde donde se instrumentan las acciones al libre mercado, a saber: la reducción de subsidios y aranceles (McMichael, 1999) que terminan beneficiando a las empresas transnacionales (*La Jornada*, 18-04-03).

7. Aparición del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y la reivindicación de demandas tales como la autonomía indígena.
8. Continuación de las reformas al Estado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, al suprimir los precios de garantía; en su lugar en 1994 el gobierno crea el Programa de Apoyo para el Campo.

Durante el gobierno del presidente Vicente Fox no hubo un cambio significativo que beneficiara a los productores del campo sino, más bien, un continuismo en las líneas económicas que ya habían adoptado los gobiernos anteriores. Durante su campaña electoral, Fox había prometido la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que sin embargo avanzaba muy lentamente, ya que fue aprobada hasta principios de 2002 y sin una ley reglamentaria. Desde 2001 a 2002 ya se manifestaban los síntomas de una crisis generalizada en el campo, como lo mostraron las movilizaciones de cafecultores, piñeros, azucareros, productores de granos básicos, ganaderos y productores de leche, todos ellos afectados por los bajos precios de sus productos como consecuencia de la apertura comercial con Estados Unidos. En el caso de los cañeros y azucareros, el gobierno de Vicente Fox se vio obligado a renacionalizar los ingenios que se encontraban en crisis financiera.⁷ Se le puede abonar a dicho gobierno su incumplimiento con las organizaciones indígenas, encabezadas por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, al aprobar la "otra" ley indígena. Al tiempo en que las migraciones de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos se ha ido ampliando. Dichas movilizaciones fueron el preámbulo de lo que seguiría.

En síntesis, durante más de veinte años, los gobiernos tecnócratas, han adoptado el paradigma de libre mercado que supone: *a*) el retiro del Estado; *b*) que los problemas económicos los soluciona el libre mercado, y *c*) los problemas de redistribución del ingreso ya no competen al Estado.⁸ Como resultado de lo anterior se había abierto una peligrosa brecha entre el Estado y la sociedad.

⁷ Sin embargo, Luis Miguel Álvarez, titular del Fideicomiso Liquidador informó que hasta el momento no había confirmado el decreto expropiatorio, ya que los dueños de ingenios interpusieron amparos, debido a eso, no se han podido recuperar los créditos de los ingenios intervenidos por unos 18 mil millones de pesos (*La Jornada*, 16/04/03).

⁸ Esta forma de pensar es compartida por un grupo de tecnócratas en el gobierno desde hace más de veinte años, desde donde se han impuesto medidas monetaristas desde los años ochenta como una forma de hacer frente a la crisis económica.

PRIMER PERIODO: EL SURGIMIENTO DEL ASUNTO PÚBLICO (*ISSUE*)
Y LA LUCHA POR LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El primer periodo del *ciclo de políticas públicas* (véase el esquema 1), contemplará de noviembre a diciembre de 2002 y corresponde al *surgimiento y definición del problema*; es decir, al punto uno y dos de dicho ciclo, en el que se va a dar una lucha de interpretaciones entre organizaciones rurales e instituciones en función de si existe o no un asunto público a tratar. De acuerdo con el esquema 2, de lo que se trataba era de mover, en lo posible, el tipo de políticas públicas, de una orientación claramente neoliberal y excluyente, hacia una posición de centro, que beneficiara a más productores rurales. Ciertos sucesos actuaron como mecanismos disparadores para ingresar las demandas sociales a la agenda pública (Aguilar, 1992). En este caso, la entrada en vigor de una etapa más del TLCAN; la negociación del presupuesto agropecuario por el Congreso de la Unión en diciembre de 2002; la cercanía del proceso electoral de julio de 2003; la crisis del sector agropecuario y los efectos sociales del TLCAN tales como el desempleo rural y las migraciones. Una seria amenaza económica, visualizada por las organizaciones de productores, consistía en que el 1 de enero de 2003 entraría el décimo corte de desgravación del TLCAN para todos los productos agropecuarios, insumos y productos manufacturados. Sólo quedarían protegidos con aranceles y cuotas de importación hasta 2008 los casos "excepcionales" del maíz, frijol, azúcar de maíz y leche en polvo. De esta manera, las salvaguardas especiales y automáticas que se tenían todavía hasta el 2002 en productos como carne de cerdo, manzana, papa y café procesado desaparecen⁹ (Schwentesiús, 2003).

El 12 de noviembre, 12 organizaciones campesinas nacionales y regionales lanzan un manifiesto a la nación titulado: "El Campo No Aguanta Más: Seis Propuestas para la Salvación y Revalorización del Campo Mexicano"; es decir, con seis propuestas de una agenda de política agropecuaria: 1) renegociación del apartado agropecuario

⁹ Lo que desaparecerá serán las cuotas de importación y la exención a pagar impuestos a unos 40 productos. Los productos que entrarán libres en adelante hasta antes del 1 de enero de 2002, un arancel máximo de 2 por ciento o de 1.5 por ciento. En 1994 entraron con gravámenes de 20 y 15 por ciento y posteriormente fueron disminuyendo dos puntos en el arancel. El problema social de lo anterior significa que 3.5 millones de campesinos de subsistencia quedarán en situación de fragilidad o de exclusión permanente ya que no se encuentran en condiciones de igualdad para competir con Estados Unidos y Canadá (*El Universal*, 13/11/02).

el TLCAN; 2) plan emergente para 2003 y de largo plazo con horizonte a 2020 para una reforma estructural del sector agropecuario elaborado por una Comisión de Estado con participación del Ejecutivo, del Legislativo, de los centros de investigación y de educación superior y de los productores; 3) incremento al presupuesto para desarrollo rural del 0.6 por ciento al uno por ciento del PIB; 4) orientación de la nueva financiera rural como banca social; 5) calidad e inocuidad en los alimentos para los consumidores mexicanos, y 6) cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura de los pueblos indios. Casi de inmediato se secundan otras agrupaciones campesinas, entre ellas El Barzón y, posteriormente, el Congreso Agrario Permanente (*El Universal*, 13/1/02).

Ante las demandas y las movilizaciones rurales, los actores institucionales van a reaccionar con medidas coyunturales, anunciando apoyo al campo para tratar de apaciguar los ánimos en el sector social rural. Así, el 18 de noviembre el jefe del Ejecutivo y el secretario de Sagarpa, Javier Usabiaga anunciaron el "blindaje" del campo por un monto de 102 563 millones de pesos¹⁰ (*Reforma*, 20/1/02). Como las medidas anteriores no lograron contener el movimiento, la Secretaría de Gobernación saldrá del paso al movimiento y propone un Acuerdo Nacional para el Campo. La primera reacción desde el gobierno consistió en minimizar la situación de crisis agrícola y desconocer el problema de la renegociación como un problema público. La segunda, consistió en promover la persecución judicial de los líderes campesinos, al tiempo en que hacía propuestas de negociación Estado-campesinos (*El Universal*, 4/12/02).

¹⁰ Se planteó un incremento al presupuesto federal para el desarrollo rural de 34 mil millones a 47 mil millones, con un incremento de 13 100 millones de pesos. Sin embargo, el blindaje fue débil, ya que no se le autorizaron todos los recursos. Además se anunció el pago a los productores de Procampo de 1 300 pesos por hectárea equivalentes a 100 dólares de 1994, así como el restablecimiento de precios de garantía y subsidios aplicados en energía eléctrica, tecnificación del riego, bajos precios en diesel y fertilizante, agroquímicos y productos biológicos, en resumen tibios y tardados subsidios. La modificación de la ley de energía para su uso en el campo incluyó subsidios a la energía eléctrica, el diesel y la gasolina para uso agrícola. En cuanto a la Ley de Ingresos se logró que la Secretaría de Economía vigile y dé seguimiento a los efectos que puedan causar la importación de productos (*La Jornada*, 19/11/02). En el Congreso, legisladores del PRI y del PRD afirmaron que el blindaje agroalimentario era engañoso. Los legisladores del PRD se pronunciaron por sacar al agro del TLC y representantes del PRI solicitaron que se pospusiera la apertura (*Reforma*, 20/11/02).

De noviembre a diciembre continuaron en ascenso las movilizaciones, destacan: la tomas de garitas; las marchas al zócalo y/o toma simbólica de la Sagarpa, la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda y la de Economía. Huelgas de hambre en el Monumento a la Independencia a fines de diciembre (véase Sánchez, 2004); el MCAM comenzó a tejer una amplia red de alianzas con organizaciones políticas, sindicales y sociales (*La Jornada*, 4/12/02); incluso lograron establecer una importante alianza estratégica con la CNC, filial del PRI; establecieron compromisos importantes con las dirigencias de organizaciones de electricistas, petroleros, con la UNTA, entre otras agrupaciones; también ganaron la batalla inicial frente a los medios de comunicación, este hecho coadyuvó a influir en la agenda pública (*Reforma*, 20/11/02). De todas estas acciones rurales se pueden destacar dos: la primera, cuando integrantes de El Barzón, maestros de la CNTE, entre otros, ingresan el 10 de diciembre al recinto parlamentario, algunos de ellos montados a caballo, como protesta y presión para lograr la moratoria (*El Universal*, 11/12/02). La segunda, cuando la noche del 31 de diciembre concluyó con un ayuno por parte de los integrantes de MCAM y nueve organizaciones solidarias en el puente internacional de Ciudad Juárez, donde lograron inhibir el paso de productos agropecuarios, ya que por ahí ingresan entre cinco y seis tráileres por minuto (*La Jornada*, 16/01/03).

Adelantándose a los procesos políticos electorales, la Secretaría de Gobernación propuso instalar una mesa de diálogo con el MCAM, El Barzón y otras organizaciones sociales, quienes ganan su primera batalla en el camino de ingresar en la agenda el asunto del campo, para tratar el problema de la situación en el campo por las vías del diálogo y las instituciones.

SEGUNDO PERIODO: INGRESO DEL ASUNTO A LA AGENDA PÚBLICA

El segundo periodo abarcará de enero a febrero de 2003, que de acuerdo con el primer esquema, corresponde a la fase de *ingreso a la agenda*, tras la numerosa marcha campesina, y *ponderación de opciones*, incluye el reconocimiento de los actores sociales como interlocutores y la creación de las mesas de diálogo.

En esta etapa continuaron las movilizaciones que utilizaron, cada vez más, acciones disruptivas, es decir, acciones que sin ser ilegales significaba quebrantar algunas reglas sociales en las que se destaca más el carácter simbólico de la acción (*La Jornada*, 16/01/03); acciones de resistencia civil como el ayuno de tres días en el Puente Inter-

ional de Córdoba-Américas, en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso. Logran la solidaridad de grupos urbanos, como las comunidades eclesiales de base, pero principalmente, recibieron apoyo por parte de sindicatos independientes, tales como la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, que se manifestaron con un paro nacional para presionar al gobierno (*Reforma*, 06/01/03). Durante esos primeros meses, la CNC se mostró vacilante en su postura por la renegociación del TLCAN, dicho cambio de actitud se evidencia en medio de una lucha interna al interior del PRI.¹¹ Sin duda, la victoria más importante lograda por el frente campesino sucede el día 31 de enero: se realizó la multitudinaria marcha campesina en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México, que logró reunir a aproximadamente unas 100 mil personas; así como la realización de marchas en varias entidades del país, en demanda de la renegociación del TLCAN y de mayores apoyos al campo.¹² Las demandas fueron adoptando la forma de una propuesta de política integral para el campo: exigieron la demanda de renegociación del TLCAN, mercados paralelos, implementación de política agropecuaria a largo plazo, acuerdos migratorios, respeto a derechos humanos de campesinos y emigrantes, y alto a la persecución y encarcelamiento de dirigentes¹³ (MCAM, 2003; *La Jornada*, 01/02/03).

A principios de 2003 las propuestas del movimiento campesino en oposición de las instituciones oficiales se habían transformado en una verdadera *controversia* que se expresó en una lucha de *interpre-*

¹¹ Al interior del PRI había una pugna entre Beatriz Paredes y Roberto Madrazo por la dirigencia del instituto político. Al mismo tiempo se libró una batalla al interior de la misma central campesina, ya que una fracción liderada por Roberto Madrazo y encabezada por Nabor Ojeda se autoproclama como dirigente de la CNC (*Reforma*, 24/11/02).

¹² Los oradores en la marcha campesina fueron Alberto Gómez, del movimiento El Campo No Aguanta Más; Rafael Galindo del Congreso Agrario Permanente; Alfonso Ramírez Cuéllar de El Barzón; Francisco Hernández Torres, de la Unión Nacional de Trabajadores, y Rosendo Flores, del Frente Sindical Mexicano y líder del sindicato de electricistas, entre otros (*La Jornada*, 01/02/03).

¹³ También en provincia hubo manifestaciones contra el TLCAN; campesinos de la CNC, CCI, UCD, UREC y CDC, en los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo, Durango, así como en Matamoros y Torreón, Coahuila, exigieron renegociar el TLC. Frente a la sede regional de la Sagarpa externaron su apoyo a la demanda del CAP para revisar el capítulo agropecuario del TLCAN (Notimex, 31/01/03). Por separado, la CNC aclaró que aunque participó en la marcha, lo hacía en solidaridad con el sector, pero que prefería mantener el diálogo abierto con el gobierno (Notimex, 31/01/03; *La Jornada*, 01/02/03).

aciones (Calva, 2004; *La Jornada*, 16/01/2003). Para el "panfoxismo", de tendencia conservadora, es contrario negociar con campesinos en la medida en que se trata de un gobierno proempresarial.¹⁴ Sin embargo, el cambio en la actitud institucional tuvo que ver con la respuesta a varias preguntas del análisis de políticas públicas: la frase "El Campo No Aguanta Más", responde a la pregunta "¿Qué sucede?, ¿cuál es el problema?", la respuesta es: "Algo del TLCAN no funciona bien". Pero la frase también contiene una solución anticipada a la pregunta de: "¿Qué hacer?": "¿Se requiere más apoyo al campo!" A la pregunta de "¿Por qué?", los diagnósticos más evidentes destacaban las enormes disparidades económicas, productivas y tecnológicas con Estados Unidos y Canadá.

Ante la radicalidad que estaba adoptando el problema del campo, la Secretaría de Gobernación propuso un "Diálogo Nacional para una Política de Estado hacia la Agricultura". Asimismo, con la intención de debilitar a las organizaciones rurales, la Sagarpa convocó no sólo a organizaciones rurales,¹⁵ sino también a agrupaciones agropecuarias del sector privado para, de esta forma, balancear los acuerdos en una mesa de negociación,¹⁶ algunas organizaciones campesinas se opusieron pero no lograron su cometido¹⁷ (*La Jornada*, 16/01/2003). Después de la lentitud inicial para responder a las demandas rurales, el gobierno agilizó las negociaciones, con lo cual se propició que las organizaciones rurales llegaran divididas.¹⁸

¹⁴ Incluso el mismo presidente Vicente Fox y el secretario de la Sagarpa, en ese entonces, cuentan con ranchos privados y se presentan, ellos mismos, como ejemplo de que el libre mercado sí funciona.

¹⁵ Además añadió el líder de la CNPA que las movilizaciones se realizan en el marco de la ley y que haber firmado un documento con las autoridades no significaba dejar de organizarse y movilizarse. Insistió en que el plan de acción de El Campo No Aguanta Más es definido por la solicitud de moratoria del capítulo agropecuario del TLC (*La Jornada*, 16/01/03).

¹⁶ La invitación del sector privado no fue un hecho fortuito o simple casualidad, ya antes dicho sector había influido con su posición en la firma antiagrarista del Artículo 27 Constitucional y con la firma incondicional del TLC. La regla utilizada por el gobierno consistió en el lema "quienes definen, deciden", por lo que era importante convocar a otros actores que hicieran contrapeso al CAP, a El Barzón y al Movimiento El Campo No Aguanta Más, entre otras.

¹⁷ El argumento de la CNG y la CNPP para participar en las negociaciones era que coincidían con muchas de las demandas de las organizaciones campesinas respecto al impacto negativo del TLCAN en el sector agropecuario, por lo que acordaron sumarse a los grupos que negocian con el gobierno federal para el 5 de febrero.

¹⁸ En este sentido, el gobierno utilizó el mismo esquema que para la firma del TLC y la aprobación de las reformas al Artículo 27 Constitucional en

de sus diferencias, las organizaciones campesinas fueron ca-
de proponer reglas del juego momentos antes del diálogo; en
lugar propusieron reorientar la política económica moneta-
scal hacia las siguientes medidas:

Búsqueda del crecimiento económico pero con justicia so-
cial y no exclusivamente hacia al control de la inflación.

Búsqueda del equilibrio entre el desarrollo económico y so-
cial, es decir, a la búsqueda del bienestar de la población.

La coordinación de políticas en tiempo y espacio que abar-
quen políticas económicas y sociales. Políticas económicas que
contemplen: precios, subsidios, fomento agropecuario y forestal,
apertura comercial, empleo, salarios y tipo de cambio. Y
políticas sociales que consideren: educación, salud, infraes-
tructura social, asistencia social, apoyo alimentario y vivien-
da. Es decir, que se encaminen hacia el logro de la calidad de
vida.

La búsqueda de adecuación entre políticas generales inclu-
sivas del tipo TLCAN y particulares del tipo Procampo, ASERCA
o CONTIGO que en los hechos han tenido un carácter limitado
pues operan aislados.

Revisar el capítulo agropecuario del TLCAN y delirar una mo-
ratoria inmediata ante el desleal comportamiento estadouni-
dense.

Exclusión del maíz y frijol del TLCAN de manera definitiva.
Restricciones cuantitativas a importación de productos bá-
sicos, respeto a volúmenes máximos de importación, garan-
tizar la inocuidad y cumplimiento de normas fitosanitarias
para la importación de alimentos.

Nuevos esquemas de financiamiento, con crédito oportuno
y suficiente.

Participación real de los productores del campo en las tomas
de decisiones, es decir en la planeación y diseño de la política
agropecuaria y social al campo.

Búsqueda expresa de la autosuficiencia alimentaria ya que el
riesgo es perder la soberanía nacional, por la importación de
alimentos.

el pretexto del tiempo. En pocos meses los campesinos de todo el país
"consultados" formalmente y con una estructura corporativa. Re-
nos que el movimiento opositor a la firma del TLC no logró su pro-

Ante la sospecha de que la propuesta gubernamental se transformara en un diálogo de sordos, como sucedió con la ley indígena, el Movimiento el Campo No Aguanta Más y El Barzón rompen el diálogo y hacen un llamado a la celebración de la Convención Nacional Agropecuaria para plantear sus demandas y propuestas¹⁹ (*La Jornada*, 09/03/03).

A unos cuantos días de iniciarse el diálogo Estado-campesinos, el presidente Fox declaró a los medios, el día 4 de febrero, que no había crisis en el campo (*La Jornada*, 05/02/03); sin embargo, el 6 de febrero, declaró lo contrario (*La Jornada*, 05/02/03). A pesar de lo anterior, el 12 de febrero el presidente Vicente Fox inauguró las ocho mesas de trabajo (*La Jornada*, 06/03/03). En ellas predominaron los desencuentros entre organizaciones campesinas, empresariales y gubernamentales (*La Jornada*, 09/03/03).

En las mesas de diálogo, realizadas entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, hasta la firma del acuerdo, el 28 de abril, hubo fuertes tensiones y divisionismo entre, y al interior, de las organizaciones rurales promovido por sus diferencias de objetivos, de diagnósticos, de estrategias y hasta posiciones meramente políticas e ideológicas (*Reforma*, 07/03/03). En medio de desconfianzas mutuas concluyeron las mesas de diálogo entre gobierno y organizaciones campesinas, pero aún quedaba pendiente la firma de los acuerdos (*La Jornada*, 07/03/03).

TERCER PERIODO: TOMA DE LA DECISIÓN DE FIRMAR O NO FIRMAR

El paso de la *toma de la decisión* y la consecuente *implementación*, definido entre marzo y abril de 2003, se transformó en una situación en la cual el gobierno terminó imponiendo las reglas del juego institucional. Faltaba todavía el trabajo de sistematización de lo acordado en esas mesas, así como el filtro juicioso de los expertos y de los negociadores campesinos para convertir las propuestas, demandas y lamentos en políticas (*La Jornada*, 07/03/03). En toda esta etapa utilizó la estrategia de "divide y vencerás": a) seleccionó a sus interlocutores; b) delimitó los temas a tratar, aplicando la regla: *quien*

¹⁹ Puede notarse la enorme similitud con el EZLN, cuando convoca a la Convención Nacional Indígena y con ello las demandas ya no serían únicamente sostenidas por dicha organización, sino por los indígenas de todo el país.

ESQUEMA 3
LOS NEGOCIADORES O TOMADORES DE DECISIÓN

<i>Organizaciones del sector social</i>	<i>Instituciones del sector agropecuario</i>	<i>Organizaciones del sector privado</i>
El Movimiento el Campo No Aguanta Más El Barzón Congreso Agrario Permanente (CAP) Confederación Nacional Campesina (CNC)	Sagarpa Secretaría de Economía Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobernación Sedesol Secretaría de la Reforma Agraria Procede Procuraduría Agraria	Consejo Nacional Agropecuario Confederación Nacional Ganadera Confederación Nacional de Productores Rurales
Organizaciones excluidas: Cocy	Los gobernadores de los estados agrupados en la Conago	
Tendencia a la fragmentación		Tendencia a la cohesión

ENTE: elaboración propia.

...*me, decide; c*) cambió la prioridad de las demandas sustanciales, renegociación del TLCAN y la modificación del Artículo 27 Constitucional quedaron relegadas a un segundo término, y en su lugar priorizó las políticas de tipo distributivas y asistencialistas; *d*) después de la firma del acuerdo, transformó las demandas campesinas en programas institucionales, y *e*) con los puntos anteriores, el gobierno dividió la unidad campesina (*La Jornada*, 03/03/03).

Conviene destacar que las organizaciones campesinas del sector social diseñaron un proyecto de acuerdo nacional y la definición de la estrategia de negociación: el primero es la paridad, es decir, que garantice un nivel de vida similar entre la sociedad urbana y la rural. Otro principio es el compromiso de asegurar la soberanía alimentaria, reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y fortalecer la capacidad de desarrollo de los pequeños y medianos productores, así como de las comunidades indígenas y campesinas (*La Jornada*, 03/03/03).

Para la firma, el gobierno seleccionó a unas cuantas instituciones y organizaciones rurales, sociales y privadas, a los "decisores", como puede verse en el esquema 3.

En marzo continuaron los "jaloneos" entre autoridades federales y líderes de organizaciones rurales, ya que el gobierno delimitó los temas de negociación. En primer lugar, separó los asuntos de la renego-

ciación del TLCAN y del Artículo 27 Constitucional por soluciones materiales de corto plazo. Respecto al tema de la renegociación²⁰ el gobierno se comprometió a estar: “[...] dispuesto a reconocer y corregir errores, para utilizar con agresividad los instrumentos de defensa, el *antidumping*, los antisubsidios, la imposición de gravámenes compensatorios, las salvaguardas, las cuotas, los cupos y negociar por sectores” (*La Jornada*, 04/03/03). En segundo lugar, el tema relativo al artículo 27, en el sentido de que se garantice que la parcela ejidal sea patrimonio familiar inembargable, y que las sociedades mercantiles no tengan acceso a los predios rústicos, el compromiso de la SRA fue que “el Ejecutivo federal evaluará y revisará el marco jurídico agrario” y se modificará “para regular el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas” (*La Jornada*, 28/04/03). En tercer lugar, se mostró dispuesto a ampliar los recursos al campo, por ejemplo, utilizando recursos obtenidos de los ingresos extraordinarios por la venta de petróleo (*El Universal*, 07/04/03).

Los acuerdos anteriores tendrán graves consecuencias en la medida en que el gobierno mejoró su posición como negociador, pero no sucedió lo mismo con las organizaciones campesinas, las cuales, al mismo tiempo, comenzaban a perder fuerza, ya que por una parte lograban aumentar los recursos y, por la otra, se diluían sus demandas más importantes. Después de muchos jalones, el jueves 3 de abril se llegó a un consenso respecto a la redacción del borrador del Acuerdo Nacional para el Campo, en este documento se incluyó de alguna forma el asunto de la renegociación del TLCAN²¹ (*La Jornada*, 04/04/03).

Lo anterior, de acuerdo con Rafael Galindo, del CAP, implica una solución intermedia “pues ni las organizaciones logran su objetivo

²⁰ A la reunión asistieron el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; el representante de la CNC, Diódoro Carrasco; Álvaro López Ríos, Rafael Galindo, José Durán, Víctor Suárez, Alfonso Ramírez Cuéllar y Alberto Gómez (*El Universal*, 14/03/03).

²¹ Los desacuerdos quedaron entre corchetes y entre ellos los aspectos relativos a financiamiento de pequeños y medianos productores en procesos de denuncia e investigación de presuntas prácticas desleales de comercio internacional. También quedó pendiente el tema relativo a experimentación, producción y comercialización de productos biotecnológicos y organismos genéticamente modificados. En esta misma situación quedó la evaluación de la Ley Federal de Competencia Económica en los mercados de las cadenas agroalimentarias. Entre ellas el establecer una política de cupos de importación, la defensa contra las prácticas desleales de comercio, la intensificación de las negociaciones internacionales para el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades (*La Jornada*, 04/04/03).

renegociar el TLCAN ni el gobierno se queda en su posición original de no tocarlo". Para Víctor Suárez lo pactado supone una renegociación y renegociación del TLCAN, ya que las consultas que se iniciarán tienen el objetivo de sacar al maíz y al frijol. Respecto a los recursos adicionales se autorizaron 2 800 millones de pesos para nueve programas específicos²² (*La Jornada*, 10/04/03). El 10 de abril, el secretario de Hacienda se comprometió a entregar apoyos por 24 millones de pesos y redistribuir 66 mil millones de los recursos para desarrollo rural incluidos en el Presupuesto de Egresos de 2003²³ (*La Jornada*, 10/04/03). Además, el Ejecutivo se comprometió a solicitar a los gobernadores que parte de los siete mil millones de pesos del fondo petrolero, los destinen en infraestructura rural²⁴ (*La Jornada*, 13/04/03).

Ya en este momento se hablaba de que algunas organizaciones campesinas no suscribirían el acuerdo por considerar que el documento no incluía las principales demandas, entre las organizaciones mencionadas están: FDC, FN en Defensa del Campo Mexicano y Forca²⁵ (*La Jornada*, 27/04/03; 28/04/03; 28/04/2003).

²² Sin embargo, el gobierno federal respaldó a organismos y fideicomisos relacionados con los programas de rescate con 441 296.6 millones de pesos, de los cuáles 90 por ciento corresponde a la deuda con los bancos y en las autopistas. Hubo un aumento en un año de 10 mil millones de pesos en el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (*La Jornada*, 05/04/03).

²³ Las organizaciones campesinas criticaron que esos 24 mil millones son "recursos del diálogo", pero señalaron que no se trata de recursos gubernamentales, ya que siete mil millones de pesos pertenecen a los gobiernos estatales, 11 mil millones de crédito y garantías proviene de la banca de desarrollo y cinco mil millones son resultado de la disminución de costos (*La Jornada*, 10/04/03).

²⁴ Los 2 800 millones de pesos se destinarán de la siguiente manera: 300 millones de pesos al presupuesto del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad; 100 millones al Programa de Apoyo a la Mujer Campesina; 400 millones para servicios de salud; 260 millones para el Fondo Nacional de Vivienda Rural; 650 millones al Procampo y 150 millones para el Programa de Empleo Temporal. Además, se destinan 500 millones para establecer un proyecto de apoyo para adultos mayores de 60 años (*La Jornada*, 13/04/03).

²⁵ Así se confirmaba que ocho de las 12 organizaciones de El Campo No Guanta Más sí firmarían el acuerdo, incluso se cuestionó que Víctor Suárez fuera el orador ese día y en su lugar iría Federico Ovalle, de la CIOAC. Víctor Quintanilla, del FDCCH, argumentó que "No vemos cómo firmar un acuerdo donde el gobierno se comprometió a hacer lo que tiene obligación de hacer". Todas las organizaciones expusieron las debilidades del proyecto de acuerdo, pero quienes sí firmarían consideraron que se trataba de un principio para transformar gradualmente las políticas públicas para el campo (*La Jornada*, 28/04/03).

Por fin, el lunes 28 de abril se firmó el esperado acuerdo para el campo, las principales líneas son: *a)* construcción de un Fondo Nacional de Vivienda Rural; *b)* incorporación de nuevas hectáreas al padrón de Procampo, estimando una asignación de 650 millones de pesos; *c)* la creación de un fondo de 500 millones de pesos en apoyo a adultos mayores de la zona rural; *d)* el otorgamiento de 100 millones de pesos para ampliar los apoyos de programas productivos de las mujeres; *e)* invitación a los gobernadores para invertir los recursos por excedentes petroleros en programas de ampliación y mantenimiento de infraestructura rural; *f)* reestructuración de la cartera vencida agropecuaria, forestal, pesquera y rural; *g)* el compromiso de entregar el 31 de diciembre una evaluación del impacto del TLC en el sector agropecuario, para aplicar mecanismos de defensa, incluidos en el acuerdo, para la protección y reducción de asimetrías o prácticas desleales con los socios comerciales; *h)* inicio de consultas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para cambiar las reglas de comercialización del maíz y frijol, tales como la administración de importaciones; *i)* el compromiso de dar a conocer en 30 días las reglas de operación de los programas incluidos en los programas federales actuales que responde a la emergencia en el campo; *j)* analizar y promover la reforma a leyes de impacto rural como la de Planeación Agropecuaria y Soberanía, la de Desarrollo Rural Sustentable, el marco jurídico de los derechos y cultura indígena (*El Universal*, 29/04/03; *La Jornada*, 29/04/03).

La disyuntiva de firmar o no era difícil, ya que se anteponían metas que el gobierno difícilmente aceptaría a metas que se expresaban en recursos que el gobierno, a regañadientes, ya había aceptado otorgar (Bartra, 2003). Fue el momento de fuego para todas las organizaciones y sus representantes. Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones rurales firmaron los acuerdos con el gobierno. Tanto El Barzón, Unorca, el FDC (2003) o el MCAM (2003) explicaron que para ellos se trataba de una etapa de negociaciones Estado-campesinos que se debería mejorar con el tiempo.

CUARTO PERIODO. LA TORTUOSA IMPLEMENTACIÓN Y LOS TEMAS PENDIENTES DE LA AGENDA

El proceso de implementación de los acuerdos, del ciclo de políticas públicas, es un periodo muy largo, que abarca de abril de 2003 a 2006, y en realidad dicha etapa fue muy lenta, a “cuenta gotas”, ya que significó ingresar al terreno del burocratismo, demasiado fan-

o y espinoso para las organizaciones rurales.²⁶ Durante esta etapa observamos el paso de la visibilidad del movimiento rural, antes de la firma, a la invisibilidad después de la firma; es decir, disminuyeron las marchas y las manifestaciones de protestas, a menos del nivel que tenían antes de la firma del acuerdo, e incluso dejaron de recibir la misma cobertura en los medios de comunicación.

La Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Cancún del 9 al 14 de septiembre de 2003, aduce un breve pero significativo repunte para el movimiento campesino. El tema más espinoso fue el de la agricultura, ya que enfrentó a bloques como Estados Unidos y la Unión Europea, que agrupan a los siete países, quienes concentran 55.5 por ciento del comercio agropecuario (en realidad colocan los excedentes de cereales y productos lácteos y cárnicos) y destinan enormes subsidios a sus productos, calculado en unos 150 mil millones de dólares,²⁷ lo que ocasiona que vendan a precios debajo de los costos de producción; frente a Brasil, China, Kenia, Malasia, Sudáfrica y México, entre otros, en particular los países del G-21 encabezados por Brasil e India,²⁸ que concentran 63 por ciento de la agricultura mundial²⁹ y en donde 70 por ciento de su población vive de la agricultura y se sostiene con menos de un dólar diario.³⁰

En relación con las protestas desde la parte campesina, los principales convocantes fueron la Red Internacional Campesina y el

²⁶ Por ejemplo, para comenzar el primer trámite acordado entre instituciones y organizaciones, consistía en la elaboración, programado en un mes, de las reglas de operación; sin embargo, las primeras, que correspondieron a Procampo, estuvieron listas hasta octubre.

²⁷ Los grandes beneficiarios de esos apoyos son las corporaciones transnacionales; en Estados Unidos, seis de cada diez dólares se destinan a las grandes corporaciones agrícolas que tienen el control del mercado, entre ellas: Cargill, Nestlé, Unilever, Monsanto, las cuales controlan entre 40 y 50 por ciento del mercado mundial (*La Jornada*, 02/09/03).

²⁸ Constituyen al Grupo 21: Brasil, India, México, Argentina, Costa Rica, entre otros.

²⁹ <<http://rimisp.org/boletines/bol31/doc3.zip>>.

³⁰ Estados Unidos otorga tres mil millones de dólares en subsidios al año a sus productores de algodón (esta cifra es tres veces mayor a lo que se otorga en asistencia a África), y otorga a sus productores de maíz un subsidio de entre 105 y 145 millones de dólares al año (más que el ingreso de 10 mil productores pobres de Chiapas). En tanto, en la Unión Europea los productores de hatos vacunos reciben 2.5 dólares diarios en subsidios. En tanto a Japón, éste destina a ese renglón 7.5 dólares diarios en subsidios adicionales; asimismo, el apoyo a sus productores de arroz equivale a siete veces el costo de producción (Reuters, *La Jornada*, 29/04/04).

Movimiento El Campo No Aguanta más.³¹ El Foro Campesino se efectuó entre los días 11 y 12 en el cual representantes campesinos e indígenas, mujeres, así como representantes de ONG's, expusieron sus puntos de vista en torno a sus problemas y demandas. En dicho foro participó la CCC, El Barzón y Unorca, además participaron representantes del EZLN y de otras organizaciones no gubernamentales. También se hizo patente la presencia de otra instancia de movilización campesina internacional, nos referimos desde luego a Vía Campesina, que es un movimiento internacional, pluralista y autónomo, y está integrado por organizaciones nacionales y regionales; asimismo, coordina organizaciones campesinas de medianos y pequeños agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y comunidades indígenas de Asia, África, América y Europa.³² Como sabemos, el Foro Mundial concluyó sin un acuerdo en materia de subsidios, en parte debido las pugnas entre los grandes países y el G-21, en parte por las manifestaciones de protesta internacionales que concluyeron, en su momento más álgido, con el suicidio del coreano Lee Kyung Lee, el día 11, en protesta por las políticas económicas impuestas a su país por la OMC (*La Jornada*, 01/09/03).

El movimiento altermundista se encuentra compuesto por una red de organizaciones campesinas e indígenas nacionales e internacionales, así como las de organismos no gubernamentales. Se trata de una nueva sociedad civil global, que se rige por nuevos valores, normas y códigos sustentados en la solidaridad, desde donde se reivindican nuevas demandas sociales globales; los movimientos altermundistas reivindican un mundo mejor, distinto y más justo. De este modo, las demandas de las organizaciones sociales, alterglobales, buscan influir en la agenda de la OMC en torno a un trato justo y equitativo en el mercado mundial.³³

³¹ Entre las principales organizaciones internacionales participantes se encuentra: Oxfam, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, el Instituto para la Agricultura y la Política Comercial (IATP), ETC Group; Public, Citizens's Global Trade Watch, Focus on the Global South, Center Food Safety, Red de Acción Directa, Desobedientes y Monos Blancos, Red Our Word in not on sale (Nuestro Mundo no está en venta), Food First, Action Aid, entre otras. Por parte de las organizaciones nacionales participaron representantes de el Movimiento El Campo No Aguanta más, El Barzón, Unorca, CNC, así como el Consejo de Médicos y Parteras Tradicionales de Chiapas y representantes de organizaciones campesinas del sureste.

³² <<http://viacampesina.org>>.

³³ Un ejemplo de lo anterior es el café, uno de los productos con mayor comercio mundial, pero que resulta afectado por las reglas y políticas de la OMC, ya que los productores no tienen control sobre el precio, puesto que éste lo

esando al caso de México, se aprecia que algunas organiza-
 manifestaron sus desacuerdos con las autoridades encar-
 gestionar los recursos que habían sido pactados. Es el caso
 ntral Campesina Cardenista, que pugnó en abril de 2004 por
 el padrón de Procampo, así como el de adultos mayores.
 diados de julio de 2004, las agrupaciones que conformaban
 nimiento El Campo No Aguanta Más entraron en una crisis in-
 e concluyó con su desaparición. La ANEC propuso integrar
 a organización; sin embargo, la mayoría de agrupaciones se
 on. Algunas organizaciones argumentaron que no era válido
 misma central se encontrara en dos organizaciones a la vez,
 plo la CIOAC, CCC y CODUC pertenecían al mismo tiempo al CAP
 M. Ante el desencuentro, algunas organizaciones campesi-
 re ellas CCC, Unorca, CNAP y CIOAC, deciden continuar en co-
 con sindicatos y otras organizaciones gremiales del Frente
 l Campesino y Social (FSCS) y con ello dan continuidad a las
 s que obtuvieron en los momentos más importantes de las mo-
 ones de invierno de 2003.³⁴

erior a la desintegración del movimiento continuaron, aun-
 separado, las movilizaciones rurales. La CCC, CIOAC, UNT,
 ODUC y El Barzón continuaron mostrando su descontento en
 s de lucha: 1) manifestaciones ante la Secretaría de Econo-
 ra exigir el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Cam-
 e), para que las autoridades eliminen las trabas que retrasan
 bación de los proyectos y la entrega de recursos; además se-
 n que el titular de dicha institución, Canales Clariond, no ha-
 tionado ante Estados Unidos y Canadá la salida del maíz y del
 el acuerdo comercial, lo que tenía el propósito de lograr un
 cio justo y equilibrado; 2) otro grupo, encabezado por CODUC
 gó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en ese lugar
 tado y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Miguel
 Hernández, demandó el cumplimiento del programa Opor-
 des para exigir 20 mil millones en apoyo de vivienda y 30 mil
 es para adultos mayores.

en las trasnacionales tales como la Nestlé o la Procter and Gamble
nada, 02/09/03).

os antecedentes más notorios de dichas alianzas son las marchas al
 la gran marcha campesina del 30 de enero de 2003, que reunió a más
 mil personas y la marcha en las vísperas del tercer informe presiden-
 oyando a las organizaciones sindicales, donde se dieron cita 50 mil
 as.

Durante 2004 y a la fecha, las organizaciones que suscribieron el acuerdo han señalado en reiteradas ocasiones que los recursos han llegado con lentitud. Reconocen que, en efecto, los apoyos en programas asistenciales reforzaron la posición de los líderes frente a sus bases. Pero también han denunciado que gran parte de los recursos no se ejercieron, en contra parte, el gobierno publicitó que ya se habían ejercido más del 90 por ciento de los apoyos para el campo.³⁵

BALANCE Y CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO

El movimiento campesino definió una estrategia clara para modificar las políticas públicas consistentes en una política de largo alcance, inscrita en un plan nacional de desarrollo integral, que abarca no sólo los aspectos productivos, comercialización y financiamiento, sino además los referentes a la política social y de derechos humanos. Aunque no hubo resultados completos, los logros parciales muestran que las políticas públicas competen a la sociedad y no únicamente a los partidos políticos y a las instituciones.

Considero que es difícil afirmar que se trató de un éxito completo para las organizaciones campesinas, en todo caso es un éxito relativo. La mayor parte de los aspectos considerados en el Acuerdo Nacional para el Campo sólo recuperaron, parcialmente, los seis planteamientos del 2 de noviembre de 2002; sin embargo, consiguieron ingresar el tema agropecuario, tradicionalmente menospreciado, en la agenda nacional; lograron transformarse en interlocutores válidos sin intromisión de partidos políticos y del Estado; lograron fijar tareas a futuro y establecieron demandas que aún esperan un lugar en la agenda pública. Pero también enseñaron que se puede negociar con dignidad, sin recibir sobornos políticos o económicos de partidos o del gobierno. Supieron mantener, hasta donde ello fue posible, las sanas distancias entre dirigentes, bases y partidos políticos.

El Movimiento el Campo No Aguanta Más utilizó varias estrategias, en una coyuntura determinada, combinando la acción directa con la negociación. Aprovecharon bien la coyuntura económica (in-

³⁵ En un evento en la UAM-Azcapotzalco, en junio de 2004, para evaluar los resultados del acuerdo, con líderes de diversas agrupaciones rurales que participaron en las movilizaciones, varios de los dirigentes de Unorca, El Movimiento El Campo No Aguanta Más, COCyP, CCC y CIOAC, entre otras; manifestaron que desde antes de la firma del acuerdo no contaban con la suficiente fuerza como para obligar al gobierno a aceptar sus demandas, muchos menos después de la firma.

ncia de la entrada en vigor de una etapa más del TLCAN) y po-
(la cercanía del proceso electoral federal en julio de 2003).
aron un buen equilibrio de movilizaciones en todo el país y me-
mos de negociación. Negociaron con habilidad y sensatez con
ntraparte gubernamental. Lograron, desde el inicio, la legiti-
d de su causa que es la causa de todos los mexicanos: la sobe-
r alimentaria.

as movilizaciones rurales del MCAM, en torno, principalmente,
demanda de una renegociación del TLCAN, de reformas al Ar-
o 27 Constitucional y de mayor presupuesto, las ubicamos como
grantes de un movimiento rural. Por una parte, algunas de las
cterísticas lo aproximan con un nuevo movimiento social, ya
se trata de una lucha multclasista (incluye a grandes, medianos
peños productores rurales); las demandas centrales pretenden
odificación de las políticas públicas agropecuarias (es decir, son
andas incluyentes ya que pretenden beneficiar a la mayoría de
productores rurales); constituye una lucha anticorporativista (re-
ando con mucha la iniciativa política de la CNC); es una lucha inter-
orial (en la medida en que logra tejer alianzas entre productores
ales con importantes gremios sindicales, tales como el sindicato
maestros o de electricistas); combinó adecuadamente diversas
mas lucha que incluyeron la acción directa con la negociación lo-
ndo captar la atención de los medios de comunicación (amenazas,
na simbólica de garitas, bodegas, puertos y puntos fronterizos de
grada de productos agropecuarios, huelgas de hambre, bloqueo
carreteras, constantes declaraciones a los medios de comunica-
n, toma de edificios públicos, manifestaciones ante autoridades
ales en las entidades o la gran marcha campesina, al tiempo que
ostró mayor iniciativa en las propuestas al negociar con autorida-
s gubernamentales); mostró la propuesta de un nuevo proyecto de
ción sustentado en principios nacionalistas (búsqueda de la sobe-
ría alimentaria, equidad en la negociación con los socios comercia-
o justicia social en la atención a mujeres y ancianos); promovió
a estrategia jurídica al demandar a las autoridades judiciales qui-
los procesos judiciales promovidos contra los líderes del movimien-
(el gobierno foxista ha adoptado como forma de represión los
ocesos judiciales contra líderes sociales); logró mantener la auto-
omía de las organizaciones rurales durante la negociación con el
estado mostrando organización y disciplina (a pesar de la injerencia
oportunista de los partidos políticos enmarcados en la coyuntura po-
ica electoral de las elecciones del 6 de julio); logró la movilización
a las entidades en el nivel nacional; por otra parte las reivindicacio-

nes del movimiento rural se inscriben en el contexto de la globalización³⁶ (en este sentido los actores sociales rurales luchan en el marco del Estado neoliberal, desde la perspectiva de una lucha por la inclusión en el nuevo modelo económico). En este sentido, el sociólogo francés Alain Touraine sostiene que los nuevos movimientos sociales se constituyen con elementos de los viejos movimientos sociales. Éste es el caso al hablar del movimiento El Campo No Aguanta Más (Touraine, 1987; 1995; 1996).

Por otro lado, dicho movimiento fue dirigido por grandes organizaciones de productores que aprovecharon la coyuntura con éxito. Más que un movimiento social unificado se trató de un frente campesino que agrupó a una gran diversidad de organizaciones rurales y de ahí su gran debilidad, ya que no había una sola dirección, puesto que partían del acuerdo de que cada organización mantendría sus propias estructuras y jerarquías organizativas. Las organizaciones más importantes fueron creadas en los últimos veinte años, tales como El Barzón o el Congreso Agrario Permanente (CAP).³⁷ Ideológicamente el movimiento rural se sustenta en una propuesta de un "nuevo proyecto de nación incluyente", base de la nueva relación Estado-campesinos, muy diferente del proyecto de nación neoliberal-excluyente, fincado en el libre mercado. Durante el movimiento plantearon el carácter altermundista del movimiento rural, caracterizado por un enfoque nacionalista en el que el nuevo papel del campo está en función del proyecto de nación "que queremos, y nosotros queremos un país soberano, democrático, equitativo, con crecimiento económico y que asegure la sustentabilidad de sus recursos naturales, todo dentro de la globalización".³⁸

Lo que da identidad a este tipo de movimiento es la lucha contra el Estado y las instituciones responsables de la situación agropecuaria. Pero también se trata de muchos "otros": en ocasiones las ins-

³⁶ Véase de Alain Touraine, *La producción de la sociedad*, México, UNAM/IFAL, 1995, y *¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente. El destino del hombre en la aldea global*, México, FCE, 1997.

³⁷ El motor del movimiento lo constituyen el Movimiento El Campo No Aguanta Más en la que existen organizaciones como la ANEC, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y El Barzón, que agrupa a grandes y medianos productores que sufrieron las consecuencias indeseables de los efectos financieros de diciembre de 1994, que ocasionó que las instituciones bancarias aumentaran la tasa de interés y la secuela de embargos a los deudores de la banca, lo cual generó movilizaciones en todo el país. Se trata de un movimiento organizado "desde abajo", sin injerencia gubernamental o de partidos políticos.

³⁸ *La Jornada*, 09/03/03.

tuciones del gobierno; las medidas comerciales impuestas por el gobierno estadounidense; las empresas importadoras de alimentos, las grandes compañías comercializadoras, las empresas transnacionales, las instituciones judiciales mexicanas, así como la opinión pública. Existía el riesgo de que tras la firma el movimiento se diluyera como actor social ya que, como afirma Touraine, los movimientos sociales no son para siempre, puesto que tienden a institucionalizarse o politizarse (Touraine, 1988). Por otra parte, la injerencia de los partidos políticos resultó más que evidente, particularmente por el PRI y el PRD. Desde su inicio existía el serio riesgo de politización del movimiento debido al proceso electoral de julio de 2003, en efecto, en esas elecciones algunos de sus dirigentes contendieron como candidatos para algún cargo de representación popular.

Frente a la "fuerte ideología" neoliberal, basada en la exclusión, que hace apología al libre mercado, convive otra "débil ideología" o "alterglobalizadora", que surge más en el terreno de la acción social y los movimientos sociales, no sólo en México sino en América Latina y en otros países, influyendo incluso en movimientos sociales en los países desarrollados. Se trata de una opción, surgida de las fauces del libre mercado, que reclama y reivindica la inclusión, pero además exige una intervención estatal "inteligente", es decir, supone el reclamo impostergable de un subsidio necesario.

Hace falta un Plan Integral de Desarrollo Rural, así como su ley reglamentaria, que considere una política agropecuaria que realmente fomente la agricultura con un carácter no excluyente, sino que también los requerimientos de las comunidades campesinas que producen para el autoconsumo. Que provea de programas y presupuestos multianuales que beneficie a todos los productores. Hoy en día, lo que urge es un *rescate del campo* tal y como se hizo con los banqueros. Lo anterior requeriría contar con un régimen político democrático, nacionalista y con los pies en la tierra, no en la bolsa de valores de Nueva York, ni en la Coca Cola. ¡Hoy el campo está en crisis, pero el campo... no aguanta más!

BIBLIOGRAFÍA

- GUILAR, Luis (1992), *El estudio de las políticas públicas*, México, Miguel A. Porrúa.
- NEC (s/f), "Por qué firmamos un acuerdo para el campo", en *Cuadernos Agrarios*, nueva época, número especial, México.

- ASCHER, W. (1992), "La evolución de las ciencias de políticas", en L. Aguilar, *El estudio de las políticas públicas*, México, Miguel A. Porrúa.
- BARTRA, Armando (2003), *El campo mexicano ante la globalización*, México, UACH.
- BEHN, R. (1992), "El análisis de políticas y la política", en L. Aguilar, *El estudio de las políticas públicas*, México, Miguel A. Porrúa.
- CALVA, José Luis (2004), "Ajuste estructural y TLCAN: efectos en la agricultura mexicana y reflexiones sobre el ALCA", en *El Cotidiano*, núm. 124, marzo-abril, año 19, México.
- COBB, Roger y Charles ELDER (1974), *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- FRENTE DEMOCRÁTICO CAMPESINO (s/f), "Postura de FDC, ante el Acuerdo Nacional para el Campo", en *Cuadernos Agrarios*, nueva época, número especial, México.
- ELDER, Charles y Roger COBB (1992), "Formación de la agenda. El caso de la política de los ancianos", en L. Aguilar, *El estudio de las políticas públicas*, México, Miguel A. Porrúa.
- LASSWELL, Harold y David APTER (1951), *The Policy Sciences*, Stanford.
- LIMBLOM, Charles (1959), *The Policy Making Process*, Princenton, s.e.
- MCMICHAEL, P. (1999), "La política alimentaria mundial", en *Cuadernos Agrarios*, nueva época, núms. 17-18, México.
- MCAM (2003), "Discurso del Movimiento: 'El Campo No Aguanta Más' en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo", en *Cuadernos Agrarios*, nueva época, número especial, México.
- RAIFFA, H. (1980), *The Art of Science of Negotiation*, Princenton, s.e.
- RUBIO, Blanca (1999), "Globalización, reestructuración productiva en la agricultura latinoamericana y vía campesina 1970-1995", en *Cuadernos Agrarios*, nueva época, núms. 17-18, México.
- SÁNCHEZ, A. (1992), "Perspectivas del campesinado en México y sus organizaciones: ¿Un neocorporativismo?", en Chacón-Mestries, *Debate sobre las reformas al agro mexicano*, México, UAM-A.
- SCHWENTESIUS *et al.* (coords.) (2003), *¿El campo aguanta más?*, México, UACH.
- SHELING (1977), *The Strategy of Conflict*, Princenton, s.e.
- TORGERSON, D. (1992), "Entre el conocimiento y la política: tres caras del análisis de políticas", en L. Aguilar, *El estudio de las políticas públicas*, México, Miguel A. Porrúa.

- RAINE, Alain (1988), *Actores sociales y sistema político en América Latina*, Santiago de Chile, PREALC.
- (1995), *La producción de la sociedad*, México, UNAM/IFAL.
- (1996), *¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente. El destino del hombre en la aldea global*, México, FCE.
- AVSKY, Aaron (1984), *Speaking Truth to Power*, Princeton, s.e.

HEMEROGRAFÍA

- ES, Rafael, "Magnifican apertura", en *Reforma*, Sección A Negocios, 20 de noviembre de 2002, p. 1A.
- NOTIMEX, "Se alistan mil ONG para llegar a la sede", en *La Jornada*, Sección Economía, 1 de septiembre de 2003, p. 24.
- OSA, Roberto, "Usabiaga, el mejor para los ricos: El Barzón", *El Universal*, Sección México, 13 de noviembre de 2003, p. 16A.
- VIDES, Carlos, "Externos del PRD, con la mira en el 2006", en *El Universal*, Sección México, 8 de abril de 2003, p. 14A.
- N, Jim y David BROOKS (corresponsales), "El futuro de la mitad de la población mundial supeditado a los intereses de transnacionales", en *La Jornada*, Sección Economía, 7 de septiembre de 2003, p. 23.
- LLANOS, Armando e Israel RODRÍGUEZ, "La expropiación de ingenios, inconclusa: Fidelq; no ha recuperado \$18 mil millones", en *La Jornada*, Sección Economía, 16 de abril de 2003, p. 23.
- Ángeles, "Integran organizaciones frente común para negociar pacto sobre el agro", en *La Jornada*, Sección Política, 9 de marzo de 2003, p. 14.
- t, Manuel, "Enloquece a D.F. conflicto agrario", en *Reforma*, Sección B Ciudad, 22 de noviembre de 2002, p. 1B.
- TIDIANO. *Revista de la realidad mexicana actual*, *El Campo No Aguanta Más*, núm. 124, marzo-abril, 2004.
- D, Angélica, "Promesas, parte sustancial del acuerdo para el agro", en *La Jornada*, Sección Política, 28 de abril de 2003, p. 3.
- , "Aceptan campesinos un fondo de emergencia de sólo 2,800 millones", en *La Jornada*, Sección Política, 17 de abril de 2003, p. 20.
- , "Presentan otra propuesta a campesinos", en *La Jornada*, Sección Política, 10 de abril de 2003, p. 31.

- _____, "Hoy, la mesa uno del diálogo campesino", en *La Jornada*, Sección Política, 6 de marzo de 2003, p. 17.
- _____, y Patricia MUÑOZ, "El gobierno tratará de convencer a los campesinos de que están equivocados", en *La Jornada*, Sección Política, 7 de marzo de 2003, p. 17.
- _____, y Matilde PÉREZ U., "Elude Canales pronunciarse sobre renegociar el TLCAN", en *La Jornada*, Sección Política, 4 de marzo de 2003, p. 17.
- _____, y Matilde PÉREZ U., "Más de 100 mil personas exigen en el Zócalo revisar el tratado", en *La Jornada*, Sección Política, 1 de febrero de 2003, p. 3.
- FERNÁNDEZ-VEGA, Carlos, "México SA", en *La Jornada*, Sección Economía, 4 de marzo de 2003, p. 24
- GONZÁLEZ, Roberto, "Hacia la Cumbre de Cancún", en *La Jornada*, Sección Economía, 7 de septiembre de 2003, p. 23.
- LA JORNADA DE ORIENTE y corresponsales, "Repudio general a la política agraria", en *La Jornada*, Sección Política, 11 de marzo de 2003, p. 24.
- MUÑOZ, Patricia, "Transnacionales dominan el mercado alimentario del país", en *La Jornada*, Sección Política, 18 de abril de 2003, p. 17.
- PÉREZ U., Matilde, "Critican grupos agrarios la falta de voluntad del gobierno para debatir", en *La Jornada*, Sección Política, 16 de enero 2003, p. 7.
- _____, "Repudian el TLCAN miles de campesinos", en *La Jornada*, Sección Política, 4 de diciembre de 2002, p. 33.
- _____, "Revisar el capítulo agropecuario del TLCAN, condición para firmar el acuerdo nacional", en *La Jornada*, Sección Política, 3 de marzo de 2003, p. 16.
- REUTERS, "La UE recortaría subsidios al agro, pero no los eliminará", en *La Jornada*, Sección Economía, 2 de septiembre de 2003, p. 24.
- ROMÁN, José Antonio, "Destinarán 102 mil 563 millones de pesos para el blindaje agropecuario", en *La Jornada*, Sección Sociedad y Justicia, 19 de noviembre de 2002, p. 41.
- _____, "Rechaza Fox que haya crisis en el campo y en la economía", en *La Jornada*, Sección Política, 5 de febrero de 2003, p. 3.
- SALAZAR, Claudia, "Plantea PRI un frente en defensa del campo", en *Reforma*, Sección A, Nacional, 24 de noviembre de 2002, p. 4A.

- ALDIERNA, Georgina, "Acepta el gobierno controlar importaciones de maíz y frijol", en *La Jornada*, Sección Política, 13 de abril de 2003, p. 24.
- SÁNCHEZ, A. (2004), "El movimiento ¡El campo no aguanta más! a las movilizaciones sociales en la cumbre de la OMC en Cancún. Dependencia o soberanía alimentaria: ésa es la cuestión... agraria", en *El Cotidiano*, núm. 124, marzo-abril, año 19, México.
- ARABIA, Ernesto, "Subsidia E.U. 721% más a su campo", en *Reforma*, Sección A Negocios, 6 de marzo de 2003, p. 3A.
- EVILLA, Ramón, "Niegan politizar tema del campo", en *Reforma*, Sección A, Nacional, 7 de marzo de 2003, p. 2A.
- HERÁN, Jorge, Sergio JIMÉNEZ y Orquídea SOTO, "Violencia en el Congreso", en *El Universal*, Sección Primera Plana, 11 de septiembre de 2002, p. 1.
- MARGAS, Rosa Elvira, "Entra 2003, caen aranceles y queda en el aire si México recurrirá a subsidios", en *La Jornada*, Sección Política, 12 de diciembre de 2002, p. 3.
- ENEGAS, Juan Manuel y Angélica ENCISO, "Con visiones opuestas, Fox y líderes agrarios firman el Acuerdo Nacional para el Campo", en *La Jornada*, Sección Política, 29 de abril de 2004, p. 7.
- ÚÑIGA, David, "Propone el CEESP nuevo pacto fiscal con estados rurales para rescatar al campo", en *La Jornada*, Sección Economía, 10 de marzo de 2003, p. 23.
- ÚÑIGA, Juan Antonio e Israel RODRÍGUEZ, "Sube \$10 mil millones el aval del gobierno a programas de rescate", en *La Jornada*, Sección Economía, 5 de mayo de 2003, p. 16.

*El cambio en la sociedad rural mexicana
¿se valoran los recursos estratégicos?
Volumen I. Los actores sociales del México
rural frente a procesos y políticas
excluyentes: diversidad de
impactos y respuestas,
se terminó en agosto de 2007
en Imprenta de Juan Pablos, S.A.,
Malintzin 199, Col. del Carmen,
Del. Coyoacán, México 04100, D.F.
<imprejuan@prodigy.net.mx>*

1 000 ejemplares



Las preocupaciones centrales del Cuarto Congreso de la AMER fueron comprender, interpretar y evaluar las repercusiones del paradigma neoliberal para la sociedad rural después de 20 años de su implantación como política económica del Estado mexicano.

Algunas de las preguntas presentadas son las siguientes: ¿Qué cambios se han registrado en el mundo rural mexicano a partir de la entrada en vigor de las políticas derivadas del modelo neoliberal en México? ¿Qué modificaciones se han hecho evidentes en relación con la valoración de los recursos estratégicos rurales? ¿Cómo han cambiado las condiciones y los apoyos gubernamentales para la producción agropecuaria?

Los textos de este volumen nos invitan a reflexionar, de manera crítica, sobre algunos procesos políticos relativos a la agricultura y las poblaciones rurales del país que han tendido a privilegiar a influyentes minorías —en detrimento de las mayorías— desde hace más de un siglo, pero con sus especificidades neoliberales recientes.

